DIARIO DE DEBATES DE SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA JUEVES DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDENTE C. DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

(Asistencia de veinticinco ciudadanos Diputados)

SECRETARIA DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ

- EL C. PRESIDENTE: (10:36 horas) Muy bien, continuamos con nuestra Sesión señoras, señores Diputados, Diputada Secretaria favor de pasar lista de asistencia.

- LA C. SECRETARIA: Con su venia Presidente: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa, Zavala Márquez Catalino; tenemos quórum Presidente.

XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA **LISTA DE ASISTENCIA**		
SESIÓN ORDINARIA **DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**		
1.-	AGATÓN MUÑIZ CLAUDIA JOSEFINA	PRESENTE
2.-	BUJANDA RUIZ MIGUEL ANGEL	PRESENTE
3.-	CABALLERO RAMÍREZ MONSERRAT	PRESENTE
4.-	CANO NUÑEZ MIRIAM ELIZABETH	PRESENTE
5.-	DEL VILLAR CASAS ROSINA	PRESENTE
6.-	GALLARDO GARCÍA FAUSTO	PRESENTE
7.-	GERALDO NUÑEZ ARACELI	PRESENTE
8.-	GONZÁLEZ QUIROZ JULIA ANDREA	PRESENTE
9.-	HERNÁNDEZ CARMONA CARMEN LETICIA	PRESENTE
10.-	LÓPEZ MONTES GERARDO	PRESENTE
11.-	MELENDREZ ESPINOZA JUAN	PRESENTE
12.-	MOLINA GARCÍA JUAN MANUEL	PRESENTE
13.-	MORÁN HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL	PRESENTE
14.-	MORENO HERNÁNDEZ LUIS	PRESENTE
15.-	NAVARRO GUTIÉRREZ VÍCTOR HUGO	PRESENTE
16.-	OTAÑEZ LICONA RODRIGO ANIBAL	PRESENTE
17.-	QUINTERO QUINTERO LORETO	PRESENTE

18.-	RODRÍGUEZ EVA GRICELDA	PRESENTE
19.-	RUVALCABA FLORES DAVID	PRESENTE
20.-	TOPETE ROBLES ELI	PRESENTE
21.-	VACA CHACÓN MARÍA TRINIDAD	PRESENTE
22.-	VÁSQUEZ HERNÁNDEZ EVA MARÍA	PRESENTE
23.-	VÁZQUEZ CASTILLO JULIO CESAR	PRESENTE
24.-	VILLALOBOS AVILA MARIA LUISA	PRESENTE
25.-	ZAVALA MÁRQUEZ CATALINO	PRESENTE

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, en consecuencia, se abre la presente sesión. Toda vez que el orden del día ha sido distribuido por la Junta de Coordinación Política, pido a la Diputada Secretaria someta consideración de esta asamblea en votación económica la dispensa de su lectura y su aprobación.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se somete a consideración de la asamblea en votación económica la dispensa de la lectura y la aprobación del orden del día.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Una moción Diputado Presidente, antes de la aprobación del orden del día; ya se giró por escrito y pediría que antes de la aprobación se considerara que como Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales no será sometido el día de hoy a consideración de esta asamblea el Dictamen 03 que está enlistado, para los efectos

de la aprobación del orden del día, solamente se someterá a consideración el Dictamen 08 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, el Dictamen 01 para efectos de la aprobación y ajustes del orden del día correspondiente, precisaría el Dictamen 03 no será sometido por parte de la Comisión a discusión de este pleno de esta fecha.

- EL C. PRESIDENTE: Registrada la intervención del Diputado Juan Manuel Molina, de retirar del orden del día el Dictamen 03, correcto Diputado, Diputado Molina el Dictamen 03 se retira, muy bien, entonces con esa aclaración hecha, favor Diputada Escrutadora poner en votación económica la dispensa de la lectura y la aprobación del orden del día.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su permiso Presidente, con la adecuación expuesta, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; Diputado Gerardo, por unanimidad de los presentes Presidente se aprueba.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, en consecuencia y continuando con el apartado correspondiente del orden del día a la aprobación del Acta de la Sesión anterior, se pregunta a los Diputados y Diputadas si tienen alguna enmienda al acta respectiva del día 03 de octubre del presente año, de no ser así, Diputada Escrutadora poner a votación el acta correspondiente.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se somete a consideración de la asamblea en votación económica la dispensa de la lectura y la aprobación del Acta referida, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por la unanimidad de los presentes Presidente se aprueba.

(SE INSERTA ACTA DE SESIÓN, CELEBRADA EL DÍA 03 DE OCTUBRE 2019)

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA JUEVES TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDENTE C. DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

(Asistencia de veinticuatro ciudadanos Diputados)

SECRETARIA DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día jueves tres de octubre del año dos mil diecinueve, el Diputado Presidente de esta Mesa Directiva da inicio a la Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura del Estado de Baja

California; y encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, solicita a la Diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia, misma que certifica la presencia de los Ciudadanos Diputados: "Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa, Zavala Márquez Catalino". Se Justifica la inasistencia de la Diputada Agatón Muñiz Claudia Josefina.

Enseguida, y existiendo quórum, el Diputado Presidente informa que el **"orden del día"** aprobado por la Junta de Coordinación Política, ha sido distribuido con anticipación a los señores Diputados y Diputadas vía correo electrónico, y solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a consideración de la Asamblea en votación económica, la dispensa de la lectura, así como su aprobación; resultando aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.

Se continúa con el siguiente punto del orden del día relativo a la aprobación del **"Acta de Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre del año 2019",** asimismo, el Diputado Presidente y en virtud de que el acta respectiva se hizo llegar previamente a los señores Diputados y Diputadas vía correo electrónico,

pregunta si tienen alguna enmienda que hacer, de no ser así solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora proceda a efectuar la votación para la dispensa de su lectura, así como para su aprobación, resultando aprobada en votación económica por unanimidad de los Diputados presentes.

Acto seguido, se pasa al siguiente apartado que se refiere a: **"Iniciativas",** en donde el Diputado Presidente procede a dar lectura a las iniciativas que se presentan para su trámite ante Oficialía de Partes, siendo las siguientes:

- Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruíz, a nombre propio y en representación del GPPAN, por el que reforma una propuesta del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado. Misma que se turna para su análisis a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
- Del Diputado Catalino Zavala Márquez, a nombre propio y en representación del GPMORENA, por el que se crea la Ley de Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de Baja California, y se abroga la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 5 de octubre del 2012. Misma que se turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

A continuación, el Diputado Presidente decreta un receso, a petición del Diputado Juan Manuel Molina García, secundado por el Diputado Luis Moreno Hernández, siendo las doce horas con un minuto; reanudándose la sesión a las doce horas con doce minutos, una vez verificado el quórum por lista de asistencia.

Enseguida, y a solicitud del Diputado Gerardo López Montes, secundado por el Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, el Diputado Presidente de nueva cuenta decreta un receso siendo las doce horas con dieciséis minutos; reanudándose la sesión a las trece horas con dos minutos, una vez verificado el quórum visualmente.

A continuación, el Diputado Presidente informa que a solicitud de algunas compañeras y compañeros Diputados, y en atención a quienes los acompañan el día de hoy en este recinto oficial, se continuará con el orden del día; pero adelantando, dos Proposiciones, una de parte de la Diputada Eva María Vásquez Hernández y la segunda del Diputado Víctor Manuel Morán Hernández.

Enseguida, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada Eva María Vásquez Hernández, para presentar, con solicitud de dispensa de trámite, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO: "Remítase atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, así como al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a efecto de que en coadyuvancia con el Presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California y del Consejo de la Judicatura, realicen las gestiones financieras, presupuestales y materiales con el fin de lograr un programa progresivo y URGENTE de dignificación de las condiciones del personal, dignificación de servicios e instalaciones, así como ampliación de especialidades en recursos humanos, necesarios para el fortalecimiento y mejoramiento del Servicio Médico Forense de Baja California."

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS 03 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Acto seguido, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por unanimidad de los Diputados presentes.

A continuación, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Punto de Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir, entendiendo que no es en contra. Por lo que concede el uso de la voz a los Diputados: Miguel Ángel Bujanda Ruiz, Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Julia Andrea González Quiroz, Miriam Elizabeth Cano Núñez, María Trinidad Vaca Chacón, Monserrat Caballero Ramírez, Araceli Geraldo Núñez, Gerardo López Montes, Carmen Leticia Hernández Carmona, Catalino Zavala Márquez y Miguel Ángel Bujanda Ruiz, para manifestarse a favor y solicitar sumarse a la Proposición presentada por la Diputada Eva María Vásquez Hernández. Posteriormente, el Diputado Gerardo López Montes propone que se sumen todos los Diputados presentes, siendo esto aceptado por la Diputada promovente.

Agotada las intervenciones, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a consideración de la asamblea la proposición presentada por la Diputada Eva María Vásquez Hernández, resultando aprobada en votación económica por unanimidad de los ciudadanos Diputados presentes.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, leída por la Diputada Eva María Vásquez Hernández. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los tres días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Enseguida, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Víctor Manuel Morán Hernández para presentar a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, con solicitud de dispensa de trámite, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- Esta H. Asamblea de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California hace un respetuoso llamado al Presidente de la H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION para que se incluya en el PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2020 LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, PARA QUE SE ABRAN NUEVAMENTE LAS MESAS RECEPTORAS DE LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS DEL PROGRAMA BRACERO, Y SE LES HAGA SU PAGO CORRESPONDIENTE, así como para que se integre nuevamente una

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, como ya se hizo con anterioridad, para darle la debida atención y vigilancia a su cumplimiento, solicitando además que se publique nuevamente en su página de internet, debidamente actualizado a las últimas reformas de la Ley de su Fideicomiso, el denominado MANUAL PARA EL REGISTRO DE EXBRACEROS, que permita el libre acceso digital para descarga, abrirse en línea, y para poder imprimirlo, a fin de que pueda difundir entre los interesados, publicado anteriormente por esa H. Cámara de Diputados en la LX Legislatura, pero sólo para descarga y bloqueado para su impresión, para poder darle seguridad jurídica a esos ex braceros solicitantes en el procedimiento de solicitud de su pago.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García "del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a 3 de octubre del año 2019.

Acto seguido, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por unanimidad de los Diputados presentes.

Enseguida, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a declarar abierto el debate del Acuerdo; y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo

ordenamiento legal, pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, solicitando sumarse al Punto de Acuerdo los Diputados: Luis Moreno Hernández, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Julio César Vázquez Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Eva Gricelda Rodríguez, Eva María Vásquez Hernández, Julia Andrea González Quiroz. Posteriormente, el Diputado Presidente informa que se suman todos los Diputados de esta Legislatura.

Agotadas las intervenciones, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa de trámite y la proposición con punto de acuerdo; resultando aprobadas por unanimidad de los Diputados.

Se continúa con el apartado de **"Iniciativas",** enseguida el Diputado Presidente menciona que tienen el uso de la voz los Diputados hasta por cinco minutos.

Acto seguido, hace uso de la voz la Diputada María Trinidad Vaca Chacón para presentar a nombre propio y como Diputada independiente, Iniciativa que reforma y adiciona la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Baja California, en materia de embarazo adolescente.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar esta Iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia.

A continuación, le corresponde hacer uso de la voz al Diputado Fausto Gallardo García, para presentar a nombre propio y en representación del PVEM, Iniciativa por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Enseguida, el Diputado David Ruvalcaba Flores hace uso de la voz para presentar a nombre propio y en representación del PRI, Iniciativa por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Acto seguido, los Diputados Loreto Quintero Quintero, Víctor Manuel Morán Hernández, Carmen Leticia Hernández Carmona, y Miguel Ángel Bujanda Ruiz, solicitan sumarse a esta Iniciativa; manifestando el Diputado David Ruvalcaba Flores que con mucho gusto.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

A continuación, el Diputado Presidente procede a declarar un receso a solicitud de varios Coordinadores Parlamentarios, siendo las catorce horas con un minuto.

Una vez verificado el quórum legal para sesionar por medio de pase lista, se reanuda la sesión siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos,

Acto seguido, se continúa con el apartado de "**Iniciativas",** en donde hace uso de la voz la Diputada Monserrat Caballero Ramírez a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, en conjunto con los Diputados: Juan Manuel Molina García, en representación del Grupo Parlamentario de MORENA, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Julio Cesar Vázquez Castillo en representación del Partido del Trabajo(PT), Fausto Gallardo García por el Partido Verde Ecologista de México(PVEM), para presentar la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CON DISPENSA DE TRÁMITE, misma que solicita se integre en su totalidad en el diario de los debates.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar la iniciativa a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

A continuación, el Diputado Juan Manuel Molina García hace uso de la tribuna para presentar a nombre de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales la siguiente iniciativa y que también es signada por la Diputada Rosina del Villar Casas como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;

asimismo, hace mención que se recibió en esta Legislatura una notificación del Juzgado Octavo de Distrito de la ciudad de Ensenada, Baja California en un amparo promovido por Mario Fernando Ruíz Sández como Juez del Poder Judicial del Estado, en donde existe una sentencia que obliga a este Congreso a legislar el tema El Haber de Retiro para jueces del Poder Judicial del Estado. Aunado a lo anterior solicita la dispensa del trámite de envío a comisiones para que se presente la iniciativa de manera directa, se discuta y se vote en esta misma sesión.

Posteriormente, el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a consideración de la asamblea la solicitud de dispensa de trámite propuesta por el Diputado Juan Manuel Molina García, resultando aprobada en votación económica por unanimidad.

A continuación, el Diputado Juan Manuel Molina García, procede a dar lectura en su totalidad a la Iniciativa de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales siendo la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone la adición del Artículo 294 a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, siendo el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA CREAR UN ARTICULO 294 PARA QUEDAR COMO SIGUE.

ARTÍCULO 294.- Al retirarse del cargo los Jueces del Poder Judicial que hayan alcanzado los setenta años de edad o completado los quince años en el ejercicio del

encargo o que les haya sobrevenido una incapacidad física que les impida seguir en la función, tendrán derecho a recibir un haber de retiro, el cual tendrá carácter de intransferible, con una duración de dos años contados a partir del día siguiente al último día en que hayan estado en funciones, mismo que no será mayor al cincuenta por ciento de la última percepción que recibió como Juez del Poder Judicial del Estado.

El Consejo de la Judicatura expedirá el Reglamento del Haber de Retiro de los Jueces del Poder Judicial del Estado, donde se determine el esquema, cuantía y condiciones para su entrega, el cual deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes.

En el Reglamento del Haber de Retiro, se deberá contemplar la creación de un Fondo autofinanciable para el otorgamiento de este, en el que, mediante estudios de índole actuarial contable realizados a solicitud y patrocinio del Poder Judicial, y previa opinión de viabilidad financiera de la autoridad facultada para su emisión en su caso, se establecerá la determinación del esquema de aportaciones económicas por parte de los Jueces para cubrir y tener derecho al Haber de Retiro.

El Juez que haya sido removido de su cargo, en términos de lo dispuesto por el párrafo sexto inciso d) del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California o por resolución judicial, no tendrá derecho al haber por retiro.

El Juez del Poder Judicial del Estado que sometido al procedimiento de ratificación no fuere ratificado, o solicite su retiro voluntario, no tendrá derecho al haber de retiro, pero podrá solicitar la devolución de las aportaciones retenidas durante el tiempo que duró en el cargo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. - El Consejo de la Judicatura, deberá expedir el Reglamento relativo al Haber de Retiro, dentro de un término de 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente reforma.

TERCERO. – La expedición de la Reglamentación deberá establecer el monto de las aportaciones que deberán hacer los Jueces del Poder Judicial del Estado al Fondo correspondiente sin excepción alguna y establecerá en su caso el mecanismo para compensar las aportaciones de los años en que no lo hubieren hecho.

CUARTO.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado deberá gestionar en su momento la viabilidad financiera ante la autoridad correspondiente sobre la base de que el Fondo para el pago del Haber de Retiro de los Jueces del Poder Judicial del Estado sea autofinanciable y no dependa del subsidio estatal ordinario que aporta el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y no genere endeudamiento de ninguna especie.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García" al día tres de octubre del año dos mil diecinueve.

A continuación, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la Iniciativa de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la misma, no siendo así, le solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora lo someta a consideración de la asamblea resultando aprobado en votación nominal por 24 votos a favor de los siguientes Diputados: López Montes Gerardo, Ruvalcaba Flores David, Morán Hernández Víctor Manuel, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Del Villar Casas Rosina, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Vázquez Castillo Julio César, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Melendrez Espinoza Juan, Gallardo García Fausto, Moreno Hernández Luis, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Geraldo Núñez Araceli, Rodríguez Eva Gricelda y Zavala Márquez Catalino.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general y en lo particular la Iniciativa de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, leída por el Diputado Juan Manuel Molina García. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del

Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, el día tres de octubre del año dos mil diecinueve.

A continuación, hace uso de la tribuna la Diputada Julia Andrea González Quiroz**,** para dar lectura al acuerdo No. 1 de la Comisión de Igualdad, entre Hombres y Mujeres y Juventud; estableciéndose el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. - El Comité Organizador para la integración del IV Parlamento de la Juventud, se integrará por los siguientes:

1 Diputada Julia Andrea González Quiroz Presidenta

2 Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez Secretaria

3 Diputado Juan Manuel Molina García Vocal

4 Diputada María Luisa Villalobos Ávila Vocal

5 Diputado Catalino Zavala Márquez Vocal

6 Diputada Rosina del Villar Casas Vocal

7 Diputada Eva Gricelda Rodríguez Vocal

8 Un representante del Instituto de la Juventud en el Estado Vocal

9 Un representante del Instituto Estatal Electoral Vocal

10 Un representante de cada una de las instancias municipales de la Juventud Vocal

SEGUNDO.- El Comité de Selección de las y los 25 Jóvenes Parlamentarios y sus respectivos suplentes, será integrado de la siguiente forma:

1 Diputada Julia Andrea González Quiroz Presidenta

2 Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez Secretaria

3 Diputado Juan Manuel Molina García Vocal

4 Diputada María Luisa Villalobos Ávila Vocal

5 Diputado Catalino Zavala Márquez Vocal

6 Diputada Rosina del Villar Casas Vocal

7 Diputada Eva Gricelda Rodríguez Vocal

TERCERO.- Se aprueba la Convocatoria emitida por la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, tal como se describe en el anexo.

Dado en la sala Francisco Dueñas Montes del edificio del poder legislativo del estado, a los 25 días del mes de septiembre de 2019.

A continuación, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la Comisión de Igualdad, entre Hombres y Mujeres y Juventud; y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra del mismo, no siendo así, le solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a consideración de la asamblea resultando aprobado en votación nominal por 23 votos a favor de los

siguientes Diputados: López Montes Gerardo, Ruvalcaba Flores David, Morán Hernández Víctor Manuel, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Del Villar Casas Rosina, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Vázquez Castillo Julio César, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Melendrez Espinoza Juan, Moreno Hernández Luis, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Geraldo Núñez Araceli, Rodríguez Eva Gricelda y Zavala Márquez Catalino.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general y en lo particular el Acuerdo No. 1 de la Comisión de Igualdad, leído por la Diputada Julia Andrea González Quiroz. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, el día tres de octubre del año dos mil diecinueve.

Acto seguido el Diputado Presidente, a solicitud y propuesta de la Junta de Coordinación Política, concluye los trabajos de esta Sesión Ordinaria, y manifiesta que los asuntos pendientes se pasarían a la próxima sesión y agotado el orden del día, el Diputado Presidente cita a los ciudadanos Diputados integrantes de esta Vigésima Tercera Legislatura del Estado, a Sesión Ordinaria el día jueves diez de octubre del año dos mil diecinueve, a las diez horas en el Recinto Oficial "Licenciado

Benito Juárez García", se levanta la sesión ordinaria, siendo las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día jueves tres de octubre del año dos mil diecinueve.

La presente Acta fue aprobada en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura el día jueves diez de octubre del año dos mil diecinueve ante la presencia del C. Diputado Presidente Catalino Zavala Márquez, quien autoriza la presente Acta asistido de la Diputada Secretaria de esta Mesa Directiva Araceli Geraldo Núñez, quien con su firma da fe.

(CONCLUYE)

(SE INSERTA CORRESPONDENCIA RECIBIDA)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
XXIII LEGISLATURA

PRESIDENCIA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
AL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(1)	OFICIO No. IN-CAB/1532/19 recibido el 18 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto 3.4 del Orden del Día Punto de Acuerdo Protocolo Sesión Solemne de Instalación XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(2)	OFICIO S/N recibido el 24 de Septiembre de 2019, que remite el FRENTE NACIONAL POR LA FAMILIA BAJA CALIFORNIA, mediante en la cual entrega peticiones a favor de que se defienda y respete la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(3)	OFICIO No. SJ/371/2019 recibido el 27 de septiembre de 2019, que remite el C.P. FLORES VÁSQUEZ CARLOS, en su calidad

		de SECRETARIO del XXII AYUNTUNTAMIENTO de B.C., mediante el cual solicita el BANDO SOLEMNE, para dar a conocer los Munícipe electos, aprobado mediante acuerdo de fecha 13 de junio de 2019, en sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(4)	OFICIO No. OD-004/19 recibido el 8 de Octubre de 2019, que remite el LIC. GÓMEZ ESCALANTE RAFAEL GUILLERMO, en su calidad de DIRECTOR DEL FIDUM, mediante el cual envía el Tercer Informe de Gestión Financiera 2019 de la Entidad denominada FIDUM.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(5)	OFICIO S/N recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DIAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 3.6, Punto de Acuerdo relativo al proyecto de reforma, adición y derogación de diversos artículos del reglamento interno de la Secretaría del Gobierno Municipal.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(6)	OFICIO No. IN-CAB/1571/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DIAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto 3.10 del Orden del día, Punto de acuerdo relativo a la reforma del Capítulo VIII del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tijuana, Baja California, así como adición a diversos artículos al mismo.
Túrnese a la Oficiala de Partes, Archivo y Correspondencia	(7)	OFICIO No. IN-CAB/1561/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto 3.7 del Orden del día, Punto de Acuerdo relativo a creación del Reglamento Interno de la Estancia Municipal de Personas Infractoras de Tijuana, Baja California.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(8)	OFICIO No. IN-CAB/1592-19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC

GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto 3.11 del orden del día, Punto de Acuerdo relativo a la aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Ayuntamiento de Tijuana y la Agenda Ambiental de Ordenamiento del Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(9) OFICIO No. IN-CAB/1697/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.20 el Dictamen XXII-CDUOSP-56/2019 relativo a los proyectos de declaratoria de usos y destino para las áreas de riego en la colonia Sánchez Taboada II (División del Norte), Tijuana, Baja California y declaratoria de usos y destino para el área de alto riesgo en la colonia Reforma, Tijuana Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(10) OFICIO No. IN-CAB/1693/2019 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.19 Dictamen XXII-CDUOSP-55/2019 relativo a la declaratoria de usos y destino para las áreas de riego en las colonias Sánchez Taboada (PRODUTSA) y anexa Sánchez Taboada; declaratoria de destino para las áreas de riego en la colonia anexa Miramar; declaratoria de uso y destino para las áreas de riego en el fraccionamiento Laderas de Monterrey, y declaratoria de uso y destino para la reducción de riegos en las colonias La Sierra, Roberto Curiel, Libertad Lomas del Rubí, Tajaren, Ampliación Tajaren y Cumbres del Rubí.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(11) OFICIO No. IN-CAB/1762/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, que de acuerdo al artículo 9 fracción VIII del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, se dio aviso al H.

Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California en el Punto del Orden del día 3.2, lo siguiente: "Informe sobre el estado que guarda en materia de acceso a la información y protección de datos personales el H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2019".

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(12) OFICIO No. IN-CAB/1537/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto 3.13 del orden del día: "Punto de acuerdo relativo a la aprobación de los proyectos que actualizan el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana 2008-2030, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2010-2030 y el Programa de Mejoramiento para la Zona Centro de la Ciudad 2004-2025".

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(13) OFICIO No. IN-CAB/1741/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual aprobó en el punto del orden del día 4.2 el Dictamen XXII-FAM-001/2019 relativo a reformas y adiciones a diversos reglamentos municipales.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(14) OFICIO No. IN-CAB/1710/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.4 el Dictamen XXII-GL-72/2019 Proyecto de Reforma al Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(15) OFICIO No. IN-CAB/1542/19 recibido el 27 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DIAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto 3.14 del orden del día: Punto de Acuerdo relativo a someter a Consulta el proyecto de Declaratoria de Conservación del Cerro San Isidro Ajolio, en

la Delegación la Presa Este, Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(16) OFICIO No. SJ/339/2019 recibido el 30 de septiembre de 2019, que remite el C. MEILLÓN HUELGA HORACIO HÉCTOR, en su calidad de SUBDIRECTOR JURÍDICO del XXII Ayuntamiento de Mexicali, B. C., mediante el cual envía respuesta del Dictamen no. 7 de la Comisión de Salud, presentado por el Diputado Raúl Castañeda Pomposo, de la XXII Legislatura del Estado de Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(17) OFICIO No. SJ/337/2019 recibido el 30 de septiembre de 2019, que remite el C. MEILLÓN HUELGA HORACIO HÉCTOR, en su calidad de SUBDIRECTOR JURIDICO del XXII Ayuntamiento de Mexicali, B. C., mediante el cual exhorta respetuosamente a los Alcaldes y Alcaldesas de los Ayuntamientos a que informen a esta Cámara cuantos Centros Deportivos y Recreativos tienen integrados al manejo Municipal.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(18) OFICIO No. IN-CAB/1766/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, que de acuerdo al artículo 126 fracción II del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, se dio aviso al H. Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, en el punto del orden del día 3.3 lo siguiente: Estadística de los asuntos que se encuentran en trámite, de los que se han resuelto y el sentido de su resolución del primer semestre del 2019 del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(19) OFICIO No. in-cup/1641/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.5 el Dictamen XXII-HDA-281/2019 relativo a la solicitud de modificaciones presupuestales y programáticas de egresos para el presente

ejercicio fiscal 2019 del H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(20) OFICIO No. IN-CAB/1717/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.27 el Dictamen XXII-CRBA-012/2019 relativo a 9 solicitudes de permiso permanente para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas bajo distintos giros comerciales.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(21) OFICIO No. IN-CAB/1731/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.1 el Dictamen XXII-ECB-08/2019 relativo a reformar al artículo 9 y cambio de denominación al Capítulo III del Título primero, así como adición de los artículos 11 Bis y 11 Ter del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(22) OFICIO No. IN-CAB/1598/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.18 el Dictamen XXII-CDUOSP-47/2019 relativo a la incorporación municipal del desarrollo urbano denominado "Vista del Rio", localizado en la Delegación La Mesa de esta ciudad.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(23) OFICIO No. IN-CAB/1627/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.26 el Dictamen XXII-CDUOSP-200/2019 relativo a la incorporación municipal del desarrollo urbano denominado "Lomas Tarabilla", localizado en la Delegación La Presa, de esta ciudad.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(24) OFICIO No. IN-CAB/1617/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.25 el Dictamen XXII-CDUOSP-170/2019 relativo a la incorporación municipal del desarrollo urbano denominado "Hacienda Los Venados", localizado en la Delegación Presa Este, de esta ciudad.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(25) OFICIO No. IN-CAB/1607/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 4.24 el Dictamen XXII-CDUOSP-63/2019 relativo a la incorporación municipal del desarrollo urbano denominado "Real de San Francisco II", localizado en la Delegación Presa Este, de esta ciudad.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(26) OFICIO No. IN-CAB/1550/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 3.5, Punto de Acuerdo relativo a creación del Reglamento Interno de Sindicatura Procuradora para el Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(27) OFICIO No. IN-CAB/1555/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DIAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 3.8, Punto de Acuerdo relativo a la autorización al C. Presidente Municipal para solicitar la adhesión permanente de la ciudad de Tijuana a la Red Mexicana de Ciudades Amigas a la Niñez (RMCAN).

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(28) OFICIO No. IN-CAB/1586/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del

orden del día 3.9, Punto de Acuerdo relativo a la creación del Reglamento de Centros de atención, Ciudadano y Desarrollo Integral Infantil para el Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(29) OFICIO No. IN-CAB/1576/19 recibido el 30 de Septiembre de 2019, que remite el LIC GUERRERO DÍAZ LEOPOLDO, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, mediante el cual se aprobó en el punto del orden del día 3.12, Punto de Acuerdo relativo a someter su aprobación el Plan de Acción Climática Municipal de Tijuana, Baja California (PACMUN) así como reformas y adiciones al Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Tijuana, Baja California.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(30) OFICIO No. 093014/14 recibido el 1 de octubre de 2019, que remite el LIC. VEGA DE LA MADRID FRANCISCO ARTURO, en su calidad de GOBERNADOR del ESTADO de B.C., mediante el cual hace del conocimiento que a partir de esta fecha se ausentara de la Entidad con entradas y salidas múltiples, tanto del país como del extranjero, ausencias breves, relacionadas con mi investidura de Titular del Ejecutivo del Estado.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(31) OFICIO No. SJ/374/2019 recibido el 1 de Octubre de 2019, que remite el C. MEILLÓN HUELGA HORACIO HÉCTOR, en su calidad de SUBDIRECTOR JURIDICO del XXII Ayuntamiento de Mexicali, B. C., mediante el cual envía respuesta del exhorto enviado al Titular del Ejecutivo del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid y a los Ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada a que remitan un Informe respecto al cumplimiento de emitir las disposiciones reglamentarias y demás medidas que fuesen necesarias para hacer efectivo el derecho a la Seguridad Social de los miembros de las Instituciones Policiales.

Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia

(32) INFORME S/N recibido el 2 de octubre de 2019, que remite el DIP. VÁSQUEZ HERNÁNDEZ EVA MARÍA, en su calidad de INTEGRANTE de la XXII LEGISLATURA, mediante envía informe de las intervenciones en el Pleno del Congreso del Estado de Baja California.

Túrnese a la Unidad de Transparencia	(33)	ESCRITO S/N recibido el 2 de Octubre de 2019, que remite el LIC. ESPINOZA OROZCO CÉSAR, en su calidad de SOLICITANTE, mediante el cual solicita copia certificada de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, en la que se incluyan las Reformas que hubieran tenido dicha Ley.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(34)	OFICIO No. 058/2019 recibido el 2 de octubre de 2019, que remite la DIP. CABALLERO RAMÍREZ MONSERRAT, en su calidad de INTEGRANTE de la XXIII LEGISLATURA, mediante el cual solicita sea retirada del Proceso Legislativo la Iniciativa presentada por la suscrita ante la oficialía de partes de este H. Congreso del Estado, el día 01 de octubre del 2019, bajo el número de oficio 057/2019.
Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	(35)	INICIATIVA S/N recibido el 3 de Octubre de 2019, que remite la DIP. DEL VILLAR CASAS ROSINA, en su calidad de DIPUTADA INTEGRANTE DE LA H. XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO, de Reforma al Artículo 35 de la Ley de Educación del Estado de Baja California.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(36)	OFICIO No. CTA/670/2019 recibido el 3 de Octubre de 2019, que remite el C. LEYVA CAMACHO GILBERTO, en su calidad de PRESIDENTE COMITE DE TURISMNO Y CONVENCIONES DE TIJUANA, mediante el cual se remite la información para revisión de la Cuenta Pública del Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Tijuana, Baja California.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(37)	OFICIO No. cta./669/2019 recibido el 3 de Octubre de 2019, que remite el SR. LEYVA CAMACHO GILBERTO, en su calidad de PRESIDENTE COMITE DE TURISMNO Y CONVENCIONES DE TIJUANA, mediante el cual envía información para revisión de la Cuenta Pública del Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Tijuana, Estado de Baja California.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(38)	OFICIO No. PP-1641/2019 recibido el 3 de Octubre de 2019, que remite el LIC FLORES BERNAL SANDRA, en su calidad de DIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE TIJUANA, mediante el cual en el punto 3.1 del orden del día se da

		aviso de movimientos presupuestales y programáticos automáticos, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(39)	OFICIO No. 0351/2019 recibido el 3 de Octubre de 2019, que remite el C.P HERNÁNDEZ DÍAZ BLADIMIRO, en su calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual se ampara la modificación Presupuestal, aprobada a la Entidad Paraestatal Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. (ISESALUD)
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(40)	OFICIO No. 0353/2019 recibido el 3 de Octubre de 2019, que remite el C.P HERNÁNDEZ DÍAZ BLADIMIRO, en su calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual se ampara la modificación presupuestal, aprobada a la entidad paraestatal denominada Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP)
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(41)	ESCRITO S/N recibido el 4 de Octubre de 2019, que remite PROFRA SANCHEZ NEVAREZ GUADALUPE, en su calidad de PROFESORA SECCIÓN 37, SNTE., mediante el cual solicita apoyo para solucionar el Desabasto de Medicamentos en ISSSTECALI.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(42)	OFICIO No. PRES-098/2019 recibido el 4 de Octubre de 2019, que remite el LIC. LOAIZA Martínez ALBERTO, en su calidad de MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, mediante el cual envía el tercer trimestre y cuarto trimestre del programa impartición de justicia administrativa correspondiente al programa operativo anual para el ejercicio 2019.
Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	(43)	INICIATIVA S/N recibido el 4 de Octubre de 2019, que remite el DIP. ZAVALA MÁRQUEZ CATALINO, en su calidad de DIPUTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXIII, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el Acceso Libre a Internet del Estado de Baja California.
Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios	(44)	INICIATIVA S/N recibido el 4 de Octubre de 2019, que remite el DIP. ZAVALA MÁRQUEZ CATALINO, en su calidad de DIPUTADO DEL

		CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXIII, mediante el cual envía Proposición de Acuerdo Económico relativo a reconocimientos de Ciudad Santuario a los Ayuntamientos.
Túrnese a la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia	(45)	OFICIO No. IEEBC/CGE/46058/2 recibido el 7 de octubre de 2019, que remite el MTRO. GUZMÁN GÓMEZ RAÚL, en su calidad de SECRETARIO del CONSEJO GENERAL del IEE de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía Punto de Acuerdo número IEEBC-CG-PA99-2019 por el que se Modifica el período vacacional para el mes de octubre del año 2019.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(46)	OFICIO No. TES/JUR/6492/2019 recibido el 7 de Octubre de 2019, que remite la LIC. AVILA OLMEDO MARINA DEL PILAR, en su calidad de PRESIDENTA MUNICIPAL DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, mediante el cual informa que por incumplimiento por parte del Gobierno del Estado, en la transferencia de recursos Entrega de Participaciones a Municipios, se han visto en la necesidad de disponer de recursos con destino predeterminado.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(47)	OFICIO S/N recibido el 7 de Octubre de 2019, que remite el C. CARRAZCO MORENO LUIS ARMANDO, EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO ESTADO, mediante el cual informa que por motivos de agenda no podrá asistir a la comparecencia programada.
Túrnese a la Comisión de Salud	(48)	OFICIO No. DIP FGG. NO.040/19 recibido el 8 de Octubre de 2019, que remite el DIP. GALLARDO GARCÍA FAUSTO, en su calidad de INTEGRANTE DE LA H. XXIII LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA INICIATIVA DE REFORMA DE SALUD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RELACIONADO CON EL TEMA DE PRECLAMPSIA/ECLAMPSIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL TAMIZ PRENATAL.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(49)	OFICIO No. DDP-606/2019 recibido el 8 de Octubre de 2019, que remite el LIC. ORTIZ MORALES SALVADOR JUAN, en su calidad de MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE JUDICATURA Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

		ESTADO, mediante el cual envía Información documental correspondiente a una Modificación Programática aplicable al Programa Operativo Anual 2019, alineado al Plan de Desarrollo Judicial 2018-2020 del Poder Judicial del Estado de Baja California.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(50)	OFICIO No. OD-004/19 recibido el 8 de Octubre de 2019, que remite el LIC. GÓMEZ ESCALANTE RAFAEL GUILLERMO, en su calidad de DIRECTOR DEL FIDUM, mediante el cual envía el Tercer Informe de Gestión Financiera 2019 de la Entidad denominada FIDUM.

(CONCLUYE)

(SE INSERTA CORRESPONDENCIA DESPACHADA)

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

Oficio de fecha 26 de septiembre de 2019, dirigido al LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, Titular del Ejecutivo del Estado, por el que se exhorta se tome las medidas necesarias a fin de beneficiar a las personas de escasos recursos que habitan en Tecate en el programa Tu Energía. Asimismo, se turnó al C. José Alberto Celestinos Issacs, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Oficio de fecha 19 de septiembre de 2019, dirigido al LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, Titular del Ejecutivo del Estado, por el que se exhorta a que intensifique la promoción de los diversos beneficios fiscales entre la comunidad empresarial-patronal, para la contratación de personas con discapacidad. Asimismo, se turnó a los Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Francisco Javier Iribe Paniagua, Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Oficio de fecha 19 de septiembre de 2019, dirigido al LIC. ALEJANDRO RUÍZ URIBE, Titular del Delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, por el que se exhorta abordar el tema migratorios, sobre todo lo relacionado a la eventual instalación de albergues para migrantes. Asimismo, se turnó al LIC. FRANCISCO GARDUÑO YAÑEZ, Comisionado Presidente del INAMI.

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada Escrutadora, continuamos con el siguiente apartado del orden del día, "Comunicaciones Oficiales" esta Mesa Directiva, hace del conocimiento a la Asamblea que se recibió Oficio por parte del Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez informando que es su deseo dejar de formar parte de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público a partir del día 03 de octubre del presente, se hace del conocimiento a la Asamblea, para los efectos correspondientes. Continuando en el siguiente apartado del orden del día "Iniciativas" para su trámite en Oficialía de Partes de este Congreso hago del conocimiento de la Asamblea que se presentaron las siguientes:

1. De la Diputada Rosina del Villar Casas, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Educación del Estado de Baja California; misma que se turna a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; así como en conjunto con la de Hacienda y Presupuesto.

2. Del Diputado Catalino Zavala Márquez, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se crea la Ley para el Acceso Libre a

Internet del Estado de Baja California; misma que se turna a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Hacienda y Presupuesto.

3. Del Diputado Catalino Zavala Márquez, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se presenta Proposición de Acuerdo Económico mediante el cual la H. XXIII Legislatura formalice el reconocimiento de Ciudad Santuario a los Ayuntamientos dispuestos a signar una carta compromiso pública con este Congreso, para el desarrollo en alianza con la sociedad civil y la académica, de un programa municipal que tenga de manera integral con perspectiva de derechos humanos para la inclusión de la población migrante;

Turno: Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

5. De la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; se turna a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

6. Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del PAN, por el que se reforman diversos artículos del Capítulo V, denominado "DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE", que comprende también otros artículos, de la Constitución Política del Estado; se turna a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Concluidas las iniciativas turnadas a comisiones para presentar ante el pleno del Congreso iniciamos con estas y pedimos a los Diputados que hagan uso de la voz

atenerse al tiempo legislativo, por favor Secretaria; y tiene el uso de la voz el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario Morena para presentar Iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado.

- EL C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ: Muy buenos días tengan todos ustedes. Diputado Catalino Zavala Márquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Tercer Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. Diputado Presidente solicito se incorpore el contenido íntegro de la presente iniciativa en el Diario de Debates.

- EL C. PRESIDENTE: Así será Diputado.

- EL C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ: Gracias, compañeras y compañeros Diputados, el suscrito El suscrito Diputado VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de MORENA de la XXIII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

> Considerando que la Constitución Federal establece que todos los actos de autoridad deben de ser por escrito conforme el mandato

establecido en el artículo 16 constitucional que en lo conducente dice: *"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

Y que por su parte en los procesos civiles tramitados bajo el Código de Procedimientos Civiles en el estado, uno de los acuerdos que le pueden recaer a los escritos de las demandas en esta materia es el denominado prevención, que significa advertir o avisar, el mismo se encuentra regulado en el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles que a la letra dice:

"Artículo 258.- Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez debe prevenir el acto, "perdón, debe de prevenir al actor que la aclare", corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos; hecho lo cual le dará curso. El Juez puede hacer esta prevención por una sola vez y verbalmente. Si no le da curso, podrá el promovente acudir en queja al superior."

Dicho precepto se considera que es inconstitucional por faltar, "perdón, por," facultar a los jueces a emitir actos de autoridad en forma verbal en contra posición al mandato constitucional y que además genera inseguridad en el justiciable al solo escuchar los motivos de oscuridad o irregularidad en la demanda además de las indicaciones que debe seguir para aclarar, corregir o completar su escrito inicial que

a su vez el acto mediante el cual subsana es un acto delicado porque solo tiene una oportunidad ya que el mismo precepto establece que si subsiste la prevención implica la no admisión y por lo tanto incumbe al actor impugnar en queja al superior.

A efecto de salvaguardar los derechos humanos y tutela efectiva de los justiciables que accedan a estos juicios se propone reformar dicho artículo secundario para quedar como sigue:

ÚNICO. - Se aprueba la adición y reforma del artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 258. Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores señalando en concreto y de manera precisa sus defectos mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, cuando;

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 256 de este Código;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión las prestaciones de la demanda; y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda y anexos.

El juez puede hacer esta prevención por una sola vez y en caso que el actor incumpla con lo prevenido dictará acuerdo por escrito en el que tenga por no presentada la demanda, resolución que la parte afectada podrá impugnar mediante el recurso de

queja en los términos establecidos en el artículo 709 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California.

TRANSITORIOS

ÚNICO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Único, "perdón", Transitorio, ya lo dijimos.

Dado en el Salón de Sesiones de Pleno "Lic. Benito Juárez García" del Congreso del Estado de Baja California, a los tres días del mes de octubre de 2019.

Atentamente

Grupo Parlamentario MORENA

Diputado Víctor Manuel Hernández.

Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR EL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ)

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA XXIII

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA.

Presente. -

Compañeras y compañeros Diputados:

El suscrito Diputado VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de MORENA de la XXIII Legislatura

Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículos 110 fracción II, 115 fracción I, 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la Constitución Federal establece que todos los actos de autoridad deben de ser por escrito conforme el mandato establecido en el artículo 16 constitucional que en lo conducente dice:

> *"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo."*

Y que por su parte en los procesos civiles tramitados bajo el Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad federativa, uno de los acuerdos que le pueden recaer a los escritos de demandas en esta materia es el denominado prevención, que significa advertir o avisar, el

mismo se encuentra regulado en el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles que a la letra dice:

> *"Artículo 258.- Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos; hecho lo cual le dará curso. El Juez puede hacer esta prevención por una sola vez y verbalmente. Si no le da curso, podrá el promovente acudir en queja al superior."*

Dicho precepto se considera que es inconstitucional por facultar a los jueces a emitir actos de autoridad en forma verbal en contra posición al mandato constitucional y que además genera inseguridad en el justiciable al solo escuchar los motivos de oscuridad o irregularidad en la demanda además de las indicaciones que debe seguir para aclarar, corregir o completar su escrito inicial que a su vez el acto mediante el cual subsana es un acto delicado porque solo tiene una oportunidad ya que el mismo precepto establece que si subsiste la prevención implica la no admisión y por lo tanto incumbe al actor impugnar en queja al superior.

A efecto de salvaguardar los derechos humanos y tutela efectiva de los justiciables que accedan a estos juicios se propone reformar dicho artículo secundario para quedar de la siguiente manera:

Artículo 258. Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los

artículos anteriores señalando en concreto y de manera precisa sus defectos mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, cuando;

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 256 de esteCódigo;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión las prestaciones de la demanda; y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda y anexos.

El juez puede hacer esta prevención por una sola vez y en caso que el actor incumpla con lo prevenido dictará acuerdo por escrito en el que tenga por no presentada la demanda, resolución que la parte afectada podrá impugnar mediante el recurso de queja en los términos establecidos en el artículo 709 del presente Código.

Por lo anterior, me permito citar la comparativa del precepto legal en su estado actual como se aprecia a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 258.- Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto ~~sus defectos; hecho lo cual le dará curso. El Juez puede hacer esta prevención por una sola vez y verbalmente. Si no le da curso, podrá el promovente acudir en queja al superior.~~	**Artículo 258**. Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores señalando en concreto **y de manera precisa sus defectos mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, cuando;** ***I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;*** ***II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 256 de este Código;*** ***III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;***

	IV. No se hubiere expresado con precisión las prestaciones de la demanda; y ***V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda y anexos.*** **El juez puede hacer esta prevención por una sola vez y en caso que el actor incumpla con lo prevenido dictará acuerdo por escrito en el que tenga por no presentada la demanda, resolución que la parte afectada podrá impugnar mediante el recurso de queja en los términos establecidos en el artículo 709 del presente Código.**

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO DE**

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:

D E C R E T O

ÚNICO. - Se aprueba la adición y reforma del artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 258. Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores señalando en concreto y de manera precisa sus defectos mediante acuerdo por escrito debidamente fundado y motivado, cuando;

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 256 de este Código;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión las prestaciones de la demanda; y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda y anexos.

El juez puede hacer esta prevención por una sola vez y en caso que el actor incumpla con lo prevenido dictará acuerdo por escrito en el que tenga por no presentada la demanda, resolución que la parte afectada podrá impugnar mediante el recurso de queja en los términos establecidos en el artículo 709 del presente Código.

TRANSITORIOS

ÚNICO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en el Salón de Sesiones de Pleno "Lic. Benito Juárez García" del Congreso del Estado de Baja California, a los 10 días del mes de octubre de 2019.

A T E N T A M E N T E
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ
HOJA DE FIRMA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESENTADA POR EL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ.

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado, se turna a la Comisión de Justicia, tiene el uso de la voz el Diputado Gerardo López Montes.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Buenos días, Honorable Presidencia de la Mesa Directiva de esta Honorable Legislatura del Estado, compañeras y compañeros Legisladores, buenos días a todos los que nos acompañan, el suscrito Gerardo López Montes integrante de esta Legislatura, acudo ante esta tribuna a fin de someter a la distinguida consideración la Iniciativa de reforma a los artículos 6 bis y 15 fracciones V, VI y X de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, bajo la siguiente,

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Lengua de Señas Mexicanas consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y motivo corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de

dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad afirma que para la gran mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud, ésta es la lengua en que articulan sus pensamientos y sus emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que les rodea.

El Artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como la lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana y serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad.

Estas disposiciones quedaron plasmadas en el Artículo 15 de nuestra Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California y la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), la encargada de promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, bibliotecas, guarderías o por parte del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Estatal.

Y en la Fracción VI de este numeral se le impone la obligación a la SEBS de implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema

de Escritura Braille, en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; así como programas de capacitación e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Estatal. De igual forma, diseñar, formular, promover, organizar e impartir capacitaciones y certificaciones en la Lengua de Señas Mexicanas.

Es en este sentido, que acudimos a esta tribuna para traer a la consideración del Pleno de esta H. XXIII Legislatura, la presente reforma que busca definir de mejor manera la facultad de la Secretaría de Educación y Bienestar Social para emitir las certificaciones correspondientes a los intérpretes y traductores de Lengua de Señas Mexicana y Sistema Braille, lo anterior, para armonizar la Ley de las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California con la que establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Lo anterior porque como Presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y de la Niñez, estoy un convencido de que como Diputados, debemos luchar por garantizar que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco jurídico nacional e internacional.

Compañeras y compañeros Diputados no debemos olvidar que como representantes populares debemos pugnar por desaparecer de nuestra legislación estatal cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito

o el efecto de obstica, obstica, "gracias compañero, no he desayuno eh", obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivo de discapacidad.

Esta reforma, es parte de los compromisos que realizamos con diversas asociaciones civiles por los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y de la niñez.

Muchas gracias, Atentamente Gerardo López.

Gracias compañero por el apoyo.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR EL DIPUTADO GERARDO LÓPEZ MONTES)

H. PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

Compañeras y Compañeros Legisladores:

El suscrito, Gerardo López Montes, Diputado integrante de esta XXIII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27, Fracción I, 28, Fracción I, y demás relativos de la Constitución Local; así como en lo previsto por los Artículos 110, fracción I, 112, 115 Fracción I, 116, 117, 118 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,

acudimos ante esta tribuna, a fin de someter a la distinguida consideración de esta Honorable Asamblea: Iniciativa de Reforma a los Artículos 6 BIS y 15 Fracciones V, VI y X, de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California; bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Lengua de Señas Mexicanas consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) señala que la dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los demás, dificulta su desarrollo educativo, profesional y humano, por consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión.

De esta forma el CONADIS afirma que para la gran mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud, ésta es la lengua en que articulan sus pensamientos y sus emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que les rodea.

El Artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana y que serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad.

Esta Ley en su numeral 12, le impone a La Secretaría de Educación Pública promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional y para tales efectos, debe realizar entre otras, las siguientes acciones:

Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana;

Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;

Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual.

Estas disposiciones quedaron plasmadas en el Artículo 15 de nuestra Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California en donde es la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), la encargada de promover el derecho a la

educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, bibliotecas, guarderías o por parte del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Estatal.

Así mismo difundir entre la comunidad académica el respeto a la diversidad; proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes, traductores de lengua de señas mexicana, o especialistas en Sistema Braille, maestras sombra, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad.

Y en la Fracción VI de este numeral se le impone la obligación a la SEBS de implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; así como programas de capacitación e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Estatal. De igual forma, diseñar, formular, promover, organizar e impartir capacitaciones y certificaciones en la Lengua de Señas Mexicanas.

En el numeral 15 se destacan dos obligaciones más para la SEBS:

"IX.- Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas; así como de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual entre ellas el sistema de escritura Braille y otras tecnologías;

X.-Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana promoviendo la Educación Bilingüe para Sordos, que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;"

Es en este sentido, que acudimos a esta tribuna para traer a la consideración del Pleno de esta H. XXIII Legislatura, la presente reforma que busca definir de mejor manera la facultad de la SEBS para emitir las certificaciones correspondientes a los intérpretes y traductores de Lengua de Señas Mexicana y Sistema Braille, lo anterior, para armonizar la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California con lo que establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Lo anterior porque como Presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez, soy un convencido de que como diputados, debemos luchar por garantizar que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco jurídico nacional e internacional,

Compañeras y compañeros diputados no debemos olvidar que como representantes populares debemos pugnar por desaparecer de nuestra legislación estatal cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivo de discapacidad.

Esta reforma, es parte del compromiso que realizamos con diversas asociaciones civiles por los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y niñez de la ciudad de Tijuana el día de la instalación de la Comisión que me honro en presidir, la cual fue atestiguada por mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión y por distinguidos diputados invitados que nos manifestaron su total apoyo y reconocimientos en la defensa los derechos de las personas.

Para mejor ilustración de nuestra pretensión legislativa presentamos el siguiente cuadro comparativo:

Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California.

Dice	Diría
ARTÍCULO 6 BIS.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, con peritos especializados en las diversas	ARTÍCULO 6 BIS.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, con peritos especializados en las diversas

discapacidades y con la capacitación y sensibilización dirigido al personal de las instancias de impartición de justicia, sobre la atención a las personas con discapacidad. Procurando con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de Escritura Braille, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.	discapacidades**,** con la capacitación y sensibilización dirigido al personal de las instancias de impartición de justicia, sobre la atención a las personas con discapacidad. Procurando con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones apoyo de intérpretes **certificados** de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de Escritura Braille, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.
ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Educación y Bienestar Social promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, bibliotecas, guarderías o por parte del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Estatal. Así mismo difundirá entre la comunidad académica el respeto a la diversidad. Para tales efectos, llevara a cabo entre otras acciones: I a la IV V.- Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes, traductores de lengua de señas mexicana, o	ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Educación y Bienestar Social promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, bibliotecas, guarderías o por parte del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Estatal. Así mismo difundirá entre la comunidad académica el respeto a la diversidad. Para tales efectos, llevara a cabo entre otras acciones: I a la IV V.- Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes, traductores **y especialistas certificados en** lengua

especialistas en Sistema Braille, maestras sombra, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;	de señas mexicana, **Sistema Braille y** maestras sombra, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;
VI.- Implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; así como programas de capacitación e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Estatal.	VI.- Implementar el reconocimiento oficial, **certificación y capacitación** de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; así como programas de capacitación e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Estatal;
De igual forma, diseñar, formular, promover, organizar e impartir capacitaciones y certificaciones en la Lengua de Señas Mexicanas;	
X.-Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana promoviendo la Educación Bilingüe para Sordos, que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;	X.-Impulsar programas de investigación, preservación, desarrollo **y certificación** de la Lengua de Señas Mexicana promoviendo la Educación Bilingüe para Sordos, que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;
XI a la XVIII	XI a la XVIII

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,

Iniciativa de Reforma en los términos del siguiente:

RESOLUTIVO:

UNICO: Se reforman los Artículos 6 BIS y 15 Fracciones V, VI y X, de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6 BIS.- …

Procurando con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones apoyo de intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de Escritura Braille, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

ARTÍCULO 15.- …

Para tales efectos, llevara a cabo entre otras acciones:

I a la IV…

V.- Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes, traductores y especialistas certificados en lengua de señas mexicana, Sistema Braille y maestras sombra, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;

VI.- Implementar el reconocimiento oficial, certificación y capacitación de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; así como programas de capacitación e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Estatal;

VII a la IX…

X.-Impulsar programas de investigación, preservación, desarrollo y certificación de la Lengua de Señas Mexicana promoviendo la Educación Bilingüe para Sordos, que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;

XI a la XVIII

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación y Bienestar Social tendrán 90 días para realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias, a efecto de instrumentar las certificaciones a que se refiere la presente reforma.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García" del Edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C. a los 10 días del mes de octubre del 2019.

DIPUTADO GERARDO LOPEZ MONTES

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Se turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz la Diputada María Trinidad Vaca Chacón.

- LA C. DIP. MARÍA TRINDAD VACA CHACÓN: Muy buenos días a todos los asistentes, medios de comunicación, compañeros Diputados, amigos todos, Diputado Presidente, presento esta Iniciativa sobre orfandad por feminicidio a nombre propio y como Diputada independiente, le solicito que la presente iniciativa se anexe de manera íntegra en la gaceta parlamentaria.

El feminicidio es una afrenta y una flagrante violación a los derechos humanos, ya que generalmente a todo feminicidio antecede una situación de abuso y violencia en contra de la víctima.

Pero el daño, que un feminicidio causa que no concluye con la pérdida de la vida de una mujer, lamentablemente sus consecuencias se prolongan hacia lo que podríamos calificar como víctimas colaterales o víctimas indirectas, que generalmente son los hijos que, de pronto, se quedan en total estado de indefensión y de vulnerabilidad.

Una estimación inicial que más de tres mil 300 niños quedaron en orfandad hasta mayo de 2019.

Algunas mujeres asesinadas no tenían hijos, pero otras tenían hasta cinco, por lo cual incluso estimaciones a la baja, de quienes cuentan un niño por mujer, dan más de 3.600 huérfanos en 2018.

Así, se tiene que huérfanos por feminicidio viven con un alto grado de vulnerabilidad, esto en razón de que persiste un contexto de violencia e impunidad, que se agrava por una incapacidad del Estado mexicano para brindar las condiciones mínimas necesarias para proteger a las víctimas indirectas de los feminicidios. Situación que se complica a causa de las disminuciones en los recursos presupuestales asignados al tema de la niñez, por parte del gobierno federal.

Los niños huérfanos por feminicidio, tienen que enfrentar solos la enorme carga emocional que significa la pérdida violenta de su madre, porque no existen registros institucionales que indiquen en dónde están, con quién y cómo viven; se ignora si continúan sus estudios, en fin, se desconoce cuál es su perspectiva de vida.

Esta situación es alarmante, si consideramos que, de acuerdo a la mayoría de los estudios que señalan que la mayoría de las víctimas de feminicidios son mujeres jóvenes, jefas de familia, trabajadoras con bajos recursos económicos, es decir,

en una grave situación de vulnerabilidad, por lo que el escenario también para sus hijos queda totalmente incierto y riesgoso.

En Baja California, esta problemática está presente y crece de manera preocupante, las víctimas indirectas de los feminicidios están desprotegidas y carentes de atención institucional.

Es un rubro pendiente en nuestro estado, que está entre las primeras diez entidades a nivel nacional en asesinatos y violencia hacia las mujeres.

Así la presente Iniciativa tiene como propósito establecer reformas a la Ley de Víctimas a efecto de que el Registro Estatal de Víctimas incluya dentro de su propia integración los registros de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, por feminicidio que se encuentren en cualquier Institución o Entidad del ámbito estatal o municipal, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquellos casos en que donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación, asimismo en esta Iniciativa se proponen reformas a diversos artículos de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, a fin de armonizarlas con la reforma propuesta a la Ley de Víctimas en cuanto al concepto de orfandad por feminicidio.

Compañeras y compañeros Diputados, por las víctimas invisibles de los feminicidios les pido su apoyo favorable a esta propuesta, por su atención gracias, es cuanto.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN)

Dip. Catalino Zavala Márquez, Presidente de la Mesa Directiva, XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

P r e s e n t e.-

La suscrita, **María Trinidad Vaca Chacón**, Diputada independiente a la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 27, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 110, fracción I; 111; 115, fracción I, y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, pongo a consideración de esta Soberanía la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE VÍCTIMAS Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, AMBAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE ORFANDAD POR FEMINICIO**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ola de feminicidios que, desde hace años, invade el país resulta altamente preocupante y condenable. Tan solo en los primeros ocho meses de 2019, se registraron más de 600 mujeres que fueron asesinadas simplemente por el

hecho de ser mujeres. Es decir, un promedio de 3 mujeres por día es víctima de feminicidio.

Esta violencia contra mujeres es un reflejo del grado de desprecio que aún persiste en contra de las mujeres, únicamente por ser mujeres, sin tener otra motivación más que ver a una mujer como alguien a quien se puede violentar, agredir, ofender, acosar e incluso asesinar, sin que haya castigo alguno, es decir, una total impunidad.

No se puede negar el factor de cohesión social y de unidad familiar que representa la mujer en nuestra sociedad. De ahí que el feminicidio, más allá de ser un delito, así tipificado por la legislación penal, es una afrenta y una flagrante violación a los derechos humanos, ya que generalmente a todo feminicidio antecede una situación de abuso y violencia en contra de la víctima.

Es precisamente por el daño, que un feminicidio causa que no concluye con la pérdida de la vida de una mujer, atenta contra la familia misma, ya que lamentablemente sus consecuencias se prolongan hacia lo que podríamos calificar como víctimas colaterales o víctimas indirectas, que generalmente son los hijos que, de pronto, se quedan en total estado de indefensión y de vulnerabilidad.

Una estimación inicial indica que más de 3,300 niños quedaron en orfandad <u>hasta mayo de 2019</u>. La cifra surge de multiplicar los feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, de ahí que de las 1,500 fallecidas por

estas circunstancias según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), multiplicado por la tasa de natalidad, de 2.21 hijos por mujer según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).

Siguiendo esta lógica, el año pasado hubo más de 8,100 huérfanos. Algunas mujeres asesinadas no tenían hijos, pero otras tenían hasta cinco, por lo cual incluso estimaciones a la baja, de quienes cuentan un niño por mujer, dan más de 3.600 huérfanos en 2018.1

Así, se tiene que huérfanos por feminicidio viven con un alto grado de vulnerabilidad, esto en razón de que persiste un contexto de violencia e impunidad, que se agrava por una incapacidad del Estado mexicano para brindar las condiciones mínimas necesarias para proteger a las víctimas indirectas de los feminicidios. Situación que se complica a causa de las disminuciones en los recursos presupuestales asignados al tema de la niñez, por parte del gobierno federal.

Es lamentable y altamente preocupante que no se cuente con un registro veraz, certero y actualizado de las víctimas colaterales de feminicidios. Es una responsabilidad en la que el Estado mexicano está siendo omiso. Es menester que se emprendan acciones que, desde diferentes áreas de nuestro andamiaje institucional, ofrezcan protección y asistencia social permanente a quienes se encuentran en situación de orfandad por feminicidio.

Los niños huérfanos por feminicidio, tienen que enfrentar solos la enorme carga emocional que significa la pérdida violenta de su madre, porque no existen registros institucionales que indiquen en dónde están, con quién y cómo viven; se ignora si continúan sus estudios, en fin, se desconoce cuál es su perspectiva de vida.

Esta situación es alarmante, si consideramos que, de acuerdo a la mayoría de los estudios que señalan que la mayoría de las víctimas de feminicidios son mujeres jóvenes, jefas de familia, trabajadoras con bajos recursos económicos, es decir, en una grave situación de vulnerabilidad, por lo que el escenario para sus hijos queda totalmente incierto y riesgoso.

[1] EL PAÍS.- "Los niños huérfanos por feminicidios: las víctimas invisibles de la violencia en México" Consulta en línea:

https://elpais.com/internacional/2019/08/08/mexico/1565299789_217540.html

En Baja California esta problemática está presente y crece de manera preocupante.

La Mtra. Maricarmen Rioseco Gallegos, Consejera Consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ha señalado que las víctimas indirectas de los feminicidios en México, y de manera particular en Baja California, están desprotegidas y carentes de atención institucional; asegura que es un rubro pendiente en nuestro país, y en esta entidad fronteriza que registra altos índices de asesinatos de mujeres, toda vez que la entidad está entre las primeras diez entidades a nivel nacional en asesinatos y violencia hacia las mujeres, de acuerdo a los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2019.

Agrega la Consejera de INMUJERES, que la violencia feminicida implica un riesgo en el proyecto de vida de estas víctimas indirectas, por eso es importante para ellas y la propia comunidad que se repare y resarza con atención física, psicológica y que se aseguren su escolaridad y sustento. Lamentó que cuando se habla de "ruptura del tejido social" no se haga referencia a los niños y niñas víctimas de la violencia de género llevada al extremo como lo es el feminicidio y que en la psicológica colectiva se traduce en una "amargura social por el trauma, la injusticia, la violencia padecida y que genera un grave rencor social". La consejera de INMUJERES por Baja California dijo que si bien existe la legislación de víctimas en la realidad y ante el grave problema de feminicidios que enfrenta nuestro país y entidad, queda al descubierto la desprotección en la que quedan miles de niños y jóvenes.2

Siendo esta una problemática no sólo de nuestro país, y muy presente en nuestro Estado, sino vigente, lamentablemente, también en otros países, los esfuerzos institucionales que se han hecho para mitigar los efectos en las víctimas colaterales de feminicidio no han logrado darle un cauce adecuado a esta situación.

Así, la presente Iniciativa tiene como propósito establecer reformas a la Ley de Víctimas, a efecto de que el Registro Estatal de Víctimas contemple también dentro de su propia integración los registros de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal o municipal, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

[2] Antonio Heras/Lindero Norte. - Desprotegidas Y Sin Atención Víctimas Indirectas De Feminicidios, Advierte Maricarmen Rioseco De INMUJERES. Consulta en línea: https://www.enlineabc.com.mx/2019/08/31/desprotegidas-y-sin-atencion-victimas-indirectas-de-feminicidios-advierte-maricarmen-rioseco-de-inmujeres/

Asimismo, en esta Iniciativa se proponen reformas a diversos artículos de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, a fin de armonizarla con la reforma propuesta a la Ley de Víctimas, en cuanto al concepto de orfandad por feminicidio.

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE VÍCTIMAS Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, AMBAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRIMERO. - Se reforma y adiciona una fracción IV al artículo 103 de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 103.- El Registro Estatal será integrado por las siguientes fuentes:

I. a III.- [. . .]

IV.- Los registros de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal o municipal, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades e instituciones [. . .]

SEGUNDO. - Se reforman los artículos 8, segundo párrafo; 34, fracción IV; 35, párrafos primero y segundo; 45, segundo párrafo, y 47 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 8. En la aplicación de la presente Ley [. . .]

Las autoridades del Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, orfandad por feminicidio, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 34. Para garantizar la igualdad sustantiva [. . .]

I. a III. [. . .]

IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja o que se encuentren en situación de orfandad por feminicidio para el ejercicio de los derechos contenidos en esta Ley,;

y

IV. Los demás deberes [. . .]

Artículo 35. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de encontrarse en situación de orfandad por feminicidio, su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de orfandad por feminicidio, en situación de calle, trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad.

Artículo 45. Las autoridades del Estado y sus Municipios [. . .]

I. a IX. [. . .]

Las autoridades competentes están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, atender, erradicar y sancionar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y para los que se encuentren en situación de orfandad por feminicidio.

Artículo 47. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos o se encuentren en situación de orfandad por feminicidio se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la legislación local de la materia y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

TRANSITORIOS

Primero. – El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. – El Ejecutivo del Estado contará con 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para integrar los Registros a que se hace referencia en el mismo.

Dado en la Sede del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a los 10 días del mes de octubre de 2019.

Suscribe

Dip. María Trinidad Vaca Chacón

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada su iniciativa será turnada a la Comisión de Justicia. Tiene el uso de la voz…

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Presidente, nada más ahí expresar un pequeño detalle, Diputada ojalá me permite sumarme a su iniciativa, todo lo que tenga que ver en beneficio de la niñez, mujeres, todo lo que tenga que ver en beneficio de Baja California estoy dispuesto a trabajar en conjunto, ojalá me permita, me permita ser parte de esta iniciativa.

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Con mucho gusto Diputado, y espero el apoyo de todos, y a favor de los Niños, Niñas, y Adolescentes.

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Diputada si me permite también unirme, ni una menos compañeros, ni una menos.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Todos Diputados.

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Con mucho gusto gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputados se pasará la lista de firmas correspondiente, tiene el uso de la voz el Diputado David Ruvalcaba Flores.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Muchas gracias Diputado, buenos días señor Presidente, compañeros, compañeras Diputadas, Diputados, amable concurrencia.

El que suscribe Diputado David Ruvalcaba Flores, integrante de la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en nombre del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, presento ante ustedes, Iniciativa de Reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, de la cual señor Presidente solicito sea tan amable de insertar de forma íntegra el texto de la misma en la gaceta parlamentaria y en el diario de los debates.

- EL C. PRESIDENTE: Así se hará Diputado.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Gracias señor Presidente. El día de hoy, somos testigos de cómo la Universidad, ha decidido salir a las calles a manifestar lo justo, lo que por derecho le corresponde, algunos podrán criticar estas acciones, pero la realidad es que se le ha orillado a esta situación.

Promesas de pago incumplidas, convenios que no se respetan, juego de cifras, mal información, ha sido la constante para evitar el pago justo y real, de lo que nosotros como Diputados aprobamos en el presupuesto de egresos del Estado de Baja California.

Y es aquí donde nos sumamos al debate siempre en respeto absoluto a la autonomía universitaria para modificar esta Ley, que data de 1957 y que no ha sido reformada desde junio de 1983, lo cual implica un desface con las necesidades reales a las que se enfrenta nuestra máxima casa de estudios. No podemos permitir que administradores y secretarios de planeación y finanzas, o de lo que sea, hagan hasta lo imposible por no cumplir en tiempo y forma con las aportaciones necesarias para el sano sustento de las finanzas de la Universidad.

Por tal motivo, con la propuesta que hoy se presenta se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Universidad, con el propósito de que el Gobierno del Estado realice las ministraciones una vez que s cuente con el recurso, que se haga sin demora, para que la máxima casa de estudios, no se vea afectada en sus funciones administrativas y lo que es más, más importante aún, que nuestros estudiantes tengan las mejores condiciones para recibir educación de calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración de esta Honorable Soberanía…"perdón"

- EL C. PRESIDENTE: Ya terminó Diputado.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: "Perdón"

ÚNICO: Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, para quedar como sigue:

Articulo 43.- (…)

El Gobierno del Estado queda obligado directamente a contribuir para la construcción de los edificios requeridos por la Universidad Autónoma de Baja California.

El Gobierno del Estado, estará obligado a cumplir dentro de los primeros 15 días del mes el pago de las ministraciones que conforme al subsidio corresponda, así como de los recursos, apoyos, ministraciones o demás conceptos extraordinarios que de carácter federal reciba por su conducto para esta Universidad. En ningún momento podrá disponer la utilización o manejo de los fondos o pagos correspondientes a la Universidad Autónoma de Baja California.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diez y nueve.

Por su atención muchas gracias, es cuanto señor Presidente.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR EL DIP. DAVID RUVALCABA FLORES)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MARQUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE

LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

DEL CONGRESO DEL ESTADO.

El suscrito Diputado David Ruvalcaba Flores, integrante de la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en nombre del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 22 y 28 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículos 110 Fracción III, 114, 117, 119 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter a consideración del Pleno de esta Honorable Legislatura, la siguiente Iniciativa de Reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, teniendo como base la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1500 millones de pesos es la cantidad real que el Gobierno del Estado de Baja California debe a la Universidad Autónoma de Baja California. Según las propias cifras de este ente público, una parte es conocida como deuda histórica y la otra gran parte es lo que la administración estatal no ha entregado a la máxima casa de estudios, conforme a lo aprobado por esta soberanía año con año en los presupuestos de egresos.

El día de hoy, somos testigos de cómo la Universidad, ha decidido salir a las calles a manifestar lo justo, lo que por derecho les corresponde, algunos podrán criticar estas acciones, pero la realidad es que se le ha orillado a esta situación.

Promesas de pago incumplidas, convenios de pago que no se respetan, juego de cifras, mal información, ha sido la constante para evitar el pago justo y real, de lo que nosotros como diputados aprobamos en el presupuesto de egresos del Estado de Baja California.

Y es aquí donde nos sumamos al debate para modificar esta Ley que data de 1957 y que no ha sido reformada desde junio de 1983, lo cual implica un desface con las

necesidades reales a las que se enfrenta nuestra máxima casa de estudios. No podemos permitir que administradores y secretarios de planeación y finanzas, hagan hasta lo imposible por no cumplir en tiempo y forma con las aportaciones necesarias para el sano sustento de las finanzas de la UABC.

Es por ello, que con la presente iniciativa se propone reformar el segundo párrafo del artículo el artículo 43 para eliminar la previsión de "la instalación provisional de la UABC," esto en virtud de que la misma hacia referencia a una situación que ya aconteció. Considerando pertinente dejar patente la obligación del Ejecutivo Estatal, para que sea su prioridad cumplir con las ministraciones, así como turnar inmediatamente los recursos federales que se otorgan a la Educación Superior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor del siguiente resolutivo:

ÚNICO: Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, para quedar como sigue:

Articulo 43.- (…)

El Gobierno del Estado queda obligado directamente a contribuir para la construcción de los edificios requeridos por la Universidad Autónoma de Baja California.

El Gobierno del Estado, estará obligado a cumplir dentro de los primeros 15 días del mes el pago de las ministraciones que conforme al subsidio corresponda, así como de los recursos, apoyos, ministraciones o demás conceptos extraordinarios que de carácter federal reciba por su conducto para esta Universidad. En ningún momento

podrá disponer la utilización o manejo de los fondos o pagos correspondientes a la Universidad Autónoma de Baja California.

ARTÍCULO TRANSITORIO

UNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diez y nueve.

ATENTAMENTE

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado, se turna a la Comisión de Educación, para su análisis y discusión, continúa en el uso de la voz la Diputada Araceli Geraldo Núñez.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: DIPUTADO CATALINO ZÁVALA MÁRQUEZ, Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, por la premura del tiempo, voy a leer los puntos principales de la presente iniciativa, solicitándole Presidente que pase íntegro el texto a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, compañeras y compañeros Diputados.

La suscrita Diputada ARACELI GERALDO NUÑEZ, en nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 27, 28 ambos de la fracción I, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Estado de Baja California, someto a consideración de este Honorable Congreso, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE LA INCLUSIÓN DE SEGURO MÉDICO COLECTIVO PARA ACCIDENTES DENTRO DEL PLANTEL ESCOLAR PARA EL NIVEL BÁSICO POR LO QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5-BIS, FRACCIÓN I, II, III Y IV, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para nuestros el ámbito escolar es dónde más tiempo pasan después del hogar, y como tal, es el lugar donde más expuestos se encuentran a un accidente, la mayoría de los percances ocurren durante los recreos escolares, es en esos momentos de juego que los accidentes son más comunes desde un raspón durante el juego de futbol hasta una caída de los juegos que practican nuestros niños y niñas en el recreo.

Este tipo de accidentes comunes, son el día a día para los maestros en los planteles educativos diferentes, es cuando los accidentes se suscitan por la negligencia de la autoridad competente que hace caso omiso a su obligación de inspeccionar de

manera periódica los patios de juego de los planteles educativos, una afinidad de accidentes escolares se han suscitado dentro de los planteles escolares en todo el estado por la falta de inspección y mantenimiento por las áreas de juegos recreativos.

Hace unos días el caso más reciente y preocupante ocurrió en las instalaciones de la Escuela "Carmen Piña" en la colonia Pro hogar en la ciudad de Mexicali, donde una parte de la estructura de los columpios le cayó en la cabeza a un alumno del quinto año de primaria.

Este niño de nombre Edwin Daniel esa mañana salió al recreo como todos los días y lo primero que hizo fue ir a los columpios, junto con otros niños se estaban columpiando, cuando repentinamente se vinieron abajo; todos salieron con golpes leves, excepto Edwin, este niño Edwin Daniel al que uno de los tubulares le pegó en el lado derecho del rostro.

El director del plantel educativo rápidamente actuó y subió al menor a su vehículo para llevarlo a la Cruz Roja, Institución que por cierto, no atendió, no quiso atender, debido a las graves lesiones craneales, por lo que trasladaron al Hospital General de la capital, a donde por cierto tuvieron ir, por él los padres del menor cuando les avisaron del accidente; finalmente lo tuvieron que ingresar a un hospital particular.

Al día de hoy ni bomberos, ni protección civil han acudido a verificar el estado que guardan los demás columpios de este plantel, ni del resto de los centros educativos

que pertenecen al Sistema Educativo Estatal, solo se limitaron en la escuela a colocar un listón amarillo alrededor de estos.

Resulta inaudito y preocupante que esto esté pasando día, día en cada uno de los planteles del Sistema Educativo Estatal, y que las autoridades sigan insensibles ante esta grave problemática y peor aún este tipo de accidentes los estén viendo con una normalidad sin que nadie haga nada. ¿Cuántos niños más tienen que accidentarse o que peligre su vida para que las autoridades educativas investiguen?

La presente iniciativa tiene como objeto contar con un seguro médico colectivo amplio contra accidentes de alumnos de nivel básico que ocurran dentro de las Escuelas Públicas, Estatales y Municipales a fin de dar atención médica ilimitada a los niños cuyas lesiones requieran 15 días o más en sanar hasta su total recuperación.

RESOLUTIVO:

Se transcribe la ADICIÓN del Articulo 5-BIS Fracción I, II, III y IV a la **LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA** el cual deberá decir:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	Artículo 5-BIS.- El Ejecutivo Estatal y los Municipios ambos en el ámbito de sus competencias contratarán un Seguro Médico Colectivo, el cual deberá de estar visible y

	vigente en todos y cada uno de los planteles de Nivel Básico a fin de dar atención médica ilimitada hasta su total recuperación a los niños y niñas que sufran un accidente dentro del plantel escolar al que fueron inscritos, dicho seguro deberá hacerse efectivo bajo las siguientes reglas: **I.- El Seguro Médico Colectivo asegurará a 1,000 educandos de nivel básico en todo el Estado en escuelas Estatales y Municipales de acuerdo a las siguientes coberturas:** **a). - MUERTE ACCIDENTAL: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **b).- GASTOS FUNERARIOS: $100,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **c).- PERDIDAS ORGANICAS: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico**

	d).- GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: ILIMITADO para todo nivel básico; **e).- AMBAS MANOS O AMBOS PIES O LA VISTA DE AMBOS OJOS: $250,000.00 M.N. para todo nivel básico;** **f).- UNA MANO UN PIE: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **g).- UNA MANO O UN PIE Y LA VISTA DE UN OJO: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **h).- UNA MANO O UN PIE: $125,000.00 M.N. para todo nivel básico;** **i).- LA VISTA DE UN OJO: $125,000.00 M.N. para todo nivel básico;** **j).- PERDIDA DE UNO O MAS DEDOS DE LA MANO: $100,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **k).- AMPUTACION DE UN PIE COMPRENDIDO TODOS LOS**

	DEDOS: $125,000.00 M.N. Para todo nivel básico. **l).- LA AUDICION TOTAL DE UNO O DOS OIDOS: $250,000.00 M.N.. para todo nivel básico.** **II.- Cuando el niño o niña dentro de su plantel escolar sufra una lesión que tarde en sanar 15 días o más deberá de llevarse al nosocomio más cercano de acuerdo al listado que contenga la póliza hasta su total recuperación.** **III.- Si el niño o niña sufriera una lesión que amerite atención médica como por ejemplo una herida deberá de ser trasladado para que sea saturada al nosocomio más cercano que el listado que contenga.** **IV.- El hacer caso omiso para atender al niño o niña por el**

	Director del plantel correspondiente así como NO contar con el Seguro Médico Colectivo visible y vigente será acreedor de las sanciones que marca el artículo 87 párrafo IX y 88 fracción II de la Ley de Educación del Estado de Baja California.

TRANSITORIOS

PRIMERO. – La presente reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Tendrán 60 días naturales para adecuar los Reglamentos respectivos una vez que entre en vigor la adición de la presente Ley

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los diez días del mes de octubre. Es cuanto.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR LA DIPUTADA ARACELI GERALDO NÚÑEZ)

DIPUTADO CATALINO ZÁVALA MÁRQUEZ.

Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Compañeras y Compañeros Diputados:

La suscrita Diputada ARACELI GERALDO NUÑEZ, en nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 27, 28 ambos de la fracción I, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Estado de Baja California, someto a consideración de este Honorable Congreso, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE LA INCLUSION DE SEGURO MEDICO COLECTIVO PARA ACCIDENTES DENTRO DEL PLANTEL ESCOLAR PARA EL NIVEL BASICO POR LO QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 5-BIS, FRACCION I, II, III Y IV, DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las escuelas es el segundo hogar y como tal, es el lugar donde pasan nuestros hijos gran parte del tiempo. En tal sentido, debería ser el lugar más seguro para los niños.

Una infinidad de accidentes escolares se han suscitado dentro de los planteles de todo el Estado sin que hasta la fecha haya sido atendido este problema que se ha

hecho cotidiano verlo día a día. Estos accidentes van desde un simple raspón, hasta niños que han perdido la vida.

Lo más preocupante es que el Sistema Educativo Estatal NO ha encontrado la solución adecuada al problema de los niños que se han lesionado dentro de sus planteles escolares, negándose en la mayoría de los casos a darle la atención médica necesaria ya que fue en sus instalaciones y es su responsabilidad la integridad física de todos y cada uno de ellos mientras estén físicamente en el centro escolar cumpliendo su horario escolar.

Hace unos días el caso más reciente y preocupante ocurrió en las instalaciones de la Escuela "Carmen Piña" en la colonia Pro hogar en la ciudad de Mexicali, donde una parte de la estructura de los columpios le cayó en la cabeza a un alumno del quinto año de primaria y casi le cuesta la vida.

Este niño de nombre Edwin Daniel esa mañana salió al recreo como todos los días y lo primero que hizo fue ir a los columpios por los que sentía una fascinación. Junto con otros niños se estaban meciendo cuando repentinamente se vinieron abajo; todos salieron con golpes leves y asustados, excepto el niño de nombre Edwin Daniel al que uno de los tubulares le pego en el lado derecho superior de la cara.

El director del plantel educativo no siguió el protocolo en este tipo de casos, no llamo al 911 solo se limitó a llevar al niño a la Cruz Roja institución que por cierto NO QUISO ATENDER debido a lo grave de la lesión craneal, por lo que lo trasladaron al Hospital General de la capital a donde por cierto tuvieron que ir por

el menor los padres cuando les avisaron del accidente; finalmente lo tuvieron que ingresar a un hospital particular.

Al día de hoy ni bomberos, ni protección civil han acudido a verificar el estado que guardan los demás columpios de este plantel, ni del resto de los centros educativos que pertenecen al Sistema Educativo Estatal

solo se limitaron en la escuela a colocar un listón amarillo alrededor de estos.

Resulta inaudito y preocupante que esto esté pasando día con día en cada uno de los planteles del Sistema Educativo Estatal, y que las autoridades sigan insensibles ante esta grave problemática y peor aún que este tipo de accidentes se estén viendo con toda normalidad sin que nadie haga nada. ¿Cuántos niños más tienen que accidentarse o perder la vida para que las autoridades educativas intervengan?

La presente iniciativa tiene como objeto contar con un seguro médico colectivo amplio contra accidentes de alumnos de nivel básico que ocurran dentro de las Escuelas Públicas, Estatales y Municipales a fin de dar atención medica ilimitada a los niños cuyas lesiones requieran 15 días o más en sanar hasta su total recuperación.

MARCO JURIDICO

Es indispensable analizar los ordenamientos legales aplicables o vinculantes al caso; mismo que se transcriben para mayor comprensión:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Articulo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Párrafo Tercero. - Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Párrafo Octavo. - En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Párrafo Decimo. - El Estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

Articulo 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos

que reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

Apartado A.- De la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos:

Párrafo Siete.- Toda persona tiene derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación; la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión; a recibir educación pública, obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Las autoridades públicas del

Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de estos derechos.

Articulo 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:

VI.- Si son personas menores de dieciocho años de edad, tendrán los siguientes derechos:

a).- Vivir y crecer en forma saludable normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, la formación integral en el amor a la nación, en la democracia como sistema de vida fundada en el respeto a la dignidad humana y en el principio de la solidaridad social, así como a ser protegidos y asistidos contra cualquier forma de sustracción del seno de la familia sin el debido proceso, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso y explotación, en condiciones de libertad, integridad y dignidad. Para lo cual el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

LEY DE EDUCACION EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

Articulo 35.- En la impartición de la Educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección

y el cuidado necesario para preservar su integridad física, sexual, afectiva, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar será compatible con su edad.

Con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, se desprenden el derecho que tienen los niños y las niñas a la Salud, a vivir y crecer en forma saludable, por lo que resulta de vital importancia El Seguro Médico Colectivo para el nivel básico a fin de que estén cubiertas todas las Escuelas tanto Estatales como Municipales.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que la presente Iniciativa es congruente con el marco normativo vigente y, en consecuencia, NO contraviene ninguna disposición constitucional o legal relacionada con la materia de que se trata.

RESOLUTIVO:

Se transcribe la ADICION del Articulo 5-BIS Fracción I, II, III y IV a la **LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA** el cual deberá decir:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	Artículo 5-BIS.- El Ejecutivo Estatal y los Municipios ambos en el ámbito de sus competencias contrataran un Seguro Médico Colectivo, el cual deberá de estar visible y vigente en todos y cada uno de los planteles de Nivel Básico a fin de dar atención medica ilimitada hasta su total recuperación a los niños y niñas que sufran un accidente dentro del plantel escolar al que fueron inscritos, dicho seguro deberá hacerse efectivo bajo las siguientes reglas:

	I.- El Seguro Médico Colectivo asegurara a 1,000 educandos de nivel básico en todo el Estado en escuelas Estatales y Municipales de acuerdo a las siguientes coberturas: **a). - MUERTE ACCIDENTAL: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **b).- GASTOS FUNERARIOS: $100,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **c).- PERDIDAS ORGANICAS: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico** **d).- GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: ILIMITADO para todo nivel básico;** **e).- AMBAS MANOS O AMBOS PIES O LA VISTA DE AMBOS OJOS: $250,000.00 M.N. para todo nivel básico;** **f).- UNA MANO UN PIE: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico;**

	g).- UNA MANO O UN PIE Y LA VISTA DE UN OJO: $250,000.00 M.N., para todo nivel básico; **h).- UNA MANO O UN PIE: $125,000.00 M.N. para todo nivel básico;** **i).- LA VISTA DE UN OJO: $125,000.00 M.N. para todo nivel básico;** **j).- PERDIDA DE UNO O MAS DEDOS DE LA MANO: $100,000.00 M.N., para todo nivel básico;** **k).- AMPUTACION DE UN PIE COMPRENDIDO TODOS LOS DEDOS: $125,000.00 M.N. Para todo nivel básico.** **l).- LA AUDICION TOTAL DE UNO O DOS OIDOS: $250,000.00 M.N.. para todo nivel básico.** **II.- Cuando el niño o niña dentro de su plantel escolar sufra una lesión que tarde en sanar 15 días o más deberá de llevarse al**

	nosocomio más cercano de acuerdo al listado que contenga la póliza hasta su total recuperación. **III.- Si el niño o niña sufriera una lesión que amerite atención medica como por ejemplo una herida deberá de ser trasladado para que sea saturada al nosocomio más cercano que el listado contenga.** **IV.- El hacer caso omiso para atender al niño o niña por el Director del plantel correspondiente así como NO contar con el Seguro Médico Colectivo visible y vigente será acreedor de las sanciones que marca el artículo 87 párrafo IX y 88 fracción II de la Ley de Educación del Estado de Baja California.**

TRANSITORIOS

PRIMERO. – La presente reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Tendrán 60 días naturales para adecuar los Reglamentos respectivos una vez que entre en vigor la adición de la presente Ley

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los días de su presentación.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA ARACELI GERALDO NUÑEZ

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, su Iniciativa se turna a la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Diputado.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputada.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Diputada si eres tan amable de incluirme en tu iniciativa por favor.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Con todo gusto Diputada.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Diputada Araceli, de igual manera, y poder hacer ahí un agregado, agregarle también que abarque las escuelas federales, en su iniciativa que abarque las escuelas federales, solo están municipales y estatales y también hay federales, nada más.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Totalmente de acuerdo Diputada, muchísimas gracias claro que sí, con gusto.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, gracias, gracias Diputados y Diputadas, comentamos se turna la iniciativa a la Comisión de Educación, continúa en el uso de la voz el Diputado Julio César Vázquez Castillo.

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Buenos días, solicito a esta Presidencia se me autorice la dispensa de la lectura total de la iniciativa con la finalidad de dar lectura a los puntos más importantes de la misma, solicitando a demás se inserte de manera íntegra en la versión estenográfica y como en la gaceta parlamentaria.

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MARQUEZ, PRESIDENTE HONORABLE VIGÉSIMO TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

COMPAÑERAS DIPUTADAS, COMPAÑEROS DIPUTADOS, HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe DIPUTADO JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO, Y LA DIPUTADA CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ, me permito presentar a la consideración del pleno de esta Honorable Legislatura la siguiente INICIATIVA DE LEY, misma que base en la siguiente, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la actualidad el 31.2 por ciento de hogares en Baja California, son sostenidos por una mujer Jefa de Familia según información de INEGI, es decir, 267 mil 906 mujeres jefas de familia, las cuales necesitan del apoyo social y económico del Gobierno del

Estado, como de los Ayuntamientos de la Entidad, para garantizar un Desarrollo Integral y óptimo en su núcleo familiar.

Por ello, sería importante crear un censo único de madres solteras en el Estado, para poder brindarles ciertos beneficios por parte del Estado y Municipios, como lo son la capacitación para crear una empresa familiar o bien para desempeñar un oficio que les permita crecer como persona, así como brindarles asesorías y apoyo para la conclusión de sus estudios.

Así pues, con la Pretensión Legislativa que hoy se presenta se busca sentar las bases para que el Estado otorgue un apoyo económico a las Madres Solteras Jefas de Familia que tengan a su cargo hijos menores de edad, a efecto de que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

Brindándoles un apoyo económico para auxiliarles en la seguridad social y el bienestar de las familias.

El apoyo social mensual que se pretende establecer será otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, a todas las madres solteras que se encuentren inscritas en un censo único que para tales efectos se tenga.

Bajo esta tesitura, la iniciativa que se somete a consideración de esta Honorable Soberanía, se compone de 35 artículos divididos en ocho capítulos y tres artículos transitorios.

Ahora bien, me permito exponer de forma breve cada uno de los capítulos dentro del Capítulo primero denominado, Disposiciones Generales establece la

conceptualización de las madres solteras, jefas de familia, entendiendo por ellas a quienes se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica por el hecho de ser madres jefas de familia y ser el único sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación, las cuales deberán residir en el Estado con una antigüedad mínima comprobable de dos años anteriores a la fecha que soliciten por primera vez los apoyos.

Por su parte el Capitulo Segundo, prevé la coordinación gubernamental e institucional entre el gobierno del estado y los municipios, con la colaboración y coordinación institucional cumpliendo lo señalado en el marco normativo que impulse y fomenta la equidad de género, así como procurando el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asimismo el Capítulo Cuarto denominado Consejo Estatal para la Protección de las Madres Solteras Jefas de Familia se contempla la creación de un Consejo Estatal para la Protección de las madres solteras jefas de familia, como órgano honorario cuyo objetivo es la elaboración de propuestas y evaluación de las políticas y programas y acciones en materia de protección a las madres solteras jefas de familia con el fin de mejorar su condiciones de vida y la de sus hijos. Dentro del Capítulo Quinto denominado De los Requisitos para Acceder a los Programas Apoyos, Servicios y Acciones, se establecen a favor de las madres solteras jefas de familia, que deberán cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:

Acreditar fehacientemente el estatus personal de jefa de familia, como principal sostén o soporte económico del hogar, acreditar su nivel de ingresos o su insolvencia

económica, así como el rezago educativo y cultural, a través del estudio socioeconómico que realicen los sistemas estatal y/o municipal de desarrollo integral de la familia, estar inscrita en el padrón de madres solteras jefas de familia que emita la Secretaría, cumplir con las condiciones y exigencias específicas que se establezcan para cada programa en particular.

De igual forma, el Capítulo Sexto regula la participación de las dependencias gubernamentales Y el Capítulo Séptimo, denominado de los Servidores Públicos Responsables del Cumplimiento de la presente Ley, prevé las responsabilidades de los servidores que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e imparcialidad, debiendo además abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento del apoyo social mensual a las madres solteras jefas de familia de escasos recursos, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, el Capítulo Octavo denominado de la Asignación Presupuestal, se establece que el Gobierno del Estado, deberá destinar los recursos económicos a favor de las madres solteras jefas de familia, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los días de su presentación. Es cuanto señor Presidente.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR EL DIPUTADO JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO)

INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN A MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA.

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MARQUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO, en mi carácter de Diputado de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, integrante y en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo ante esta Soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 110 fracción I, 112 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION A MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA; misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la actualidad el 31.2 por ciento de hogares en Baja California, son sostenidos por una mujer Jefa de Familia según información de INEGI, es decir, 267 mil 906 mujeres jefas de familia, las cuales necesitan del apoyo social y económico del Gobierno del Estado, como de los Ayuntamientos de la Entidad, para garantizar un Desarrollo Integral y óptimo en su núcleo familiar.

Por ello, sería importante crear un censo único de madres solteras en el Estado, para poder brindarles ciertos beneficios por parte del Estado y Municipios, como lo son capacitación para crear una empresa familiar o bien para desempeñar un oficio que les permita crecer como persona, así como brindarles asesorías y apoyo para la conclusión de sus estudios.

Así pues, con la Pretensión Legislativa que hoy se presenta se busca sentar las bases para que el Estado otorgue un apoyo económico a las Madres Solteras Jefas de Familia que tengan a su cargo hijos menores de edad, a efecto de que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

Brindándoles un apoyo económico para auxiliarles en la seguridad social y el bienestar de las familias.

El apoyo social mensual que se pretende establecer será otorgado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, a todas las madres solteras que se encuentren inscritas en un censo único que para tales efectos se tenga.

Así pues, la Ley que se somete a consideración de esta honorable Soberanía, se compone de 35 artículos divididos en ocho Capítulos, y 3 artículos transitorios.

Dentro del Capítulo Primero denominado Disposiciones Generales, se establece que madres solteras jefas de familia, son aquellas que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica, por el hecho de ser madres jefas de familia y ser el único sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación, las cuales deberán residir en el estado con una antigüedad mínima comprobable de dos años anteriores a la fecha en que soliciten por primera vez los apoyos.

Por su parte en el Capítulo Segundo se prevé la Coordinación Gubernamental e Institucional, entre el gobierno del estado y los municipios, con la colaboración y coordinación institucional y cumpliendo lo señalado en el marco normativo que impulsa y fomenta la equidad de género, así como procurando garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se encargará de revisar, diseñar y adecuar las políticas públicas destinadas al desarrollo pleno de las madres solteras jefas de familia.

Por cuanto al Capítulo Tercero, establece los derechos y obligaciones de las madres solteras jefas de familia

Asimismo, el Capítulo Cuarto denominado del Consejo Estatal para la Protección de las Madres Solteras Jefas de Familia, se contempla la creación de un Consejo Estatal para la protección de las madres solteras jefas de familia, como órgano honorario, cuyo objetivo es la elaboración de propuestas y evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección a las madres solteras jefas de familia, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos.

Dentro del Capítulo Quinto denominado de los Requisitos para Acceder a los Programas, Apoyos, Servicios y Acciones, se establecen a favor de las madres solteras jefas de familia, que deberán cumplir por lo menos con los siguientes requisitos, acreditar fehacientemente el estatus personal de jefa de familia, como principal sostén o soporte económico del hogar, acreditar su nivel de ingresos o su insolvencia económica, así como el rezago educativo y cultural, a través del estudio socioeconómico que realicen los sistemas estatal y/o municipal de desarrollo integral de la familia, estar inscrita en el padrón de madres solteras jefas de familia que emita la secretaría, cumplir con las condiciones y exigencias específicas que se establezcan para cada programa en particular.

De igual forma, el Capítulo Sexto regula la participación de las dependencias gubernamentales Y el Capítulo Séptimo, denominado de los Servidores Públicos Responsables del Cumplimiento de la presente Ley, prevé las responsabilidades de los servidores que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e imparcialidad, debiendo además abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento del apoyo social mensual a las madres solteras jefas de familia de escasos recursos, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente el Capítulo Octavo denominado de la Asignación Presupuestal, se establece que el Gobierno del Estado, deberá destinar los recursos económicos a

favor de las madres solteras jefas de familia, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito respetuosamente a las Diputadas y Diputados integrantes de esta XXIII Legislatura, se someta a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:

DECRETO:

ÚNICO.- SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA LEY DE PROTECCION A MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY DE PROTECCIÓN A MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en el Estado de Baja California, y tiene por objeto establecer y normar el derecho a recibir un Apoyo Social mensual a las madres solteras jefas de familia de escasos recursos residentes en el Estado.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I.- GOBIERNO DEL ESTADO: El Gobierno del Estado de Baja California.

II.- LEY: Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia de Baja California.

III.- REGLAMENTO: Al reglamento de la presente Ley.

IV.- SECRETARIA: La Secretaria de Desarrollo Social del Estado.

V.- CONSEJO ESTATAL: El Consejo Estatal para la Protección de las Madres Solteras Jefas de Familia.

VI.- DIF: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California; y

VII.- MADRE SOLTERA JEFA DE FAMILIA: A la mujer madre de uno o más menores de edad, que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad conforme al artículo 26 de esta Ley.

ARTÍCULO 3.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer y regular los derechos de las Jefas de Familia, así como las políticas públicas y acciones del Estado tendientes a brindar una atención preferencial para mejorar su bienestar y calidad de vida y las de sus dependientes en línea directa que habitan en el Estado, y se encuentren en situación socioeconómica precaria, otorgándoles beneficios de desarrollo económico, social y patrimonial:

I. Las madres solteras o casadas, en concubinato, en sociedad en convivencia que acrediten documentalmente la solicitud de disolución del vínculo jurídico o demanda de alimentos para ella y sus hijos, o en caso excepcional mediante acta circunstanciada ante Juez de lo familiar; el DIF podrá realizar los estudios socioeconómicos pertinentes para su verificación;

II. Que tengan hijos menores de 18 años; y

III. Que tengan un ingreso diario no superior a tres veces la unidad de medida y actualización (UMA), incluyendo cualquier pago por derecho alimentarios.

ARTÍCULO 4.- Las madres solteras jefas de familia de escasos recursos, tienen el derecho a recibir un Apoyo social mensual.

ARTÍCULO 5.- Tienen derecho a recibir el Apoyo social a que se refiere la presente Ley, las madres solteras jefas de familia de escasos recursos que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Estén inscritas en el programa de Apoyo social a las madres solteras jefas de familia, del Estado de Baja California.

II. Acrediten ser madres solteras jefas de familia de escasos recursos;

III. Acrediten la residencia en Baja California, y

IV. No cuenten con apoyo económico o alimentario de la Administración Pública municipal, estatal, federal o de instituciones privadas.

ARTÍCULO 6.- Las madres solteras jefas de familia de escasos recursos beneficiarias del Programa previsto en la presente Ley, tienen derecho a:

I. Integrarse a las políticas públicas económicas, de salud, social, laboral, educativo, recreativo y tecnológico del Estado.

II. Recibir ellas y sus hijos los servicios de salud, incluyendo tratamiento y urgencias, y que carecen de Seguridad Social Laboral, en los casos de diagnóstico

de VIH y el SIDA, contarán con los servicios de consejería y atención médica especializada en los niveles de atención con los que cuenta el Gobierno del Estado.

III. Recibir asesoría legal por cualquier acto de discriminación vejación y vulneración de sus derechos.

IV. Recibir los servicios de defensoría de oficio para interponer los recursos, juicios o medios legales de defensa necesarios para proteger o reivindicar sus derechos.

V. Conocer y tener acceso a los diversos centros de atención a la mujer, gubernamentales o privados, mediante una línea de atención telefónica o los sistemas de información con los que cuenta el Gobierno del Estado.

VI. A obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del Gobierno municipal y estatal; y

VII. A tener preferencia al acceso a los programas sociales que implemente el Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 7.- El Ejecutivo del Estado debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Baja California, la asignación presupuestal que garantice el ejercicio del derecho a un apoyo social mensual establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 8.- El Poder Legislativo del Estado de Baja California, debe aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a un Apoyo social mensual establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 9.- Son principios rectores de la Ley:

I. La igualdad de oportunidades para las Jefas de Familia;

II. El bienestar físico y mental de las Jefas de Familia y sus dependientes económicos;

III. La integración de las Jefas de Familia a la vida económica y social, sin discriminación; y

IV. Las políticas públicas permanentes de naturaleza compensatoria para contrarrestar la vulnerabilidad económica y social de las Jefas de Familia.

ARTÍCULO 10.- Para efectos de la Ley, se señala de manera enunciativa más no limitativa, la siguiente clasificación de madres solteras Jefas de Familia:

I. Mayores de 16 años, solteras, viudas, divorciadas, o casadas que no cuenten con algún tipo de beneficio tal como un subsidio derivado de un programa gubernamental, exceptuando el programa en turno establecido por la federación; o bien, que sean responsables de administrar una pensión alimenticia destinada a los hijos;

II. Que no cuenten con el apoyo económico de una pareja o concubinario;

III. Que demuestren que existen dependientes directos de ellas;

IV. Se encuentren sin empleo o bien que aun teniéndolo, no cuente con prestaciones sociales de ley, se incluyen a las Jefas de Familia que habitan en los

medios rural y urbano, así como en comunidades y localidades consideradas de alta y muy alta marginación y

V. Las demás que establezca la Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 11.- La forma como se hará efectiva la entrega del apoyo social mensual a las madres jefas de familia de escasos de recursos, será mediante el procedimiento que se establezca en el Reglamento de la presente Ley, la operación e implementación del programa de Apoyo social mensual a las madres solteras de escasos de recursos, estará a cargo de la Secretaria.

CAPÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 12.- El Gobierno del Estado y los Municipios, con la colaboración y coordinación institucional y cumpliendo lo señalado en el marco normativo que impulsa y fomenta la equidad de género, así como procurando garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se encargará de revisar, diseñar y adecuar las políticas públicas destinadas al desarrollo pleno de las madres solteras Jefas de Familia.

ARTÍCULO 13.- Con el objetivo de dotar de mayores herramientas a las madres solteras Jefas de Familia, tendrán acceso a los programas sociales integrales del Gobierno del Estado, que incluirán: apoyo psicológico, emocional, de mejora de la autoestima; al igual que acciones encaminadas a aprovechar sus talentos y capacidades individuales, fortaleciéndolas a través de acciones que favorezcan su

beneficio económico, social y cultural en aras de lograr un entorno familiar más adecuado.

Para esto, las políticas públicas a favor de las jefas de familia en el estado deberán contar al menos con lo siguiente:

I. Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en su elaboración, diseño, implementación seguimiento y evaluación;

II. Basarse en un diagnóstico general y focalizar en las necesidades específicas de las jefas de familia, por localización geográfica e intensidad;

III. Ser equitativas, imparciales, integrales y de bajo costo pero alto impacto, tanto en su formulación como cuando se implementen;

IV. Estar sustentadas en problemas que experimentan las jefas de familia, de acuerdo a evidencia estadística y demandas sociales; e

V. Implementarse inter institucionalmente atendiendo la perspectiva de género.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA

ARTÍCULO 14.- Son derechos de las madres solteras Jefas de Familia, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Ser tratadas con dignidad, respeto, salvaguardando sus derechos fundamentales;

II. Recibir orientación y ayuda integral, incluyendo la capacitación para el trabajo, el apoyo psicológico para ella y, de ser necesario, para sus familiares directos, a fin de generar un entorno armónico que favorezca su desarrollo pleno;

III. Ser beneficiaria de los diferentes programas gubernamentales dirigidos a las mujeres y en particular a las madres solteras Jefas de Familia. Por ningún motivo, razón o circunstancia deberán ser excluidas de programas y prerrogativas sociales;

IV. Recibir atención médica integral para la titular y sus descendientes directos hasta que estos alcancen la mayoría de edad, sin menoscabo de los beneficios que reciban a través de otros programas gubernamentales;

. Al trabajo de las madres solteras jefas de familia incluye la oportunidad, en condiciones de igualdad;

VI. Alimentación adecuada y nutritiva que les asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual;

VII. La posibilidad de tener un espacio privado donde se pueda vivir con seguridad, paz y armonía;

VIII. A la salud, que es el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social;

IX. Educación orientada hacia el pleno desarrollo social, y debe capacitar a las madres solteras jefas de familia para participar efectivamente en una sociedad democrática y plural; y

X. Disfrutar plenamente de los derechos consignados en la Ley, su reglamento y en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 15.- Son obligaciones de las madres solteras mujeres Jefas de Familia:

I. Cumplir los requerimientos establecidos en los lineamientos de los programas públicos y acciones institucionales que para dicho fin pongan en marcha los diversos niveles de gobierno y las instituciones públicas;

II. Otorgar la información necesaria para su inclusión a los programas públicos y acciones institucionales, así como aquella necesaria para la elaboración del padrón de beneficiarias y la solicitada para el desarrollo del diagnóstico correspondiente;

III. Aprovechar con responsabilidad los beneficios que obtengan a través de los programas y acciones que se implementen, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y la de sus dependientes;

IV. Contribuir con el desarrollo familiar, social y del Estado, por medio de los conocimientos y beneficios adquiridos a través de los programas, cursos y talleres impartidos;

V. Acudir, de manera oportuna, a la Secretaria, en caso de actualización de su domicilio, para notificar del mismo o cualquier otra información o dato que genere un cambio sustancial en sus condiciones de vida que, a su vez, pudiera generar una modificación de su estatus;

VI. Dar aviso a las instituciones correspondientes en cuyos casos las madres solteras Jefas de Familia cuenten con el apoyo económico de un esposo o concubino, o de cualquier otro miembro integrante del núcleo familiar; y

VII. Las demás que establezca la Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA

ARTÍCULO 16.- Se crea el Consejo Estatal para la Protección de las Madres Solteras Jefas de Familia como un órgano honorario y cuyo objeto es la elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección a las madres solteras jefas de familia, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos.

ARTÍCULO 17.- El Consejo Estatal estará integrado por:

I. Presidente: Titular del Poder Ejecutivo;

II. Vicepresidente: Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien ocupará la presidencia, en caso de ausencia;

III. Tres Diputadas representantes del Congreso del Estado; y

IV. Nueve vocales que serán:

a) El Titular de la Secretaría de Salud;

b) El Titular de la Secretaría de Educación;

c) El Titular de la Secretaría de Economía;

d) El Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas;

e) El Titular de la Dirección General del DIF Baja California;

f) El Titular del Instituto Estatal de la Mujer; y

g) Dos vocales de género femenino que serán designadas por el Titular del Poder Ejecutivo a propuesta de organizaciones ciudadanas cuyo objeto esté relacionado con el tema materia de esta ley.

Todos los miembros del Consejo Estatal tendrán derecho a voz y voto. El presidente, vicepresidente, diputadas y los vocales del Consejo Estatal designarán a sus respectivos suplentes, quienes contarán con las mismas facultades del titular.

El Consejo Estatal designará al titular de la Secretaría Técnica, quien participará en las sesiones del mismo con voz, pero sin voto.

El Consejo Estatal, a través de su presidencia, podrá invitar a las sesiones del mismo, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, y representantes de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, federal y municipal, cuando los asuntos a tratar en las sesiones se relacionen con la materia en su competencia, así como a integrantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres legalmente constituidos, que por sus

conocimientos y experiencias contribuyan a la realización del objeto del Consejo Estatal, quienes en todo caso, participarán únicamente con voz.

ARTÍCULO 18.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones:

I. Definir las políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las madres jefas de familia;

II. Participar en la evaluación de programas para las madres jefas de familia; así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los lineamientos

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la presidencia del Consejo Estatal:

I. Representar al Consejo Estatal ante las distintas autoridades e instituciones públicas y privadas;

II. Presidir las reuniones del Consejo Estatal;

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones;

IV. Dictar las políticas necesarias para mejorar la operación del Consejo Estatal;

V. Someter a consideración del Consejo Estatal los estudios, propuestas y opiniones que se emitan en el seno del mismo; y

VI. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 20.- Corresponde a la vicepresidencia del Consejo Estatal:

I. Presidir, en ausencia del titular de la presidencia, las reuniones del Consejo Estatal;

II. Coordinar y supervisar la aplicación de las políticas necesarias para mejorar las operaciones del Consejo Estatal;

III. Someter, a consideración del Consejo Estatal, los programas del trabajo del mismo;

IV. Difundir y dar seguimiento a las resoluciones y trabajo del Consejo Estatal; y

V. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 21.- Corresponde a la Secretaría Técnica:

I. Convocar a sesiones a quienes integran el Consejo Estatal;

II. Formular el orden del día para las sesiones del Consejo Estatal;

III. Dar seguimiento a los compromisos, acuerdos y demás acciones que se deriven de las sesiones del Consejo;

IV. Pasar lista a los integrantes del Consejo Estatal;

V. Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo Estatal y registrarlas con su firma;

VI. Llevar el control de la agenda;

VII. Entregar actas de sesiones, programas de trabajo, orden del día y documentación necesaria para las sesiones de trabajo;

VIII. Dar lectura al acta de la sesión anterior;

IX. Auxiliar en sus funciones a la presidencia y vicepresidencia del Consejo Estatal; y

X. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 22.- El Consejo Estatal celebrará una sesión ordinaria, por lo menos cada 2 meses; y extraordinaria, las veces que considere necesaria, a juicio de su presidencia.

ARTÍCULO 23.- Las sesiones del Consejo Estatal, tanto ordinarias como extraordinarias, se celebrarán, previa convocatoria expedida por la presidencia, por conducto de la Secretaría Técnica, la que contendrá el orden del día y se hará del conocimiento de sus integrantes, cuando menos con 3 días de anticipación.

ARTÍCULO 24.- Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, siempre y cuando asistan el presidente o vicepresidente, las decisiones se tomarán por mayoría de votos de quienes asistan; en caso de empate quien presida contará con voto de calidad.

CAPÍTULO V

DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER

A LOS PROGRAMAS, APOYOS Y SERVICIOS

ARTÍCULO 25.- Para acceder a los beneficios de los programas y acciones que se establezcan a favor de las madres solteras Jefas de Familia, deberá de cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:

I. Acreditar fehacientemente el estatus personal de Jefa de Familia, como principal sostén o soporte económico del hogar;

II. Acreditar su nivel de ingresos o su insolvencia económica, así como el rezago educativo y cultural, a través del estudio socioeconómico que realicen los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal o Municipal;

III. Estar inscrita en el padrón de madres solteras Jefas de Familia que emita la Secretaría;

IV. Cumplir con las condiciones y exigencias específicas que se establezcan para cada programa en particular; y

V. Los demás que establezca la Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 26.- Son condiciones de vulnerabilidad de las madres Jefas de Familia las siguientes:

I. Asumir la responsabilidad de la manutención de sus dependientes directos, en forma única y total;

II. La minoría de edad de sus dependientes económicos;

III. Obtener un promedio de ingreso diario de hasta tres veces las unidad de medida y actualización (UMA), o cuando no perciban ingresos y acrediten que están buscando trabajo; y

IV. Las demás que establezca la Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 27.- El incumplimiento por parte de las madres solteras Jefas de Familia o por sus dependientes de algunos de los requisitos o de las obligaciones previstas en las disposiciones establecidas, en relación a los otorgamientos de los apoyos previstos en ésta y otras leyes aplicables a la materia, originará la negativa o suspensión de los mismos, según sea el caso sin perjuicio de que el Gobierno del Estado, solicite cuando sea procedente, la reintegración de los apoyos otorgados.

CAPÍTULO VI

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

ARTÍCULO 28.- A la Secretaría le corresponde:

I. Realizar y revisar periódicamente el padrón de mujeres que sean beneficiarias de los programas y prerrogativas a favor de las madres solteras Jefas de Familia;

II. Celebrar convenios institucionales y con los gobiernos de los municipios con el objetivo de implantar programas y acciones que favorezcan el desarrollo pleno de las madres solteras Jefas de Familia;

III. Del total del presupuesto destinado a los programas a cargo de dicha dependencia, destinar un porcentaje del mismo, para el desarrollo de programas de apoyo a opciones productivas, capacitación para el trabajo, apoyo para mejoramiento de vivienda y becas, dirigidos a la reconstrucción del núcleo familiar;

IV. Coadyuvar a la elaboración de un diagnóstico cada dos años en el cual se identifiquen las principales características, problemáticas, necesidades y

acciones a emprender para apoyar a las madres solteras Jefas de Familia en nuestro Estado; y

V. Darles capacitación para crear una empresa familiar o aprenda un oficio así mismo asesorías y la conclusión de estudios a las madres solteras jefas de familia que truncaron su educación.

ARTÍCULO 29.- La Secretaria, así como las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal estarán facultadas para celebrar convenios de concertación con el sector privado, con el fin de implementar acciones de apoyo a favor de las madres solteras jefas de familia, entre las cuales se incluyan, en condiciones preferentes, descuentos en los bienes, productos o servicios que las empresas ofrezcan al público.

ARTÍCULO 30.- La Secretaría, se vinculará con las Secretarías de Educación, de Planeación y Finanzas, de Economía, de Salud, así como con el DIF, el Instituto Estatal de la Mujer, los Municipios de la Entidad, y demás entidades públicas, cuyas dependencias brindarán atención y asesoría jurídica necesaria a las Jefas de Familia, para gestionar los apoyos y servicios derivados de los programas que se implementen en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 31.- La Contraloría General del Gobierno del Estado, será la Autoridad competente, para recibir y resolver las denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley.

CAPÍTULO VII

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES

ARTÍCULO 32.- Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la presente Ley, que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e imparcialidad, serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 33.- Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente Ley, deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento del Apoyo social mensual a las madres solteras jefas de familia de escasos recursos, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 34.- Cuando se proporcione información falsa con el objeto de simular o evadir el cumplimiento o satisfacción de los requisitos establecidos en la presente Ley, se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes.

CAPÍTULO VIII

DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

ARTÍCULO 35.- El Gobierno del Estado, deberá destinar los recursos económicos a favor de las madres solteras Jefas de Familia, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de noventa días contados a partir de la fecha de entrada en vigor.

ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo Estatal de Protección de las Madres Solteras Jefas de Familia deberá quedar instalado dentro de los ciento veinte días siguientes al inicio de vigencia de la presente Ley.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

DIP. JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Julio César Vázquez, se turna a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, continúa en el uso de la voz la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz.

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Con su venia Presidente, muy buenos días a todos, bienvenidos a Ángeles de la Esterilización Canina y Felina de Baja California, a la Alianza Nacional, un Millón de Esperanzas y la Unión

Animalista de Zacatecas. Diputadas y Diputados en el Partido del Trabajo estamos a favor de impulsar medidas que detengan la violencia temprana en la sociedad, es una realidad de las democracias modernas, las organizaciones de la sociedad civil forman parte fundamental para determinar y guiar el sentir de la sociedad.

Por lo tanto en el Partido del Trabajo impulsamos a que las propuestas de los Organismos de Protección y salvaguarda de los animales se plasmen en la legislación y se ejecuten a nivel gubernamental, por lo cual hago eco a diversos planteamientos de los promotores de las Organizaciones y Asociaciones Protectoras de Animales del Estado de Baja California, respecto a la necesidad de que en el Estado se reconozcan y hagan efectivos los derechos de los animales partiendo de la modificación del concepto tradicional que los define como cosas, desafortunadamente nuestra sociedad, aun hay algunas personas y grupos que por falta de sensibilidad llegan a ocasionar a los animales un maltrato que implica actos de crueldad o degradantes, considero al igual que muchas personas que es tiempo del sentido humanista de las personas de la sociedad y que se traduzca no solo Enel respeto y la solidaridad hacia otras personas, sino que debe implicar los animales como seres sintientes y que son parte esencial del medio ambiente y de los ecosistemas, al jugar un papel específico dentro de las distintas cadenas y nichos ecológicos de cada especie.

Ellos, al igual que nosotros merecemos un lugar en este planeta y una existencia digna.

Consideramos que los animales destinados al consumo humano no sean sometidos a tratos que les generen angustia o ansiedad y sean tratados con el menor sufrimiento posible.

Y que aquellas especies que son usados como animales de trabajo tengan un buen trato sin someterlos a una explotación que les cause dolor, afectaciones físicas o agotamiento extremo.

Por lo anteriormente expuesto, quiero proponerles una reforma la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, a efecto de que se reconozca a los animales como seres sintientes y por lo tanto reciban un trato digno y que toda persona tenga un deber ético y una obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, estos por su naturaleza sean sujetos de consideración moral y su tutela sea de responsabilidad común, también para que las autoridades de los municipios y del Estado garanticen la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y se fomente sobre todo Diputados una cultura que es la cultura del cuidado y tutela responsable, realizando acciones para la atención de animales en abandono, por lo anterior estamos obligados a presentar una protección más efectiva en donde la igualdad entre especias sean más concreta, más que una declaración de meras o buenas intenciones, es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR LA DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ)

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

XXIII LEGISLATURA

P R E S E N T E.-

La suscrita Diputada CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ, en representación de la ciudadanía y del PARTIDO DEL TRABAJO en la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los numerales 110 fracción I, 112, 115 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito presentar ante el Pleno de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL APARTADO F AL ARTÍCULO 7, Y FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Tomando en cuenta que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental, hago eco a diversos planteamientos de los promotores de las organizaciones y asociaciones protectoras de animales del Estado de Baja California, respecto a la necesidad de que en el Estado se reconozcan

y hagan efectivos los derechos de los animales, partiendo de la modificación del concepto tradicional que los define como cosas.

Para lo cual se hace necesario establecer el bien jurídico de los animales no humanos, haciendo hincapié de que, al referirnos a estos, estamos circunscribiendo el ámbito de aplicación de la Ley a los animales vertebrados.

Sin que estos impliquen que se considere ético o razonable el someter a sufrimiento o crueldad a otras especies del reino animal.

Desafortunadamente, en nuestra sociedad aún hay algunas personas y grupos que por falta de sensibilidad llegan a ocasionar a los animales un maltrato, que implica actos de crueldad o degradantes.

Considero al igual que muchas personas que es tiempo de el sentido humanista de las personas de la sociedad se traduzca no solo en el respeto y solidaridad hacia otras personas, sino que debe implicar a los no humanos, que son parte esencial del medio ambiente y de los ecosistemas, al jugar un papel específico dentro de las distintas cadenas y nichos ecológicos de cada especie.

Ellos, al igual que nosotros merecemos un lugar en este planeta y una existencia digna.

Consideramos que los animales destinados al consumo humano no sean sometidos a tratos que les generen angustia o ansiedad y sean tratados con el menor sufrimiento posible.

Y que aquellas especies que son usados como animales de trabajo tengan un buen trato sin someterlos a una explotación que les cause dolor, afectaciones físicas o agotamiento extremo.

Partimos que la denominación de animal no humano nace del concepto de que el ser humano es considerado como -animal racional- según su nombre científico, asignado por el naturalista sueco Carlos Linneo en 1758. Y son estas especies, a las que pretendemos se les reconozca como seres sintientes.

Por otra parte, es importante remarcar que la palabra "derechos", en su connotación jurídica, alude al conjunto de facultades o potestades que son otorgadas o reconocidas por el Estado a los miembros de una comunidad por las normas emanadas del poder legislativo.

En tal sentido para que un determinado bien sea tutelado por la ley, existe un procedimiento jurídico surgido de un reclamo social, mismo que necesariamente responde a lo que en un momento y lugar determinado es considerado por la sociedad como justo.

En este tenor es importante señalar que en Baja California ya tenemos avances en esta materia toda vez que en el ARTÍCULO 342, del Código Penal para el Estado de Baja California, se establece que: Al que intencionalmente realice algún acto de maltrato o crueldad en contra de un animal, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado.

Y dicho ordenamiento abona más en la intención de la presente iniciativa al mencionar en el ARTÍCULO 342 BIS, que, Para efectos del presente capítulo, se entenderá por animal, al organismo vivo, no humano, SENSIBLE, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre.

De similar forma se establecen sanciones a los que infrinjan un trato cruel a los animales en la Ley para la Protección de los Animales Domésticos, para el Estado de Baja California.

Esta pretensión ya ha ido avanzando en otras naciones e forma tal que están vigentes los siguientes Tratados y Convenios Internacionales:

Declaración Universal de los Derechos del Animal Londres 23 de septiembre de 1977. Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tratado de Ámsterdam de 1999,"Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales", Anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que fue la primera legislación en considerar a los animales como seres sintientes de manera expresa.

Tratado de Roma del 29 de octubre de 2004, señala en su artículo 111-121: "Cuando definan y ejecuten la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los transportes, el mercado interior, la investigación y el desarrollo tecnológico y el

espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los animales como seres sensibles, al tiempo que respetarán las disposiciones legales o administrativas y los usos de los Estados miembros, en particular por lo que respecta a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios regionales".

En nuestro país en el ámbito federal se aplican las siguientes Normas Oficiales en la materia:

NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres;

NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la movilización de animales;

NOM-062-ZOO-1999. Sobre especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio;

NOM-194-SSA1-2004. Establece las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio;

NOM-148-SCFI-2008. Prácticas comerciales-comercialización de animales de compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y adiestramiento;

NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos;

NOM-054-Z00-1996. Establecimientos de cuarentenas para animales y sus productos;

NOM-008-Z00-1994. Para la construcción y equipamiento de establecidos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos; y

NOM-009-Z00-1994. Para el establecimiento de los procedimientos que deben cumplir los establecimientos destinados al sacrificio de animales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO.- Se adicionan el APARTADO F al artículo 7, y la Fracción VI al artículo 9, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- El Estado de. . .

(. . .)

(. . .)

APARTADO A. De la promoción. . .

APARTADO B. De la Comisión. . .

APARTADO C. De la Transparencia. . .

APARTADO D. De los Juicios. . .

APARTADO E. De las Víctimas. . .

APARTADO F. De la protección a los animales.

Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En el Estado de Baja California toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.

Las autoridades de los municipios y del Estado, garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.

La ley determinará:

I.- Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;

II.- Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

III.- Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;

IV.- Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y

V.- Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los habitantes del Estado:

I.- a la V.- (. . .)

VI.- Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, remítanse el dictamen correspondiente, así como las actas del debate respectivo, a los Ayuntamientos en los términos previstos por el artículo 112 constitucional.

SEGUNDO.- Agotado el trámite establecido en el transitorio que antecede, remítase al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación.

TERCERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Recinto Parlamentario "Benito Juárez García" del edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a los 10 días del mes de octubre del año 2019.

¡UNIDAD NACIONAL, TODO EL PODER AL PUEBLO!

A T E N T A M E N T E

_____

DIPUTADA CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ

PARTIDO DEL TRABAJO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL APARTADO F AL ARTÍCULO 7, Y FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 9, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES.

(CONCLUYE)

- EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ: Presidente, nada más para sumarme a la propuesta de la Diputada Agatón, si me hace favor de incluirme Diputada.

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Gracias, sí, con mucho gusto Diputado, Diputado Bujanda, Diputada, muy bien. Todos.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputados extraordinaria solidaridad, se turna a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, continúa en el uso de la voz la Diputada Monserrat Caballero Ramírez.

- LA C. SECRETARIA: Presidente, damos cuenta de la asistencia del Diputado Elí Topete.

- EL C. PRESIDENTE: Bienvenido Diputado, registrado.

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Con su venia Presidente, y en respeto al tiempo parlamentario solicito que la presente iniciativa sea incorporada íntegramente a la gaceta parlamentaria y al diario de debates, haciendo un resumen en los siguiente términos.

- EL C. PRESIDENTE: Así será Diputada adelante.

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Exposición de Motivos: La educación es un derecho humano fundamental, a nivel internacional que ha sido reconocido como tal, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y reconocida en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de la persona y sociedades, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura y los valores de todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, en ese sentido, la educación se vuelve necesaria en todos los aspectos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho, así como para el impulso de la tecnología e innovación.

En atención a lo anterior, se vuelve necesario efectuar acciones en beneficio de la impartición de la educación, con el objeto de fomentar la igualdad de oportunidades para las alumnas y alumnos de nuestro país, así como el apoyo a la economía de las familias de nuestro Estado, mediante esta iniciativa de ley, se busca elevar a rango de ley la obligación del Estado de entregar a cada estudiante de educación básica pública un uniforme de forma gratuita cada ciclo escolar, incluyendo el calzado.

Al proporcionarse por parte del Estado al menos un uniforme y calzado gratuito a cada estudiante de educación básica pública, se estará apoyando a la economía de las familias baja californianas, la entrega de este apoyo por parte de Gobierno del Estado repercutirá en la equidad de la impartición de la educación, además de fortalecer la igualdad entre los estudiantes sin importar el nivel económico de las familias que reciban este apoyo.

De conformidad con los planteamientos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea del Poder Legislativo, INICIATIVA POR EL CUAL SE CREA LA LEY UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN IX DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Señores, el cambió llegó, el cambio está aquí, el cambio somos nosotros.

DADO en el salón de Sesiones "Benito Juárez García" del Congreso del Estado de Baja California a los 10 días de octubre del año dos mil diecinueve.

Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA INICIATIVA, LEÍDA POR LA DIPUTADA MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE. –

La suscrita Diputada MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ, Coordinadora del GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, en uso de la facultad que me confiere lo establecido en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y los artículos 110, 111, 115, 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA por el que se crea la LEY DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN IX DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La educación es un derecho humano fundamental, a nivel internacional ha sido reconocido como tal, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

de 1948, en la cual, se ha establecido en su artículo 26, el derecho de toda persona a recibir educación de forma gratuita, por otro lado, a nivel nacional, la obligatoriedad y gratuidad de la educación se encuentra establecida en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fijándose las bases en la que esta deberá impartirse, siendo estas el respeto irrestricto de la dignidad de las personas y los derechos humanos.

La educación es el principal instrumento para el desarrollo de los individuos, nos proporciona las capacidades y conocimientos necesarios para convertirnos en ciudadanos capaces de contribuir a la sociedad, la educación es una herramienta que nos ayuda a vivir en una sociedad con menor desigualdad, fortalece tanto la creación de criterios propios como el respeto a las libertades individuales, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas, es un bien social que hace más libres a los seres humanos.

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de la persona y sociedades, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura y los valores de todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, en ese sentido, la educación se vuelve necesaria en todos los aspectos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho, así como para el impulso de la ciencia, tecnología e innovación.

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes, las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, la educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, en razón de las profundas transformaciones motivadas por el avance de la ciencia y sus aplicaciones.

En atención a lo anterior, se vuelve necesario efectuar acciones en beneficio de la impartición de la educación, con el objeto de fomentar la igualdad de oportunidades para las alumnas y alumnos de nuestro país, así como el apoyo a la economía de las familias de nuestro Estado, mediante esta iniciativa de ley, se busca elevar a rango de ley la obligación del Estado de entregar a cada estudiante de educación básica pública un uniforme de forma gratuita cada ciclo escolar, incluido el calzado.

Al proporcionarse por parte del Estado al menos un uniforme y calzado gratuito a cada estudiante de educación básica pública, se estará apoyando a la economía de las familias baja californianas, la entrega de este apoyo por parte de Gobierno del Estado repercutirá en la equidad de la impartición de la educación, además de fortalecer la igualdad entre los estudiantes sin importar el nivel económico de las familias que reciban este apoyo.

La presente iniciativa de ley tiene por objeto que con independencia de los fondos federales aportados por parte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno Federal, se fortalezca por parte de gobierno del Estado, la intención de dotar gratuitamente un uniforme escolar, incluido el calzado

por cada ciclo escolar, a todos y cada uno de las alumnos y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico del Estado de Baja California, o en su caso efectuar el otorgamiento de un vale (electrónico), para la adquisición de los mismos. En la presente iniciativa de ley se establece la obligación del Ejecutivo de incluir en su proyecto de presupuesto de egresos la cantidad suficiente para el cumplimiento de la presente ley y la obligación de este Poder Legislativo de dotar de los recursos necesarios en la aprobación de dicho presupuesto, otorgándosele además al Ejecutivo el plazo de 90 días naturales para emitir la reglamentación correspondiente relativa a la operatividad para dar el debido cumplimiento a la presente ley.

De conformidad con los planteamientos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea del Poder Legislativo, INICIATIVA POR EL QUE SE CREA LA LEY UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN IX DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:

PRIMERO. - Se crea la Ley Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

LEY UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Baja California y tiene por objeto garantizar que en el presupuesto de egresos del año correspondiente se otorgue la suficiencia presupuestal para dotar gratuitamente de, por lo menos, un uniforme escolar, incluido el calzado o en su caso, el otorgamiento de vale electrónico para adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico del Estado de Baja California, el cual deberá realizarse puntualmente al inicio de cada ciclo escolar anual, conforme al calendario autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Educación y Bienestar Social.

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley, se consideran inscritos en las escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Baja California a los siguientes:

I.- Las alumnas y alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria, educación especial e indígena;

II.- Las alumnas y alumnos de preescolar inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno del Estado; y

III.- Las alumnas y alumnos de educación especial inscritos en los Centros de Atención Múltiple o en Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular.

Artículo 3º- El Ejecutivo del Estado, además de los recursos provenientes de los respectivos Fondos Federales, y a fin de garantizar el propósito de esta ley, se podrá

incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California que presente anualmente ante el Congreso del Estado, un monto que garantice la entrega gratuita de un uniforme escolar incluido el calzado o, en su defecto, la entrega de un vale electrónico para adquisición de los mismos al inicio de cada ciclo escolar a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Baja California.

Artículo 4º.- El Poder Legislativo del Estado de Baja California, en su caso, deberá aprobar en el Decreto del Presupuesto del Gobierno del Estado de Baja California, la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho a recibir gratuitamente, un uniforme escolar incluido el calzado o, en su defecto, la entrega de un vale electrónico para adquisición del mismo, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Baja California.

Artículo 5º.- Las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación y Bienestar Social y de Planeación y Finanzas, serán las dependencias responsables de operar el proceso para contar con los uniformes escolares o, en su defecto, con los vales electrónicos para la adquisición de los mismos, la difusión de éste y la entrega de los apoyos, en su caso. El registro y control de los uniformes o vales electrónicos entregados será a través de sus distintas unidades administrativas y podrán solicitar el apoyo de otras dependencias, órganos desconcentrados, entidades administrativas, para la ejecución de la presente Ley.

La participación que tendrán las Secretarías señaladas en el párrafo anterior del presente artículo, en el proceso de dotar gratuitamente de un uniforme escolar,

incluido el calzado o, en su caso, el otorgamiento de vale electrónico para adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico ubicadas en el Estado de Baja California, se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 6º.- La Secretaría de Educación y Bienestar Social deberá otorgar la relación de las alumnas y los alumnos inscritos en las escuelas públicas de nivel básico ubicadas en el Estado de Baja California, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, con el tiempo suficiente para ser incluido en el proyecto de presupuesto de egresos del año correspondiente.

Artículo 7º.- El Ejecutivo del Estado, elaborará el reglamento de la presente Ley, en el que se establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo el derecho que establece esta Ley.

Con independencia de lo que se establezca en el reglamento de la presente Ley, el Ejecutivo del Estado, podrá tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas que reconoce la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California, para la elaboración del diseño de los uniformes que habrán de entregarse a las alumnas y alumnos que pertenezcan a dichos pueblos indígenas y que se encuentren inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Baja California.

Artículo 8. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias de manera verbal o por escrito siempre que aporte elementos de prueba, sobre cualesquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos

establecidos en la presente Ley, contravengan sus disposiciones o menoscaben el correcto ejercicio de recursos públicos.

Las quejas o denuncias podrán ser presentadas a la - Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a la Auditoría Superior del Estado o a ante quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Artículo 9. La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental será la encargada de realizar revisiones, auditorías y evaluaciones, para que de existir observaciones o recomendaciones se solventen por las autoridades responsables. En caso contrario, aplicará las medidas conducentes para su correcta efectividad.

Artículo 10. El incumplimiento, ya sea por acción u omisión de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, por parte de autoridades responsables, generará responsabilidades y serán sancionadas conforme a lo prescrito por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, sin menoscabo de la posibilidad del fincamiento de responsabilidades de diversa índole jurídica dependiendo del caso concreto.

Artículo 11. La inobservancia a lo previsto en la presente Ley, ya sea por acción u omisión, por parte de personas físicas o morales que no sean autoridades, serán sancionadas conforme a lo establecido por la ley o leyes aplicables al caso concreto.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Durante el ciclo escolar 2020-2021 autorizado por la Secretaría de Educación y Bienestar Social, seguirá aplicando el Programa de Entrega de Uniformes Escolares Gratuitos manejado por el Poder Ejecutivo, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno Federal.

ARTÍCULO TERCERO. - El ejercicio de los recursos Estatales asignados, motivos de la presente Ley, se deberá de ajustar a lo dispuesto en la respectiva Ley de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, en virtud de que la presente Ley es estrictamente de materia presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO. - Se otorga un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación de la presente ley para que el Titular del Poder Ejecutivo emita el reglamento correspondiente a que alude el artículo 7º de esta Ley.

SEGUNDO. - Se reforma el artículo 5, fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTICULO 5o.- El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su competencia y atribuciones, está obligado a prestar servicios educativos suficientes a todos los habitantes del Estado para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior bajo el criterio de la mayor calidad y equidad.

I a la VIII.- (…)

IX.- Dará acceso a un uniforme escolar y un par de calzado gratuitos por ciclo escolar a cada alumno inscrito en las escuelas públicas del Estado, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

DADO en el salón de Sesiones "Benito Juárez García" del Congreso del Estado de Baja California a los 10 días de octubre del año dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

_____

DIPUTADA MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA DE ESTA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, a ver adelante Diputados.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Diputada nada más sumarme, con muchísimo gusto.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: De igual manera Diputada

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Igualmente.

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputados y Diputadas, les pasarán la hoja de firmas correspondiente, gracias Diputada, sigue en el uso de la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez.

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Con su permiso Diputado Presidente, Diputados y Diputadas. En nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, presento la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 5º, 6º y 15 DE LA LEY EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En dicha Ley General se Garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

3. La educación de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), "es la base para mejorar nuestras vidas y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede

ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo".

4. La educación es un derecho que todos y todas las niñas deben recibir sin menoscabo de ninguna interpretación por parte de las autoridades y los docentes.

5. La educación es un triunfo histórico, incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el resultado de una discusión histórica sobre el papel del Estado en el otorgamiento del derecho humano de la educación, y a que los alumnos y alumnas reciban una educación de calidad que permita el desarrollo pleno de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.

6. La Ley de Educación del Estado de Baja California fue emitida el 29 de septiembre de 1995, para dar sustento al marco legal vigente en materia de educación, por lo que hace necesario actualizar algunos artículos.

7. Los uniformes en la actualidad no pueden ser vistos únicamente por el género, que ha determinado el uso histórico de cierta ropa. Dicho determinismo ha concluido que las niñas deban usar faldas y los niños pantalones.

8. En la actualidad tenemos demasiados problemas para mantener a los docentes en las aulas ante la falta de certidumbre por el gobierno estatal, como para generar mayor incertidumbre en el alumnado por el uso de estereotipos y determinismos históricos.

9. En los últimos años, la educación en México y en Baja California ha sido otorgada de manera constante, por ello, es necesario evitar generar problemas que

disminuyan el acceso a la misma, más allá de condiciones económicas, políticas y sociales que siguen estando vigentes en diversas comunidades del Estado.

10. El acceso a la educación para las niñas en las zonas rurales e indígenas de México y Baja California sigue siendo un problema por la constante exclusión de las que son objeto. Por ello, debemos de dar las facilidades necesarias para que puedan acceder al Derecho Universal de la Educación otorgada por el Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 5º, 6º y 15 DE LA LEY EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUEDAR COMO SIGUE.

ARTICULO 5o.- El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su competencia y atribuciones, está obligado a prestar servicios educativos suficientes a los habitantes del Estado para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior bajo el criterio de la mayor calidad y equidad.

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- ...

VI.- ...

VI.- ...

VIII.-...

IX.- ...

X.- Establecerá los criterios para recomendar y autorizar a través de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, el color y las características de los uniformes escolares en escuelas públicas y particulares de los niveles de educación básica y media superior, dichos uniformes podrán ser mixtos tomando en consideración:

a).- Las autoridades escolares no condicionarán el acceso o permanencia del alumnado a la adquisición de útiles escolares, uniformes con distintivos especiales, y demás objetos vinculados al proceso de enseñanza aprendizaje, en establecimientos comerciales específicos, asimismo a ropa adicional al uniforme que por condiciones climáticas se porte.

b).- Los padres de familia o tutores adquirirán los materiales educativos y uniformes en donde más les convenga, sin que se les pueda obligar a comprarlos en establecimientos o marcas determinados.

XI.- ...

ARTICULO 6o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad, con acceso y permanencia al Sistema Educativo Estatal, cumpliendo con los requisitos que señala esta Ley. El derecho deberá ser sin condicionamientos a la apariencia física y forma de vestir, por parte de las autoridades educativas.

ARTICULO 15.- El Ejecutivo del Estado, tiene las siguientes facultades y obligaciones en materia educativa:

I.- Impartir en toda la entidad los servicios de educación de calidad en todos los niveles que atiende el Estado, así como la normal y demás para la formación de docentes. Salvaguardando la integridad y cuidado de los profesores, alumnos y demás servidores que participan en la educación.

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- ...

VI.- ...

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

X.- ...

XI.- ...

XII.- ...

XIII.- ...

XIV.- ...

XV.- ...

XVI.- ...

XVII.- ...

XVIII.- ...

XIX.- ...

XX.- ...

XXI.- ...

XXII.- ...

XXIII.- ...

XXIV.- Distribuir y entregar uniformes escolares gratuitos a los alumnos de escasos recursos inscritos en las escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ubicadas en el territorio del Estado; privilegiando a aquellas escuelas que se ubiquen en zonas indígenas, rurales o de alta marginación y a través de un Programa Estatal, que funcionará de acuerdo a las normas y lineamientos de operación que la Secretaría emita. En caso contrario, el Ejecutivo deberá cuidar que no exista discriminación o interrupción del servicio educativo para aquellos que no puedan o no cuenten con los recursos para adquirir dicho uniforme. Ninguna alumna ni alumno podrá ser condicionado por su vestimenta.

XXV.- ...

XXVI.- ...

XXVII.- ...

XXVIII.- ...

XXIX.- ...

XXX.- ...

XXXI.- ...

XXXII.- ...

TRANSITORIO.

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García al día 10 de octubre del año dos mil diecinueve. Es cuanto Diputado.

(SE INSERTA INICIATIVA QUE PRESENTA LA DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MARQUEZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

PRESENTE

La suscrita Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, integrante de la Fracción Parlamentaria de morena, con fundamento en los artículos 27 y 28 en su fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y en lo dispuesto en los artículos 110, fracción I; 112; 115, fracción I; 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 5º, 6º y 15 DE LA LEY EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En dicha Ley General se Garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

3. La educación de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), "es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede

ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo".

4. La educación es un derecho que todos y todas las niñas deben recibir sin menoscabo de ninguna interpretación por parte de las autoridades y los docentes.

5. La educación es un triunfo histórico, incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el resultado de una discusión histórica sobre el papel del Estado en el otorgamiento del derecho humano de la educación, y a que los alumnos y alumnas reciban una educación de calidad que permita el desarrollo pleno de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.

6. La Ley de Educación del Estado de Baja California fue emitida el 29 de septiembre de 1995, para dar sustento al marco legal vigente en materia de educación, por lo que hace necesario actualizar algunos artículos.

7. Los uniformes en la actualidad no pueden ser vistos únicamente por el género, que ha determinado el uso histórico de cierta ropa. Dicho determinismo ha concluido que las niñas deban usar faldas y los niños pantalones.

8. En la actualidad tenemos demasiados problemas para mantener a los docentes en las aulas ante la falta de certidumbre por el gobierno estatal, como para generar mayor incertidumbre en el alumnado por el uso de estereotipos y determinismos históricos.

9. En los últimos años, la educación en México y en Baja California ha sido otorgada de manera constante, por ello, es necesario evitar generar problemas que

disminuyan el acceso a la misma, más allá de condiciones económicas, políticas y sociales que siguen estando vigentes en diversas comunidades del Estado.

10. El acceso a la educación para las niñas en las zonas rurales e indígenas de México y Baja California sigue siendo un problema por la constante exclusión de las que son objeto. Por ello, debemos de dar las facilidades necesarias para que puedan acceder al Derecho Universal de la Educación otorgada por el Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 5º, 6º y 15 DE LA LEY EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUEDAR COMO SIGUE.

ARTICULO 5o.- El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su competencia y atribuciones, está obligado a prestar servicios educativos suficientes a todos los habitantes del Estado para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior bajo el criterio de la mayor calidad y equidad.

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- ...

VI.- ...

VI.- ...

VIII.-...

IX.- ...

X.- Establecerá los criterios para recomendar y autorizar a través de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, el color y las características de los uniformes escolares en escuelas públicas y particulares de los niveles de educación básica y media superior, dichos uniformes podrán ser mixtos tomando en consideración:

a).- Las autoridades escolares no condicionarán el acceso o permanencia del alumnado a la adquisición de útiles escolares, uniformes con distintivos especiales, y demás objetos vinculados al proceso de enseñanza aprendizaje, en establecimientos comerciales específicos, asimismo a ropa adicional al uniforme que por condiciones climáticas se porte.

b).- Los padres de familia o tutores adquirirán los materiales educativos y uniformes en donde más les convenga, sin que se les pueda obligar a comprarlos en establecimientos o marcas determinados.

XI.- ...

ARTICULO 6o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad, con acceso y permanencia al Sistema Educativo Estatal, cumpliendo con los requisitos que señala esta Ley. El derecho deberá ser sin condicionamientos a la apariencia física y forma de vestir, por parte de las autoridades educativas.

ARTICULO 15.- El Ejecutivo del Estado, tiene las siguientes facultades y obligaciones en materia educativa:

I.- Impartir en toda la entidad los servicios de educación de calidad en todos los niveles que atiende el Estado, así como la normal y demás para la formación de docentes. Salvaguardando la integridad y cuidado de los profesores, alumnos y demás servidores que participan en la educación.

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- ...

VI.- ...

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

X.- ...

XI.- ...

XII.- ...

XIII.- ...

XIV.- ...

XV.- ...

XVI.- ...

XVII.- ...

XVIII.- ...

XIX.- ...

XX.- ...

XXI.- ...

XXII.- ...

XXIII.- ...

XXIV.- Distribuir y entregar uniformes escolares gratuitos a los alumnos de escasos recursos inscritos en las escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ubicadas en el territorio del Estado; privilegiando a aquellas escuelas que se ubiquen en zonas indígenas, rurales o de alta marginación y a través de un Programa Estatal, que funcionará de acuerdo a las normas y lineamientos de operación que la Secretaría emita. En caso contrario, el Ejecutivo deberá cuidar que no exista discriminación o interrupción del servicio educativo para aquellos que no puedan o no cuenten con los recursos para adquirir dicho uniforme. Ninguna alumna ni alumno podrá ser condicionado por su vestimenta.

XXV.- ...

XXVI.- ...

XXVII.- ...

XXVIII.- ...

XXIX.- ...

XXX.- ...

XXXI.- ...

XXXII.- ...

TRANSITORIO.

PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García al día 10 de octubre del año dos mil diecinueve.

DIPUTADA MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ
XXIII LEGISLATURA DE CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
(CONCLUYE INICIATIVA)

- **EL C. PRESIDENTE:** Gracias Diputada Miriam Canio, su iniciativa se turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Adelante Diputada.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Coincide las dos esta iniciativa de la Diputada Monserrat y de la Diputada Cano; la Diputada Monserrat está pidiendo que uniformes para nivel de educación estatal, municipal y federal, entonces

también y gratuito, entonces yo creo que deberíamos de juntarlas y también me sumo a la iniciativa, pero yo creo que es más o menos lo mismo que están pidiendo las dos Diputadas.

- EL C. PRESIDENTE: Bueno gracias Diputada, ese procedimiento lo harán, la incorporación de las propias iniciativas en la comisión correspondiente.

- LA C. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Diputada Miriam me puedo unir a su iniciativa?

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Igual me uno.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, agotada ya este punto de iniciativas ante el Pleno, continuamos con el apartado referente a **"Dictámenes",** de las Comisiones de Trabajo de esta Legislatura, por lo tanto tiene la voz de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para presentar el Dictamen número 7, muy bien, adelante Diputada Rosina del Villar.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Muchas gracias, buenos días, para antes Diputado Presidente solicito se someta a consideración de la asamblea, dispensar la lectura total de los dictámenes que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que únicamente se de lectura al proemio y resolutivos de los mismos.

- **EL C. PRESIDENTE:** Se pone a consideración, por favor Diputada Escrutadora por favor siéntese, en votación económica la solicitud de la Diputada Presidenta de

la Comisión de Hacienda y Presupuesto la dispensa de la lectura, solo leer el proemio y resolutivo.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de la lectura, para solamente leer el proemio y resolutivos de los Dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los Diputados que se encuentren a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, adelante.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Gracias Diputado Presidente. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 7, Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, a fin de que los adultos mayores queden exentos del pago de contribuciones de mejoras de obras de urbanización; para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso.

Resolutivo:

ÚNICO.- Se aprueba la reforma al Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, a fin de que los adultos mayores queden exentos del pago de contribuciones de mejoras de obras de urbanización, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9.- Tratándose de…

El Ejecutivo del Estado…

Tratándose de pensionados, jubilados, y demás personas mayores de sesenta años; discapacitados que acrediten tal calidad; padre o madre jefe de familia, así como personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad y reúnan los requisitos establecidos en el Título noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, quedarán exentos como sigue:

A).- Los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, padre o madre jefe de familia y personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad, que realicen alguna actividad económicamente productiva y que obtengan ingresos diarios de hasta cinco veces el salario mínimo general, en el cincuenta por ciento de la contribución de mejoras determinada a su cargo; y,

B).- Las personas mayores de sesenta años, que no sean pensionados ni jubilados y que sus ingresos no excedan de dos veces el salario diario mínimo general o discapacitados que no desempeñen actividad productiva, el cien por ciento en los conceptos señalados, otorgándose este beneficio sólo por un inmueble de su propiedad.

En la misma forma el Presidente Municipal podrá otorgar subsidio para el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de las obras realizadas bajo el sistema de cooperación, a los Organismos, instituciones de Asistencia y personas físicas señaladas anteriormente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las autoridades respectivas darán cumplimiento de la presente reforma en base a los requisitos señalados por el artículo 172, fracción II, en correlación con el artículo 174 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, con el hecho de comprobar la edad de la persona con el acta de nacimiento, o bien que se identifique con credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del Honorable Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Es cuanto señor Presidente.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 7 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ROSINA DEL VILLAR CASAS)

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DICTAMEN No. 7

HONORABLE ASAMBLEA

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo

9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, a fin de que los adultos mayores queden exentos del pago de contribuciones de mejoras de obras de urbanización; para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso.

Una vez realizado el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente en todos y cada uno de los términos de la Iniciativa, la Comisión que suscribe, en cumplimiento a los Artículos 39, 55, 56 fracción II, 65 Fracción III numeral 3, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procede al estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa precitada, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES:

En fecha 06 de Abril de 2017, el C. Diputado Catalino Zavala Márquez a nombre y representación de los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA), con fundamento en los Artículos 27 y 28, ambos en su Fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los Artículos 110 Fracción II, 115 Fracción I, 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, de forma específica su tercer párrafo, cuya intención pretende que las "personas" mayores de sesenta años y no los denominados como "indigentes" sean los sujetos de beneficios o exenciones respecto del pago de las contribuciones de las mejoras de obras de urbanización, lo anterior, sustentándose bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores en muchas veces es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, malamente aceptable. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedico el año 2016 para concientizar en contra de la discriminación de las personas Adultas Mayores; asimismo, ha determinado que la edad de 60 años de toda persona es considerada como adulto mayor, tal criterio es utilizado respectivamente en el Orden Jurídico Mexicano, y por consiguiente de Organismos gubernamentales como es el caso del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y la Secretaría de Salud.

Por otro lado, de acuerdo a un análisis del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en México, 75 de cada 100 adultos mayores no cuentan con una pensión, es decir, sólo uno de cada cuatro recibe un ingreso por los años de servicio laboral en su vida productiva; lo más grave es que de seguir con esta estadística, la pobreza seguirá en aumento en la vejez. Siguiendo con el análisis, el tema del envejecimiento demográfico, caracterizado por un crecimiento dinámico de los mayores de 60 años, contiene una problemática; hoy, el 9.4 por ciento de los mexicanos tiene más de 65 años de edad, cuando en la década de los 50 este índice era de 5 puntos porcentuales.

En el Estado de Baja California, del total de la población, el 5.4% representa a personas de 65 años y más, cifra que se espera aumente a 9.2% para el año 2030. Durante el II trimestre del 2016 en Baja California, la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el INEGI, arrojó datos sobre la Población Económicamente Activa (PEA) con 65 años y más, cuyo resultado fue que en nuestro Estado, 94 mil 988 habitantes que cuentan con 60 años y más, son considerados población económicamente activa, en contraste a los que No son Económicamente Activos, registrando 232 mil 018 habitantes en ese grupo de edad.

De igual forma también debemos contemplar los tipos de discapacidad más frecuentes que afectan a los adultos mayores, donde se reporta dificultades para escuchar, aprender, recordar o concentrarse y mover o usar sus brazos o manos, lo cual impide desarrollarse laboralmente.

En este sentido, una de las mayores preocupaciones es la seguridad económica en la edad adulta, porque no se le ha dado importancia social de cómo enfrentarán los adultos mayores los retos de ingreso para las cosas elementales, como alimentación y vivienda, o cómo solventarán las afectaciones de salud, pues en la medida de que la esperanza de vida aumenta en el país, se presentan más inconvenientes para que ellos puedan ser atendidos con cierta dignidad.

Ante tal situación, la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California, refiere que las autoridades respectivas debemos garantizar y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, para propiciarles una plena protección, bienestar y calidad de vida, así como para lograr su integración al desarrollo social, económico, político y cultural.

Asimismo, el artículo 10, fracción XIII de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece como objetivo de la Política Nacional, establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; por lo que el motivo de la presente iniciativa va encaminada en este sentido, reformando a la Ley de Urbanización del Estado, a fin de ayudar a dicho sector vulnerable.

En este contexto, la Ley de Urbanización del Estado en su artículo 9, tercer párrafo, refiere quienes son sujetos a beneficios o exenciones del pago de las contribuciones de las mejoras de obras de urbanización, en donde el actual artículo beneficia a pensionados, jubilados, indigentes mayores de sesenta años, entre otros grupos vulnerables; dicha porción normativa afecta a los adultos mayores en general, toda vez que señala una limitante a dicho sector, ya que la mayoría de las personas que tienen 60 años y más, difícilmente tienen la posibilidad del beneficio de una pensión o jubilación, por lo que en el mejor de los casos, tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para poder subsistir llegando incluso a la pobreza extrema; en resumen, al incorporar este nuevo supuesto normativo suprimiendo la palabra "indigentes", amplia y garantiza la protección a la totalidad de los adultos mayores de Baja California.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, someto a consideración de este Honorable XXII Legislatura, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9.- Tratándose de…

El Ejecutivo del Estado…

Tratándose de pensionados, jubilados, y demás personas mayores de sesenta años; discapacitados que acrediten tal calidad; padre o madre jefe de familia, así como personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad y reúnan los requisitos establecidos en el Título noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, quedarán exentos como sigue: los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, padre o madre jefe de familia y personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad, que realicen alguna actividad económicamente productiva y que obtengan ingresos diarios de hasta cinco veces el salario mínimo general, en el cincuenta por ciento de la contribución de mejoras determinada a su cargo; y los mayores de sesenta años que no sean pensionados ni jubilados, o discapacitados que no desempeñen actividad productiva, el cien por ciento en los conceptos señalados, otorgándose este beneficio sólo por un inmueble de su propiedad. En la misma forma el Presidente Municipal podrá otorgar subsidio para el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de las obras realizadas bajo el sistema de cooperación, a los Organismos, Instituciones de Asistencia y personas físicas señaladas anteriormente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las autoridades respectivas darán cumplimiento de la presente reforma en base a los requisitos señalados por el artículo 172, fracción II, en correlación con el artículo 174 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, con el hecho de comprobar la edad de la persona con el acta de nacimiento, o bien que se identifique con credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores."

Una vez analizada en todos y cada uno de sus términos la presente Iniciativa por esta Comisión y en cumplimiento de los Artículos 65 Fracción III punto 3, numeral 8, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 122 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se procede a sustentar el Dictamen en cuestión con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9, párrafo tercero de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, pretende eliminar el vocablo de "indigentes", como sujetos de exención para el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de obras y en su lugar adicionar el texto "demás personas" mayores de sesenta años, como sujetos a beneficios o exenciones del pago de las contribuciones de las mejoras de obras de urbanización en el Estado de Baja California, con el objeto de incorporar un nuevo supuesto

normativo suprimiendo la palabra "indigentes", ampliando y garantizando la protección a la totalidad de los adultos mayores de Baja California.

SEGUNDO.- Que con el propósito de hacer más explícito el objetivo que se persigue con la Iniciativa en comento, a continuación se plasma cuadro comparativo entre la Ley de Urbanización del Estado de Baja California vigente, con la Iniciativa de Decreto:

LEY DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (TEXTO VIGENTE)	**INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE** URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 9.- *Tratándose de …* *El Ejecutivo del Estado…* *Tratándose de pensionados, jubilados,* ***indigentes*** *mayores de sesenta años; discapacitados que acrediten tal calidad; padre o madre jefe de familia, así como personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad y reúnan los requisitos establecidos en el Título noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, quedarán exentos como sigue: los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, padre o madre jefe de familia y personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad, que realicen alguna actividad económicamente productiva y que obtengan ingresos diarios de hasta cinco veces el salario mínimo general, en el cincuenta por ciento de la contribución de mejoras determinada a su cargo; y los* ***indigentes*** *mayores de sesenta años o discapacitados que no desempeñen actividad productiva, el cien por ciento en los conceptos señalados, otorgándose este beneficio sólo por un inmueble de su*	***ARTÍCULO 9.-*** *Tratándose de …* *El Ejecutivo del Estado…* *Tratándose de pensionados, jubilados, y* ***demás personas*** *mayores de sesenta años; discapacitados que acrediten tal calidad; padre o madre jefe de familia, así como personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad y reúnan los requisitos establecidos en el Título noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, quedarán exentos como sigue: los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, padre o madre jefe de familia y personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad, que realicen alguna actividad económicamente productiva y que obtengan ingresos diarios de hasta cinco veces el salario mínimo general, en el cincuenta por ciento de la contribución de mejoras determinada a su cargo; y los mayores de sesenta años* ***que no sean pensionados ni jubilados****, o discapacitados que no desempeñen actividad productiva, el cien por ciento en*

LEY DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (TEXTO VIGENTE)	**INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE** URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
propiedad. En la misma forma el Presidente Municipal podrá otorgar subsidio para el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de las obras realizadas bajo el sistema de cooperación, a los Organismos, instituciones de Asistencia y personas físicas señaladas anteriormente.	*los conceptos señalados, otorgándose este beneficio sólo por un inmueble de su propiedad. En la misma forma el Presidente Municipal podrá otorgar subsidio para el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de las obras realizadas bajo el sistema de cooperación, a los Organismos, instituciones de Asistencia y personas físicas señaladas anteriormente.*

TERCERO.- Que la Iniciativa en comento plantea suprimir el vocablo de "indigentes" del párrafo tercero contenido en el Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California. Igualmente elimina tal concepto en el otorgamiento del 100% de los beneficios o exenciones de pago de las contribuciones de mejoras de obras de urbanización por sólo un inmueble de su propiedad, especificando que con relación a las personas mayores de sesenta años, se establece como excepción que "no sean pensionados ni jubilados".

Incorporando el texto "demás personas" mayores de sesenta años, como sujetos de los beneficios o exenciones de pago, de las contribuciones de las mejoras de obras de urbanización en el Estado de Baja California.

CUARTO.- Que las exenciones que se determinan en el Título Noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, preceptúa que se otorgarán a los grupos vulnerables establecidos en el contenido del Artículo 172 de la Ley de Hacienda en

comento. Por lo tanto, es importante resaltar que cuando una persona encuadre en dichos supuestos, podrá ser acreedora de la exención correspondiente.

Al respecto, no pasa desapercibido que el mismo Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, hace la remisión a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, para señalar los requisitos establecidos en el Título Noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.

QUINTO.- Que la exención fiscal es un beneficio ante el pago de tributos que recoge en un sentido amplio alguna actividad o alguna persona que no soporta realmente la carga económica que por aplicación estricta de las normas impositivas puede corresponderles. Estos son supuestos en los que a pesar de realizarse el hecho imposible que no tiene el carácter generador de la obligación tributaria.

SEXTO.- Que la Exención debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando se tiende a favorecer intereses de determinadas personas. Se otorga con base en consideraciones objetivas en que se reflejen intereses sociales o económicos en favor de una categoría de sujetos, esto es, los beneficiarios de la exención deben de ser contribuyentes que por su actividad o alguna situación específica se encuadren dentro de los supuestos legales que contemple la exención, y no una persona física o moral previamente determinada.

SÉPTIMO.- Que los preceptos contenidos en la Ley de Hacienda, determinan que los indigentes mayores de sesenta años, quedarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere dicho Título Noveno, en los términos y condiciones que en el mismo

se establecen. Y para efectos de esta Ley de Hacienda se consideran, entre otros a los Indigentes mayores de 60 años a las que comprueben su edad con acta de nacimiento, o bien que se identifiquen con credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; la viudez con el acta de defunción del cónyuge, y la indigencia, previo estudio socioeconómico con vigencia anual que realice el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

OCTAVO.- Que la palabra indigente es aquella que se usa para designar a una persona que se encuentra en una situación particular, de pobreza y miseria, es decir falta de medios para pasar la vida y cuyos recursos son insuficientes para vivir, por lo que es importante que sean las personas mayores de 60 años y no solamente los referidos como indigentes mayores de sesenta años los sujetos a las exenciones planteadas en la presente Iniciativa.

NOVENO.- Que las exenciones que se otorgan a los jubilados y pensionados, así como a las personas con discapacidad que realicen alguna actividad económicamente activa, está condicionada siempre a que sus ingresos no excedan de 5 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, no omitiendo señalar que conforme al contenido del Artículo 172 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, en su fracción I considera como Jubilados o Pensionados a aquellas personas que acreditan la calidad correspondientes a través de la documentación oficial expedida por las instituciones Públicas de Seguridad Social que la misma estructura precisa (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Instituto

Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de Ferrocarriles Nacionales de México; Otras instituciones de seguridad social que presten estos servicios en las diversas entidades federativas del país, o a diversas agrupaciones sindicales.).

DÉCIMO.- Que el Artículo 172 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, en su fracción II, define el concepto de Indigentes mayores de 60 años y personas viudas en situación de indigencia mayores de 50 años, como aquellas que comprueben su edad con acta de nacimiento, o bien que se identifiquen con credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; la viudez con el acta de defunción del cónyuge, y la indigencia, previo estudio socioeconómico con vigencia anual que realice el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. De ahí que los artículos 172, 174 y 179 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, señalan igualmente el concepto de indigentes mayores de 60 años.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la propuesta que hoy se considera como reforma, debe incorporar un límite de ingresos, es decir que las personas mayores de 60 años que realicen una actividad económica, sean sujetos de dicha exención, siempre y cuando sus ingresos no excedan del monto mencionado en el considerando noveno, para efecto de que se esté en posibilidad de otorgar la exención, en el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de obras.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que bajo esta conceptualización, la Comisión que suscribe considera procedente reformar el tercer párrafo del Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, para que sean las "personas" mayores de sesenta años y no los referidos como "Indigentes" mayores de sesenta años los sujetos a beneficios o exenciones del pago de las contribuciones de las mejoras de obras de urbanización.

DÉCIMO TERCERO.- Asimismo, esta Comisión determina apropiado modificar el párrafo tercero del Articulo 9 de la Iniciativa de reforma, atendiendo a la técnica jurídica y con el propósito de que su texto sea más claro y preciso, por lo que integra el contenido de dicho párrafo tercero en dos incisos, A) y B).

DÉCIMO CUARTO.- Que con el propósito de normar su criterio, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, opinión respecto de la Iniciativa en comento, y éste de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 105, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, emitió al respecto la misma que fue vertida en lo general en términos de procedencia mediante Opinión No. TIT/270/2019, de fecha 1 de marzo de 2019.

DÉCIMO QUINTO.- Que la Comisión que suscribe determina importante ajustar el beneficio previsto en el tercer párrafo de la Iniciativa de reforma, para que las personas mayores de sesenta años, que no sean pensionados ni jubilados y que sus ingresos no excedan de dos veces el salario diario mínimo general, y no de cinco como se pretendía, considerando la actualización del salario mínimo general vigente

para la franja norte. Lo anterior a efecto de que reciban el cien por ciento en el beneficio de pago de contribuciones de mejoras de obras de urbanización, otorgándose dicha exención sólo por un inmueble de su propiedad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 65 fracción III numeral 3, 110, 111, 112, 116, 118, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California vigente, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el siguiente:

RESOLUTIVO:

ÚNICO.- Se aprueba la reforma al Artículo 9 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, a fin de que los adultos mayores queden exentos del pago de contribuciones de mejoras de obras de urbanización, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9.- Tratándose de…

El Ejecutivo del Estado…

Tratándose de pensionados, jubilados, y demás personas mayores de sesenta años; discapacitados que acrediten tal calidad; padre o madre jefe de familia, así como personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad y reúnan los requisitos establecidos en el Título noveno de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, quedarán exentos como sigue:

A).- Los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, padre o madre jefe de familia y personas que acrediten tener a su cargo y sostenimiento económico a un familiar en primer grado con discapacidad, que realicen alguna actividad económicamente productiva y que obtengan ingresos diarios de hasta cinco veces el salario mínimo general, en el cincuenta por ciento de la contribución de mejoras determinada a su cargo; y,

B).- Las personas mayores de sesenta años, que no sean pensionados ni jubilados y que sus ingresos no excedan de dos veces el salario diario mínimo general o discapacitados que no desempeñen actividad productiva, el cien por ciento en los conceptos señalados, otorgándose este beneficio sólo por un inmueble de su propiedad.

En la misma forma el Presidente Municipal podrá otorgar subsidio para el pago de las contribuciones de mejoras por concepto de las obras realizadas bajo el sistema de cooperación, a los Organismos, instituciones de Asistencia y personas físicas señaladas anteriormente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las autoridades respectivas darán cumplimiento de la presente reforma en base a los requisitos señalados por el artículo 172, fracción II, en correlación con el artículo 174 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, con el hecho de

comprobar la edad de la persona con el acta de nacimiento, o bien que se identifique con credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del Honorable Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
PRESIDENTA
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
SECRETARIA
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL
DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO
VOCAL
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
VOCAL
DIP. MIGUEL ANGEL BUJANDA RUIZ
VOCAL
DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ
VOCAL
DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NUÑEZ
VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, en consecuencia se declara abierto el debate del Dictamen número 7 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se

pregunta y a las y los Diputados si alguien desea intervenir en contra del mismo, no siendo así, Diputada Escrutadora favor de poner a votación nominal el Dictamen número 7 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen número 7 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor, con reserva.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, y solo para precisión, este tipo de iniciativas precisamente promueven los valores fundamentales que los gobiernos de MORENA impulsan hacia adelante, se tiene que atender primero los más necesitados, a los que más necesitan ser apoyados por los órganos de gobierno y desgraciadamente aunque la disposición ya existían, no estaba haciendo bien implementada por las autoridades que se van, estaba en ley, pero era letra muerta, esta reforma facilita el acceso precisamente a estas personas de sectores vulnerables para que tengan acceso a los beneficios que el gobierno tiene la obligación de prestarles; yo por cierto Diputado Catalino por ser una iniciativa de Usted, en su momento no dudo que haya sido muy complicado en la Legislatura pasada sacarla adelante, pero los tiempos cambiaron, Molina García a favor.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: No nada más es MORENA Diputado, estamos todos en favor de los más vulnerables, no nada más es MORENA eh!.

- EL C. PRESIDENTE: A ver Diputados, no hay ninguna alusión al respecto, pueden hacer uso de la voz si así lo desean en el orden correspondiente, les pido guardar orden por favor. Adelante con la votación.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor, e igualmente reconozco el esfuerzo del compañero Diputado Catalino Zavala ser inicialista de esta iniciativa.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?,

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Muy bien, otro Diputado o no? Bien, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 7			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X/R		
Dip. Ruvalcaba Flores David	X		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel			
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		

Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo			
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto			
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	22		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se informa Diputado Presidente que se aprueba del Dictamen con 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora. Otorgo el uso de la voz al Diputado Gerardo López para presentar su reserva.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Gracias Presidente y disculpe ahí la interrupción. Básicamente la reserva que se maneja se plantea al contenido de este Dictamen de la Comisión de Hacienda, con el objeto de armonizar el texto en el artículo que se reforma, cambiando el término discapacitado, que en el inciso B de dicho numeral, por el correcto, que es persona con discapacidad, en el cual ya se cuenta presente en el inciso A del mismo artículo y debería de quedar en el siguiente sentido:

Inciso B, las personas mayores de 60 años que no sean pensionados, ni jubilados, que sus ingresos no excedan de dos meses el salario mínimo diario, o personas con discapacidad que no desempeñen actividad productiva, el 100% de los conceptos señalados otorgándose este beneficio, solo por un inmueble de su propiedad.

Básicamente es el cambio, armonizar las palabras, gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Diputado me hace llegar su reserva por favor.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Claro que sí.

- LA C. SECRETARIA: Presidente, hacemos cuenta de la presencia del Diputado Fausto Gallardo.

- EL C. PRESIDENTE: Se abre el debate de la reserva presentada por el Diputado, en los términos mencionados; si hay algún Diputado que quiera intervenir en contra de esa reserva; no siendo así, favor Diputada Escrutadora de poner en lo particular la votación de la reserva hecha por el Diputado.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se pone a consideración de la asamblea en votación nominal la dispensa presentada, la reserva perdón, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor y es correcta la apreciación del Diputado Gerardo.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor y es correcta la apreciación.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
RESERVA EN LO PARTICULAR			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David	X		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel			
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		

Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo			
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea			
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	22		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente con 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba es el resultado.

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia se aprueba la reserva presentada por el Diputado Gerardo López en los términos para agregar la palabra que mencionó en su exposición. Continuamos con el orden de Dictámenes, continúa el Dictamen número 12 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de la Diputada María Luisa Villalobos Ávila.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Buenos días, Comisión de Hacienda y Presupuesto Dictamen número 12, Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa de Reforma al Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso.

Resolutivo:

ÚNICO.- No se aprueba la Reforma al Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

DADO.- Sala Estado 29, del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Es cuanto señor Diputado.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 12 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA)

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DICTAMEN No. 12

HONORABLE ASAMBLEA

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa de Reforma al Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso.

Una vez realizado el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente en todos y cada uno de los términos de la Iniciativa de Reforma al Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, la Comisión que suscribe, en cumplimiento a los Artículos 39, 55, 56 Fracción II, 65 Fracción III, numeral 3 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procede al estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa precitada, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES:

Mediante oficio no. SGG/SSJE/DJCN/114/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, el C. Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado, con fundamento en los Artículos 28 y 49, ambos en su Fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como Artículo 19 Fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa de Reforma al Artículo 19 de la

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Lo anterior, de la forma siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, publicada el 22 de octubre de 2010, se creó con la finalidad de contar con un instrumento acorde a las disposiciones constitucionales federales, así como un orden que replique y desarrolle la aplicación de las directrices que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Dentro de las aportaciones significativas que en su momento presentó dicho instrumento se encuentra que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público queda sujeta a las directrices, lineamientos y políticas que establezcan los planes estatal y municipal de desarrollo; que el esquema presupuestal estará sujeto a un Programa basado en Resultados (PbR), la obligatoriedad de contar con indicadores de gestión, así como el establecimiento de bases jurídicas sólidas que contribuyen a la construcción de un sistema nacional de fiscalización armónico sin menoscabo de la soberanía de la entidad.

Sin duda, el ordenamiento en comento ha sido fundamental para regular de manera puntual los procesos para integrar los presupuestos de ingresos y egresos, así como para normar el ejercicio, evaluación, vigilancia y verificación del gasto público; no obstante actualmente dicho dispositivo conserva disposiciones que inhiben la obtención de mayores rendimientos económicos, lo cual no resulta acorde con la

realidad financiera de la entidad, donde los ingresos por fuentes estatales no son suficientes, y es notoria la alta dependencia a los recursos federales, derivado de las potestades tributarias limitadas.

Ejemplo de lo anterior es el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, el cual señala que todas las entradas de efectivo de los sujetos a la referida Ley deberán depositarse en cuentas bancarias procurando obtener mejores rendimientos financieros, pudiendo invertirse los excedentes temporales de efectivo en instrumentos de inversión de renta fija o valores gubernamentales del Sistema Financiero Mexicano.

Dicha limitante, si bien podría resultar acertada para resguardar los ingresos que por el ejercicio de sus actividades públicas obtienen los entes gubernamentales, no resulta congruente con la realidad que presentan los órganos autónomos, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, cuyo patrimonio conforme a lo dispuesto en el artículo 30 fracciones IV, V y VI, de su Ley Orgánica, ésta formado entre otros bienes, por las donaciones y los legados que reciba, los derechos y las cuotas que recaude por sus servicios y las utilidades, los intereses, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles.

De lo antes señalado se observa que parte del patrimonio de la citada institución educativa corresponde a las utilidades e intereses que percibe, mismos que dependen de los montos y cuentas de inversión a las que se encuentren aparejados, por lo que en el supuesto de que fuese viable realizar inversiones diversas a la renta

fija, podrían incrementarse considerablemente, dadas las condiciones de inversión actuales.

Aunado a lo anterior, la hipótesis prevista en el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, se contrapone con el espíritu del artículo 3º, fracción VII de la Constitución Federal, el cual dispone que las universidades autónomas por ley, administrarán su patrimonio, lo que implica que es única y exclusivamente la Universidad la que debe decidir el destino de sus recursos propios, en tanto que sirvan al cumplimiento de sus fines y sin demérito de la debida comprobación de su correcta aplicación ante las instancias correspondientes.

Atendiendo a la situación anterior, la Universidad Autónoma de Baja California, ha solicitado al Ejecutivo a mi cargo impulsar la modificación del artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, a efecto de prever la posibilidad para que los órganos autónomos , inviertan los excedentes temporales provenientes de ingresos propios, en instrumentos de inversión diversos a los de renta fija, siempre que se procuren mayores rendimientos, bajo mecanismos que aseguren el menor riesgo posible.

Cabe aclarar, que con el objeto de contar con los instrumentos que permitan fiscalizar dichas operaciones, a su vez se propone incorporar la obligación de que se informe por parte de los órganos autónomos que utilicen instituciones administradoras de inversión, a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, dentro de los primeros quince días posteriores al corte del mes, el reporte correspondiente de saldos y movimientos sobre la posición financiera de las

inversiones; así como de manera semestral, las aperturas y cancelación de cuentas bancarias que corresponda al periodo inmediato anterior, dentro de los primeros quince días posteriores al corte respectivo.

Se estima que la medida legislativa planteada contribuye de manera favorable ha fortalecer las estrategias para la mejora de la educación superior, ya que permitirá a la Universidad Autónoma de Baja California contar con mayores recursos a efecto de que continúe brindando un servicio educativo de calidad, formando profesionistas competentes, comprometidos con su quehacer y socialmente responsables, mediante un modelo educativo basado en el aprendizaje y comprometido con las responsabilidades que la sociedad les ha asignado.

Bajo este contexto y con la finalidad de que la Universidad Autónoma de Baja California continúe brindando con oportunidad, pertinencia y mejore con ello los estándares de calidad, y con ello incremente el desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana se estima pertinente presentar la presente reforma, pues permitirá no sólo a la máxima casa de estudios en Baja California, sino a cualquier órgano autónomo acceder a instrumentos diversos de inversión de renta fija o valores gubernamentales del Sistema Financiero Mexicano, que mejoren mayores rendimientos financieros en beneficio para la población y para la referida institución.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales señalados, me permito poner a consideración de este Congreso del Estado, la siguiente:

INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRIMERO.- Se reforma el (sic) 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 19.- …

Los órganos autónomos, podrán invertir los excedentes temporales provenientes de ingresos propios, en instrumentos de inversión diversos a los mencionados en el párrafo primero, siempre que se procuren mayores rendimientos que los de inversión de renta fija o valores gubernamentales del Sistema Financiero Mexicano, bajo mecanismos que aseguren el menor riesgo posible.

Para el caso de los órganos autónomos que utilicen instituciones administradoras de inversión, bastará que se remitan a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, dentro de los primeros quince días posteriores al corte del mes, el reporte correspondiente de saldos y movimientos que informen sobre la posición financiera de las inversiones; así como de manera semestral, las aperturas y cancelación de cuentas bancarias que corresponda al periodo inmediato anterior, dentro de los primeros quince días posteriores al corte respectivo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Las (sic) presente reforma entrarán (sic) en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.”

Una vez analizada en todos y cada uno de sus términos la presente Iniciativa por esta Comisión y en cumplimiento de los Artículos 65 Fracción III, numeral 4, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 122 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se procede a sustentar el Dictamen en cuestión con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que la Iniciativa en comento tiene por objeto reformar el Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, para otorgar a los órganos autónomos la posibilidad de que inviertan los excedentes temporales provenientes de ingresos propios, en instrumentos de inversión diversos a los de renta fija, siempre que se procuren mayores rendimientos, bajo mecanismos que aseguren el menor riesgo posible.

SEGUNDO.- Que por ingresos propios del Estado se entiende a la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del Sector Público, exceptuando las transferencias y los ingresos por financiamiento interno y externo.

TERCERO.- Que en este tenor, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala en el Artículo 1, párrafo segundo, que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en dicha Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; y que adicionalmente,

deberán cumplir, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de la Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable. Precisando al respecto que el Titulo Segundo de la Ley de Disciplina Financiera, se denomina "Reglas de Disciplina Financiera" y el Capítulo I "Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas", el cual está conformado con los artículos 5 al 17.

CUARTO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios define en el Artículo 2 fracción IX a los Entes Públicos, siendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

QUINTO.- Que asimismo, el Artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala en la fracción XIX, como ingresos de libre disposición a los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico y en la fracción XX, a los ingresos excedentes como los

recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos.

SEXTO.- Que aunado a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aplicable a todos los entes públicos, establece en el Artículo 14, los conceptos a los cuales deberán ser destinados los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición.

SÉPTIMO.- Que de lo manifestado en los considerandos anteriores, queda de manifiesto que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, prevé reglas precisas respecto del destino que deberá otorgarse a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, dentro de los cuales destaca la creación de un fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. Los ingresos depositados en dicho Fondo pudieran ser sujetos de instrumentos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano, siempre y cuando se cumpla con los principios que la propia Ley de Disciplina Financiera establece.

OCTAVO.- Que dentro de dichos principios se destaca la racionalidad en materia de recursos públicos, que implica establecer un criterio basado en la razón y la congruencia en el uso y disposición de los recursos públicos y en la búsqueda de ahorro en la operación de los Entes Públicos, lo cual conlleva que la elección de determinada opción para su ejercicio, sea la más adecuada para el cumplimiento de sus objetivos.

NOVENO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, además establece en el Artículo 3 que, a falta de disposición expresa en la Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal; y se estará a la interpretación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para efectos administrativos.

DÉCIMO.- Que en este tenor, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define en el Artículo 2 fracción XXX a los ingresos excedentes como los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o, en su caso, respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto y en la fracción XXXI a los ingresos propios como los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.

DÉCIMO PRIMERO.- Que asimismo, en el Artículo 19 prevé el destino que deberá otorgarse a los ingresos excedentes, en forma semejante a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, anteriormente comentado.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en el ámbito local, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto normar y regular los presupuestos de ingresos y egresos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, los Municipios del Estado y los Órganos Autónomos. Dicha Ley señala en el Artículo 19 que "Todas las entradas de efectivo

de los sujetos de la presente Ley deberán depositarse en cuentas bancarias procurando obtener los mejores rendimientos financieros, pudiendo invertirse los excedentes temporales de efectivo en instrumentos de inversión de renta fija o valores gubernamentales del Sistema Financiero Mexicano."

DÉCIMO TERCERO.- Que asimismo, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California establece en el Artículo 20, que se considerarán como ingresos propios los previstos en el primer párrafo del Artículo 11 de la Ley, el cual a la letra indica: "Los Presupuestos de Ingresos de los sujetos de la presente Ley deberán incluir, en su caso, las expectativas de recaudación de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos, deuda pública autorizada, recepción de subsidios, participaciones y de los demás ingresos provenientes del cumplimiento de su objeto legal."

DÉCIMO CUARTO.- Que la iniciativa de reforma en comento, pretende otorgar a los Órganos Autónomos la posibilidad de que los excedentes temporales provenientes de ingresos propios, es decir los ingresos que obtienen de las actividades que realizan en cumplimiento de su objeto legal, que no proceden de subsidios o transferencias del Estado, se inviertan en instrumentos de inversión diversos a los de renta fija como actualmente lo tiene limitado la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, siempre y cuando se procuren mayores rendimientos, bajo mecanismos que aseguren el menor riesgo posible.

DÉCIMO QUINTO.- Que en este tenor, se comenta que la propuesta legislativa se fundamenta y motiva por parte de su inicialista en que la limitante precitada "si bien

podría resultar acertada para resguardar los ingresos que por el ejercicio de sus actividades públicas obtienen los entes gubernamentales, no resulta congruente con la realidad que presentan los órganos autónomos, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, cuyo patrimonio conforme a lo dispuesto en el artículo 30 fracciones IV, V y VI, de su Ley Orgánica, esta formado entre otros bienes, por las donaciones y los legados que reciba, los derechos y las cuotas que recaude por sus servicios y las utilidades, los intereses, dividendos, rentas y las cuotas que recaude por sus servicios, y las utilidades, los intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles." Asimismo, precisa que "la Universidad Autónoma de Baja California, ha solicitado al Ejecutivo a mi cargo impulsar la modificación del artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, …" "Bajo este contexto y con la finalidad de que la Universidad Autónoma de Baja California continúe brindando con oportunidad, pertinencia y mejore con ello los estándares de calidad, y con ello incremente el desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana se estima pertinente presentar la presente reforma, pues permitirá no sólo a la máxima casa de estudios en Baja California, sino a cualquier órgano autónomo acceder a instrumentos diversos de inversión de renta fija o valores gubernamentales del Sistema Financiero Mexicano, que mejoren mayores rendimientos financieros en beneficio para la población y para la referida institución."

DÉCIMO SEXTO.- Que queda de manifiesto que la iniciativa de reforma motiva su pretensión en una petición formulada por la citada Institución Educativa y, por ende,

va enfocada en otorgar a la Universidad Autónoma de Baja California la posibilidad de realizar inversiones diversas a la renta fija, señalándole el carácter de órgano autónomo.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que al respecto, se comenta que la propia Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público en el Artículo 3 fracción XV, define a los Órganos Autónomos de la siguiente forma: "Los organismos públicos autónomos creados con ese carácter, dotados de autonomía técnica y de gestión por mandato constitucional o legal para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones", por ende, es a este tipo de entidades públicas a quienes estaría dirigida la reforma estudio.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 28 de febrero de 1957, en el Artículo 1, señala que se crea la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, como una institución de servicio público, descentralizada de la administración del estado, con plena capacidad jurídica.

DÉCIMO NOVENO.- Que asimismo, el Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California establece en el Artículo 1, que la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, es una institución de servicio público, descentralizada de la administración del estado, dotada de plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios.

VIGÉSIMO.- Que de lo anterior, se deduce que la Institución Educativa no es un órgano autónomo, toda vez que no fue creada con ese carácter por el legislador, quien ha establecido en forma expresa que es una institución descentralizada de la Administración del Estado, por lo tanto, la pretensión legislativa no resulta aplicable a la misma.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en este tenor, esta Comisión determina como no procedente la iniciativa de reforma, toda vez que la exposición de motivos en la cual se fundamenta y motiva, resulta contraria al objetivo que se persigue con la misma. Ello, en razón de que se pretende otorgar a la Universidad Autónoma de Baja California la calidad de órgano autónomo para que pueda invertir sus ingresos propios excedentes en inversiones de renta fija o variable, lo cual es contrario a lo establecido por el legislador en el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, al señalar que es una institución descentralizada de la administración del estado y no así un órgano autónomo.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que asimismo, esta Comisión considera que la iniciativa de reforma incumple con el principio de racionalidad en la administración de los recursos públicos que contempla el Artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aunado a que el destino que debe aplicarse a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición se encuentra previamente establecido en el Artículo 14 de dicha Ley, siendo uno de ellos, la creación de un fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes, sobre el cual si bien es cierto podría aplicarse

instrumentos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano, también lo es que, debe efectuarse un manejo racional de los dichos recursos, evitando cualquier perdida posible, en virtud de que son ingresos de los Entes que tienen un fin de carácter público.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que con el propósito de normar su criterio, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, su opinión respecto de la Iniciativa en comento, y este, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 105, Fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, emitió su opinión al respecto, misma que fue vertida mediante Oficio TIT/653/2018, de fecha 31 de julio de 2018.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 65 fracción III numeral 3, 110, 111, 112, 116, 118, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California vigente, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el siguiente:

RESOLUTIVO:

ÚNICO.- No se aprueba la Reforma al Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

DADO.- Sala Estado 29, del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
PRESIDENTE
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL
DIP. JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO
VOCAL
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
VOCAL
DIP. MIGUEL ANGEL BUJANDA RUIZ
VOCAL
DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ
VOCAL
DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ
VOCAL
(CONCLUYE DICTAMEN)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Villalobos, en consecuencia se declara abierto el debate del Dictamen número 12 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se pregunta y a las Diputadas y Diputados si hay alguien que desee intervenir en contra, no siendo así, Diputada Escrutadora favor de poner a votación nominal el Dictamen número 12 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen número 12 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, en contra.

- Quintero Quintero Loreto, en contra.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, en abstención.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 12			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel			
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María		X	
Dip. Quintero Quintero Loreto		X	
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel			X
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		

Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo			
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea			
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	18		
Total de votos en Contra		2	
Total de Abstenciones			1

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente el resultado de la votación es el siguiente: 18 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, en consecuencia se aprueba el Dictamen número 12 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esta Presidencia pregunta al Diputado que se abstuvo si desea hacer alguna aclaración al respecto; no siendo así, continuamos con los Dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Dictamen número 18 de esta comisión a cargo de la Diputada Eva Gricelda Rodríguez.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Dictamen número 18, Honorable Asamblea: Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, los oficios número PRES-064/2019, PRES-067/2019 y PRES-068/2019, recibidos en el H. Congreso del Estado el día 30 de julio del 2019, firmados por el C. Lic. Alberto Loaiza Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, a través de los cuales envía solicitud de autorización de modificación presupuestal para efectuar transferencia de recursos a su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2019, por los importes de $48,700, $49,750 y $99,500, respectivamente, sumando un monto total de $197,950 (SON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

Resolutivo:

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de recursos por $121,300 (CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal de 2019, afectándose las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente		$ 92,700
12201	Sueldo Tabular Personal Eventual	$ 121,300	
15401	Canasta Básica		5,000
15403	Previsión Social Múltiple		23,600
SUMA		**$ 121,300**	**$ 121,300**

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes", del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ)

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DICTAMEN No. 18

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, los oficios número PRES-064/2019, PRES-067/2019 y PRES-068/2019, recibidos en el H. Congreso del Estado el día 30 de julio del 2019, firmados por el C. Lic. Alberto Loaiza Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, a través de los cuales envía solicitud de autorización de modificación presupuestal para efectuar transferencia de recursos a su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2019, por los importes de $48,700, $49,750 y $99,500, respectivamente, sumando un monto total de $197,950 (SON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2019, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión

Ordinaria celebrada en fecha 27 de diciembre del año 2018, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 del mismo mes y año.

SEGUNDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2019 se incluye el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con un monto de $46’000,000.

TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio 2019, fue autorizado por el H. Congreso del Estado el día 27 de diciembre de 2018, a través del Dictamen 203 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, publicándose sus Resolutivos en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2018, a través del cual se aprueba un Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2019 hasta por la cantidad de $46’000,000, y se encomienda a la Presidenta del Tribunal en mención a que formule su presupuesto de egresos en los términos de la Ley de la materia y a techo financiero en comento, además de que se publique a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

CUARTO.- Que dando seguimiento a lo señalado en el Considerando anterior, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el día 04 de enero del 2019, su Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal del 2019, a nivel de partidas presupuestales por $46’000,000.

QUINTO.- Que la Auditoría Superior del Estado de Baja California solicitó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, información complementaria

mediante oficio DEL/784/2019, de fecha 26 de agosto del 2019, recibiéndose respuesta el día 06 de septiembre del mismo año, mediante oficio número PRES-082/2019, la cual sirve de apoyo para la emisión del presente Dictamen.

SEXTO.- Que en los oficios de solicitud de autorización del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California anteriormente referidos, se establece en parte lo que se transcribe a continuación:

OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE
PRES-064/2019	Solicitud de autorización para efectuar transferencia entre partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con el fin de ampliar la partida presupuestal 12201 Sueldo Tabular Personal Eventual, para estar en posibilidad de contratar en forma temporal dos plazas de personal **(Actuario y Secretario Mecanógrafo)**, para reforzar el área jurisdiccional para Pleno (Secretaría General de Acuerdos), a fin de que apoyen a abatir el rezago en notificaciones de segunda instancia.	$ 48,700
PRES-067/2019	Solicitud de autorización para efectuar transferencia entre partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con el fin de ampliar la partida presupuestal 12201 Sueldo Tabular Personal Eventual, para estar en posibilidad de contratar en forma temporal **un auxiliar administrativo** de apoyo al área jurisdiccional para Pleno.	49,750
PRES-068/2019	Solicitud de autorización para efectuar transferencia entre partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con el fin de ampliar la partida presupuestal 12201 Sueldo Tabular Personal Eventual, para estar en posibilidad de contratar en forma temporal **dos auxiliares administrativos** de apoyo al área jurisdiccional para la Segunda Sala y Sala Auxiliar, a fin de que apoyen a abatir el rezago en notificaciones de primera instancia.	99,500
TOTAL		$ 197,950

SÉPTIMO.- Que en los oficios de solicitud referidos en el Considerando que antecede, se señala que con la ampliación de la partida presupuestal 12201 Sueldo Tabular Personal Eventual, no se afectan las metas del Programa de este Tribunal.

OCTAVO.- Que las solicitudes de autorización descritas en el Considerando Sexto fueron autorizadas por unanimidad de votos en Sesión de Pleno de fecha 11 de julio de 2019, según se hace constar en CERTIFICACIONES emitidas por la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, de fecha 12 de julio del mismo año.

NOVENO.- Que con las solicitudes de modificación presupuestal citadas por un total de $197,950, se transferirán recursos de las partidas presupuestales que se indican a continuación:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente		$ 149,250
12201	Sueldo Tabular Personal Eventual	$ 197,950	
13401	Compensaciones		5,050
14102	Aportaciones Patronales de Fondo de Pensiones		9,650
15401	Canasta Básica		8,000
15403	Previsión Social Múltiple		26,000
SUMA		**$ 197,950**	**$ 197,950**

DÉCIMO.- Que la intención de las solicitudes en comento, es la de contratar 5 plazas de personal de carácter eventual durante un periodo de 142 días, abarcando este a partir del día 12 de Agosto y hasta el 31 de diciembre de 2019, sin embargo y dado que el tiempo transcurrió, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, a través de su oficio de solicitud de información DEL/784/2019, mencionado con antelación, solicitó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, ajuste el periodo de contratación de las plazas a la probable fecha de autorización por parte del Congreso del Estado; en respuesta a lo anterior, el Tribunal manifestó a través de su oficio PRES/082/2019, que el nuevo periodo de contratación será por 88 días, considerando el mismo a partir del día 05 de octubre al 31 de diciembre de 2019, ajustándose la afectación y monto de partidas presupuestales como se presenta a continuación:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente		$ 92,700
12201	Sueldo Tabular Personal Eventual	$ 121,300	
15401	Canasta Básica		5,000

15403	Previsión Social Múltiple		23,600
SUMA		**$ 121,300**	**$ 121,300**

DÉCIMO PRIMERO.- Que lo establecido en el Considerando Décimo se aprobó por unanimidad de votos en Sesión de Pleno del Tribunal celebrada el día 4 de septiembre de 2019, según se hace constar en Certificación del Acuerdo emitido por la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal de fecha 06 de septiembre del mismo año.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que se ampliará la partida presupuestal 12201 Sueldo Tabular Personal Eventual por $121,300, a fin de estar en posibilidad de contratar 5 plazas de personal eventual, durante un periodo de 88 días, abarcando este a partir del 05 de Octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, a fin de apoyar a abatir el rezago generado en las áreas de Pleno, Segunda Sala y Sala Auxiliar del Tribunal, el cual resulta urgente atender dado la insuficiencia de personal con que se cuenta en dichas áreas y con el propósito de no perjudicar la impartición de justicia por parte de este Órgano Jurisdiccional, de acuerdo a las justificaciones siguientes:

PUESTO EVENTUAL	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
Actuario	Pleno	Se requieren dichas plazas a fin de abatir el rezago generado en el área de la Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Tribunal, integrada a su vez por la Actuaría y el área de Transparencia. El incremento en la recepción de recursos de revisión así como el incremento de las obligaciones generadas en el área de Transparencia, derivó en la necesidad de implementar
Secretario Mecanógrafo	Pleno	

		medidas urgentes a fin de reforzar esta área ante el alto incremento de sus obligaciones. Lo anterior con el propósito de no perjudicar la impartición de Justicia por parte de este Órgano Jurisdiccional.
Auxiliar Administrativo	Pleno	Se requiere dicha plaza a fin de abatir el rezago generado en el área de la Secretaría General de Acuerdos del Pleno, integrada en parte por la Actuaría del Tribunal. El incremento en la recepción de recursos de revisión, derivó en la necesidad de implementar medidas urgentes a fin de reforzar esta área ante el alto incremento de sus obligaciones. Por lo que dicha plaza se requeriría en la Actuaría del Pleno a fin de auxiliar con el trabajo generado de las notificaciones en auxilio de los expedientes de Segunda Instancia que se requieren notificar en la ciudad de Tijuana, B. C., a fin de no perjudicar la impartición de justicia por parte de este Órgano Jurisdiccional.
Auxiliar Administrativo	Segunda Sala	Se requiere la contratación de dichas plazas a fin de abatir el rezago generado en la Segunda Sala y Sala Auxiliar del Tribunal, a fin de abatir el rezago en notificaciones, generado como consecuencia del incremento en el número de demandas recibidas, a fin de apoyar en el trámite e integración de los expedientes y la integración de documentación para realizar las notificaciones respectivas, con el propósito de no perjudicar la impartición de justicia por parte de este Órgano Jurisdiccional.
Auxiliar Administrativo	Sala Auxiliar	

SEGUNDO.- Que el Tribunal remitió la base de cálculo mediante la cual se determinó el importe requerido para la partida en comento, misma que fue verificada por la Auditoría Superior del Estado, sin encontrar ninguna diferencia relevante.

TERCERO.- Que en relación a las 5 plazas que se requiere contratar, se está solicitando el recurso para cubrir su Sueldo Tabular solamente, debido a que los recursos necesarios para cubrir las demás prestaciones a que tienen derecho como son la compensación en el caso del Actuario y Secretario Mecanógrafo, Prima Vacacional y Gratificación de Fin de Año, se cuenta con disponibilidad presupuestal.

CUARTO.- Que dentro de la partida presupuestal 12201 "Sueldo Tabular Personal Eventual" se incluye la parte proporcional de las vacaciones a que tienen derecho.

QUINTO.- Que para efecto de cubrir la ampliación antes señalada, como fuente de recursos se reducirán las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	REDUCCIÓN
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	$ 92,700
15401	Canasta Básica	5,000
15403	Previsión Social Múltiple	23,600
SUMA		**$ 121,300**

Lo anterior, toda vez que después de un análisis realizado, se observaron ahorros derivados de la aplicación de descuentos al personal, por permisos sin goce de sueldo, inasistencias y retardos generados a la fecha de las solicitudes que nos ocupan.

SÉXTO.- Que es obligación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California por conducto de su Titular, solicitar al Congreso del Estado la autorización correspondiente para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la

modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50, Fracción V de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el primer párrafo del Apartado A del Artículo 22, de la Constitución Política del Estado de Baja California, es facultad del Congreso del Estado, en los tres períodos ordinarios de sesiones, estudiar y votar los dictámenes de las modificaciones presupuestales, que sean presentados a su consideración.

OCTAVO.- Que con fundamento en el Artículo 65, Fracción II, punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto cuenta con facultades para llevar a cabo el estudio y dictamen de la transferencia, ampliación, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos de las Entidades, que deban ser aprobados por el Congreso del Estado.

NOVENO.- Que tomando en cuenta que dentro de su Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, en las partidas presupuestales a reducir, se cuenta con disponibilidad suficiente para cubrir el incremento a la partida solicitada, esta Comisión considera viable aprobar la presente solicitud de transferencia presupuestal, ampliando la partida presupuestal 12201, disminuyéndose las partidas presupuestales 11301, 15401, y 15403.

DÉCIMO.- Que a fin de normar su criterio la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoria Superior del Estado, su opinión al respecto la que fue vertida en términos viables mediante oficio DEL/836/2019.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto

RESOLUTIVO:

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de recursos por $121,300 (CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal de 2019, afectándose las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente		$ 92,700
12201	Sueldo Tabular Personal Eventual	$ 121,300	
15401	Canasta Básica		5,000
15403	Previsión Social Múltiple		23,600
SUMA		**$ 121,300**	**$ 121,300**

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes", del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
PRESIDENTE
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
SECRETARIA
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO

VOCAL

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA

VOCAL

DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ

VOCAL

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ

VOCAL

DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ

VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se abre el debate del Dictamen número 18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se pregunta si alguien que desee intervenir en contra, no siendo así, Diputada Escrutadora favor de poner en votación nominal el Dictamen número 18.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo con sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen número 18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 18			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel			
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea			

Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	22		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, en consecuencia se aprueba el Dictamen número 18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y continúa en la misma Comisión con el Dictamen número 19 a cargo de la Diputada Presidenta de la misma Rosina del Villar.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Gracias señor Presidente. Dictamen número 19, Honorable Asamblea: Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el oficio PRES-065/2019, recibido en el H. Congreso del Estado el día 30 de julio del 2019, por medio del cual el C. Lic. Alberto Loaiza Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, solicita autorización para realizar ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja

California para el ejercicio fiscal 2019, por $ 1,022,800 (UN MILLON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), afectándose diversas partidas presupuestales.

Resolutivo:

ÚNICO.- No se aprueba la ampliación de recursos por $776,400 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), es el monto que resulta después de actualizar la información a la fecha.

Al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal de 2019, mediante la cual se pretendían afectar diversas partidas del capítulo de gastos Servicios Personales con el propósito de contratar de manera temporal 12 plazas de personal en apoyo al área jurisdiccional, toda vez que se incumple con lo previsto en el artículo 13 fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes", del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Es cuanto señor Presidente.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ROSINA DEL VILLAR CASAS)

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DICTAMEN No. 19

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el oficio PRES-065/2019, recibido en el H. Congreso del Estado el día 30 de julio del 2019, por medio del cual el C. Lic. Alberto Loaiza Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, solicita autorización para realizar ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, por $ 1,022,800 (UN MILLON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), afectándose diversas partidas presupuestales.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2019, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 27 de diciembre del año 2018, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 del mismo mes y año.

SEGUNDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2019 se incluye el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con un monto de $46’000,000.

TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio 2019, fue autorizado por el H. Congreso del Estado el día 27 de diciembre de 2018, a través del Dictamen 203 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, publicándose sus Resolutivos en el Periódico

Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2018, a través del cual se aprueba un Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2019 hasta por la cantidad de $46’000,000, y se encomienda a la Presidenta del Tribunal en mención a que formule su presupuesto de egresos en los términos de la Ley de la materia y al techo financiero en comento, además de que se publique a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

CUARTO.- Que dando seguimiento a lo señalado en el Considerando anterior, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el día 04 de enero del 2019, su Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal del 2019, a nivel de partidas presupuestales por $46’000,000.

QUINTO.- Que en el oficio de solicitud de autorización del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, se establece en parte lo que se transcribe a continuación:

Por este conducto me permito solicitar a Usted autorización para efectuar ampliación de partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California por la cantidad de $ 1,022,800 M.N. (un millón veintidós mil ochocientos pesos con cero centavos moneda nacional) como se detalla en documento que se anexa al presente, mediante la utilización de remanentes generados en ejercicios anteriores. Lo anterior a fin de ampliar diversas partidas presupuestales del grupo 10000 Servicios Personales para estar en posibilidad de contratar en forma temporal el personal para reforzar las áreas de Pleno y Salas que a la fecha presentan rezago.

La ampliación de partidas presupuestales antes referida no afecta las metas del programa de este Tribunal.

SEXTO.- Que es de mencionar que con la presente solicitud de modificación presupuestal, inicialmente se proyectaban ampliar las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA		**AMPLIACIÓN**
12201	Sueldo tabular personal eventual	$ 488,438
13202	Prima Vacacional	32,437
13203	Gratificación de fin de año	117,987
13401	Compensaciones	288,306
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	95,632
	TOTAL	$ 1,022,800

SÉPTIMO.- Que la Auditoría Superior del Estado, solicitó información complementaria al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, mediante oficio DEL/7832019, de fecha 26 de agosto de 2019, recibiéndose respuesta en la misma, el día 10 de septiembre de 2019, a través de oficio PRES-088/2019.

OCTAVO.- Que considerando el tiempo transcurrido entre la solicitud de información y el tiempo establecido para que el H. Congreso del Estado resuelva lo procedente con respecto a la presente, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Baja California, realizó ajustes a su solicitud original, quedando en definitiva la proyección de contratación temporal de personal a partir del 5 de octubre para concluir el 31 de diciembre de 2019, afectándose las partidas presupuestales hasta por los importes siguientes;

PARTIDA		**AMPLIACIÓN**

12201	Sueldo tabular personal eventual	$ 370,600
13202	Prima Vacacional	24,630
13203	Gratificación de fin de año	89,550
13401	Compensaciones	218,720
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	72,900
	TOTAL	$ 776,400

NOVENO.- Que el ajuste anterior, fue aprobado por el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, según consta en Certificación emitida por la Lic. Claudia Carolina Gómez Torres, Secretaria General de Acuerdos, misma que se transcribe a continuación:

CERTIFICA

Que en sesión de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno integrado por los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Guillermo Moreno Sada, acordó lo siguiente:

"PRIMERO.- En cuanto al punto uno del orden del día, el Pleno aprueba, por unanimidad de votos, se ajuste la solicitud de ampliación de partidas con cargo a remanentes de ejercicios anteriores remitida al Congreso del Estado mediante oficio PRES-065/2019 por la cantidad de $ 1,022,800.00 M:N. (un millón veintidós mil ochocientos pesos con cero centavos moneda nacional), a la cantidad de $ 776,400.00 M.N. (setecientos setenta y seis mil cuatrocientos pesos con cero centavos moneda nacional)."

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Mexicali, Baja California, el seis de septiembre de dos mil diecinueve.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con la presente solicitud de autorización para ampliar diversas partidas presupuestales por $ 776,400, se contratarán en forma temporal 12 plazas de personal, en apoyo jurisdiccional y administrativo, por el período del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2019, por lo que se requieren incrementar las partidas presupuestales hasta por los importes siguientes:

PARTIDA		**AMPLIACIÓN**
12201	Sueldo tabular personal eventual	$ 370,600
13202	Prima Vacacional	24,630
13203	Gratificación de fin de año	89,550
13401	Compensaciones	218,720
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	72,900
	TOTAL	$ 776,400

SEGUNDO.- Que a las plazas de personal a contratar en forma temporal se les cubrirá por concepto de sueldo y compensación diaria, los importes siguientes:

NÚMERO DE PLAZAS	**CATEGORÍA**	**SUELDO DIARIO**	**COMPENSACIÓN DIARIA**	**SUELDO MÁS COMPENSACIÓN DIARIA**
	PLENO:			
1	Actuario	$ 303.27	$ 680.59	$ 983.86
6	Auxiliares Administrativos	323.58		323.58
	PRIMERA SALA:			
1	Secretario de Acuerdos	352.70	844.70	1,197.40
1	Secretario Mecanógrafo	342.99	90.75	433.74
	SEGUNDA SALA:			
1	Auxiliar Administrativo	323.58		323.58
	SALA AUXILIAR DE LA SEGUNDA SALA:			
1	Actuario	303.27	680.59	983.86
1	Auxiliar Administrativo	323.58		323.58

TERCERO.- Que el total de las prestaciones a cubrir a las 12 plazas de personal que se contratarán, por el período del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2019, son las siguientes:

PARTIDA A AFECTAR:		12201	13401	13203	13202		14101	
		SUELDO TABULAR	COMPENSACIÓN	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PRIMA VACACIONAL	TOTAL SUELDO	APORTACION ISSSTECALI	TOTALES
PLENO								
1	Actuario	$ 28,881	$ 64,815	$ 14,232	$ 3,914	$ 111,842	$ 6,075	$ 117,917
6	Auxiliares Administrativos	184,893		28,085	7,723	220,701	36,448	257,149
PRIMERA SALA								
1	Secretario de Acuerdos	33,589	80,443	17,321	4,763	136,116	6,075	142,191
1	Secretario Mecanógrafo	32,664	8,642	6,274	1,726	49,306	6,075	55,381
SEGUNDA SALA								
1	Auxiliar Administrativo	30,815		4,681	1,287	36,783	6,075	42,858
SALA AUXILIAR								
1	Actuario	28,881	64,815	14,232	3,914	111,842	6,074	117,916
1	Auxiliar Administrativo	30,816		4,681	1,287	36,784	6,074	42,858
12	**TOTALES**	**$ 370,539**	**$ 218,715**	**$ 89,506**	**$ 24,614**	**$ 703,374**	**$ 72,896**	**$ 776,270**

CUARTO.- Que las justificaciones presentadas por el Organismo solicitante, para la contratación temporal de las plazas de personal, son las siguientes:

PLENO:

Plaza de Actuario adscrito al Pleno, llevaría a cabo las funciones establecidas en el artículo 28 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

Esta plaza se requiere con el fin de abatir el rezago en notificaciones de segunda instancia que se generó en virtud del incremento que se ha presentado en los últimos años en el número de recursos de revisión y de queja interpuestos por las partes en los juicios que se ventilan ante este órgano jurisdiccional, ya que el Pleno cuenta con una plaza de Actuario.

Número de Recursos de Revisión recibidos:

2016	**443**
2017	**1287**
2018	**1823**
Junio 2019	**988**

A la fecha se encuentran aproximadamente 1200 notificaciones de segunda instancia pendientes de realizar.

Por otra parte de las plazas de seis Auxiliares Administrativos de apoyo al área jurisdiccional cuatro de ellos apoyarían a la Secretaría General de Acuerdos y a la Actuaría, en la preparación de las notificaciones, lo que incluye sacar copias de traslado de las resoluciones a notificar, en su caso elaborar la certificación de las resoluciones que lo requieran e integrar el expediente correspondiente a las resoluciones originales, elaborar los oficios y cédulas de notificación, sellar y foliar los expedientes.

Las otras dos plazas de auxiliares administrativos de apoyo al área jurisdiccional se adscribirían a la Unidad de Transparencia a fin de abatir el rezago en la elaboración y publicación de las versiones públicas de las sentencias tanto de la primera como de segunda instancia, lo que incluye tildar los datos personales establecidos en la legislación aplicable de los actores en juicio que se ventilan ante este Tribunal, publicar dichas versiones públicas en el portal de este órgano Jurisdiccional.

PRIMERA SALA:

En cuanto a la plaza de Secretario de Acuerdos para la Primera Sala, llevaría a cabo las funciones establecidas en el artículo 27 de la Ley que rige este Tribunal, esta

plaza se requiere a fin de abatir el rezago en el dictado de sentencias de primera instancia que se ha generado en virtud del incremento en demandas recibidas que se ha presentado en los últimos años, como se detalla a continuación.

Demandas recibidas por la Primera Sala

2016	**549**
2017	**1705**
2018	**937**
Junio 2019	**513**

ARTÍCULO 27.- Son facultades de los Secretarios de Acuerdos, las siguientes:

I. Auxiliar al Magistrado de la Sala de su adscripción en la formulación de Proyectos de autos de trámite y de resoluciones que se le encomienden,

II. Efectuar las diligencias que le encomiende el Magistrado de la Sala, cuando éstas deban practicarse fuera del local del Tribunal;

III. Redactar y autorizar las actas de las audiencias en las que les corresponda dar cuenta y autorizar las resoluciones que recaigan en los expedientes;

IV. Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes, y

V. Las demás que les encomienden los Magistrados, el Secretario general de Acuerdos, esta Ley y demás ordenamientos.

Los Secretarios de Acuerdos estarán adscritos a las Salas.

La plaza de auxiliar administrativo de apoyo al área jurisdiccional apoyaría en el área de Actuaría de la Primera Sala en la preparación de las notificaciones, lo que incluye

sacar copias de traslado de las resoluciones a notificar, en su caso elaborar la certificación de las resoluciones que lo requieran, e integrar al expediente correspondiente las resoluciones originales, elaborar los oficios y cédulas de notificación, sellar y foliar los expedientes.

SEGUNDA SALA:

En relación a la plaza de un auxiliar administrativo de apoyo al área jurisdiccional para la Segunda Sala, apoyaría en el área de Actuaría de la Segunda Sala en la preparación de las notificaciones, lo que incluye sacar copias de traslado de las resoluciones a notificar, en su caso elaborar la certificación de las resoluciones que lo requieran, e integrar al expediente correspondiente las resoluciones originales, elaborar los oficios y cédulas de notificación, sellar y foliar los expedientes.

SALA AUXILIAR DE LA SEGUNDA SALA:

Por lo que hace a la plaza de Actuario para la Sala Auxiliar llevaría a cabo las funciones establecidas en el artículo 28 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

Esta plaza se requiere a fin de abatir el rezago en notificaciones de primera instancia que se generó en virtud del incremento que se ha presentado en los últimos años en el número de demandas recibidas por la Sala Auxiliar, y a que dicha Sala cuenta con una plaza de Actuario, a continuación se detalla el incremento en el número de demandas recibidas por la referida Sala Auxiliar.

Demandas recibidas por la Sala Auxiliar

31 oct. A 31 dic. 2017	**544**
2018	**3265**
Junio 2019	**2258**

ARTÍCULO 28.- Son atribuciones de los Actuarios:

I. Notificar en tiempo y forma prescritos por la Ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnadas;

II. Formular los Oficios de notificación de los acuerdos que se dicten y enviarlos a su destino, asentando en el expediente, la razón de haber hecho la notificación y de haber entregado los Oficios de notificación, respectivos;

III. Practicar las diligencias que les encomiende el Magistrado; y

IV. Las demás que les señalen los Magistrados, el Secretario General de Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta y Secretarios de Acuerdos, esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables.

Los Actuarios estarán adscritos al Pleno o a las Salas.

La plaza de auxiliar administrativo de apoyo al área jurisdiccional apoyaría en el área de Actuaría de la Sala Auxiliar en la preparación de las notificaciones, lo que incluye sacar copias de traslado de las resoluciones a notificar, en su caso elaborar la certificación de las resoluciones que lo requieran, e integrar al expediente correspondiente las resoluciones originales, elaborar los oficios y cédulas de notificación, sellar y foliar expedientes.

QUINTO.- Que para de cubrir la presente solicitud de autorización para realizar ampliación presupuestal por $ 776,400, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

de Baja California propuso utilizar remanentes de ejercicios anteriores pendientes de utilizar, determinados al mes de diciembre de 2018.

Que a fin de corroborar lo establecido en el párrafo que antecede, se analizaron las cifras presentadas por el Organismo solicitante, en su Estado Financiero al 31 de diciembre de 2018, información que fue remitida al H. Congreso del Estado, como parte integrante de su Cuenta Pública 2018, determinándose que sí cuenta con remanentes suficientes para cubrir la solicitud de ampliación presupuestal que nos ocupa, como se muestra a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Efectivo y Equivalentes	$ 1,522,663
(+)		
	Cuentas por Cobrar	
	Gobierno del Estado (subsidio octubre, noviembre y diciembre de 2018, pagado en el mes de enero de 2019)	7,556,688
	SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 9,079,351**
(-)	**MENOS:**	
	Cuentas por pagar	7,607,443
(=)	**REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**	**$ 1,471,908**
(-)	**MENOS:**	
	SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN:	
	PRES-044/2019	$ 162,000
	PRES-045/2019	34,100
(=)	**REMANENTE PRESUPUESTAL DEL 2018 PENDIENTE DE UTILIZAR**	**$ 1,275,808**
(-)	**MENOS:**	
	PRES-065/2019, solicitud que nos ocupa	776,400
	REMANENTES 2018 QUE QUEDARÍAN PENDIENTES DE APLICAR	**$ 499,408**

SEXTO.- Que adicionalmente al análisis y estudio sobre las justificaciones, validación de cálculos y constatar que exista la fuente de recursos que venga a cubrir la presente solicitud de autorización para ampliar el Presupuesto de Egresos del

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, así como la verificación al cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes de la materia, tenemos que en lo que corresponde a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016), específicamente en lo relativo al capítulo de gasto de Servicios Personales, dicha ley señala lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

I al VIII. ….

IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas, los Municipios, los organismos

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías;

….

Interpretando las disposiciones anteriores, y considerando que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, es un organismo autónomo, por lo tanto es un Ente Público, y si nos remitimos al Artículo 1 último párrafo, nos establece que como tal, cumplirá con lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de la Ley que nos ocupa.

El Título Segundo, ”Reglas de Disciplina Financiera” , Capítulo I “Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas”, relativo al tema que nos ocupa, de incremento al presupuesto de egresos en el Capítulo de gastos de servicios personales, prevé lo siguiente:

Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:

I.- ….

a) ….

b) ….

….

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

a) ….

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. …

SÉPTIMO.- Que tomando en cuenta lo previsto en el Considerando que antecede, tenemos que la presente solicitud de autorización, es relativa a la contratación temporal de plazas de personal, que vendrían a apoyar en el área jurisdiccional con el fin de abatir el rezago con que se cuenta a la fecha, y que se viene acumulando de años anteriores, lo cual podría interpretarse que ya se conocía al momento de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2019, y sí, efectivamente se incluyó, sin embargo, al momento de la derrama final por partida presupuestal de su techo financiero aprobado por el H. Congreso del Estado, ya no fue incluido; generando que durante el presente ejercicio fiscal, se tenga la necesidad de la presente ampliación para solventar dicho concepto. Se concluye, al leer el inciso b) antes mencionado, que el Ente Público tenía la obligación de hacer la previsión en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, como medida económica de índole laboral, a efecto de que, una vez que se autorice el presupuesto

de egresos, no se incremente durante el ejercicio el presupuesto en el capítulo de servicios personales.

Lo cual viene a reforzarse con lo establecido en el siguiente:

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

I al IV. ….

V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Con lo anterior, podemos observar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es clara y contundente; el capítulo de servicios personales no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, salvo el pago de sentencias laborales, lo cual no es el caso que nos ocupa.

OCTAVO.- Como conclusión de nuestro estudio y análisis, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto, considera no viable la presente solicitud de autorización para ampliar el Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California hasta por un importe ajustado de $ 776,400, para la contratación de 12 plazas temporales en apoyo al área jurisdiccional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que la misma prevé que debió incluirse el recurso necesario para

ello, como una previsión de índole económica laboral desde su Presupuesto de Egresos aprobado originalmente para el presente ejercicio fiscal.

NOVENO.- Que es obligación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California por conducto de su Titular, solicitar al Congreso del Estado la autorización correspondiente para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50, Fracción V de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

DÉCIMO- Que de conformidad con el primer párrafo del Apartado A del Artículo 22, de la Constitución Política del Estado de Baja California, es facultad del Congreso del Estado, en los tres períodos ordinarios de sesiones, estudiar y votar los dictámenes de las modificaciones presupuestales, que sean presentados a su consideración.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fundamento en el Artículo 65, Fracción II, punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto cuenta con facultades para llevar a cabo el estudio y dictamen de la transferencia, ampliación, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos de las Entidades, que deban ser aprobados por el Congreso del Estado.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que a fin de normar su criterio la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoria Superior del Estado, su opinión al respecto la que fue vertida en términos no viables mediante oficio DEL/890/2019.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto

RESOLUTIVO:

ÚNICO.- No se aprueba la ampliación de recursos por $776,400 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal de 2019, mediante la cual se pretendían afectar diversas partidas del capítulo de gastos Servicios Personales con el propósito de contratar de manera temporal 12 plazas de personal en apoyo al área jurisdiccional, toda vez que se incumple con lo previsto en el artículo 13 fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes", del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
PRESIDENTE
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
SECRETARIA
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ

VOCAL

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO

VOCAL

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA

VOCAL

DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ

VOCAL

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ

VOCAL

DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ

VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Rosina del Villar, se abre el debate del Dictamen número 19, se pregunta a la asamblea si hay alguien que desee intervenir en contra, no siendo así, Diputada Escrutadora favor de poner en votación nominal el Dictamen número 19.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente. Se somete a votación nominal el Dictamen número 19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?

- Topete Robles Elí, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Bien, si no falta ninguno, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 19			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David	X		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		

Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	25		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente el resultado de la votación es el siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia se declara aprobado el Dictamen número 19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Continuando con la misma Comisión de Hacienda, Dictamen número 20, como punto de acuerdo a cargo de la Diputada María Luisa Villalobos.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 20, Honorable Asamblea: Esta Comisión de Hacienda y Presupuesto recibió, la PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONOMICO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UNA OFICINA ESTATAL DE ENLACE DE DICHA SECRETARÍA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Resolutivos:

PRIMERO.- Se aprueba la Proposición de Acuerdo Económico por el que se solicita al Gobernador del Estado, suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de establecer una oficina estatal de enlace de dicha dependencia, en el Municipio de Ensenada, Baja California.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Dictamen, se gire atento oficio al Gobernador del Estado de Baja California, en los siguientes términos:

ACUERDO

ÚNICO.- La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California solicita respetuosamente al Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de establecer una oficina estatal de enlace de dicha Secretaría en el Municipio de Ensenada, Baja California, y realizar lo conducente para la operatividad de la misma.

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del Honorable Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Es cuanto.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 20 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA)

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DICTAMEN No. 20

HONORABLE ASAMBLEA

Esta Comisión de Hacienda y Presupuesto recibió, la PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONOMICO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UNA OFICINA ESTATAL DE ENLACE DE DICHA SECRETARÍA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora, en ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 56 fracción II, 65 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procede al estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa en cita, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de octubre de 2018, la Diputada Claudia Agatón Muñiz, en representación de la ciudadanía y del Partido del Trabajo en la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en los Artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado de Baja California, 110, 114 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentó PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONOMICO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UNA OFICINA ESTATAL DE ENLACE DE DICHA SECRETARÍA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo del inminente cierre de las instalaciones de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Municipio de Ensenada, es importante que los funcionarios públicos debemos conocer y resolver los temas que más interesan y preocupan a los ciudadanos, así como aportar todas las herramientas e información necesaria para que tengan mayor facilidad de acceso a todos los servicios que ofrece el Gobierno, sin tener que encontrarse con obstáculos económicos, burocráticos, entre otros.

En el caso que nos ocupa, y tras la decisión del Gobierno Municipal de cerrar la oficina de Enlace para la realización de trámites para la obtención del pasaporte Mexicano, invocando cuestiones financieras y demás circunstancias, es necesario señalar, que el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, en el apartado 5.4 del Eje 5, denominado "Eficacia y eficiencia gubernamental", establece que es necesario

implementar estrategias que orienten a la función pública para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la prestación de servicios públicos; asimismo el artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establece que corresponde al Director General de Delegaciones proponer la creación de delegaciones y subdelegaciones, así como su modificación, reubicación o desaparición ya sea en colaboración con Autoridades Estatales o Municipales.

Es importante establecer que el Reglamento para la operación de oficinas Estatales y Municipales de enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores, estipula en su Artículo 1ro que las oficinas estatales y municipales de enlace son oficinas administrativas que dependen económica y administrativamente del Estado o Municipio y cuya operación autoriza la Secretaría de Relaciones Exteriores, para apoyar a sus Delegaciones en la recepción de documentos y entrega de pasaportes ordinarios, de permisos para la constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos, de certificados de nacionalidad mexicana, difusión de becas que promueve la Secretaría, protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior y de difusión de la política exterior de México, en los términos de ese Reglamento y de conformidad a los convenios que para tal efecto celebre la Secretaría con los gobiernos estatales y municipales, según el caso.

Asimismo, en su Artículo 9 establece que, para dar inicio a la operación de una oficina estatal o municipal de enlace, ésta deberá estar autorizada mediante la suscripción de un convenio de colaboración administrativa que celebren la Secretaría

y el gobierno estatal o municipal que corresponda, y una vez que aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por ello y con objeto de prestar un mejor servicio a la población ensenadenses para la tramitación de tan importante documento como

De lo anterior se evidencia que al suscribir un Convenio el Gobierno Estatal con la Secretaria de Relaciones Exteriores beneficiaria a un número importante de ensenadenses al ofrecerles este servicio de manera oportuna y al alcance de sus posibilidades, incluyendo a jornaleros de San Quintín, así mismo es notorio que actualmente existe un excesivo personal de base y de confianza adscrito a Gobierno del Estado que bien pudieran ser capacitados por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores y cumplir con esta función en beneficio de la población de Ensenada.

De igual forma, queda claro que de suscribirse el Convenio correspondiente, se tendría que cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para la operación de oficinas Estatales y Municipales de enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores, y modificar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para la inclusión de la operatividad que conllevaría el ofrecer dichos servicios, debiéndose establecer la partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos del 2019, para crear este Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en el Municipio de Ensenada, Baja California.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicito se turne el presente Punto de Acuerdo Económico, por parte del Presidente del Congreso, a la Comisión que corresponda para que sea discutido y en su caso aprobado por la Comisión respectiva y posteriormente en sesión ordinaria, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- La XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California solicita respetuosamente al Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de establecer una oficina estatal de enlace de dicha Secretaría en el Municipio de Ensenada, Baja California, y realizar lo conducente para la operatividad de la misma.

Una vez analizada en todos y cada uno de sus términos la presente Iniciativa por esta Comisión y en cumplimiento de los Artículos 65 en su Fracción II; 118, 122, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se elabora el presente Dictamen bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Proposición de Acuerdo Económico tiene por objeto solicitar al Gobernador del Estado, C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de establecer una oficina estatal de enlace de dicha dependencia en el Municipio de

Ensenada, Baja California, y por ende, realizar las gestiones conducentes para la operatividad de la misma.

SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en el Artículo 14 Párrafo Cuarto dispone que "Los Diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del Estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones", de ahí, que de conformidad al Artículo 28 fracción I de la misma, los diputados contarán con facultades constitucionales para iniciar leyes y decretos, en auxilio de sus representados y podrán intervenir en los asuntos de orden administrativo y de interés general ante las autoridades administrativas de los distintos ámbitos de gobierno, a fin de lograr la oportuna resolución de las promociones a su cargo.

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California señala en el Artículo 110 fracción III, que los Diputados en el ejercicio de sus facultades podrán presentar al Congreso del Estado, Iniciativas de Proposición de Acuerdo Económico, definiendo este término en el Artículo 114, como la determinación que tienda a una resolución que por su naturaleza no requiera de sanción, promulgación y publicación o que fije la posición del Congreso del Estado respecto de algún hecho, acontecimiento o fenómeno social.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Ensenada suscribió un Convenio de Colaboración Administrativa para el Establecimiento y Operación de una Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores" en fecha 1 de octubre de 2004, el cual fue publicado el 24 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, de conformidad a lo previsto en el Artículo 37 fracción I del Acuerdo por el que se dieron a conocer los Lineamientos para el establecimiento y operación de Oficinas Estatales y Municipales de Enlace autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ayuntamiento de Ensenada mediante oficio PM/0290/2018 de fecha 21 de junio de 2018, solicitó no continuar con dicho convenio, por lo que en fecha 15 de octubre de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dictó acuerdo de cierre definitivo de la oficina municipal de enlace en Ensenada, Baja California, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de Octubre de 2018.

QUINTO.- Que el objeto que se pretende con la Proposición de Acuerdo Económico para que el Gobierno Estatal celebre convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores es viable, con fundamento en los Artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 9 del Reglamento para la Operación de Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, que establecen atribuciones a los antes mencionados, para suscribir convenios sobre la prestación de servicios públicos como el propuesto por la inicialista, con el objeto de otorgar a los ciudadanos del municipio de Ensenada los

servicios de la dependencia federal entre los que destacan, la expedición de pasaportes, representación de mexicanos en el extranjero, de enlace con consulados, entre otros.

SEXTO.- Que es viable jurídicamente la celebración de convenios de colaboración entre el Ejecutivo del Estado y la Federación, a fin de brindar dichos servicios a la población que así lo requiera en el Municipio de Ensenada, Baja California; asimismo, es oportuno señalar que la Administración Estatal deberá valorar la factibilidad del proyecto, considerando la disponibilidad de recursos materiales, humanos y económicos que se requieran a fin de materializar el objeto de dicha pretensión.

SÉPTIMO.- Que de lo anterior, queda de manifiesto que el Congreso del Estado cuenta con facultades para aprobar acuerdos económicos que tengan como finalidad solicitar la celebración de convenios entre el Gobierno del Estado de Baja California y el Gobierno Federal en beneficio de los ciudadanos del Municipio de Ensenada.

OCTAVO.- Que con el propósito de normar su criterio, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, su opinión respecto de la Iniciativa en comento, y este, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 105 fracción VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, emitió su opinión al respecto, misma que fue vertida en lo general en términos de procedencia mediante Oficio TIT/0720/2019, de fecha 12 de agosto de 2019.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 65 fracción II numeral 8, 110 III, 114, 116, 118, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California vigente, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el siguiente:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueba la Proposición de Acuerdo Económico por el que se solicita al Gobernador del Estado, suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de establecer una oficina estatal de enlace de dicha dependencia, en el Municipio de Ensenada, Baja California.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Dictamen, se gire atento oficio al Gobernador del Estado de Baja California, en los siguientes términos:

ACUERDO

ÚNICO.- La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California solicita respetuosamente al Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de establecer una oficina estatal de enlace de dicha Secretaría en el Municipio de Ensenada, Baja California, y realizar lo conducente para la operatividad de la misma.

DADO.- En la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del Honorable Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
PRESIDENTE
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL
DIP. JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO
VOCAL
DIP. JUAN MANUEL GARCIA MOLINA
VOCAL
DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ
VOCAL
DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ
VOCAL
DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ
VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se abre el debate del Dictamen número 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto como punto de acuerdo, se pregunta a la asamblea si hay alguien que desee intervenir en contra, no siendo así, solicito a la Diputada Escrutadora favor de poner en votación nominal el Dictamen número 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones Presidente. Se somete a votación nominal el Dictamen número 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, por el bien de los ensenadenses, San Quintinenses y de todo el Municipio de Ensenada, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, dándole las gracias a los Diputados y obviamente pues esto es única y exclusivamente pues para beneficio de toda la gente de Ensenada, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 20			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN

Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David	X		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal			
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	24		

Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente el resultado de la votación es el siguiente: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada. En consecuencia se declara aprobado el Dictamen número 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Continuamos con el apartado de Dictámenes de Comisiones, ahora a cargo de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, Diputada para presentar el Dictamen número 13 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, adelante Diputada.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Para antes Diputado Presidente, le solicito se someta a consideración de la asamblea, dispensar la lectura total de los Dictámenes que presenta la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, para que únicamente se de lectura al proemio y resolutivo de los mismos, toda vez que dichos Dictámenes fueron distribuidos en tiempo y forma a la totalidad de los Diputados.

- EL C. PRESIDENTE: Como lo solicita la Diputada y siendo ella la Diputada Escrutadora, un servidor pone en votación económica, se pregunta a la asamblea la dispensa de la lectura del dictamen, solo proemios y resolutivos, quiénes estén a favor en votación económica favor de levantar la mano; por unanimidad se aprueba la dispensa de la lectura, solo proemios y resolutivos, adelante Diputada.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Con su venia Presidente. Honorable Asamblea: Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DMCF/OP126/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Resolutivos:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio al Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las

responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Firman Presidente Eva Gricelda Rodríguez, Secretaria María Luisa Villalobos, Vocales: Víctor Hugo Navarro, Claudia Josefina Agatón Muñiz, David Ruvalcaba Flores, Eva María Vásquez, Luis Moreno, Rosina del Villar, integrantes de la Comisión.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 13 DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DICTAMEN NO. 13

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio

No. DMCF/OP126/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Para efectos de la emisión del presente dictamen se efectuó el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente, resultando los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 31 de marzo de 2017 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual del Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el día 24 de noviembre de 2016, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, inició la fiscalización de la información que comprende la Cuenta Pública Anual del Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracciones I, II, III y IV y 98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el examen se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales en materia de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.

TERCERO.- Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante el oficio DMMP/1282/2017 de fecha 21 de junio de 2017, mismo que fue atendido, a través de oficio número DIF/DG-188/2017 de fecha 6 de julio de 2017, remitido al entonces Órgano de Fiscalización Superior por la C. Lic. Laura Elena Corral Murillo, en su carácter de Directora de la Entidad.

Así mismo, atendiendo a lo establecido en los ordenamientos citados en el párrafo anterior, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló California formuló pliego de observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DMMF/1639/2017 y DMMF/2473/2017 de fechas 31 de agosto de 2017 y 26 de septiembre de 2017, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios números DIF/DG-253/2017 y DIF/DG-301/2017 de fechas 14 de septiembre de 2017 y 3 de noviembre de 2017, respectivamente, remitidos a la Auditoría Superior del Estado de Baja California por la C. Lic. Laura Elena Corral Murillo, en su carácter de Directora de la Entidad.

CUARTO.- Que en fechas 25 de julio de 2017 y 30 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo las confrontas entre los servidores públicos de la Entidad y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y Penúltimo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, con el objeto de darle a conocer los resultados preliminares de la revisión realizada a la Entidad por el ejercicio fiscal 2016 y se aclararan las observaciones que no quedaron totalmente solventadas en los plazos establecidos en dicha Ley.

QUINTO.- Asimismo, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero, 51 último párrafo, 98 Fracción XV y 103 Fracción VII, y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; en correlación con el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, estos dos últimos ordenamientos aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló observaciones a través de oficios números DMMF/1640/2017 y DMMF/2606/2017 de fechas 31 de agosto de 2017 y 26 de septiembre de 2017, respectivamente, para notificar los

pliegos de observaciones a la Ex Directora C. María de los Ángeles Romero Flores, relativo al período en el que se desempeñó como Titular, que comprende del 1 de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2016, habiéndose elaborado Acta Circunstanciada de fecha 8 de septiembre de 2017, donde se hace constar que no se pudo llevar a cabo la diligencia antes mencionada, en razón de que en las dos ocasiones que se visitó el domicilio, nadie del interior de la casa atendió el llamado.

Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior, mediante el oficio número DMMF/2756/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, se requirió la presencia de la C. María de los Ángeles Romero Flores, en su carácter de Ex Directora de la Entidad, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, habiendo comparecido el día 1 de diciembre de 2017, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta Pública durante su periodo de gestión.

SEXTO.- Que durante el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, la Entidad no realizó operación alguna de Deuda Pública.

SÉPTIMO.- Que una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la Entidad, de conformidad con los Artículos 58 al 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió Informe de Resultados mediante oficio número DMCF/OP126/2018 de fecha

27 de febrero de 2018, que contiene la opinión sobre la Cuenta Pública Anual del Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

OCTAVO.- Que a partir del día 12 de agosto de 2017, entró en vigor la reforma al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través de la cual se modifica la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por el de Auditoría Superior del Estado de Baja California, otorgándole a ésta las atribuciones para continuar tramitando hasta su terminación, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como los demás asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Octavo del Decreto No. 97 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 28 de julio de 2017, así como en los Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C y 27 Fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la Cuenta Pública Anual tanto del Estado como de los Municipios y demás Entidades fiscalizables.

SEGUNDO.- Que de conformidad al Artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual de las Entidades fiscalizables, previstas en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CUARTO.- Que de conformidad al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, vigente hasta el 11 de agosto de 2017, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California, es responsable de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que están obligados a rendir las

Entidades que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, administración, el manejo o el ejercicio de recursos públicos estatales o municipales, como se establece en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO.- Que durante el ejercicio fiscal de 2016, fungieron como Directoras de la Entidad las CC. María de los Ángeles Romero Flores y Lic. Laura Elena Corral Murillo por los periodos del 1 de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2016 y del 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

SEXTO.- Que con fundamento en los Artículo 37, 38 y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se hicieron observaciones a las Cuentas Públicas del Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., mismas que fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, a excepción de lo siguiente:

1. La Entidad durante el periodo de enero a noviembre de 2016 pagó un importe de $ 702,800 por concepto de compensación extraordinaria a 13 trabajadores que laboraron en la Entidad durante dicho periodo, correspondiendo un importe de

$ 407,000 a 6 trabajadores comisionados por el Ayuntamiento de Mexicali y un importe de $ 295,800 a 7 empleados de confianza de la Entidad, las cuales fueron autorizados por la Dirección de la Entidad, observándose lo siguiente:

a) Sobre un monto de $ 507,000, la Entidad proporcionó actas de la Junta de Gobierno donde se autoriza el pago de "compensación extraordinaria" a 3 trabajadores comisionados por el Ayuntamiento de Mexicali y a 6 empleados de la Entidad, sin indicarse en dichas actas los montos autorizados para cada uno de los trabajadores, por lo que no se pudo comprobar si los montos pagados corresponden a los autorizados por la Junta de Gobierno.

b) Sobre un monto de $ 195,800, la Entidad no proporcionó la autorización por parte de la Junta de Gobierno para el pago de las compensaciones extraordinarias, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 12, Fracción I del Acuerdo por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, B.C., el cual señala que son facultades u obligaciones del Director "Administrar el organismo de conformidad con las resoluciones de la Junta de Gobierno….", así mismo se incumple con lo establecido en el Artículo 41 Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

2. La Entidad realizó el cálculo y retención del Impuesto sobre la Renta sobre el pago de la primera parte del aguinaldo al personal, sin embargo sobre un importe de $ 564,120 correspondiente a la provisión de la segunda parte del aguinaldo del personal, el cual fue pagado en el mes de enero de 2017, la Entidad omitió realizar

el cálculo, retención y entero del Impuesto sobre la Renta; asimismo en el mes de junio de 2016 realizó el pago de prima vacacional por un monto de $ 366,770 sin haber efectuado el cálculo y retención del impuesto citado, incumpliendo en ambos casos con lo establecido en los Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Asimismo, la Entidad durante el ejercicio 2016 pagó un monto de $ 210,000 por concepto de liquidación por demanda interpuesta por la C. María Elena Vázquez Gaytán, según acuerdo de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California de fecha 29 de junio de 2016 por laudo condenatorio emitido en contra de la Entidad en fecha 14 de marzo de 2014, donde se acuerda el pago de la Entidad a la demandante del monto señalado libre de impuestos, sin haber efectuado la Entidad el calculó del gasto real, así como el registro de la retención y entero el impuesto correspondiente, de conformidad con lo establecido con el Artículo 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

3. La Entidad durante el ejercicio efectuó pagos por un importe de $ 617,894, por conceptos de adquisición de diversos materiales y servicios para la construcción de cocina en el Centro de Desarrollo Esperanza Agrícola, así como adecuaciones realizados en el Asilo de Ancianos Carlos Canseco, las cuales fueron adjudicadas directamente sin cotización a tres proveedores, observándose que no se atendió al procedimiento establecido en el Artículo 27, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno

Municipal de Mexicali, Baja California, donde se establece que debió aplicar el procedimiento de por lo menos dos cotizaciones, en los rangos de $ 109,633 a $ 292,160 sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar la obtención de las mejores condiciones de precio y calidad de los artículos, para el adecuado ejercicio del presupuesto autorizado. Cabe señalar que los materiales y servicios adquiridos fueron recibidos en forma oportuna y a satisfacción de la Entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes puntos.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio al Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. B. C., por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las

responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA
SECRETARIO
DIP. DAVID RUVALCABA FLORES
VOCAL
DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL
DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ
VOCAL
DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ
VOCAL
DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL
DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
VOCAL
(CONCLUYE DICTAMEN)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Eva Gricelda, se abre el debate del Dictamen número 13 de la Comisión de la Comisión de Fiscalización del Gasto

Público, se pregunta si hay algún Diputado o Diputada que desee intervenir en contra.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Presidente solo para una observación.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputado.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Leyendo el contenido del dictamen que se somete a consideración del Pleno, y son puntos que deben de ser tomados en cuenta por nosotros, el momento en que mandaron la cuenta pública al Congreso, fue recepcionada desde marzo del 2017, más de dos años, obviamente nosotros nos incorporamos al trabajo legislativo el pasado primero de agosto, pero si es grave, en la Legislatura pasada quienes estaban encargados de la Comisión de la Comisión de Fiscalización, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, quien estuvo encargado de la auditoría, el Órgano de Fiscalización en su momento, porque el tránsito hacia Auditoría Superior del Estado, encargado del despacho, hayan tomado de tanto tiempo para preparar un documento de revisión de cuenta pública, inclusive podría ser que hasta en responsabilidades administrativas ya hubieran pre escrito, digo, habría que analizarlo de fondo, pero me parece quien presidió en su momento la Comisión de Fiscalización de la Legislatura pasada tuvo un actuar negligente en este caso, tan solo nos toca responder por los actos que nosotros ejercemos, y se está sacando rápidamente por lo que hace el trabajo de la Comisión de Fiscalización de esta Veintitrés Legislatura, pero si es de atenderse y tomarse en cuenta eso, de que no se haya hecho, lo que se debió haber hecho en su momento,

los tiempos cambiaron, siempre lo he dicho, y nosotros vamos hacer nuestra parte y responder por nuestros actos, pero si es grave y serio que hayan tomado tanto tiempo, quien presidió la Comisión de Fiscalización, y quienes estuvieron a cargo de estos órganos y no hayan hecho lo que les correspondía, es cuanto Diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado Juan Manuel Molina, se registra su comentario en el diario de debates.

- **LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ:** Por alusión.

- EL C. PRESIDENTE: Si la aludieron?

- **LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ:** Sí,

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputada.

- **LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ:** Yo presidí la Comisión. Si justamente de eso se trata, a mi me parece sumamente importante que nos podamos decir las cosas como son; yo presidí la Comisión de Fiscalización, orgullosamente lo digo, no es para nadie ajeno, casi toda la Vigésimo Segunda Legislatura hubo un cambio posterior, donde la presidió el Diputado Raúl Castañeda Pomposo, ya hemos dado cuenta en la Comisión de Fiscalización y de ello puede comentar la propia Diputada Presidenta y los integrantes de la misma, de aquellos casos en que hubo algún retraso en tratándose de Dictámenes de cuentas públicas; me parece que no hay que tenerle el miedo a decir el nombre, no es quien presidió, es Eva María Vásquez Hernández y Raúl Castañeda Pomposo, y pues yo creo que es

muy importante, que lo invitamos Diputado que nos acompañe en esa comisión, así como a todos los compañeros Diputados, para que puedan analizar puntualmente las consideraciones de aquellas cuentas públicas, que ojo, si bien en su momento no tuvieron las condiciones para ver podido ser dictaminadas, ahora las estamos revisando, pero son todos bienvenidos, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputada. No habiendo mayores comentarios.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Solo por alusión Diputado sin entrar en debate. Gracias por la invitación. Solo por alusión Diputado Presidente y no tardaría más de veinte segundos. Es responsabilidad asumir las consecuencias de nuestros actos, y si veo las fechas muy claras y todas son del 2017, en su momento debieron de haber justificado las dilaciones y que bueno que los tiempos han cambiado en las actitudes también, que bueno que ahora se toquen temas que antes no se tocaban y se hagan con prontitud y que todos contribuyamos a esto, por el bien del Estado, es cuanto.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado. Hecha la réplica y la contra réplica, se procede a poner a votación el Dictamen número 13 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, Diputada Escrutadora en votación nominal.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Sigo sus instrucciones Presidente y sometemos en votación nominal el presente dictamen, los que estén, iniciando por la derecha perdón.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor, porque antes se hacían las cosas bien y ahora también.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 13			
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		

Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis			
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	23		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, es el resultado.

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia queda aprobado el Dictamen número 13 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Y para continuar con la lectura de estos Dictámenes, Dictamen 14, solicito a la Vicepresidenta de esta Mesa Directiva que pueda ocupar mi lugar por favor para continuar con ello.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Continúa con el uso de la voz la Diputada María Luisa Villalobos, adelante Diputada.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Comisión de Fiscalización del Gasto Público, Dictamen número 14. Honorable Asamblea: Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DMMF/OP125/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Mexicali, B. C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Resolutivos:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Patrimonio y Deuda Pública al H. Ayuntamiento de Mexicali, B. C., por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Ingresos al H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C., por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 1 y 2 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

TERCERO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos al H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C., por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre

de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios o ambos, que en su caso hubieren ocasionado a la entidad fiscalizada en los términos establecidos en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98 Fracción XVI y 103 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, también aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Es cuanto.

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 14 DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DICTAMEN NO. 14

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio

No. DMMF/OP125/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Mexicali, B. C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Para efectos de la emisión del presente dictamen se efectuó el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente, resultando los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 31 de marzo de 2017 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C., en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el día 24 de noviembre de 2016, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, inició la fiscalización de la información que comprende la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C., para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracciones I, II, III y IV y 98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el examen se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales en materia de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.

TERCERO.- Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, estos dos últimos ordenamientos aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de

Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DMEO/1558/2017, DMMP/2509/2017, DMMF/2498/2017 y DMMF/2720/2017 de fechas 26 de julio, 26 de septiembre, 30 de octubre y 14 de noviembre de 2016, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios números DOP/1284/2017, TES/PP/5491/2017 y TES/OT/6055/2017 de fechas 17 de agosto, 17 de octubre y 17 de noviembre de 2017, respectivamente, remitidos a la Auditoría Superior del Estado de Baja California por los CC. Ing. José Francisco Reynoso Ambriz y el C.P. Saúl Martínez Carrillo, en su carácter de Director de Obras Públicas Municipales y Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

CUARTO.- Que con fechas 9 de noviembre y 14 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo las confrontas entre los servidores públicos de la Entidad y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y Penúltimo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, con el objeto de darle a conocer los resultados preliminares de la revisión realizada a la Entidad por el ejercicio fiscal 2016 y se aclararan las observaciones que no quedaron totalmente solventadas en los plazos establecidos en dicha Ley.

QUINTO.- Asimismo, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero, 51 último párrafo, 98 Fracción XV y 103 Fracción VII, y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; en correlación con el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, estos dos últimos ordenamientos aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló observaciones, las cuales fueron notificadas mediante oficios números DMMO/1613/2017 y DMMF/2650/2017 de fechas 25 de septiembre y 14 de noviembre de 2017 al Ex Presidente Municipal L.A.E. Jaime Rafael Díaz Ochoa relativo al período en el que se desempeñó como Titular, que comprende del 1 de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2016, mismo que no fue atendido.

SEXTO.- Asimismo, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero, 98 Fracción XXII, Numerales 2, 3 y Párrafo Penúltimo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; así como en los Artículos 12 Fracción XVI, 14 Fracción XI, 30 Fracción VII y 37 Fracción V del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, ordenamientos

aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló oficio número DMMF/22795/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, se requirió la presencia del Ex Presidente Municipal L.A.E Jaime Rafael Díaz Ochoa, relativo al período en el que se desempeñó como Titular, mismo que no fue atendido.

SÉPTIMO.-. Que una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la Entidad, de conformidad con los Artículos 58 al 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió Informe de Resultados mediante oficio número DMMF/OP125/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, que contiene la opinión sobre la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Mexicali, B. C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

OCTAVO.-. Que a partir del día 12 de agosto de 2017, entró en vigor la reforma al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través de la cual se modifica la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por el de Auditoría Superior del Estado de Baja California, otorgándole a ésta las atribuciones para continuar tramitando hasta su terminación, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a

los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como los demás asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Octavo del Decreto No. 97 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 28 de julio de 2017, así como en los Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C y 27 Fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la Cuenta Pública Anual tanto del Estado como de los Municipios y demás Entidades fiscalizables.

SEGUNDO.- Que de conformidad al Artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Comisión de Fiscalización del

Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual de las Entidades fiscalizables, previstas en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CUARTO.- Que de conformidad al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, vigente hasta el 11 de agosto de 2017, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California, es responsable de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que están obligados a rendir las Entidades que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, administración, el manejo o el ejercicio de recursos públicos estatales o municipales, como se establece en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO.- Que durante el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, fungieron como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C. los C.C. L.A.E. Jaime Rafael Díaz Ochoa y Lic. Gustavo Sánchez Vásquez por el

periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 y del 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente, y como Tesorero Municipal los CC. C.P. Rogelio Orlando Pineda Meléndez y el C.P. Saúl Martínez Carrillo por el período comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y del 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

SEXTO.- Que con fundamento en los Artículo 37, 38 y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se hicieron observaciones a las Cuentas Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, B. C., mismas que fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, a excepción de lo siguiente:

1. La Entidad recaudó de menos un importe total de $ 11’381,026, del cual $ 1’520,273 corresponde a Impuesto Predial del ejercicio fiscal de 2016, $ 8’376,306 a Rezago Predial (de 2010 al 2015) y $ 1’484,447 a Impuesto al Fomento Deportivo, ocasionado por la incorrecta aplicación de las tasas y valores catastrales para el cálculo de dicho Impuesto, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 2, Fracción I, II IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, B.C., para el Ejercicio Fiscal del 2016 y el Articulo 1 de la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial para el Municipio de Mexicali, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2016.

2. La Entidad efectuó la enajenación a título oneroso de 39 predios por un monto total de $ 58’983,651, bajo el procedimiento establecido en el Artículo 80, Fracción I, Inciso A) del Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio de Mexicali, Baja California, a favor de varios contribuyentes, sin embargo dichas enajenaciones no se efectuaron bajo el procedimiento de licitación pública, contraviniendo con lo establecido en los Artículos 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 79 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2016.

Los predios fueron vendidos por la Entidad por un monto total de $ 58’983,651, tomando como base para determinar su precio los avalúos elaborados por la Comisión Municipal de Valuación y que se realizaron principalmente durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, sin embargo dichos avalúos difieren al valor catastral de dichos predios en un promedio de -57.90%, resultando una diferencia de menos en su valor catastral de $ 31’279,297. Cabe mencionar que los valores catastrales fueron autorizados en Acta de Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2015 por el Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario del Municipio de Mexicali y posteriormente fueron aprobados en Acta Numero 62 de Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2015.

3. Derivado de la auditoria número 0201/30C/AD/00025/2013 practicada durante el ejercicio 2015 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en virtud que el día 17 de diciembre de 2015 se notificó a la Entidad que omitió pagar cuotas obrero patronales de cada uno de los seguros de riesgos de trabajo,

enfermedades y maternidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales por un importe de $ 14’096,476, así como las cuotas obrero patronales de cada uno de los ramos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por un importe de $ 6’590,116, por los bimestres del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. En consecuencia de lo anterior, durante los meses de abril, mayo y julio del ejercicio 2016, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California le retuvo un importe total de $ 40’350,605, correspondiente al Fondo General de Participaciones, Impuestos Estatales y Fondo Compensatorio, detectándose que efectuó pagos de recargos, actualizaciones y multas por un monto total de $ 20’441,171, por la falta de entero y pago oportuno de cuotas obrero patronales, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Es de comentar que por la falta de pago oportuno, se presume un demerito al erario público, contraviniendo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California, así como el incumplimiento a los artículos 8 fracción III, 24 fracción III y 52 fracción IX del Reglamento de la Administración Pública del municipio de Mexicali.

4. La Entidad efectuó erogaciones por la cantidad total de $ 54’131,082 a diversos proveedores, por diferentes conceptos, como son: artículos metálicos para la construcción, material eléctrico, material asfáltico, otros artículos de construcción y reparación, medicinas y productos farmacéuticos, reparación y accesorios menores de equipo de transporte, entre otros, detectándose que dichas erogaciones, se llevaron a cabo sin aplicar el procedimiento de licitación pública establecido en el

artículo 27, fracción V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Mexicali, así mismo se incumple con el artículo 100, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California.

Por otra parte, la Entidad no proporciono evidencia del control, reguardo y destino de las adquisiciones antes mencionadas, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, fracción IV y 29 fracción V del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali, Baja California.

Como consecuencia de no haber efectuado el procedimiento de licitación pública la Entidad durante el ejercicio 2016 adquirió 3,763 artículos metálicos para la construcción consistente en "Tubular 2"x2" C-16 x10' Galv" a un costo de $ 400 c/u sin IVA, detectándose un sobreprecio pagado de más por un importe total de $ 1'145,906, ya que posteriormente, el día 22 de mayo de 2017 la Entidad adquirió dicho artículo a un costo por pieza de $ 212 c/u sin IVA. Así mismo el día 19 de septiembre de 2017 se solicitó cotización a "Comercio Azteca, S.A. de C.V." consistente en artículo denominado "Hoja de Lamina 4'x10' C-26", el cual fue cotizado a un costo por pieza de $ 432 c/u sin IVA, sin embargo que durante el ejercicio 2016 la Entidad adquirió dicho artículo a un costo de $ 870 c/u sin IVA, detectándose un sobreprecio pagado de más durante el ejercicio 2016 por un importe total de $ 330,358.

5. Durante el mes de noviembre de 2016 la Entidad efectuó erogaciones por la cantidad total de $ 4'011,152, de los cuales efectuó pagos a Constructora Cadena,

S.A. de C.V. por la cantidad total de $ 2’188,015 y a Desarrollos y Construcciones Bajamex, S. de R.L. de C.V. por la cantidad total de $ 1’823,137 por concepto mantenimiento a áreas públicas, rehabilitación, limpieza, remozamiento, entre otros, en diferentes puntos de la ciudad, observándose la falta de aplicación del procedimiento de licitación pública establecido en el artículo 27, fracción V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Mexicali, así mismo, se incumple con el artículo 100, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California.

Así mismo, la Entidad no proporcionó expediente y/o carpeta de la evidencia documental que compruebe la debida prestación de los servicios, incumpliendo con lo establecido en los Artículos 10, 32 y demás aplicables de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, ordenamientos aplicables por disposición de las Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

6. La Entidad celebró contrato de Prestación de Servicios Profesionales s/n de fecha 01 de junio de 2016 con la empresa “Cox LTD México, S.A. de C.V.”, por concepto de “Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Legal y Fiscal, Gestión y Tramites para el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal Vigente y demás disposiciones legales, normativas y rectoras en materia fiscal aplicables a los Municipios, como lo es el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta,

de los Derechos y Aprovechamientos publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación.” Erogando la cantidad total de $ 40’411,666, no proporcionando evidencia de haber llevado a cabo el procedimiento de licitación pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, fracción V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Mexicali, así mismo, se incumple con el artículo 100, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California.

Así mismo no proporcionó los resultados obtenidos derivados de las actividades objeto del contrato que el prestador debió entregar a la Entidad, tal como lo establece el contrato en su cláusula segunda incisos B) y C), incumpliendo con lo establecido en los Artículos 10, 32 y demás que le son relativos a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, aplicables por disposición de las Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios

7. La Entidad efectuó pago de intereses moratorios correspondiente a 7 créditos por un monto total de $ 845,298, derivado de la falta pago oportuno de las amortizaciones, ocasionando un demerito al erario público, contraviniendo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California. La integración de los intereses moratorios pagados de más.

Cabe señalar que derivado de la falta pago oportuno de las amortizaciones de 6 créditos celebrados con el Banco Interacciones, S.A., la Entidad dejó de recibir un

premio por pago puntual por un importe total de $ 6’471,060, dicho premio se establece en su cláusula quinta del contrato el cual establece que podrá otorgar al municipio un premio por pago oportuno por la cantidad equivalente a 1.50% del monto dispuesto de cada pagaré.

Asimismo la Entidad presenta en su Cuenta Pública el Contrato de Apertura de Crédito Simple número 11036 celebrado con el Banco Nacional de obras y servicios Públicos, S.N.C. (préstamo por pagar a largo plazo), el cual establece en su cláusula séptima que durante la vigencia del contrato se revisará y, en su caso, ajustará a la alza o a la baja la tasa de interés que precisa la cláusula sexta anterior, tomando como base para ello cualquier cambio en la situación de la o las calificaciones con que cuente u otorgue al Municipio al menos una Institución Calificadora de Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señalando que durante el ejercicio 2015 y de enero a agosto de 2016 el pago intereses se efectuó a una tasa igual al resultado de adicionar a la TIIE 3.42 puntos porcentuales, ya que la Entidad se encontraba a un nivel de riesgo 12, de acuerdo a la "Tabla 1 Escala de Riesgo" (anexo A del Contrato), sin embargo derivado a la falta de pago oportuno de los créditos a corto plazo, la Entidad pago intereses durante el periodo de septiembre a diciembre de 2016 a una tasa igual al resultado de adicionar a la TIIE 9.18 puntos porcentuales, lo que representa que la Entidad se encontraba en un nivel de riesgo 21 al cierre del ejercicio, resultado intereses pagados de más por la cantidad total de $ 6’957,190, generando un demerito al erario público,

contraviniendo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

8. La Entidad realizó pagos por concepto de recargos y actualizaciones por la cantidad de $ 4’770,439, derivados de la falta de entero oportuno de retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos correspondientes a los meses de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2015 y de enero a abril de 2016, generando un demerito al erario público, contraviniendo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California. Así como el incumpliendo con lo establecido en los Artículos 96, 106 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y con los artículos 8 fracción III, 24 fracción III y 52 fracción IX del Reglamento de la Administración Pública del municipio de Mexicali.

9. La Entidad proporcionó relación de personal con derechos a jubilación, pensión, renuncias, entre otros, a los cuales no se les ha cubierto el pago por concepto de seguros de vida y finiquitos correspondientes al ejercicio 2016 y anteriores por el importe de $ 359’293,149, señalando que durante el ejercicio se detectaron 40 bajas de personal, de las cuales la Entidad determinó prestaciones por pagar por un importe de $ 24’630,660, observándose lo siguiente:

a) Se detectaron 20 bajas por defunción, que de acuerdo a los cálculos que la Entidad efectuó se determinó un importe por pagar de $ 20’556,794, observándose que no se ha efectuado el pago a los beneficiarios, contraviniendo así con el Artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo.

Cabe señalar que el Artículo 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California, establece que: "En los casos no previstos por esta ley y sus reglamentos se aplicaran supletoriamente, en el orden siguiente: la Ley Federal del Trabajo,…".

b) De los cálculos de liquidaciones que efectuó la Entidad, se revisaron 20 liquidaciones por Pensión por Edad y Años de Servicio, Jubilación, Renuncia, entre otros, por la cantidad de $ 4'073,866. Observando que no ha efectuado el pago de dichas liquidaciones a los trabajadores por las prestaciones a que tienen derecho a recibir Posteriormente de dichas liquidaciones la Entidad proporcionó un convenio de pago celebrado con el trabajador por las prestaciones que tiene derecho, sin embargo no presentó evidencia de haber efectuado el pago de dichas liquidaciones a los trabajadores restantes.

10. Con fecha 4 de marzo de 2016 se aprobó en la Septuagésima Segunda Sesión de Cabildo, licencia para separarse de las funciones propias del cargo a dos Regidores por tiempo indefinido a partir del 4 de marzo del 2016, detectándose lo siguiente:

a) La Entidad efectuó el pago de la dieta del mes de marzo a Regidor por el importe líquido de $ 53,362, sin embargo sólo debió pagar la dieta correspondiente a los 3 días que se encontraba en su cargo de Regidor por el importe líquido de $ 5,164

b) En el Acta de Sesión señalada con anterioridad, se aprobó hacer el llamado al C. Arturo Aguilera Ceseña a efecto fungir como Regidor Suplente del C. César Valerio Castillo, sin embargo al C. César Valerio Castillo se le pagó su dieta del 27 al 30 de junio y del 1ro. al 31 de julio de 2016, así mismo la Entidad pagó de manera completa los meses de junio y julio de 2016 al C. Arturo Aguilera Ceseña, detectándose un pago de más por la cantidad de $ 60,477 ($ 7,115 del mes de junio y $ 53,362 de julio).

11. La Entidad erogó la cantidad total de $ 9’545,183 por concepto de percepciones como: sueldos, compensación, bono por riesgo, bono de productividad, estímulo a la buena disposición, prima vacacional, pago de uniforme y aguinaldos, correspondiente al periodo de la segunda catorcena de septiembre a la segunda catorcena de diciembre de 2016, mediante la nómina denominada "04-11 Prejubilados Oficialía Mayor" a personal que ya no se encuentra laborando en la Entidad y que cuenta con 30 años de servicios o más, incumpliendo con el Artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California. Así mismo se incumple con el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

12. La Entidad presenta al cierre del ejercicio en la cuenta contable de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo un saldo por la cantidad de $ 4’982,837, del cual proporcionó los reportes de levantamiento de inventario físico de almacenes elaborados por el Departamento de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, por un importe total de $ 2’728,492, de lo anterior se detectó lo siguiente:

a) La Entidad no ha efectuado la baja contable de los artículos que fueron dictaminados como obsoletos y en malas condiciones de los almacenes de "Materiales, Útiles y Equipos de oficina", "Material de Limpia" y "Materia electico y Alumbrado Público" por un importe total de $ 664,876

b) La Entidad proporcionó inventario físico al 31 de diciembre de 2016 del Almacén de "material eléctrico y alumbrado público" por un importe de $ 1'434,533, el cual al ser comparado con el saldo contable de $ 540,239, se determinó una diferencia de menos en contabilidad por la cantidad de $ 894,294, incumpliendo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en lo relativo al apartado "B.1.1", segundo párrafo. Posteriormente en fecha 14 de noviembre de 2017 se efectuó registro contable de salidas correspondiente al primer trimestre de 2015 por un importe total de $ 407,493 incrementado dicha diferencia de menos en contabilidad por la cantidad de $ 1'301,787

13. En relación a los bienes muebles se observa lo siguiente:

a) La Entidad proporcionó "Reporte por Ramo-Dep-Ubica de Bienes Muebles" (Padrón de Bienes Muebles), emitido por el Departamento de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, con un valor total de $ 1,011'207,030 y que al ser comparado el saldo contable al cierre del ejercicio de la cuenta contable "124 Bienes Muebles" por $ 1,048'839,465, resulta una diferencia de más en registros contables por un monto de $ 37'632,435. Posteriormente durante el ejercicio 2017 la Entidad efectuó bajas contables de bienes por considerarse mantenimientos, insumos, entre otros, los cuales no se localizaban en el Padrón de Bienes Muebles, por un importe total de $

27’764,191 resultando una diferencia de más en contabilidad por la cantidad de $ 9’868,244

b) La Entidad durante el ejercicio solicito servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo pesado, consistente en 2 camiones pipa, 1 tractocamión, 2 camiones de canastilla, 1 camión chasis, 1 semirremolque de volteo, 1 cargador frontal y 1 remolque de dos ejes, los cuales se encuentran en los patios del proveedor MJ Industrial, S.A. de C.V. y a fecha no han sido recuperados, señalando que 8 equipos cuentan con un valor en libros por la cantidad total de $ 7’887,912 y el remolque de dos ejes no se localizó en el padrón ya que no cuenta con número económico y/o de inventario, dicha situación incumple con lo señalado en el Artículo 64 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali, Baja California.

14. En relación a los bienes inmuebles se observa lo siguiente:

a) La Entidad proporcionó el reporte denominado “Registro Inmobiliario Municipal XXI Ayuntamiento de Mexicali año 2016” (padrón valuado de bienes inmuebles) por $ 17,435’051,082, el cual al efectuar el comparativo contra registros contables al cierre del ejercicio por la cantidad de $ 2,205’880,962, se deriva una diferencia de menos en registros contables por la cantidad de $ 15,229’170,120, Posteriormente durante el ejercicio 2017 la Entidad efectuó ajustes en la cuenta contable de bienes inmuebles, correspondiente a altas, así como revaluó de dichos bienes, entre otros, por un importe total de $ 1,183’401,350 resultando una diferencia de menos en contabilidad por la cantidad de $ 14,045’768,770. Dicha

diferencia fue registrada durante el ejercicio 2017 en cuentas de orden por considerarse, entre otros, bienes inmuebles irregulares y asignaciones.

b) Mediante Decreto No. 345 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 14 de septiembre del 2001, en el cual se autorizó la desincorporación del patrimonio del Dominio Público del Gobierno del Estado al Dominio Privado de 201 lotes, integrados principalmente por predios para áreas verdes y deportivas, ubicados en distintos desarrollos del Municipio de Mexicali, B.C., se autoriza también al Ejecutivo del Estado la enajenación a título gratuito a favor del Ayuntamiento de Mexicali, para que se incorporen al patrimonio del dominio público Municipal y se destinen a los usos que se especifican; sin embargo se observa que de 178 lotes no se ha concluido con el proceso de regularización, al no proporcionar la documentación que acredite que se encuentran registrados a nombre del Municipio de Mexicali, B.C. ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Cabe señalar que los 178 lotes se encuentran registrados en cuentas de orden a valor catastral.

c) La Entidad aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de enero de 2012, autorizar el dictamen técnico no. DAU-FRACC/1477/2011 de fecha 8 de noviembre de 2011, emitido por la Dirección de administración urbana, para la opción de sustitución de 9 predios a cambio de la ejecución de 3 obras de edificación e infraestructura por parte de la empresa Ingeniería y Obras, S.A. de C.V., consistentes en Construcción de área deportiva y Centro Comunitario en donación municipal del desarrollo urbano centenario; Construcción de caseta de policía en

fraccionamiento Finca los Jazmines tercera etapa; y Construcción de 2 carriles (uno por sentido) y guarniciones en camellón por boulevard Anáhuac, tramo del dren Wisteria a calle gobernador; así mismo para complementar el costo total de dichas obras, se aprobó la desincorporación del dominio público y su incorporación al régimen del dominio privado, un total de 14 predios de esta Ciudad de Mexicali, los cuales son autorizados para que sean enajenados a título oneroso y en calidad de permuta a favor de dicha empresa, para la ejecución de las obras en comento. Cabe señalar que el costo de las obras a realizar por la empresa es de

$ 23’588,468, sin embargo la Entidad no presentó evidencia documental de la realización de las obras anteriormente descritas.

d) La Entidad no cuenta con la documentación que acredite la propiedad legal de los bienes inmuebles que a continuación se indican:

d.1) 15 bienes inmuebles reconocidos en la cuenta contable de “Edificios no habitacionales” subcuenta “Edificios Públicos” por un importe de $ 3’709,854 sin sustento documental, mismos que se encuentran incorporados en el “Registro Inmobiliario Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali” con un valor total de $ 43’106,841

d.2) No se ha concluido con el proceso de regularización de 26 inmuebles que se encuentran incorporados en el “Registro Inmobiliario Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali” (padrón) proporcionado por Oficialía Mayor con un valor total de $ 68’104,370, no reconocidos en registros contables.

d.3) El inmueble en donde se encuentra ubicado el Bosque de la Ciudad, no se encuentra registrado contablemente, no obstante que en fecha 5 de octubre del año 2011 quedó registrado bajo la partida 5611364, de la sección civil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Mexicali, inscrita con la Escritura Pública número 9631, volumen 141, de fecha 25 de octubre del año 1965, que acredita la propiedad a favor del Municipio de Mexicali. Señalando que el valor catastral del bien para el ejercicio 2015 según Sistema de Administración Urbana asciende a un valor de $ 252’198,000 con una superficie de 168,132.000 m2

15. La Entidad presenta al cierre del ejercicio en la cuenta contable “Proveedores por Pagar a Corto Plazo”, sub-cuenta “Proveedores por Pagar a Corto Plazo” un saldo por pagar de $ 166’082,987, el cual se origina por diversos adeudos con proveedores derivados de operaciones efectuadas con la Entidad, señalando que dichos adeudos no se encuentran identificados contablemente por proveedor, por lo que la Entidad proporcionó listado denominado “Relación de Proveedores por concepto del Gasto 2016 (pasivo)” integrando dicho importe; de lo cual se detectó lo siguiente:

a) El listado denominado “Relación de Proveedores por concepto del Gasto 2016 (pasivo)”, se integra de adeudos con proveedores, en el cual se localizaron saldos con una antigüedad de hasta 3 años, por un monto total de $ 10’419,462 correspondiente a 18 proveedores y que a la fecha de la revisión no han sido liquidados, depurados o corregidos contablemente en su caso.

b) Así mismo, en el listado denominado “Relación de Proveedores por concepto del Gasto 2016” (pasivo) se detectaron 12 adeudos con proveedores por un importe

total de $ 83’528,764, señalando que dichos adeudos al 31 de diciembre de 2016 van de $ 886,434 a $ 19’316,415, los cuales a la fecha de la revisión no han sido liquidados, depurados o corregidos contablemente en su caso.

16. De la revisión del "Plan de Operación del Fondo de Pensiones por Jubilación, Fallecimiento e Invalidez para los Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali", el cual se conforma con aportaciones de la Entidad y de los propios Agentes de la Dirección de Seguridad Pública, se detectó lo siguiente:

a) La Entidad durante el ejercicio retuvo vía nómina a los Agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali la cantidad de $ 4’095,431, que corresponde al 1% del sueldo nominal mensual que los Agentes deben aportar al citado Fideicomiso, sin embargo a la fecha de la revisión la Entidad no ha efectuado el entero de 7 catorcenas correspondientes de la 1ra de septiembre a la 2da de noviembre de 2016, por un importe total de $ 1’103,640, así mismo no enteró oportunamente las 19 catorcenas restantes, existiendo atrasos que van de 49 hasta 164 días posteriores a la fecha en que debió enterar dichas retenciones afectando el patrimonio del Fideicomiso, incumpliendo con el Artículo 24 del Plan de Operación del Fondo de Pensiones.

b) La Entidad durante el ejercicio debió aportar al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de $ 8’190,862 que corresponde al 2% del sueldo nominal mensual de los Agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, sin embargo sólo aportó la cantidad de $ 6’900,000 detectándose que al cierre del ejercicio dejó de aportar la cantidad de $ 1’290,862 afectando el patrimonio del Fideicomiso, incumpliendo

con lo establecido en el Artículo 24 del Plan de Operación del Fondo de Pensiones, señalando que aportaciones pagadas se efectuaron con atrasos que van de 22 hasta 169 días posteriores a la fecha en que debieron recibirse. Cabe señalar que durante el ejercicio 2017 la Entidad realizó aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por la cantidad de $ 633,099 correspondientes a la 1ra y 2da catorcena del mes de diciembre de 2016 quedando pendiente de aportar la cantidad de $ 657,763

17. La Entidad no ha efectuado el registro contablemente del adeudo por el servicio de consumo de agua potable, ya que el reporte denominado "Adeudos por consumo de agua potable cuentas centralizadas del Gobierno Municipal al 31 de diciembre de 2016" proporcionado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), la Entidad cuenta con un adeudo por el consumo de agua potable de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 un importe total de $ 111'515,654, por lo que incumple con los postulados básicos de Sustancia Económica y Devengo Contable.

18. La Entidad durante el ejercicio efectuó retenciones vía nómina a empleados del Ayuntamiento de Mexicali por la cantidad total de $ 87'128,115, que corresponde principalmente a las retenciones por concepto de fondos de ahorro, descuentos por préstamos, cuotas, ayudas, adquisición de artículos y créditos otorgados por diversas Asociaciones y Sociedades, detectándose enteró durante el ejercicio la cantidad total de $ 65'327,391 quedando pendiente de enterar al cierre del ejercicio la cantidad total de $ 21'800,724 a dichas Asociaciones y Sociedades. Así mismo se detectó que la Entidad no ha enterado la cantidad total de $ 18'701,225 correspondiente a las retenciones efectuadas durante los ejercicios 2013 y 2015 por

concepto de fondo de ahorro, descuentos por préstamos, cuotas y ayudas, resultando un importe total de $ 40’501,949 pendiente de enterar al cierre del ejercicio. Posteriormente se verificó que durante el ejercicio 2017 la Entidad enteró a las Asociaciones y Sociedades según corresponda, la cantidad total de $ 5’842,333 correspondiente a las retenciones de la 1ra y 2da catorcena del mes de diciembre de 2016 quedando pendiente de enterar la cantidad de $ 34’659,617 al cierre de la auditoria.

Cabe señalar que la Entidad presenta en contabilidad un saldo total al cierre del ejercicio por la cantidad total de $ 42’325,413, que al ser comparado con las retenciones efectuadas vía nomina pendientes de enterar al 31 de diciembre de 2016 por la cantidad total de $ 40’501,949, arroja una diferencia neta de más en contabilidad por la cantidad total de $ 1’823,464 la cual no ha sido aclarada por la Entidad.

19. Derivado de la celebración de 2 (dos) Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Pago en Parcialidades, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), ambos de fecha 29 de noviembre de 2013, la Entidad efectuó registro contable el día 31 de diciembre de 2013 por un monto total de $ 523’789,220 el cual incluye convenio por las cuotas y aportaciones no pagadas hasta la 2da. catorcena de agosto de 2013 por un monto total de $ 364’881,830 más recargos por la cantidad de $ 74’376,558 y otro por descuentos efectuados a los trabajadores derivados de préstamos de ISSSTECALI no pagados hasta la 2da. catorcena de noviembre de

2013 por un monto de $ 71’476,353 más recargos por la cantidad de $ 13’054,479, los cuales debieron pagarse mediante 36 y 18 parcialidades mensuales y sucesivas, respectivamente, por el “Municipio” el último día hábil de cada mes, a partir del 31 de diciembre de 2013, mediante cheque o trasferencia electrónica; conforme a la Tabla de Amortización que forma parte integrante del convenio, se observó la falta de pago de los convenios, quedando expuesto a la cancelación de los convenios y a generación de recargos por mora o intereses, por el incumpliendo con la Cláusula Octava y Tercera de dichos Convenios, respectivamente.

Posteriormente, el día 31 de diciembre de 2014 la Entidad efectuó registro contable en cuentas por pagar la cantidad de $ 81’820,833, la cual corresponde principalmente a retenciones para fondo de pensiones y servicios médicos, así como otras cuentas por pagar a ISSSTECALI, del período de la 1ra. catorcena de septiembre de 2013 a la 2da. catorcena de noviembre de 2013. Cabe mencionar que durante el periodo de diciembre de 2014 a diciembre de 2016, la Entidad efectuó pagos al ISSSTECALI por un monto total de $ 23’551,575 afectando la cuenta por pagar, dichos pagos corresponden principalmente por adeudos de omisiones de aportaciones y cuotas obrero patronal por retiro de años de servicio y por edad por el periodo de abril de 2012 a noviembre de 2013 por jubilación de 104 empleados y adeudos por aportaciones obrero patronal de conformidad a 6 laudos y/o demandas emitidos por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, arrojando un saldo contable por pagar al ISSSTECALI por la cantidad total de $ 494’627,441 correspondiente a cuotas y aportaciones y $ 87’431,037 de recargos.

Cabe señalar que se recibió "Cedula de Cuentas por Cobrar de Cuotas y Aportaciones al 31 de diciembre de 2016" por parte de ISSSTECALI, la cual presenta un saldo de $ 517'327,390 por cobrar al Ayuntamiento de Mexicali (no incluye recargos), mismo que al ser comparado con los registros contables se observa que arroja una diferencia de menos en contabilidad por la cantidad de $ 22'699,949

Es de comentar que los adeudos antes señalados se derivan del incumplimiento con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

20. La Entidad proporcionó Padrón de Deudores de Impuesto Predial presentando saldos por la cantidad de $ 926'347,701 el cual corresponde a rezago un importe de $ 574'648,851 de los ejercicios de 2011 a 2015 y de cuenta corriente del ejercicio 2016 por un importe de $ 230'870,889 e incluyendo el 15% de Impuesto al Fomento Deportivo por un importe de $ 120'827,961, sin embargo, no obstante las gestiones realizadas tendientes a su recuperación, no se ha logrado abatir el rezago.

21. Con respecto al contrato de concesión número AYTO-CTC-SP-01-2010 de fecha 24 de septiembre de 2010 celebrado con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. por concepto de traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Mexicali, se detectó que no efectuó el registro contable de la provisión del pasivo correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 por la cantidad de $ 58'399,630, incumpliendo con los postulados básicos emitidos por el CONAC, en referencia al Devengo contable, consistente en

el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción, entre otros, y Sustancia Económica relativo al reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Cabe mencionar que la Entidad tomó posesión de las instalaciones que habían sido dadas en concesión a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V., esto debido a que en fecha 12 de junio de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, resolvió sentencia de pleno número 194/2010 donde determina lo siguiente: "PRIMERO.- Se declara la nulidad del acta de sesión del Comité de Concesiones del Ayuntamiento de Mexicali del 26 de agosto de 2010… relativo a la convocatoria pública nacional número AYTO-CTC-SP-01-2010, en consecuencia, se declara la nulidad del procedimiento de licitación mencionado a partir de la etapa de registro de los participantes, incluyendo el fallo de adjudicación, al derivar de un procedimiento viciado de origen".

22. La Entidad proyectó un equilibrio presupuestal a través de los presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados por montos iguales de $ 3,333'349,470, observándose al cierre del ejercicio un déficit presupuestal de $ 116'056,135, en razón de que los ingresos reales de $ 3,747'335,334 fueron insuficientes para cubrir los egresos devengados de $ 3,863'391,469 detectándose la falta de acciones que logren mantener el equilibrio presupuestal durante el ejercicio, incumpliendo con el

Articulo 49 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Cabe señalar que la disponibilidad bancaria al cierre del ejercicio es $ 46’412,239, cifra insuficiente para cubrir el déficit de $ 116’056,135; así mismo presenta un pasivo acumulado al 31 de diciembre de 2016 de $ 1,046’579,598, que se integra principalmente por $ 570’733,294 correspondiente a servicios personales y retenciones por pagar, $ 200’000,000 por créditos bancarios solicitados principalmente para el pago de aguinaldos a los trabajadores y empleados del Ayuntamiento de Mexicali, así como deuda publica contratada a corto plazo por $ 39’513,259 correspondiente a las líneas de crédito 9482 y 11036 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC contratada por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

23. La Entidad durante el ejercicio recibió la cantidad de $ 70’617,209 correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2016) y durante su administración se generaron intereses por $ 440,980 según el cierre del Programa de Inversión Publica proporcionado por la Tesorería Municipal, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue por la cantidad total de $ 71'058,189 sin embargo se constató que al 31 de diciembre de 2016 no ejerció recursos del fondo, y se determinó un subejercicio del 40.4%, que equivale a $ 28'718,278, por lo tanto dichos recursos no fueron ejercidos durante el ejercicio 2016; en incumplimiento de los artículos 33, apartado A, inciso I y 49, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cabe señalar que al 30 de septiembre de 2017 ejerció la cantidad de $ 67'916,303 que representaron el 95.6% del disponible, quedando un saldo no ejercido a esta fecha $ 3'141,886 equivalente al 4.4% del recurso autorizado.

24. La Entidad efectuó retenciones por concepto de ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, honorarios y arrendamiento, por la cantidad total de $ 137’562,203, las cuales fueron registradas en la cuenta contable de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, de dichas retenciones efectuó el entero parcial de los meses de enero a abril del ejercicio 2016 por un monto total de $ 17’095,115, quedando pendiente de enterar al cierre del ejercicio la cantidad total de $ 120’467,088, además que al comparar dicho importe con las retenciones pendientes de enterar (saldo contable) al 31 de diciembre de 2016 por la cantidad total de $ 128’808,532, resulta una diferencia neta de más en contabilidad por un importe de $ 8’341,444, es de comentar que la falta de entero incumple con lo establecido en los Artículos 96, 106 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de que generará actualizaciones, recargos y otros accesorios fiscales al momento de efectuar los pagos correspondientes.

25. El Comité de Concesiones y Permisos del Transporte Público del XXI Ayuntamiento de Mexicali emitió en fecha 15 de noviembre de 2016 dictamen de procedencia en favor de diversos permisionarios (taxi), detectándose lo siguiente:

a) El permiso número MXLI-T-1163 emitido en fecha 17 de noviembre de 2016, se observa que el permisionario de dicho permiso es hermano de ex-empleado del Ayuntamiento de Mexicali quien laboró desde el 19 de mayo de 2014 al 1 de marzo

de 2017 con plaza de confianza número 14247 y adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, por lo tanto se autorizó a un permisionario que tenía relación consanguínea en línea colateral con un empleado público municipal.

b) Con respecto a los permisos números MXLI-T-996 y MXLI-T-1162 ambos emitidos en fecha 17 de noviembre de 2016 a favor de dos permisionarios, se detectó que de acuerdo a acta de nacimiento comparte paternidad legal con el Sr. Pedro Aguilera Raygoza y la Sra. Edna Celia Aguilera Raygoza, respectivamente, que a su vez son hermanos de empleado del Ayuntamiento de Mexicali desde el 22 de septiembre de 1990 a la fecha, con plaza de base, número de empleado 5816 y adscrito a la Dirección de Servicios Públicos, así mismo, se detectó que el permiso número MXLI-T-1161 emitido en fecha 17 de noviembre de 2016, el padre del permisionario es empleado del Ayuntamiento de Mexicali desde el 22 de septiembre de 1990 a la fecha, con plaza de base, número de empleado 5816 y adscrito a la Dirección de Servicios Públicos, por lo tanto se están autorizando permisionarios con relación de parentesco colateral por afinidad y por ser cuñada de un empleado público municipal.

Los casos descritos en los incisos anteriores incumplen con lo establecido en el último párrafo del Artículo 166 del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Mexicali, Baja California, el cual establece que en relación al otorgamiento de permisos: "Asimismo, no podrán otorgarse a los miembros del Ayuntamiento, funcionarios o empleados públicos municipales, así como sus cónyuges, parientes

consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el segundo grado y por afinidad."

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes puntos.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Patrimonio y Deuda Pública al

H. Ayuntamiento de Mexicali, B. C., por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Ingresos al H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C., por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 1 y 2 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

TERCERO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos al H. Ayuntamiento de Mexicali, B.C., por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las

observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios o ambos, que en su caso hubieren ocasionado a la entidad fiscalizada en los términos establecidos en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98 Fracción XVI y 103 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, también aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA
SECRETARIO
DIP. DAVID RUVALCABA FLORES
VOCAL
DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ

VOCAL

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ

VOCAL

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS

VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada, se abre el debate del Dictamen número 14 de la Comisión de fiscalización del Gasto Público, en consecuencia se pregunta Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores en contra, solicito a la Diputada Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen número 14, por favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidenta. Se somete a votación nominal el Dictamen número 14 de la Comisión de fiscalización del Gasto Público, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, por las consideraciones hechas en el dictamen que votamos anteriormente, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 14			
COMISIÓN DE FICALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto			

Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino			
Total de votos a favor	22		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidenta con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba.

- - LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara formalmente aprobado el Dictamen número 14 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Continúa con el uso de la voz la Diputada Rosina del Villar para dar lectura al Dictamen número 15 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, adelante Diputada.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Gracias Diputada Presidenta. El Dictamen número 15. Honorable Asamblea: Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DTCF/131/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia de Tecate, Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Resolutivos:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto, del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de la materia.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Es cuanto Presidenta.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 15 DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DICTAMEN NO.15

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio

No. DTCF/131/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Para efectos de la emisión del presente dictamen se efectuó el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente, resultando los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 30 de marzo de 2017 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el día 25 de noviembre de 2016, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, inició la fiscalización de la información que comprende la Cuenta Pública Anual del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracciones I, II, III y IV y 98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el examen se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales en materia de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.

TERCERO.- Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DTMP/98/2017 y

DTMF/370/2017 de fechas 23 de mayo y 13 de noviembre de 2017, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios números DIR/278/2017 y DIR/552/2017 de fechas 8 de junio y 1 de diciembre de 2017, respectivamente, remitidos al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California por la C. Profa. Carmen Yolanda Castro González, en su carácter de Directora de la Entidad.

CUARTO.- Que en fechas 27 de julio y 8 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo las confrontas entre los servidores públicos de la Entidad y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y Penúltimo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, con el objeto de darle a conocer los resultados preliminares de la revisión realizada a la Entidad por el ejercicio fiscal 2016 y se aclararan las observaciones que no quedaron totalmente solventadas en los plazos establecidos en dicha Ley.

QUINTO.- Asimismo, que como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló oficios números DTMP/99/2017,

DTMP/100/2017, DTMF/380/2017 y DTMF/381/2017 de fechas 23 de mayo y 13 de noviembre de 2017, para notificar el pliego de observaciones, a los CC. C.P. Zayd Zecua Conde y L.C.C. Bernardo Ramírez Leyva, quienes se desempeñaron como Directores de la Entidad durante el periodo del 1 de enero al 21 de marzo y del 22 de marzo al 30 de noviembre de 2016, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios sin número de fechas 14 de junio y 30 de noviembre de 2017, remitido al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior, mediante los oficios números DTMP/263/2017, DTMP/264/2017, DTMF/408/2017 y DTMF/409/2017 de fechas 14 de agosto y 24 de septiembre de 2017, se requirió la presencia de los CC. C.P. Zayd Zecua Conde y L.C.C. Bernardo Ramírez Leyva, en su carácter de Ex Directores de la Entidad, en las instalaciones del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, habiendo comparecido los días 14 de agosto, 25 de agosto y 8 de diciembre de 2017, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta Pública durante su periodo de gestión.

SEXTO.- Que durante el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, la Entidad no realizó operación alguna de Deuda Pública.

SÉPTIMO.- Que una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la Entidad, de conformidad con los Artículos 58 al 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios

Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió Informe de Resultados mediante oficio número DTCF/131/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, que contiene la opinión sobre la Cuenta Pública Anual del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

OCTAVO.- Que a partir del día 12 de agosto de 2017, entró en vigor la reforma al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través de la cual se modifica la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por el de Auditoría Superior del Estado de Baja California, otorgándole a ésta las atribuciones para continuar tramitando hasta su terminación, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como los demás asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Octavo del Decreto No. 97 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 28 de julio de 2017, así como en los Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C y 27 Fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la Cuenta Pública Anual tanto del Estado como de los Municipios y demás Entidades fiscalizables.

SEGUNDO.- Que de conformidad al Artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual de las Entidades fiscalizables, previstas en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CUARTO.- Que de conformidad al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, vigente hasta el 11 de agosto de 2017, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California, es responsable de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que están obligados a rendir las

Entidades que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, administración, el manejo o el ejercicio de recursos públicos estatales o municipales, como se establece en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO.- Que durante el ejercicio fiscal de 2016, fungieron como Directores de la Entidad los CC. C.P. Zayd Zecua Conde, L.C.C. Bernardo Ramírez Leyva y Profa. Carmen Yolanda Castro González por los períodos del 1 de enero al 21 de marzo, del 22 de marzo al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

SEXTO.- Que con fundamento en los Artículo 37, 38 y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se hicieron observaciones a las Cuentas Públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, mismas que fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, a excepción de lo siguiente:

1. En relación a los recursos propios autorizados al DIF-Tecate en la partida de gasto, para la ejecución de obras, la Entidad formalizó tres contratos de obra pública para la ejecución de la obra denominada "Rehabilitación de Centro comunitario de

niños y niñas, Colonia Escudero de la Ciudad de Tecate, B.C., mediante tres etapas, por un monto total contratado y pagado de $917,701, mediante los contratos: C-DIF-TKT-2016-001, C-DIF-TKT-2016-002 y C-DIF-TKT-2016-003 adjudicados de manera directa a los contratistas: Arq. Hermes Cazares Pérez, Servicios Integrales Bronco, S.A. de C.V. y Constructora villas Cuchuma, S. de R.L. de C.V., respectivamente, observándose que la entidad realizó pagos en exceso a los contratistas por un importe $10,317, $44,712 y $8,679, respectivamente, que en suma representa un importe pagado en exceso de $63,708, monto que la entidad no requirió a los contratistas, ni presentó evidencia documental de haber obtenido los reintegros correspondientes.

Incumpliendo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

2. La Entidad no cuenta con el beneficio de Servicios médicos para sus empleados con categoría de confianza, encontrándose expuesta a posibles demandas por parte de los trabajadores, por no otorgarles dichos servicios.

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo.

3. Con fecha 14 de septiembre de 2016 la Entidad formalizó un Contrato de Donación Pura y Condicionada a favor de la Universidad Autónoma de Baja California, teniendo como objeto de donación la subdivisión del predio donde se encuentra edificada la Clínica DIF con una superficie de 522.758 m2, inserto en el

Lote 01 de la manzana 533 del Fraccionamiento La Hacienda de la Ciudad de Tecate, Baja California, así como el mobiliario, equipo médico, dental y de laboratorio que forma parte del equipamiento de la Clínica DIF por un total de $1,649,881, observándose que a la fecha aún no ha sido publicada la desincorporación del inmueble objeto de donación así mismo, y los bienes muebles que fueron materia del citado contrato de donación, aún se encuentran incorporados en el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, al 31 de diciembre de 2016.

Incumpliendo con el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, Índice D, Subíndice D.2.5.

4. La Entidad al cierre del ejercicio fiscal 2016, realizó provisiones de pasivo por concepto de finiquitos y liquidaciones a 10 exfuncionarios por un total de $757,820, que incluyen percepciones relativas a: Sueldos, compensaciones, vacaciones pendientes de goce, primas vacacionales, aguinaldos, y en algunos casos también indemnizaciones; observándose la falta de cálculo y registro de retenciones del Impuesto Sobre la Renta a la parte gravable. Cabe señalar que al mes de octubre de 2017 se había pagado la cantidad de $447,360 de dichos finiquitos y liquidaciones, sin realizar las respectivas retenciones de impuestos.

Incumpliendo con el Articulo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

5. La Entidad no ha enterado a las instancias fiscales correspondientes impuestos federales retenidos en ejercicios fiscales anteriores, por un total de $170,502 sin incluir recargos y actualizaciones, integrados de la siguiente forma: Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios $167,788, Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Profesionales $2,158 e Impuesto al Valor Agregado por Honorarios Profesionales $556, mismos que fueron retenidos durante los ejercicios 2013 y 2014.

Incumpliendo con los Artículos 96, Primer Párrafo, 106, Último Párrafo y 116, Último Párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 6 Fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes puntos.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto, del presente Dictamen, deberán

notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de la materia.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA

SECRETARIO

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES

VOCAL

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ

VOCAL

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ

VOCAL

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS

VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN No. 15)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, se declara abierto el debate del dictamen No. 15 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, se pregunta Diputados si desean intervenir en contra, toda vez que no hay oradores en contra, solicito a la Diputada Secretaria someta a votación nominal el dictamen No. 15.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Sigo sus instrucciones Presidenta. Se somete a votación nominal el dictamen No. 15 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, con las consideraciones hechas en los dictámenes precedentes, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Algún Diputado que falte por votar?, de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA:

10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 15			
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César			
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan			
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis			
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal			
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		

Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino			
Total de votos a favor	19		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente, con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el dictamen.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, se declara aprobado el dictamen No. 15 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Continua con el uso de la voz la Diputada Rosina del Villar, para dar lectura al dictamen No. 16 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; adelante Diputada.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Gracias Diputada Presidenta. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DTCF/130/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto

en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio a la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto, deberán notificarse a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la "Ley de Responsabilidades que corresponda".

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

Es cuanto Presidenta.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 16 DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DICTAMEN NO. 16

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DTCF/130/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Para efectos de la emisión del presente dictamen se efectuó el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente, resultando los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 31 de marzo de 2017 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual de la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el día 7 de diciembre de 2016, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, inició la fiscalización de la información que

comprende la Cuenta Pública Anual de la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracciones I, II, III y IV y 98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el examen se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales en materia de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.

TERCERO.- Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DTO/141/2017, DTPP/258/2017 y DTPF/388/2017 de fechas 12 de junio, 31 de julio, y 23 de noviembre de 2017, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los

oficios números ADMI/231/2017, ADMI/308/2017 y ADMI/480/2017 de fechas 27 de junio, 14 de agosto de 2017 y 1 de diciembre de 2017, respectivamente, remitidos al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California por el C. Arq. Alfonso Maceira Contreras, en su carácter de Director General de la entidad.

CUARTO.- Que en fechas 18 de julio de 2017, 17 de noviembre de 2017 y 6 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las confrontas entre los servidores públicos de la Entidad y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y Penúltimo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, con el objeto de darle a conocer los resultados preliminares de la revisión realizada a la Entidad por el ejercicio fiscal 2016 y se aclararan las observaciones que no quedaron totalmente solventadas en los plazos establecidos en dicha Ley.

QUINTO.- Asimismo, que como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló oficio número DTO/142/2017, DTPP/385/2017 y DTPF/389/2017 de fechas 13 de junio de 2017, 17 y 27 de noviembre de 2017, respectivamente, para notificar el pliego de observaciones, al

C. Lic. Juan Rivera Medellín, quien se desempeñó como director General de la Entidad durante el periodo del 1 de enero de 2016 al 15 de diciembre de 2016, siendo atendido el primero, a través de escrito libre, sin número, de fecha 3 de julio de 2017, y los dos siguientes a través de escrito libre, sin número con fecha 6 de diciembre de 2017, remitidos al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Cabe señalar que el Exdirector General de la Entidad, no fue requerido para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta Pública durante el período de su gestión, conforme a lo establecido en los Artículos 7 Fracción III, 38 Párrafo Tercero, 98 Fracción XXII, Numerales 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; **así como en los Artículos 12 Fracción XVI, 14 Fracción XI, 27 Fracción XI, 30 Fracción VII y 37 Fracción V del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California,** ordenamientos aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios toda vez que mediante escrito de solventación recibido con fecha 6 de diciembre de 2017, manifestó adherirse a todas y cada una de las manifestaciones de contestación realizadas por los actuales funcionarios de la Entidad en el acto de confronta.

SEXTO.- Que durante el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, la Entidad no realizó operación alguna de Deuda Pública.

SÉPTIMO.- Que una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la Entidad, de conformidad con los Artículos 58 al 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió Informe de Resultados mediante oficio número DTCF/130/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, que contiene la opinión sobre la Cuenta Pública Anual de la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

OCTAVO.- Que a partir del día 12 de agosto de 2017, entró en vigor la reforma al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través de la cual se modifica la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por el de Auditoría Superior del Estado de Baja California, otorgándole a ésta las atribuciones para continuar tramitando hasta su terminación, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como los demás asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Octavo del Decreto No. 97 publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Baja California de fecha 28 de julio de 2017, así como en los Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C y 27 Fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la Cuenta Pública Anual tanto del Estado como de los Municipios y demás Entidades fiscalizables.

SEGUNDO.- Que de conformidad al Artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual de las Entidades fiscalizables, previstas en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CUARTO.- Que de conformidad al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, vigente hasta el 11 de agosto de 2017, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California, es responsable de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que están obligados a rendir las Entidades que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, administración, el manejo o el ejercicio de recursos públicos estatales o municipales, como se establece en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO.- Que durante el ejercicio fiscal de 2016, fungieron como Directores Generales de la Entidad los CC. Lic. Juan Rivera Medellín y Arq. Alfonso Maceira Contreras, por el período del 1 de enero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 y del 16 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

SEXTO.- Que con fundamento en los Artículo 37, 38 y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se hicieron observaciones a las Cuentas Públicas de la

Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., mismas que fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, a excepción de lo siguiente:

1. La Empresa Baja California Rail Road Inc., no ha realizado el pago total correspondiente a la Entidad por concepto de participaciones del 7%, pactadas en la cláusula Novena del contrato de servicios y del 7.75% pactado en la cláusula 8 conforme al convenio modificatorio, celebrados entre ambas partes, con fecha del 16 de mayo de 2012 y 28 de enero de 2016, respectivamente, importe que al 31 de diciembre de 2016 asciende a $149,068 dólares que representan un importe por cobrar a favor de la Entidad, que valuado al tipo de cambio de 20.6640 correspondiente al 30 de diciembre de 2016, equivale a $3,080,341 en moneda nacional; dicho importe incluye el impuesto al valor agregado, según sus registros contables.

Debido al incumplimiento anterior por parte del prestador de servicios, ADMICARGA no proporcionó evidencia de haber notificado dicho incumplimiento, tal y como se establece en la Cláusula Décima Séptima del contrato de servicios celebrado entre ambas partes con fecha del 16 de mayo de 2012.

Cabe señalar que con fecha de 13 de noviembre de 2017, la Entidad y Baja California Rail Road Inc., celebraron convenio de pago con el objeto de reconocer el cumplimiento al "Acuerdo Relativo a la Aplicación de Penas Convencionales" celebrado entre las partes en fecha 18 de enero de 2016, resultando un adeudo a cargo de la empresa y a favor de Admicarga por la cantidad de $188,657.49 dólares, realizando la empresa un primer pago a la firma de dicho convenio por $30,000.00

dólares, el resto a pagarse mediante 22 pagos mensuales iguales a partir del 20 de diciembre de 2017 y concluyendo el 20 de septiembre de 2019.

2. De la revisión y análisis a las cuentas por pagar a la Entidad, se observan saldos provenientes del ejercicio 2011 por concepto de servicios transportación de carga al anterior prestador del servicio de apoyo técnico y operativo CARRIZO GORGE RAILWAY, INC., el pasivo se integra por: (cifras en dólares) ....

CONCEPTO	IMPORTE	
Conciliación de carros de septiembre a noviembre de 2011	$ 91,453	(1)
Conciliación de carros de Diciembre de 2011	4,024	(2)
Total	$ 95,477	

(1) Conciliación firmada en fecha 29 de diciembre de 2011
(2) Conciliación firmada en fecha 30 de diciembre de 2011

En la Cláusula cuarta del contrato modificatorio del 16 de febrero de 2009, del contrato de servicios de apoyo técnico y operativo para la operación y explotación de la Vía General de Comunicación Tijuana-Tecate con CARRIZO GORGE RAILWAY, INC., menciona que las partes pactan que a partir de 2009 las conciliaciones se efectuarán por periodos semanales y los pagos se efectuarán el día quince o el día último del mes siguiente, dependiendo según sea el caso de la quincena del mes conciliado.

En consecuencia a lo antes mencionado, existe la posibilidad de la exigencia de cobro por la vía legal del total adeudado por el incumplimiento del contrato referido, que al 31 de diciembre de 2016 es por $95,477 dólares, valuado al tipo de cambio de $20.6640 equivale a $1,972,937 moneda nacional.

Incumpliendo la Cláusula cuarta de contrato modificatorio al contrato de servicios de apoyo técnico y operativo para la operación y explotación de la Vía General de Comunicación Tijuana-Tecate, celebrado con fecha del 16 de febrero de 2009.

3. De la revisión y análisis a las cuentas por pagar, se observan saldos provenientes del ejercicio 2011 por concepto de retenciones para mantenimiento al entonces prestador de servicios de apoyo técnico y operativo CARRIZO GORGE RAILWAY, INC., a continuación se integran las retenciones efectuadas: (cifras en dólares)

CONCEPTO	Importe Retenido	Pagado en 2011	Pagado en 2013	Saldo al 31-dic-2016	
Retención efectuada del mes de Agosto (túnel 3)	$ 30,000	$ -	$ 4,242	$ 25,758	(1)
Retención efectuada en conciliación del mes de julio de 2011 (para rieles)	16,405	16,405		-	(2)
Retención efectuada en conciliación del mes de	35,000	-	35,000	-	(3)
	$ 81,405	$ 16,405	$ 39,242	$ 25,758	

1. Conciliación firmada en fecha 22 de diciembre de 2011.
2. Conciliación firmada en fecha 05 de octubre de 2011.
3. Conciliación firmada en fecha 05 de octubre de 2011.

En la Cláusula cuarta del contrato modificatorio de servicios de apoyo técnico y operativo para la operación y explotación de la Vía General de Comunicación Tijuana-Tecate con CARRIZO GORGE RAILWAY, INC., firmado el 16 de febrero de 2009, se menciona que las partes pactan que a partir de 2009, las conciliaciones se efectuarán por periodos semanales y los pagos se efectuarán el día quince o el día último del mes siguiente, según sea el caso de la quincena del mes conciliado.

En consecuencia, se observa que la obligación de pago según el contrato citado que venció el 31 de diciembre de 2011 y en relación a las erogaciones que se están realizando para mantenimiento correctivo de la vías y túnel 3 con cargo a las retenciones de CARRIZO, se han efectuado sin autorización del mismo, existiendo la

posibilidad de una demanda por el incumplimiento del contrato referido y que éste solicite el pago del total de $65,000 dólares retenidos, que al 31 de diciembre de 2016 valuado al tipo de cambio de $20.6640 equivale a $1,343,160 en moneda nacional.

Incumpliendo con el inciso a) e inciso b) de la Cláusula cuarta del contrato modificatorio al contrato de servicios de apoyo técnico y operativo para la operación y explotación de la Vía General de Comunicación Tijuana-Tecate, celebrado con fecha del 16 de febrero de 2009.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes puntos.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio a la Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate, B.C., por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto, deberán notificarse a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso se

finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la "Ley de Responsabilidades que corresponda".

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA

SECRETARIO

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES

VOCAL

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ

VOCAL

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ

VOCAL

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS

VOCAL

Estas firmas corresponden al Dictamen No. 16 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, dado en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

(CONCLUYE DICTAMEN No. 16)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; se declara abierto el debate del dictamen No. 16 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, en consecuencia, se pregunta Diputados si desean intervenir en contra, de no ser así, solicito a la Diputada Secretaria someta a votación nominal.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su permiso Presidenta. Se somete a votación nominal el dictamen No. 16 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, con las consideraciones hechas en los dictámenes precedentes, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:¿Algún Diputado que falte por votar?, de no ser así, ¿Falta algún Diputado por votar? De no ser solicito, continuamos con la Mesa Directiva.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA:

10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 16			
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César			
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan			
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis			
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal			
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		

Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino			
Total de votos a favor	19		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidenta, con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el dictamen.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Se declara aprobado el dictamen No. 16 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Continua con el uso de la voz la Diputada María Luisa Villalobos, para dar lectura al dictamen No. 17 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; adelante Diputada.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DICTAMEN 17

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio

No. DECF/124/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto a la Cuenta Pública

Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de **enero** de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, y Deuda Pública al H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos al H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el periodo comprendido de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 1 al 8 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

TERCERO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Patrimonio dell Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 9 al 14 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las

observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios o ambos, que en su caso hubieren ocasionado a la entidad fiscalizada en los términos establecidos en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 98 Fracción XVI y en el 103 la Fracción VIII de la Ley de Fiscalización de los Recursos Públicos del Estado de Baja California y sus Municipios, también aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

Es cuanto.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 17 DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DICTAMEN NO. 17

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DECF/124/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Para efectos de la emisión del presente dictamen se efectuó el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente, resultando los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 31 de marzo de 2017 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el día 30 de noviembre de 2016, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, inició la fiscalización de la información que comprende la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Baja California; así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracciones I, II, III y IV y 98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el examen se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales en materia de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.

TERCERO.- Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante el oficio número DEO/92/2017 de fecha 26 de julio de 2017, mismo que fue atendido, a través del oficio número DSPM/92/2017, de fecha 09 de agosto de 2017, remitido al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California por el C. Ing. Salvador González Robles Director de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura del XXII Ayuntamiento de Ensenada, el cual fue ratificado a la Auditoría Superior del Estado de Baja California , mediante oficio número PM/0013/2018 de fecha 12 de enero de 2018 por el C. Lic. Marco

Antonio Novelo Osuna, en su carácter de Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.

Así mismo, atendiendo a lo establecido en los dos últimos ordenamientos citados en el párrafo anterior aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoria Superior del Estado de Baja California formulo Pliegos de Observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DEP/121/2017 y DEF/142/2017 de fechas 11 de octubre y 2 de noviembre de 2017, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios números PM/0775/10/2017 y TM/4569/11/2017 de fecha 26 de octubre y 17 de noviembre de 2017, respectivamente, remitidos a la Auditoria Superior del Estado de Baja California, por los C. Lic. Marco Antonio Novelo Osuna y C.P. Guadalupe Méndez Maldonado, en su carácter de Presidente Municipal y Tesorero Municipal, respectivamente.

CUARTO.- Que en fechas 18 de septiembre de 2017, 17 y 30 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo las confrontas entre los servidores públicos de la Entidad y de la Auditoria Superior del Estado de Baja, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y Penúltimo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, con el objeto de darle a conocer los resultados preliminares de la revisión realizada

a la Entidad por el ejercicio fiscal 2016 y se aclararan las observaciones que no quedaron totalmente solventadas en los plazos establecidos en dicha Ley.

QUINTO.- Asimismo, que como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló oficio número DEO/93/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, para notificar el pliego de observaciones, al C. Mtro. Gilberto Antonio Hirata Chico , quien se desempeñó como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, el cual no fue atendido.

Así mismo, atendiendo a lo establecido en los dos últimos ordenamientos aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Séptimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a los Ex Titulares o aquellos que fueron responsables y que tienen relación con el manejo de la Cuenta Pública de la Entidad, mediante los oficios números DEP/122/2017 y DEP/141/2017 de fechas 25 de octubre y 6 de noviembre de 2017, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios sin números de fechas de recibido 17 de noviembre y 28 de noviembre de 2017, respectivamente, remitidos a la Auditoria Superior del

Estado de Baja California por el C. Mtro. Gilberto Antonio Hirata Chico, en su carácter de Ex presidente Municipal de la Entidad.

Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas anteriormente, mediante el oficio número DECF/001/2018 de fecha 22 de enero de 2018, se requirió la presencia del C. Mtro. Gilberto Antonio Hirata Chico, en su carácter de Ex Presidente de la Entidad, en las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado de Baja California, habiendo comparecido el día 31 de enero de 2018, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta Pública durante su periodo de gestión.

SEXTO.- Que una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la Entidad, de conformidad con los Artículos 58 al 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió Informe de Resultados mediante oficio número DECF/124/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, que contiene la opinión sobre la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California para por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEPTIMO.- Que a partir del día 12 de agosto de 2017, entró en vigor la reforma al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través de la cual se modifica la denominación del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado por el de Auditoría Superior del Estado de Baja California, otorgándole a ésta las atribuciones para continuar tramitando hasta su terminación, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como los demás asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Octavo del Decreto No. 97 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 28 de julio de 2017, así como en los Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C y 27 Fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la Cuenta Pública Anual tanto del Estado como de los Municipios y demás Entidades fiscalizables.

SEGUNDO.- Que de conformidad al Artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual de las Entidades fiscalizables, previstas en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CUARTO.- Que de conformidad al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, vigente hasta el 11 de agosto de 2017, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California, es responsable de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que están obligados a rendir las Entidades que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, administración, el manejo o el ejercicio de recursos públicos estatales o municipales, como se establece en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO.- Que durante el ejercicio fiscal de 2016, fungieron como Presidente Municipal la Entidad los CC. Mtro. Gilberto Antonio Hirata Chico, Lic. Marco Antonio Novelo Osuna por el período del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 y del 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

SEXTO.- Que con fundamento en los Artículos 37, 38 y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se hicieron observaciones a las Cuentas Públicas del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, mismas que fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, a excepción de lo siguiente:

1. Respecto de los recursos ejercidos del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG), se observa lo siguiente:

a) No obstante que la Entidad recibió en tiempo y forma las ministraciones del Subsidio por un monto de $ 60’988,014, presenta al cierre del ejercicio un monto devengado de $ 51’731,819; resultando un total de recursos no ejercido de $ 9´256,195, que representa el 15.2% del monto asignado, mismo que al mes de septiembre de 2017 no ha sido reintegrado.

Cabe señalar, que el importe a reintegrar difiere con el reporte presentado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, denominado

"Cédula de registro de la aplicación de los recursos FORTASEG cierre 2016", que presenta un importe no ejercido de $ 9'752,409, presentando una diferencia no aclarada de $ 496,214.

b) Del monto devengado según registros contables por un monto de $ 51´731,819, la Entidad solamente pagó un importe de $ 22,215,697 quedando un pasivo por un monto de $ 29'516,122 que continúa sin ser pagado al mes de octubre de 2017; y la Entidad no cuenta con recursos disponibles en la cuenta bancaria especifica.

Adicionalmente, dentro de la cuenta de pasivo "Provisiones FORTASEG 2016", mediante póliza de diario 210 de fecha 31 de diciembre de 2016, se registró la adquisición de 144 cargadores de arma corta calibre 0.40 mm, 65 cargadores de arma larga calibre 0223 mm, 97 cargadores de arma larga calibre 0223 mm; por un monto de $ 249,111, anexándose la cotización SIDCAM-GOB-104/2016, afectando la cuenta de gastos "Materiales para armamento de seguridad pública"; desconociéndose si la operación fue concretada con la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que no se tiene evidencia de que los bienes fueron entregados.

c) Con fecha 22 de enero de 2016, la Entidad aperturó la cuenta bancaria BBVA BANCOMER número 0104053214, para el manejo del FORTASEG al amparo del Convenio específico de coordinación y adhesión para el otorgamiento del subsidio, el cual fue celebrado el 26 de enero de 2016; observándose que de los recursos recibidos por $ 60'988,014, se transfirieron recursos por un monto de $ 47'953,500 a otras cuentas bancarias de la Entidad que se utilizan

para el pago de gasto corriente y nómina de los empleados del Ayuntamiento; adicionalmente, en la cuenta bancaria se recibieron depósitos de otras fuentes de financiamiento por $ 9’262,274.

El saldo bancario al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta específica aperturada para el control de los recursos es de $ 79,571.

De lo anterior, se desprende que la Entidad dispuso recursos del Subsidio a fines distintos, ya que traspasó a cuentas bancarias utilizadas para gasto corriente un monto de $ 47’953,500, efectuando reembolsos por un total de $9’262,274, quedando un monto pendiente de reintegrar a la cuenta bancaria de $ 38’691,226, sin que a la fecha de auditoría fueran reintegrados; permaneciendo la cuenta bancaria al mes de julio de 2017 con un saldo de $ 79,576.

Por lo anterior, se incumple con el Artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 69 Párrafo Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 1 y 74, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 9, 10 y 41 párrafo primero, 47, fracción I y III, de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de enero de 2016; Cláusula Tercera, Fracciones A, D, E del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG y

Numeral 2 del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG.

d) Es de señalarse que los productos financieros generados al mes de diciembre de 2016 por la cantidad de $ 2,189 no fueron ejercidos para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y acciones establecidas en el Anexo Técnico.

2. Mediante convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de fecha 22 de abril de 2016, se destinaron recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al Ayuntamiento de Ensenada por un monto de $ 27’000,000, que menos deducciones por concepto de administración y fiscalización federales por un monto de $ 297,000, queda un neto a recibir de $ 26’703,000, del cual, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado solamente entregó un monto de $ 26’564,881, quedando una diferencia no aclarada de $ 138,119, observándose además lo siguiente:

2.1 Destino de los recursos.

a) Con fecha 22 de febrero de 2016 la Entidad aperturó la cuenta bancaria Scotiabank Inverlat 13104809947 en la cual recibió recursos por un monto de $ 26’564,881 más rendimientos y bonificaciones generados al 31 de

diciembre de 2016 por $ 41,401, los cuales serían utilizados para la ejecución de obras y acciones en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, la Entidad destinó recursos a fines distintos a lo dispuesto en el convenio celebrado, adicionalmente, en la cuenta bancaria se recibieron depósitos de otras cuentas bancarias de la Entidad.

El saldo bancario al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta específica aperturada para el control de los recursos es de $ 22,600.

De lo anterior, se desprende que la Entidad dispuso los recursos a fines distintos, ya que traspasó un monto de $ 22’300,000 a cuentas bancarias utilizadas para gasto corriente, sin que a la fecha de auditoría fueran reintegrados; permaneciendo la cuenta bancaria al mes de agosto de 2017 con un saldo de $ 22,600.

Por lo anterior, la Entidad incumplió con la Cláusula Cuarta del convenio, ya que la cuenta bancaria aperturada para el ejercicio del recurso no fue específica, así como en su Cláusula Quinta, que establece que por ningún motivo los recursos se podrán destinar a gasto corriente a excepción de los gastos indirectos; adicionalmente incumple con los numerales 15, tercer párrafo; 19 y 20 así como el Capítulo VII. Del control, trasparencia y rendición de cuentas, en su Numeral 25 de los Lineamientos de Operación del Fondo.

b. Adicionalmente, es de señalarse que se efectuaron contrataciones de obra pública, así como de gastos indirectos, por la cantidad de $ 25’670,488; de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, efectuó pagos por $ 4’281,786 que corresponden al pago del anticipo por la cantidad

de $ 4’078,573 y pagos de gastos indirectos por $ 203, 313, mismos que al mes de agosto de 2017, no se han amortizado.

Así mismo al 31 de diciembre de 2016, efectuó registro contable de provisiones de pasivo por concepto de anticipos a contratos por un total de $ 6’578,261, de los cuales la cantidad de $ 3’345,722 corresponden al 30% del anticipo, que al mes de agosto de 2017 no se han amortizado, y el importe de $ 2’420,113 corresponde a la estimación No. 1 de la construcción de las bibliotecas del Ejido el Porvenir y Vista Hermosa, del cual el importe de $ 1’033,281, los trabajos ya se encuentran devengados y $ 1’386,832 relativos al Porvenir únicamente se encuentran devengados los trabajos preliminares por $ 71,132, cimentación por $ 187,435 y otros por $ 812,426.

Adicionalmente, es de señalarse, que existe una diferencia de $ 14’810,441, de los cuales la Entidad no proporciona información que las obras fueron efectivamente ejecutadas.

Por lo antes señalado, se incumple con el Artículo 7, Fracción III en su penúltimo párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 100 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California y Artículos 46 y 47, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

3. La Entidad recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISM-DF)

por la cantidad de $ 89’645,630, del cual se desprenden las siguientes observaciones:

3.1 Registro e información contable y presupuestaria.

a. Con fecha 22 de enero de 2016, la Entidad aperturó la cuenta bancaria SCOTIABANK-INVERLAT número 13104809858, para el manejo del Fondo FISM-DF; el total de recursos federales recibidos durante el ejercicio 2016, asciende a la cantidad de $ 89’645,630; en esta cuenta también se recibieron transferencias de otras cuentas bancarias de la entidad por la cantidad de $ 17’838,502; recursos sobre los cuales se efectuaron transferencias a otras cuentas bancarias.

El saldo bancario al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta específica aperturada para el control de los recursos es de $ 120,623.

De lo anterior, se desprende que la Entidad dispuso recursos por un monto de $ 89’675,000, (incluye rendimientos generados) a fines distintos a los previstos en dicho fondo, ya que los traspasó a cuentas bancarias utilizadas para gasto corriente, sin que a la fecha de auditoría fueran reintegrados; permaneciendo la cuenta bancaria al mes de junio de 2017 con un saldo de $ 112,308.

Por lo anterior, se incumple con el Artículo 69 Párrafo Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

b) La cuenta bancaria generó rendimientos al 31 de diciembre de 2016, por la cantidad de $ 150,050 los cuales no fueron destinados al cumplimiento de los fines del fondo.

Por lo anterior, incumple con los Artículos 1 Párrafo Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3.2 Destino de los recursos

Mediante sesión ordinaria de Cabildo de fecha 22 de junio de 2016, se aprobó listado de selección de obras y acciones, que ascienden a $ 89’645,630, para ejecutarse con recursos del Fondo.

Del importe total autorizado, la Entidad al 31 de diciembre, efectuó contrataciones por $ 39’511,648; no proporcionando evidencia de contrataciones de obra pública y acciones por un monto de $ 50’133,982.

Es de señalarse que las contrataciones efectuadas por $ 39’521,097, la entidad provisionó en pasivo al 31 de diciembre de 2016, la cantidad de $ 11’593,544, mismo que se integra del anticipo a contratistas por $ 11’394,044, y gastos indirectos el importe de $ 208,949, de los cuales en el mes de enero de 2017 se efectuó únicamente un pago por la cantidad de $ 9,449.

4. a Entidad suscribió convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura de fecha 30 de junio de 2016, por un importe de $ 4’796,163, para llevar a cabo el proyecto cultural de Rehabilitación del Edificio de Archivo Histórico en la Calle Tercera y Gastélum; al respecto la Entidad no dio cumplimiento a las siguientes cláusulas:

Cláusula primera: se incumplió con la obligación de realizar la obra de Rehabilitación de Edificio de Archivo Histórico en la Calle Tercera y Gastélum, toda vez que dichos recursos federales fueron transferidos a otras cuentas bancarias destinadas para

gasto corriente y nóminas, por un monto de $ 4’500,000, como se detalla a continuación:

FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA BANCARIA DE TRASPASO	USO	IMPORTE DEL TRASPASO	PÓLIZA DE REGISTRO	FECHA
15-ago-16	BBVA BANCOMER No. 0193853535	GENERAL (GASTO CORRIENTE)	$ 1’500,000	PI-76	15-ago-16
22-ago-16	BANAMEX No. 964 128795	NÓMINA	3’000,000	PI-101	22-ago-16
	TOTAL TRANSFERIDO A OTRAS CUENTAS BANCARIAS		$ 4,500,000		

Cláusula Tercera incisos d):

"Elaborar y remitir a la Secretaría, informes trimestrales, partiendo de la fecha de entrega del recurso y hasta la conclusión del proyecto cultural. Los informes deberán contener los aspectos financieros, las actividades relativas al ejercicio, la aplicación de los recursos y el soporte documental correspondientes, tales como, diseños, planos, fotografías, proyectos ejecutivos, comprobantes correspondientes y demás que acrediten el desarrollo del proyecto cultural objeto del Convenio, con el fin de verificar su correcta aplicación."

Cláusula Tercera incisos e):

Resguardar la documentación original comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos.

Cláusula Tercera incisos g):

"En caso de existir remanentes de los recursos públicos federales aportados, reintegrarlos a la Secretaría, junto con los rendimientos que se hubieren generado, para su entero a la Tesorería de la Federación."

Asimismo, se actualiza lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda, que refiere: El incumplimiento por parte de "el Municipio" al contenido de las clausulas previstas en el presente Convenio, será motivo de su rescisión y de la devolución de la cantidad transferida por la Secretaría, así como los rendimientos que se hubieren generado.

Adicionalmente, es de señalarse que:

El saldo bancario al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. No. 13104809971, aperturada para el control de dichos recursos únicamente es de $ 309,866.

De lo anterior, se desprende que la Entidad dispuso los recursos en fines distintos a lo previsto en dicho convenio, ya que los traspasó a cuentas bancarias utilizadas para gasto corriente, sin que a la fecha de auditoría fueran reintegrados, por un monto total de $ 4'813,011, permaneciendo la cuenta bancaria al mes de julio de 2017 con un saldo de $ 313,011.

Por todo lo anterior se incumple con el Artículo 69 Párrafo Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Artículo 1 Párrafo Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 100 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículos 46 y 47, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California; así como en la Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación celebrado.

5. Mediante Convenio suscrito entre el Ejecutivo Estatal con el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de fecha 8 de agosto de 2016, la Entidad obtuvo recursos del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", por un monto de $ 5'500,000, para ser destinados exclusivamente en la ejecución de los proyectos de Desarrollo Regional "Pavimentación de Avenida Néstor Olivas entre calles primera y segunda, colonia Ex Ejido Chapultepec" por un monto de $ 2'000,000 y "Construcción de Subestación de bomberos en Nueva Era en San Quintín" por un monto de $ 3'500,000; observándose lo siguiente:

a. Con fecha 22 de febrero de 2016, la Entidad aperturó con la institución bancaria Scotiabank Inverlat, la cuenta 13104809955 para el manejo de los recursos; sin embargo, se utilizó en conceptos distintos a lo previsto en dicho convenio por un monto de $ 3'500,000 ya que la Entidad los transfirió a otras cuentas bancarias destinadas para gasto corriente, como se detalla a continuación:

FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA BANCARIA DE TRASPASO	USO	IMPORTE TRASPASADO	PÓLIZA DE REGISTRO	FECHA
14-sep-16	BANAMEX No. 964 128795	NÓMINA	$ 1'500,000	PI-55	14-sep-16
11-nov-16	HSBC 4059618769	Nómina empleados municipio	2'000,000	PI-42	11-nov-16
	TOTAL TRANSFERIDO A OTRAS CUENTAS BANCARIAS		$ 3,500,000		

El saldo bancario al mes de agosto de 2017 en la cuenta especifica aperturada para el ejercicio del recurso, es de $ 1'941,856 que incluye rendimientos por $ 30,507; asimismo se observa que, en razón del incumplimiento al convenio celebrado no se ha reintegrado a la instancia federal el total del recurso recibido.

b. La Entidad recibió recurso por un monto de $ 5’411,365, mediante tres ministraciones, en virtud de haberse efectuado descuentos por concepto de administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como para la Auditoría Superior de la Federación por concepto de fiscalización, por un total de $60,500; existiendo una diferencia de $ 28,135 recibido de menos no aclarado por la Entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, incumple con los Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 100 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículos 46 y 47, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California; Artículo 69 Párrafo Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 1 Párrafo Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Clausulas Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima del Convenio celebrado, así como Numerales 5, 11, 14, 17 de los Lineamientos de Operación publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de enero de 2016.

6. Mediante Convenio suscrito entre el Ejecutivo Estatal con el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de fecha 8 de agosto de 2016, la Entidad obtuvo recursos del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, Programas Regionales 2016, por un monto de $ 2’935,200, para ser destinados exclusivamente en la ejecución del

proyecto "Rehabilitación de gimnasio en la unidad deportiva Vicente Guerrero de la Colonia Hidalgo"; observándose lo siguiente:

a. Con fecha 24 de agosto de 2016, la Entidad aperturó con la institución bancaria Scotiabank Inverlat, la cuenta 13104830776 para el manejo de los recursos, mismos que fueron recibidos en tres ministraciones por un monto total de $ 2'920,018; sin embargo, se utilizó en conceptos distintos a lo previsto en dicho convenio por un monto de $ 1'000,000, ya que la Entidad los transfirió a otra cuenta bancaria destinada para gasto corriente, como se detalla a continuación:

FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA BANCARIA DE TRASPASO	USO	IMPORTE TRASPASADO	PÓLIZA DE REGISTRO	FECHA
14-sep-16	BANAMEX No. 964 128795	NÓMINA	$ 1'000,000	PI-55	14-sep-16
	TOTAL TRANSFERIDO A OTRAS CUENTAS BANCARIAS		$ 1,000,000		

El saldo bancario al mes de agosto de 2017 en la cuenta especifica aperturada para el ejercicio del recurso, es de $ 1'919,908; asimismo se observa que, en razón del incumplimiento al convenio celebrado, no se ha reintegrado a la instancia federal el total del recurso recibido.

b. La Entidad recibió recursos por un monto de $ 2'920,018, existiendo una diferencia de menos de $ 15,182, no aclarado por la Entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, incumple con los Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 100 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 69

Párrafo Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 1 Párrafo Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 46 y 47, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California; así como en la Cláusula Tercera, Cuarta y Quinta del Convenio celebrado.

7. Se efectuaron pago de liquidaciones por $ 5’854,023, correspondiente a 19 empleados de los cuales se integra de Prima de Antigüedad por $ 895,197, Gratificaciones por $ 982,421, Vacaciones proporcionales por $ 996,957, Prima Vacacional por $ 231,168, Indemnizaciones (3 Meses) por $ 1’315,531, 20 días por año por $ 954,670 e indemnizaciones por $ 478,079, al personal que dejó de prestar sus servicios durante el ejercicio 2016, para lo cual se procedió a efectuar la revisión de las mismas tomando como fundamento los Artículos 51, Fracción I, y 56 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Además, en los oficios de nombramiento de los funcionarios, se establece el 30 de noviembre de 2016 como fecha de conclusión del cargo. Observándose que la Entidad efectuó pagos improcedentes en las liquidaciones por un total de $ 2´748,280, los cuales se integran por concepto de “Indemnización Constitucional” equivalente a 3 meses de sueldo por $ 1’315,531, así como el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio por $ 954,670 e indemnizaciones por $ 478,079, establecido en el artículo 56 de la Ley antes mencionada, toda vez que por la naturaleza de la separación

laboral, únicamente correspondía el pago del sueldo devengado a la fecha de la baja, y el pago proporcional de aguinaldos, vacaciones y prima vacacional, así como el pago de una prima de antigüedad, de conformidad con los Artículos 32, 33, 34, 44 y 51, Fracción XI, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

8. En relación a la revisión de la adquisición de materiales y servicios, registradas en la subcuenta "Ayudas Sociales a personas" por un monto de $ 54'543,911, se observa lo siguiente:

8.1) Por un monto de $ 47'417,224, no se efectuó el procedimiento de licitación pública.

8.2) En adquisiciones por un importe de $ 7'126,687, no se obtuvieron por lo menos 3 cotizaciones.

8.3) No se proporcionaron los expedientes sociales que acrediten fehacientemente la entrega-recepción de los bienes/insumos a la población abierta, así mismo se observa la falta de normatividad interna- manuales que regule el beneficio a dicha población abierta.

De todo lo anterior se observa el incumplimiento al Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico para el Estado de Baja California, así como de los Artículos 8 Fracciones II y IV, y 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios, del Municipio de Ensenada.

9. Con respecto al rubro de bienes muebles, se observó lo siguiente:

a. La Entidad proporcionó padrón general de bienes muebles emitido por la Dirección de Bienes Patrimoniales que sustentan los saldos al cierre del ejercicio de 2016 por la cantidad de $ 523’730,504, el cual al compararlo con registros contables que asciende a la cantidad de $ 531’383,577, existe una diferencia de $ 7’653,073, de más en registros contables, no aclarada por la Entidad.

b. En el citado padrón se detallan 539 bienes muebles bajo el concepto de no localizados sigla “L” que ascienden a $ 12’260,961, de los cuales en su mayoría corresponde a bienes muebles de la dirección de seguridad pública municipal, correspondientes a los ejercicios 1999-2015; así mismo la Entidad no presenta documentación que respalde el trabajo de investigación y/o depuración para efecto de su aclaración y en su caso proceder a la baja correspondiente.

c. Es de señalarse que en el citado padrón incluye un total de 87 Bienes muebles con el estatus para darse de baja sigla “B” por la cantidad de $ 1’164,288, los cuales desde el ejercicio 1999 al 2015, no se encuentran en uso, observándose que la Entidad no ha concluido con el proceso de baja de los mismos, Incumpliendo con la Norma Técnica Administrativa número 7 relativa al Sistema de Inventarios y Resguardo de Bienes Muebles emitida por la Sindicatura Municipal de Ensenada, así como incumplimiento al acuerdo por el que se reforman las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio en sus numerales 9 y 11, así como

también con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Sustancia Económica".

d. Así mismo en el referido padrón existen un total de 11,035 bienes muebles con el estatus para propuesta de baja identificados con la letra "P" que ascienden a la cantidad de $ 101'410,471, correspondientes a los ejercicios 1999-2015; sobre los cuales no se proporcionó evidencia documental de las condiciones de uso, deterioro, perdida o extravío de dichos bienes, y proceder en su caso a la baja correspondiente.

e. La Entidad no muestra evidencia de haber realizado inventarios de sus bienes muebles considerados del Dominio Público como los Bienes Propios y su aprobación ante Cabildo en los meses de enero y julio del año de calendario de que se trate, por lo que se incumple con lo que establece en el Artículo 15 del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Ensenada, Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la Norma de CONAC relativa al Acuerdo por el que se determina la Norma de Información Financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado el 13 de agosto de 2013, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013.

f. La Entidad dentro de su Padrón de Bienes muebles que emite la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Oficialía Mayor no contempla la clasificación de sus bienes como son de dominio público y propio, como lo establece

el Artículo 15 del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Ensenada.

g. La Entidad no ha reconocido contablemente las siguientes donaciones:

g.1) Una ambulancia de urgencias equipada marca Ford Econoline Van E-150, modelo 2012, con número de serie 1FTNE1EW7CDA08426, con un valor de adquisición de $ 680,000 donativo a favor del Ayuntamiento entregado por parte de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, dicho contrato de donación fue suscrito por las partes de fecha 7 de marzo de 2016.

g.2) Dos (2) computadoras marcas Hewlett Packard 4GB RAM, y Intel Pentium Ace AIO 4GB RAM, ambas con valor de adquisición de $ 16,998, y un (1) escritorio Oslo con valor de $ 2,598, donativo a favor del Ayuntamiento entregado por parte de Desarrollos Avitat, S.A. de C.V.; así mismo ésta donación incumple con la Norma Técnica administrativa No. 3, ya que no se celebró el contrato de donación respectivo.

g.3) Una computadora marca HP desktop Pavillion, 500-015 serie M8Y34AA con valor de $ 6,889 donativo a favor del Ayuntamiento entregado por parte del C. Ing. Felipe Neri Sánchez Galván, así mismo dicha donación incumple con la Norma Técnica administrativa No. 3 en cuanto a que no se celebró el contrato de donación respectivo.

g.4) Una Bombera marca Ford Pierce seagraves, modelo 1988, serie es 1FDYD80U8JVA24510, con valor de $ 68,380 donativo a favor del

Ayuntamiento entregado por parte de la empresa Exphortalizas, S.A. de C.V., así mismo dicha donación incumple con la Norma Técnica administrativa No. 3, ya que no se celebró el contrato de donación respectivo.

g.5) Una Computadora CPU Intel-Core 15-4460, 3.2 ghz, 6mb, LGA 1150, tarjeta madre Gigabyte H81m, disco duro 7200 rpm, monitor ace 20", tarjeta video 1GB, teclado y mouse logitec, con un valor de $ 11,484 donativo a favor del ayuntamiento entregado por parte del C. Ing. Carolina Beltrán VIllezcas, así mismo dicha donación incumple con la Norma Técnica administrativa No. 3 en cuanto a que no se celebró el contrato de donación respectivo.

g.6) Un Proyecto Técnico Ejecutivo para la electrificación e iluminación del edificio del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, B.C., con un valor de $ 233,040 donativo a favor del Ayuntamiento entregado por parte del Fideicomiso de Ensenada ("Entidad ciudadana creada por parte de la Empresa Energía Costa Azul y su corporativo IENOVA apoyando proyectos en pro de la Ciudad de Ensenada"), con el objeto de contar con un instrumento técnico para gestionar recursos ante las distintas dependencias y entidades del Gobierno Federal y Estatal para la ejecución misma de dicho proyecto; así mismo dicha donación incumple con la Norma Técnica administrativa No. 3, ya que no se celebró el contrato de donación respectivo.

h. La Entidad no ha dado de baja contable un vehículo marca Chevrolet tipo Panel Van Express, modelo 2010, serie es 1GC2GTBG6A1102253, con valor de factura por $ 373,509, y numero de resguardo 16456, donado en favor de "Ellos son la Razón A.C." para realizar las labores de rescate y cuidado animal; así mismo dicha donación incumple con la Norma Técnica administrativa No. 3, ya que no se celebró el contrato de donación respectivo.

i. Derivado del acta administrativa e informativa del inventario físico de la Delegación Vicente Guerrero efectuada de fecha 20 de mayo de 2016, por el departamento de Bienes Patrimoniales de la Oficialía Mayor, se observa que existen bienes muebles como "activos" dentro del padrón general, de los cuales no ha efectuado los ajustes correspondientes para su depuración a dicho padrón, toda vez fueron siniestrados o robados en los disturbios campesinos en dicha demarcación territorial del año 2015, siendo algunos los siguientes:

No. De Resguardo	**Tipo**	**Descripción del bien**	**Valor en libros**
17132	activo	Radio Motorola negro serie 563TKE1073	15,318
16686	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE0833	14,300
16687	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE0834	14,300
16688	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE0835	14,300
16811	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE1049	14,300
16814	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE1052	14,300
16816	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE1054	14,300
16817	activo	Radio Motorola negro serie 977TKE1055	14,300
		Suman:	$ 115,418

Por todo lo anterior se incumple con los artículos 7, 10 Fracciones I y II, 11, 14 y 15 del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Ensenada, así como el Artículo 65 Fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal.

10. Con respecto al rubro de Bienes Inmuebles, se observó lo siguiente:

a. La Entidad proporcionó padrón general de bienes Inmuebles que sustentan los saldos al cierre del ejercicio de 2016 por la cantidad de $ 4’471,494,068, el cual al compararlo con registros contables que asciende a la cantidad de $ 4’169,635,226, existe una diferencia de $ 301,858,842, de menos en registros contables, no aclarada por la Entidad.

b. Asimismo, la Entidad recibió durante los ejercicios 2013-2016, donaciones por autorización de Fraccionamientos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, no se localizó registro contable, ni la formalización de la escritura e inscripción en el Registro Público.

c. La Entidad realizó donaciones de inmuebles a favor de terceros, de los cuales no se ha realizado la baja contable, ni se dio cumplimiento a la normatividad técnica administrativa No. 3 que le es relativa para la celebración de los contratos de donaciones, siendo estos inmuebles.

d) La Entidad obtuvo donaciones de inmuebles, las cuales no se han dado de alta en los registros contables, así mismo no se obtuvo evidencia de la celebración de los contratos de donación respectivos por lo que se incumple con la Norma Técnica Administrativa No. 3 de aceptación de donaciones.

Respecto a las donaciones señaladas en los incisos b), c) y d) anteriores, así como a la falta de evidencia de haber realizado inventarios de bienes inmuebles en los meses de enero y julio del año de calendario de que se trate, se observa incumplimiento al Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Ensenada como al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Sustancia Económica"

De lo anterior, se incumple con los artículos 10 Fracciones III y IV, 11, 15 del Reglamento de Bienes Patrimoniales del Municipio de Ensenada, Articulo 27 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, así como Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014, así como a la Norma Técnica Admirativa No. 3 relativa a la aceptación de donaciones.

11. La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio 2016, en Cuentas por pagar por concepto de Cuotas y Aportaciones, y recargos al ISSSTECALI por la cantidad de $ 610'655,618, que se integra por la Subcuenta Cuotas Patronales Convenidas por un importe de $ 201'214,637 el cual incluye $ 28'669,342 de recargos moratorios, y Subcuentas Cuotas y Aportaciones a ISSSTECALI como son servicio médico, fondo de pensiones, cuota antigüedad, préstamos por $ 409'440,981, de los cuales se observa lo siguiente:

a. Con fecha 27 de octubre de 2013, la Entidad celebró Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago en Parcialidades por cuotas y aportaciones con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y

Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), por un importe total de $ 211’214,636, del cual $ 172’545,294 corresponde a Cuotas y Aportaciones del ISSSTECALI del período comprendido de la 1er. Catorcena de abril de 2012 a la 2da. Catorcena de agosto de 2013, y recargos moratorios por la cantidad de $ 38’669,342. Al respecto en la Cláusula Tercera la Entidad se comprometió a liquidar el importe total convenido de $ 211’214,636 mediante un anticipo de $ 10’000,000, cantidad que fue depositada el día 28 de octubre de 2013 al ISSSTECALI, cantidad que se aplicará en primer término al adeudo por concepto de recargos. El remanente del adeudo será cubierto en 36 parcialidades mensuales iguales y sucesivas cada una por el importe de $ 5’589,295 que en suma ascienden a la cantidad de $ 201’214,637, cuyo primer pago será a partir del día 29 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2016, el resto de las 35 parcialidades mensuales serán pagadas el último día hábil de cada mes, pagos que se realizarán mediante transferencia electrónica interbancaria y/o cheque de las cuales el ISSSTECALI expedirá el recibo correspondiente.

Por lo anterior, se observa que la Entidad no dio cumplimiento con las fechas e importes de pago correspondientes a los ejercicios 2013 por un importe de $ 11’178,591 y un importe de $ 67’071,546 del ejercicio de 2014, y del ejercicio 2015 $ 67’071,540, y por el ejercicio 2016 un importe de $ 55’892,960 respectivamente, incumpliéndose las Cláusulas Tercera sub inciso b), cuarta, quinta, y octava del citado convenio, así mismo no cumple con lo que establecen los

Artículos 22, Primer Párrafo, y 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

El importe de $ 409’440,981 por concepto de Cuotas y Aportaciones por servicios al ISSSTECALI, que corresponde al ejercicio de 2016 por $ 150’462,409, del 2015 por $ 151’884,074, por el ejercicio 2014 el importe de $ 93’853,871 y $ 13’240,627 del ejercicio 2013 respectivamente, los cuales no se encuentran convenidos, se observa que a la fecha no se han efectuados los pagos correspondientes, incumpliéndose con los Artículos 22, Primer Párrafo, y 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

b. Adicionalmente la Entidad no ha efectuado conciliación entre las Cuentas por Pagar por el importe de $ 610’655,618, contra las Cuentas por Cobrar de Cuotas y Aportaciones emitido por el ISSSTECALI, que asciende a $ 587’318,003, observándose que existe una diferencia de más por la cantidad de $ 23’337,615 en registros contables de la Entidad, no conciliada entre ambas Entidades.

c. La Entidad mantiene un saldo por liquidar al 31 de diciembre de 2016 por un importe de $ 2’641,506 subcuenta 2119-0002-862, por conceptos de omisiones al fondo de pensiones del personal que causo baja por fallecimiento, obstaculizando el tramitar las pensiones de viudez y orfandad a los deudos de dichos trabajadores.

d. Cabe mencionar que se efectuaron abonos al Instituto, por cuenta del Gobierno del Estado de Baja California, mismos que fueron descontados de las participaciones Estatales que le corresponden a la Entidad; por lo anterior, para validar que efectivamente las retenciones efectuadas por el Gobierno del Estado fueran enteradas al Instituto; mediante oficio DEF-SD-029-AYTO-ENS-2016 de fecha 28 de julio de 2017, se solicitaron los comprobantes de los pagos efectuados, lo cual no fue proporcionado.

12. La Entidad presenta al cierre del ejercicio en cuentas por pagar subcuenta Retenciones al Personal I.S.R., por un monto de $ 136’780,364, por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido sobre Sueldos y Salarios, mismo que se integra de los ejercicios 2016, 2015, 2014 y 2013 por $ 45’656,374, $ 40’612,332, $36’329,113, y $ 14’182,545 respectivamente; así como retenciones sobre Honorarios Asimilables a Salarios, por un monto de $ 23’579,758, el cual proviene de los ejercicios 2016, 2015, 2014 y 2013 por las cantidades de $ 8’544,748, $ 8’996,374, $ 5’479,722, y $ 558,914 respectivamente; así mismo Impuesto sobre retenciones a Profesionistas por un monto de $ 527,715 el cual proviene de los ejercicios 2016, 2015, 2014 y 2013 por las cantidades $ 2,178, $ 136,022, $ 65,279, y $ 324,236 respectivamente; y por ultimo Impuesto sobre retenciones por Arrendamientos por un monto de $ 68,897, el cual se integra de los ejercicios 2016, 2015, 2014 y 2013 por las cantidades de $ 18,857, $ 16,544, $ 29,325, y $ 4,171 respectivamente. De todo lo anterior se observa que no se ha efectuado la totalidad del entero

respectivo, incumpliéndose con los Artículos 113, 127 Último Párrafo y 143 Penúltimo Párrafo vigentes para el ejercicio fiscal 2013, y Artículos 96, 106 Último Párrafo y 116 Último Párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 respectivamente.

Cabe mencionar que mediante Oficio 500-27-00-02-02-201-4102, orden PMV4700024/14 de fecha 27 de octubre de 2015, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Ensenada notificó al Municipio de Ensenada las irregularidades en la omisión de contribuciones federales como retenedor por los Impuestos sobre la Renta, por el periodo fiscal comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.

Al respecto la Entidad celebró con fecha 21 de diciembre de 2015 contrato de prestación de servicios profesionales con Sistemas Integrales de Gerenciamiento, S.C., los servicios de consultoría en defensa fiscal, sobre el crédito fiscal determinado en la resolución contenida en oficio 500-27-00-02-02-201-4102, citado con antelación, sujetándose la Entidad al pago por los honorarios el equivalente al 35% del total del crédito fiscal determinado en contra del cliente, cantidad que deberá incrementarse el Impuesto al Valor Agregado, pagaderos de la siguiente manera:

a. El 10% del total de los honorarios por prestación del servicio al momento de la firma del contrato. Habiéndose efectuado un abono a cuenta sobre el 10% de los servicios de defensa fiscal de $ 1’000,000 de fecha 1 de marzo de 2016.

b. El resto del total de los honorarios deberán efectuarse al momento de obtener la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento legal de

defensa. Adicionalmente con fecha 15 de abril de 2016, la Entidad interpuso Demanda a Juicio Contencioso Administrativo en contra de la Resolución del Recurso de Revocación número RL00001/2016 emitido por la Administración desconcentrada Jurídica de Baja California "3", con sede en Baja California, desconociéndose los posibles ajustes que se pudieran derivar de las acciones que adopte la autoridad Fiscal Federal en cuanto a la estimación pecuniaria de dicha contingencia fiscal a favor o en contra de la Entidad.

Cabe destacar, que se solicitó información que permitiera aclarar los incisos a), y b), antes señalados, mediante oficio DEF-SD-038-AYTO-ENS-2016 de fecha 7 de septiembre de 2017, la cual no fue proporcionada.

13. La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, Cuotas por pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social por un importe de $ 64'683,813 mismas que corresponden a cuotas y aportaciones obrero patronales, al respecto no se ha efectuado el pago correspondiente, observándose incumplimiento a los Artículo 39, Primer Párrafo, Artículo 40-A de la Ley del Seguro Social.

Cabe aclarar que dicho adeudo se compone de los conceptos siguientes:

a. Por cuotas y aportaciones obrero patronales por el ejercicio de 2014 un importe de $ 17'537,326, por el ejercicio 2015 un importe de $ 62'033,938, así como por el periodo de enero a diciembre de 2016 un importe de $ 67'078,948 arrojando una deuda total por este concepto de

$ 146’650,212, así mismo se efectuaron abonos por parte del Ejecutivo del Estado de Baja California en relación a las retenciones que por participaciones Federales y Estatales se realiza por cuenta del Municipio por un monto de $ 89’712,340, arrojando un pasivo por liquidar de $ 56’937,872. Es importante destacar, que para validar que efectivamente las retenciones efectuadas por el Gobierno del Estado fueran enteradas al Instituto; mediante oficio DEF-SD-029-AYTO-ENS-2016 de fecha 28 de julio de 2017, se solicitaron los comprobantes de los pagos efectuados, lo cual no fue proporcionado.

b. Por cuotas y aportaciones obrero patronales subcuenta 2117-0002-00002 “IMSS-convenio” se solicitó mediante oficio s/n de fecha 30 de septiembre de 2013, por parte del presidente municipal en funciones, celebrar un convenio de pago de 12 mensualidades sobre el crédito No. 132082553 del periodo 08/2013, sin embargo, se desconoce si se realizó dicho convenio, toda vez que no fue proporcionado para fines de validarlo, existiendo un saldo por pagar desde esa fecha de $ 1’687,269.

c. Por cuotas y aportaciones obrero patronales Riesgo por retiro, Cesantía y Vejez en edad avanzada subcuenta 2117-0002-00003 “IMSS-convenio RCV” se solicitó mediante oficio s/n de fecha 30 de septiembre de 2013, por parte del presidente municipal en funciones, celebrar un convenio de pago estipulándose como fechas límites los meses de enero, febrero y marzo de 2014, sobre los créditos números 137047578, 137067138 y

137086102 periodos 02/2013,03/2013 y 04/2013 respectivamente , desconociéndose si se realizó dicho convenio toda vez que no fue proporcionado para fines de validarlo, existiendo un saldo por pagar desde esa fecha de $ 6’354,241.

d. Adicionalmente la Entidad reconoce en la subcuenta contable 2117-0002-00004 “Retención IMSS por reclasificar” una diferencia por conciliar-aclarar por un saldo de naturaleza contraria a su origen de $ 295,569.

Cabe destacar, que se solicitó información sobre la celebración de convenios de pago, con dicha institución de seguridad social, mediante oficio DEF-SD-005-AYTO-ENS-2016 de fecha 7 de febrero de 2017, informándose por parte de Oficialía Mayor, mediante el oficio 01031 de fecha 21 de febrero de 2017, que no se llevaron a cabo gestiones administrativas para liquidar dicho pasivo durante el ejercicio en mención.

14. La Entidad con fecha 8 de septiembre de 2015, suscribió contrato de adquisición de un sistema de armonización contable con el proveedor MAX PC de México, S.A. de C.V., por un importe total de $ 28’968,657, que incluye el I.V.A., por el suministro, implementación, y puesta en punto del sistema de armonización contable para el gobierno central y sus paramunicipales, estableciéndose en sus cláusulas tercera, cuarta, séptima, decima primera y decima segunda, su forma de pago, plazos y condiciones de entrega, y entrega recepción del servicio, garantías, y pena convencional, observándose lo siguiente:

a. Cláusula tercera. – "Forma de Pago" 40% de anticipo del monto contratado, 20% al finalizar primer avance y 20% al finalizar segundo avance, y 20% al finalizar la implementación total del sistema como se muestra en el siguiente cuadro:

Monto total contratado más I.V.A.	Anticipo 40%	20% primer avance	20% segundo avance	Total a pagar por avances
$ 24'972,980				
3'995,677				
$ 28'968,657	$ 11'587,463	$ 3'476,239	$ 2'780,991	$ 17'844,693

Cabe señalar que la entidad realizó el pago del anticipo del 40% por $ 11'587,463 de fecha 5 de enero de 2016, del 20% del primer avance por $3'480,000 de fecha 15 de marzo de 2016 y del 20% del segundo por $ 2'313,731, de fecha 5 de abril de 2016, para dar un total de $ 17´381,194.

De lo anterior se observa la falta de evidencia documental de los avances- bitácoras logrados en los dos primeros avances; el primero que establece la entrega en plantillas de la información contable, presupuestal, programática y patrimonial armonizada por parte del licitante, y segundo, la entrega recepción del producto, simulación y pruebas, y la autorización de la puesta en producción del sistema, que serían en los meses de enero y marzo de 2016, respectivamente.

Cabe mencionar que con fecha 3 de marzo de 2017, se acudió a las instalaciones de la Dirección de Informática del Ayuntamiento de Ensenada, con el propósito de constatar el avance en la implementación del sistema de contabilidad gubernamental armonizado, lo cual sólo se constata que contaba con la base de datos técnicos-contables como son los clasificadores por rubros de ingresos, egresos,

financiamiento y programáticos, plan de cuentas, matrices de conversión y control patrimonial, así mismo se contaba con una base de datos en su captura de los ingresos y egresos al mes de enero de 2016. Por lo que dicho pago no es congruente con dicho avance en su implementación considerándose un avance estimado en primera fase de los trabajos base del contrato en un 60%.

b. Cláusula cuarta. - "Plazos y condiciones de entrega" será entregado e implementado a la administración central como a sus paramunicipales en un término de ocho (8) meses contados a partir de la firma del contrato. Observándose que la conclusión de dicho plazo venció el día 8 de mayo de 2016, y la Entidad aún no cuenta con el citado sistema de armonización contable.

c. Cláusula séptima. - "Entrega y Recepción" el suministro se realizará dentro de los ocho (8) días contados a partir de la firma del presente instrumento, reservándose El Ayuntamiento el derecho de no aceptar, ni recibir el sistema contratado cuando no cumpla con las especificaciones requeridas o la entrega se realice de forma incorrecta o distinta a lo solicitado, ocasionado un daño o perjuicio al Ayuntamiento. De lo anterior se observa que no existe evidencia documental de la aceptación por parte del Ayuntamiento sobre la correcta instalación-funcionamiento del sistema de armonización contable.

Adicionalmente se celebró adendum al contrato original de fecha 15 de enero de 2016 en donde se acuerda convenir ampliar el plazo y condiciones de entrega hasta el 30 de abril de 2017, prorrogándose por una ocasión por un término de tres meses, contados a partir del 30 de abril de 2017, observándose que dicho proveedor culminaría con la captura del sistema de fecha 30 de julio de 2017, situación que no ha ocurrido.

d. Cláusula décima primera. - "garantías" se constituyen a favor del Ayuntamiento mediante pólizas de fianzas lo relativo al 100% del anticipo otorgado, así como el 10% de la fianza de cumplimiento del contrato y del 10% sobre fianza de vicios ocultos; al respecto, y en razón del incumplimiento citado, el Ayuntamiento deberá de hacer efectivas dichas fianzas por la falta de implementación y puesta en funcionamiento del sistema de armonización contable.
e. Cláusula décima segunda. - "Pena convencional" cuando el proveedor incumpla con la implementación del sistema contratado en los plazos estipulados, quedará obligado a pagar al Ayuntamiento por cada día natural de retraso, independientemente de la compensación por daños y perjuicios que se causen, una pena convencional del 0.025% conforme al porcentaje de retraso de calendario de trabajo estipulado, por causas no imputables a el Ayuntamiento, por cada día hábil de demora en el cumplimiento de los plazos pactados, se descontará de las liquidaciones o pagos que deban efectuársele, conforme a la etapa que corresponda

con forme al calendario de trabajo. De lo anterior se observa que el Ayuntamiento no ha requerido al proveedor de la pena convencional correspondiente, toda vez que dicho sistema no ha sido implementado.

15. La Entidad recibió durante el ejercicio 2016, subsidio por la cantidad de $ 60’988,014 para la Seguridad Pública de los Municipios (FORTASEG), de los cuales se observa lo siguiente:

15.1Control Interno

a. **Riesgos**

a.1) Se carece de actividades de control eficientes que permitan la correcta aplicación de la normatividad en los procesos de adquisición de bienes y servicios.

a.2) Falta de coordinación entre las diferentes áreas que intervienen en la administración y registro del subsidio, lo que provoca que la calidad de la información sea deficiente, impidiendo que esta se genere de manera oportuna, precisa y confiable.

a.3) No cuenta con mecanismos para disponer de indicadores que permitan evaluar los resultados alcanzados.

b. **Información y Comunicación**

b.1) No se garantiza la calidad, oportunidad y suficiencia de la información financiera, ya que se carece de un sistema integral que genere información contable-presupuestal de manera oportuna, que permita el seguimiento puntual de las acciones del subsidio.

b.2) El sistema de registro contable no cumple adecuada y oportunamente con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por la CONAC.

Todo lo anterior, se incumple con los Artículos 3, Fracción I de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California y 10 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California.

2. **Observaciones en materia de adquisición de radios.**

La Entidad celebró contrato de suministro para la adquisición de 50 terminales digitales portátiles, 200 baterías para terminales digitales portátiles, 26 terminales digitales móviles para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por un monto de $ 2´415,925, IVA incluido con el proveedor Cassidian México, S.A. de C.V., del cual se observa lo siguiente:

Con fecha 29 de julio de 2016, se elaboró el documento "Dictamen para la adjudicación del contrato de equipos de radio comunicación para la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California" a efecto de analizar y en su caso aprobar la solicitud de excepción a la licitación pública presentada por la Dirección de Seguridad Pública, fundamentando la adquisición directa en el supuesto establecido en el Artículo 41, Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que hace referencia a que no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos, o sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad o licenciamiento

exclusivo de patentes...” del análisis efectuado al dictamen es de señalarse lo siguiente:

a. En el punto IV del dictamen, la Entidad manifiesta que motiva el supuesto de excepción “por el hecho de que existe sólo un proveedor a nivel nacional que es distribuidor autorizado y filial de la empresa AIRBUS DEFENSE & SPACE que a su vez posee la titularidad de la patente de la tecnología tetraPol que es la que utiliza las frecuencias exclusivas de la Policía Municipal, tal como se desprende del oficio anexo y de las fotocopias de la patente correspondiente”. Por lo anterior, se solicitó la documentación que acreditara lo antes expuesto, por lo que la Entidad proporcionó copia de los documentos “Título de Registro de Marca” de fecha 27 de enero de 1999, donde figura como titular “Matra Nortel Communications”; así como certificado con acuse de recibo 47143 donde se comunica la transmisión de derechos de marca en favor de “Eads Defense & Security Networks” de fecha 15 de mayo de 2003; así como diversos documentos en idioma extranjero los cuales no se encuentran traducidos oficialmente. Del análisis a los documentos no se acredita que el proveedor seleccionado sea quien posea la titularidad de la patente o ser la única a nivel nacional que sea distribuidor autorizado y filial de la empresa creadora, por lo anterior se concluye que la Entidad no acredita fehacientemente que el proveedor seleccionado

cumpla con el supuesto del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Fracción I. Adicionalmente, es importante destacar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de marca tiene una vigencia de 10 años, por lo que dichos documentos ya no tenían vigencia.

Por lo anteriormente expuesto, incumple con lo establecido en los Artículos 134, Párrafos Primero y Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 en su Fracción II, 47 Fracción X y 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

15.3Observaciones a la adquisición de cámaras fotográficas

La Entidad celebró contrato de fecha 17 de junio de 2016 por concepto de adquisición de 1123 cámaras fotográficas para la Dirección de Seguridad Pública con el proveedor Max PC de México, S.A. de C.V. por un monto de $ 5’311,790 más IVA, mediante el procedimiento de Licitación Pública, del cual en su Cláusula Primera se establece lo siguiente:

El proveedor se obliga conforme a la Cláusula primera a entregar en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo respectivo; por lo cual se nos proporciona acta de entrega-recepción de fecha 30 de junio de 2016, firmada de conformidad por el Director de Seguridad Pública con dos testigos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública.

Sin embargo, con fecha 5 de septiembre de 2017, se acudió a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, para efectuar la inspección física de los bienes adquiridos, donde se nos proporciona oficio DSPM/DI/AGO/019/2017 de fecha 3 de agosto de 2017, donde el Director de Informática adscrito a Seguridad Pública, notifica al Director de la institución antes señalada, que las cámaras fueron recibidas en las siguientes fechas:

FECHA DE RECEPCIÓN	**NÚMERO DE CAMARAS RECIBIDAS**	**FECHA DE ALTA EN BIENES PATRIMONIALES**
20 de julio de 2016	413	junio de 2016
Febrero, mayo, junio y julio de 2017	710	cio 2017
TOTAL ENTREGADO	**1,123**	

Derivado de lo anterior, se observa el incumplimiento a las Cláusulas Primera y Cuarta:

Cláusula Primera, que el proveedor se obliga a suministrar los bienes adquiridos en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la firma del contrato.

Cláusula Cuarta: La cual especifica que el pago del 50% del finiquito se llevaría a cabo dentro de los veinte días posteriores a la entrega de los bienes; sin embargo, el pago se realizó en su totalidad con fecha 15 de julio de 2016. Cabe señalar que según acta de entrega-recepción de fecha 30 de junio de 2016, antes descrita, los bienes fueron entregados en su totalidad, sin embargo, se observa que sólo fueron recibidas físicamente 413, desconociéndose el motivo de porque la Entidad no contaba con el resto de los bienes.

16. La Entidad recibió durante el ejercicio 2016, el importe de $ 262’393,127 relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), de lo cual se observa lo siguiente:

16.1 CONTROL INTERNO

a. **Identificación y administración de riesgos**

a.1) La Entidad no contó con mecanismos de planeación para determinar por rubro programático el ejercicio del recurso; en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, su erogación se estableció en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, dentro del rubro de gasto corriente, destinado a las partidas de servicios personales. Así mismo en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

a.2) La Entidad carece de mecanismos para conocer de manera sistemática y oportuna el ejercicio del gasto.

a.3) La Entidad no mantiene un registro específico contable y de las operaciones realizadas con los recursos del fondo.

a.4) La Entidad carece de evaluaciones, al término del ejercicio, sobre los resultados e impactos alcanzados con el Fondo, lo que impide medir su cumplimiento.

b. **Información y comunicación**

b.1) Se carece de sistemas contables y presupuestales que permitan la generación de reportes con información que refleje exclusivamente el ejercicio del Fondo.

Por todo lo anterior, se incumple con el Artículo 10 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California.

16.2 REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

a. Con fecha 22 de enero de 2016, la Entidad aperturó la cuenta SCOTIABANK FONDO IV/2016 cuenta 13104809831, observándose que dichos recursos se transfirieron a otras cuentas bancarias.

Asimismo, con fecha 9 de diciembre de 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, transfirió el importe de $ 10’000,000 como anticipo a cuenta del fondo, los cuales fueron depositados en la cuenta BBVA Bancomer 0193853535 destinada para gasto corriente, como es el pago de materiales y suministros, servicios, así como para traspasos a cuentas bancarias destinadas para el pago de nómina.

Adicionalmente, recibió recursos de otras fuentes de financiamiento por $716,043.

La cuenta aperturada para el ejercicio del recurso presenta un saldo al 31 de diciembre de 2016 por $ 4,341, mismo que permanece al mes de junio del ejercicio 2017.

Cabe señalar que los traspasos efectuados a otras cuentas bancarias utilizadas para pago de gasto corriente así como recursos federales, implicaron limitaciones al alcance de revisión a efecto de cerciorarnos de su correcto destino y aplicación, ya que se desconoce el fin específico que se le dio a los recursos recibidos, impidiendo que se permita medir el cumplimiento de los objetivos del Fondo, los cuales deberán ser destinados principalmente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Por lo anterior, incumple con el Artículo 69 Tercer y Cuarto Párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b. Para la integración de la información financiera, la Entidad no mantiene registros específicos del Fondo debidamente identificados y controlados; incumpliendo con el Artículo 70, Fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c. Adicionalmente, la Entidad no efectúa el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del Fondo, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, incumpliendo con los Artículos 7, Primer Párrafo 38, 70, Fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 17 y 47 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

17. De la revisión efectuada al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se observa lo siguiente:

17.1 Registro e información contable y presupuestaria

a. Para la integración de la información financiera, la Entidad no mantiene registros específicos del Fondo debidamente identificados y controlados; incumpliendo con el Artículo 70, Fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b. Adicionalmente, la Entidad no efectúa el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del Fondo, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, incumpliendo con los Artículos 7, Primer Párrafo 38, 70, Fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 17 y 47 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

18. La Entidad recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por la cantidad de $ 89’645,630, del cual se desprenden las siguientes observaciones:

18.1 Cumplimiento de Objetivos y Metas.

Derivado de la revisión efectuada al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) se derivan las siguientes observaciones en términos de cumplimiento de objetivos y metas:

a. La Entidad no cumplió con los objetivos y metas del Fondo, ya que no efectuó pago alguno por concepto de obras contratadas, por lo anterior, el Fondo no contribuyó al logro de las estrategias y objetivos planteados en la política pública.

b. No ejerció la totalidad de los recursos recibidos en el ejercicio; para el cumplimiento de los objetivos del Fondo, destinándolos para el pago de gasto corriente.

Por todo lo anteriormente expuesto, incumple con los Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 100 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California y Artículos 46 y 47, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

19. Con fecha 31 de diciembre de 2015, la Entidad expide Cheque No. 3472 a favor del C.P. Germán Argimiro Morales Martínez, Director de Planeación y Gestión Financiera por concepto de gasto a comprobar para la compra de una unidad vehicular por el importe de $ 197,850, para ser utilizada en los trabajos de recolección de basura en la Zona Federal Marítima Terrestre, habiéndose adquirido una unidad marca Chevrolet, línea colorado, tipo pickup, modelo 2005, 4 puertas, 5 cilindros, con factura No. A1944 de fecha 11 de febrero de 2016, emitida por Belem Akiyama León, en donde se detalla el costo del vehículo a razón de $ 170,560, más el I.V.A. por $ 27,290 sumando un total de $ 197,850, sin embargo, dicha factura que ampara la compra del vehículo en su apartado donde se especifica el valor de

la factura con letra establece un importe de $ 70,389 pesos, habiéndose cotejado dicha factura en los archivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el folio de la factura, fecha, beneficiario, total de la factura por un importe de $ 70,389 y emisor, resultando correctos, no así los valores escritos con números en la facturación emitida, por lo que se presume que existió alteración del comprobante fiscal y que se presume también un daño patrimonial a la Hacienda Pública por un monto de $ 127,461.

Adicionalmente se verificó dicha unidad vehicular en el padrón general de bienes muebles identificada con número de resguardo 22079, con un valor en libros de $ 70,388

Por lo anterior, se incumple con los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, Regla I.2.7.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016, así como el Artículo 47, Fracciones I y VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

20. Erogaciones por pago de honorarios a profesionistas sin el debido sustento documental por los trabajos realizados.

a. La Entidad celebró contrato de prestación de servicios con el Bufete denominado Contacto y Proyección Efectiva, S.A. de C.V. de fecha 15 de mayo de 2015; del cual se celebró contrato modificatorio que contiene la misma fecha, estableciéndose en su cláusula primera lo siguiente "El Municipio encarga a el prestador del servicio y este se obliga a prestarle los servicios profesionales, consistentes en la asesoría, escrituración y preparación de la documentación legal y

financiera requerida para que el Municipio promueva y obtenga las autorizaciones necesarias para el registro del contrato modificatorio al contrato de crédito así como, ha solicitado a el Prestador del servicio que le otorgue sus servicios profesionales para la estructuración y preparación de la documentación legal requerida para que el Municipio promueva y obtenga las calificaciones satisfactorias con las diferentes calificadoras HR Raitings y Verum mismas que por gestión del despacho deberán otorgar dos calificaciones de tipo quirografarias y dos estructuradas en términos del contrato de crédito, satisfactorias para esta administración, el tramite y negociación del contrato modificatorio ante el banco y ante las instancias de Gobierno correspondientes, al contrato original por $ 665'156,105, así como su correspondiente registro ante el Registro Estatal de Deuda Pública, el trámite de registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la gestoría ante BANSI, para la autorización de una línea de crédito hasta por $ 100'000,000, así como los registros correspondiente ante las instancias gubernamentales. Para el financiamiento de inversiones públicas productivas a cargo del Municipio con instituciones de crédito y prepare los instrumentos necesarios para tales fines, llevando a cabo las actividades que precisan en la cláusula primer del presente contrato". Se precisa en la citada clausula entre otros las siguientes Fracciones: "Fracción I Gestionar ante la o las instituciones financieras del país el o los créditos necesarios para financiar inversión pública productiva del Ayuntamiento del el Municipio hasta por $ 100'000,000. Fracción VII.

"en su caso, gestión de calificación de la estructura ante las agencias calificadoras de valores autorizadas por la CNBV, la cual será optativa, de acuerdo a la conveniencia que se determine considerando el costo-beneficio para la estructuración del financiamiento".

Adicionalmente en su cláusula sexta se establece que el pago de los honorarios "El Municipio se obliga a cubrir como contraprestación al prestador del servicio por los servicios prestados al amparo del presente contrato, honorarios la cantidad de $ 11'079,841 más I.V.A. Dicha cantidad será exigible por el prestador del servicio a el Municipio y el Municipio tendrá la obligación de pagar en una sola exhibición los honorarios señalados a la conclusión de las actividades previstas en los numerales I al VII de la cláusula primera del presente contrato. La actividad prevista en el numeral VII de la cláusula primera del presente contrato, no será determinante, ni influirá para el pago de los honorarios señalados".

De todo lo anterior la entidad no proporciona evidencia documental, sobre los trabajos realizados, así mismo es de señalarse que se efectuó un pago indebido de $ 2'320,000, el cual no se estableció en el contrato anticipos a cuenta, toda vez que la contraprestación del servicio se efectuará sobre lo estipulado en la cláusula sexta respectiva.

b. Se celebró contrato de servicios profesionales de fecha 1 de enero de 2016, con Pulse Project, S.C., para llevar a cabo los trabajos de entrega/recepción de la administración entrante y saliente, cierre de programas federales, evaluaciones periódicas de las finanzas públicas del

Municipio emitiéndose sugerencias para adoptar estrategias financieras, entrega de boletines informativos con los principales indicadores económicos, integración de expedientes técnicos para la ejecución de recursos federales, impartición de cursos y temas de interés para la formación académica del servidor público, habiéndose efectuado pagos por la prestación de los servicios de $ 572,460, observándose que no se cuentan con evidencias documentales de los trabajos citados objeto del contrato, y estipulados en el cuerpo del contrato obligándose el prestador del servicio a realizar evaluaciones periódicas de las finanzas públicas y sus sugerencias hacerlo de manera trimestral por escrito, y respecto a los boletines informativos en materia de indicadores de manera bimestral, por los demás servicios solo en materia de asesoría.

c. Se efectuó anticipo a cuenta del contrato celebrado con Servicios integrales Unilloy, S.A. de.C.V. por $ 245,920, amparándose mediante facturas No. 810, y 930, de fechas 27 de abril y 2 de junio ambas de 2016, por servicios de asesoría y revisión de informes mensuales y Cuenta Pública periodo 2014-2016, al respecto, mediante previa solicitud de información DEF-SD-041-AYTO-ENS-2016 de fecha 13 de septiembre de 2017, fue requerido al Ayuntamiento el contrato de prestación de servicios debidamente firmado por la partes sin tener respuesta positiva sobre dicho documento, desconociéndose el total de la operación pactada, así

mismo la falta de documentación que sustente el trabajo realizado por el prestador del servicio.

d. Se celebró contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 8 de agosto de 2016, con LGM y Asociados representado por el C.P. Lázaro Gámez Medina, para llevar a cabo la prestación de servicios consistentes en una Auditoria de cumplimiento por un periodo de 12 semanas contadas a la firma del convenio, habiéndose erogado el importe de $ 533,600, obligándose con base a la cláusula sexta el prestador del servicio a presentar un informe detallado de las actividades, observándose que no se cuenta con evidencia documental sobre dichos trabajos, al respecto, mediante previa solicitud de información DEF-SD-041-AYTO-ENS-2016 de fecha 13 de septiembre de 2017, fue requerido al Ayuntamiento el contrato de prestación de servicios debidamente firmado por la partes sin tener respuesta positiva sobre dicho documento.

e. La Entidad al 31 de diciembre de 2016, erogó la cantidad de $ 137,025, al M.A.P. Andrés Silva Flores por concepto de Servicios de Consultoría Administrativa y Procesos en la capacitación para la gestión de resultados, habiéndose facturado dichos servicios mediante facturas números 26, 29, 47 y 48, sin que medie un contrato de prestación de servicios profesionales, así como la falta de documentación que sustente el trabajo de capacitación realizado por el prestador del servicio como son listas de asistencia del personal que intervino y material propio de la capacitación.

f. La Entidad celebró convenio específico de colaboración con el Instituto Baja Californiano de Administración Pública A.C., de fecha 5 de enero de 2016, para llevar a cabo una asesoría integral para la implementación de la Armonización Contable que comprende diagnóstico, estrategia para el cumplimiento, reingeniería de procesos, por el periodo comprendido del 5 de enero al 30 de junio de 2016, habiéndose pactado por dichos servicios un importe de $ 345,980 más el I.V.A que en suma asciende a $ 401,337, observándose que la Entidad erogó un importe de $ 414,201 por el citado servicio por lo cual efectuó un pago de más al prestador del servicio de $ 12,864. Cabe aclarar que la Entidad no proporcionó la documentación que avale los trabajos encomendados al prestador del servicio.

g. La Entidad erogó el importe de $ 6’357,269, por concepto de servicios diversos tales como raspados de terracerías, servicios de asesoría para diseño y redacción de informe anual de actividades y pago de artistas en festejos patrios, observándose que no fueron localizados en el archivo contable evidencia documental que sustente los trabajos realizados, cotizaciones del servicio, procedimientos de adjudicación, así como la contratación de los mismos.

De todo lo anterior se observa el incumplimiento al Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Estado de Baja California y en relación al Artículo 8, Fracciones II, III y IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ensenada, Baja California.

21. La Entidad efectuó el reconocimiento contable de las erogaciones por los servicios de reparaciones de equipo de transporte por un importe de $ 1’198,933 sin existir evidencia documental en el archivo contable de la justificación técnica (diagnóstico mecánico) asimismo no se proporcionó el cuadro de cotizaciones para la adjudicación al proveedor del servicio, se detallan los casos observados.

Observándose el incumplimiento a la Norma Técnica Administrativa No. 10, relativa a la Adquisición de Bienes y Servicios en su Sección I, políticas de operación Numeral 2.

22. La Entidad celebró contrato de obra No.AD-XXI-AYTO-ENS-BC-CULTURA-2015-EP-01 con el contratista L.A.T.I. VICTOR HUGO SALAS MONTESDEOCA, de fecha 22 de octubre de 2015, por un importe de $ 4´895,598 incluye IVA para la CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ENSENADA, CASA DE LA CULTURA, DELEGACIÓN EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA, B.C., con un periodo de ejecución de los trabajos del 30 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, posteriormente, con fecha 4 de abril de 2016 se celebró Convenio Modificatorio No. 1 por aumento y disminución de volúmenes de obra y obra extraordinaria, así como la reprogramación del periodo de ejecución de los trabajos del 1º de abril de 2016 al 26 de junio de 2016, de lo cual, en la estimación No. 1 por un periodo de ejecución del 11 de abril al 10 de mayo de 2016, se incluye el concepto No. 16.06.-"Suministro, puesta a punto y capacitación de los siguientes contenidos electrónicos del editor océano digital. Incluye: 1, escolar…", por un importe de $71,682 sin IVA, observándose que dicho concepto se incluye nuevamente dentro de la partida de

EXTRAORDINARIOS como EXT. 16.16 por un importe de $161,184 sin IVA. Asimismo, el concepto No. 16.08.-"Suministro, puesta a punto y capacitación de los siguientes contenidos electrónicos del editor tercer escalón, que consiste en 1,EduVyT en español, que cuenta con 50 cursos en línea y maneja los temas de ciencias, ciencias sociales y humanidades, educación……", por un importe de $95,104 sin IVA, en la partida EXTRAORDINARIOS nuevamente se incluye dicho concepto como EXT.16.17 por un importe de $131,786 sin IVA, al respecto, la entidad no aclara porque se incluyeron y pagaron ambos conceptos extraordinarios por un importe total de $292,970 sin IVA, incumpliendo con lo señalado en el Párrafo Segundo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cabe señalar que se proporcionó factura número de serie CSD203392777 de fecha 22 de diciembre de 2015 de la citada estimación, la cual se observa que fue elaborada previamente a la ejecución de los trabajos.

Adicionalmente del citado contrato, se observa a su vez que la obra se encuentra inconclusa y suspendida sin la debida aplicación de penas convencionales al contratista por incumplimiento al programa, sin que se proporcione por parte de la entidad convenio alguno posterior al Modificatorio No. 1 de fecha 4 de abril de 2016 que de formalidad a dicha situación por lo cual se incumple con lo señalado en los Artículos 59, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

23. De acuerdo a oficio de aprobación de recursos No. 10010155006 de fecha 1º de diciembre de 2016 por un importe de $5'519,610 de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la entidad realizó contrato No.IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF2DA-2016-IC-06

de fecha 30 de diciembre de 2016, para el REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, EN CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA, B.C., con el contratista RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por un importe de $ 6´584,230 incluye IVA, observándose que dicho importe es superior al recurso autorizado por $1’064,620. Adicionalmente, de acuerdo a oficio de aprobación de recursos No. 10010155007 de fecha 1º. de diciembre de 2016 por un importe de $5’493,711, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se realizó contrato No. IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF2DA-2016-IC-05 de fecha 29 de diciembre de 2016, para la ILUMINACIÓN EXTERIOR DE JARDINES Y TERRAZAS, EN CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL, RIVIERA DE ENSENADA, B.C., con el contratista CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V. por un importe de $13’861,754 incluye IVA, observándose que dicho importe resulta superior al recurso autorizado hasta por un monto de $8’368,043. De acuerdo a lo anterior, se resume que no obstante se aprobaron recursos por un importe total de $11´013,321, la entidad realizo la contratación por un importe de $20´445,984 incluye IVA, lo cual es mayor al aprobado, reduciendo posteriormente el alcance de metas de las obras y elaborando nuevamente los contratos conforme al importe aprobado, por lo cual se observa la falta administrativa de la entidad al no desechar las propuestas para abrir nuevo periodo de licitación, asimismo, no se proporciona evidencia de la formalización de dichos cambios mediante el convenio correspondiente, incumpliendo con lo estipulado en los Párrafos Primero y Quinto

del Artículo 38 y el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

24. Al cierre del ejercicio fiscal 2016, los ingresos por $ 1,450’574,945, fueron insuficientes para cubrir el presupuesto de Egresos devengados por $ 1,912’589,386, resultando un déficit presupuestal por $ 462’014,441; al respecto es de señalarse que, al 31 de diciembre de 2016, la Entidad cuenta con un saldo en bancos por $ 112’729,273, que resulta insuficiente para cubrir dicho déficit, asimismo presenta un pasivo a corto plazo por $ 1,163’392,344. Al respecto, la Entidad indicó que se están realizando esfuerzos para establecer controles administrativos, asimismo que, dada la situación financiera del Ayuntamiento, no puede precisar una fuente de ingresos para cubrir el déficit presupuestal en comento, incumpliendo con el Artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

25. La Entidad presenta al cierre del ejercicio 2016, en sus registros contables en la cuenta de Bancos un importe de $ 3’124,030, que corresponden a recursos Federales y Estatales de los ejercicios 2007 al 2015, mismos que no se han ejercidos, reprogramados o en su caso reintegrados.

26. Derivado de la convocatoria de Licitación Pública Internacional No. 001-2015, para el “Proyecto de Modernización del Alumbrado Público para el Municipio de Ensenada, Baja California”, se adjudicó el contrato de arrendamiento a la empresa Celsol, S.A.P.I. de C.V., según acta de fallo realizada con fecha 23 de marzo de 2015, y posteriormente, se celebró contrato de arrendamiento de fecha 15 de abril

de 2015, con la empresa en mención. Asimismo, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago pactadas en el contrato de arrendamiento, se suscribió un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago No. 2534 en fecha 5 de agosto de 2015 con la Institucion Bancaria Banco Invex,S.A., el cual establece que el monto total de las rentas por los 10 años de la vigencia de dicho contrato asciende a $ 564,649,597 de pesos, de los cuales la Entidad pagó durante el ejercicio 2016 un total de $ 17´455,644. De lo anterior se desprenden las siguientes observaciones:

a. La Entidad reconoció pasivo a favor de la empresa CELSOL, S.A.P.I. de C.V por un total de $17´455,644 correspondientes a las rentas devengadas durante los meses de agosto a diciembre de 2016; observándose la falta de reconocimiento contable de los pagos efectuados durante el ejercicio en revisión por el importe en mención, según se constata en los estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Invex, S.A., como a continuacion se detalla:

FACTURA			**FECHA COBRO SEGÚN EDO.CTA. BANCARIO**
No.	**FECHA**	**IMPORTE**	
C579	15-ago-16	$ 3,219,565.40	8-sep-16
C591	01-sep-16	3,504,287.40	25-jul, 9-ago, 26-sep´16
C614	03-oct-16	3,577,263.58	31-oct y 29-nov-16
C636	01-nov-16	3,577,263.58	29-nov y 29-dic-16
C651	01-dic-16	3,577,263.58	29-dic-16 y 30-ene-17
		$ 17,455,643.54	

b. En adición, el monto de las rentas por los 10 años de la vigencia de dicho contrato de renta asciende a $ 564,649,597, se observa que el H. XXI Ayuntamiento de Ensenada, B.C., previo a la celebración del contrato de

Arrendamiento para el proyecto de modernización de Alumbrado Público para el Municipio, debió solicitar la autorización del Congreso del Estado de Baja California, en virtud de tratarse de un convenio plurianual al abarcar un periodo de vigencia de 10 años, a través del cual adquirió obligaciones que trascienden y van más allá de su periodo de gestión constitucional.

Aunado a lo anterior, igualmente se requiere la aprobación del Congreso del Estado de Baja California, ya que para afectar ingresos derivados de contribuciones, productos y aprovechamientos aun cuando sean aprobados por su cabildo, es necesario que la asamblea legislativa lo autorice, de tal forma que en el caso al celebrarse un contrato plurianual cuyos efectos jurídicos consistente en establecer obligaciones que trascienden el periodo de su gestión constitucional, se requiere forzosamente dicha intervención y autorización. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la fracción VII y penúltimo párrafo del Artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y Artículos 5 fracciones III y V y 11 Fracción VI inciso c) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

c. Por otra parte, la Entidad no dio cumplimiento con los artículos 7 y 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con los lineamientos emitidos por el CONAC publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de diciembre de 2013 referente a los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los

fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos, toda vez que dicho concepto de fideicomiso no se ha incorporado a la estructura financiera del Ayuntamiento.

d. Adicionalmente, la Entidad omitió revelar en la Notas a los Estados Financieros información referente al Fideicomiso No. 2534 celebrado con el Banco Invex, S.A. por lo cual incumple con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado Revelación Suficiente.

27. La Entidad suscribió un contrato de Fideicomiso irrevocable de administración e Inversión y Fuente de pago, identificado con el número F/1540 con Deutsche Bank México, S.A. con fecha 21 de diciembre de 2011, cuyo objeto fue el de garantizar el pago del crédito suscrito con BBVA Bancomer, S.A. por la cantidad de $200´000,000; sin embargo dicho empréstito fue liquidado el 27 de mayo de 2015, y posteriormente con fecha 21 de julio de ese mismo año se extinguió, según consta en el Convenio de Extinción Total del Contrato de Fideicomiso de Administración Irrevocable identificado con el No. F/1540 de fecha 21 de diciembre de 2011. Al respecto se observa lo siguiente:

a. Falta de depuración de la cuenta contable 1123-2-6-2 denominada Fideicomiso BBVA Bancomer, toda vez que al 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo el saldo por la cantidad de $3´631,055.

b. Asimismo, al cierre del ejercicio 2016 presenta un saldo de $1´030,000 en la cuenta 1116-3 denominada Depósitos de fondos de tercero en

garantía y/o administración del cual se observa que la Entidad no proporcionó información y/o documentación referente a la cancelación del registro contable de la cantidad en mención, misma que constituyó el Fondo de reserva del Fideicomiso F/1540, según consta en la póliza de Egresos 4/0001 de fecha 10 de enero de 2012.

28. El 30 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos. Al respecto la Entidad no dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, mismos que se detallan a continuación:

a. La Entidad no lleva una contabilidad por separado respecto de las operaciones efectuadas con el Fideicomiso Irrevocable y de Administración y Fuente de pago identificado con el número interno 2213-3, suscrito en fecha 4 de febrero de 2015, el cual tiene por objeto garantizar el pago del crédito suscrito con la institución financiera en mención por la cantidad de $ 665´156,105, a cuyo patrimonio afectó el 60% de las participaciones federales presentes y futuras derivados del fondo general de participaciones y el fondo de fomento municipal. Es de señalar que al cierre del ejercicio 2016, la Secretaria de Planeación y Finanzas depósito a favor del Fideicomiso en comento, un monto total de $215´930,874, integrados por $ 188´413,756 del Fondo General de Participaciones Federales y $ 27´517,118 del Fondo de Fomento Municipal.

b. Al 31 de diciembre de 2016 la Entidad presenta un saldo contrario a su naturaleza en la cuenta contable 1123-2-6-1 denominada Fideicomiso Bansi por un total de $ 57´263,303, que de conformidad con los lineamientos del CONAC, este saldo debe por igual a los saldos mostrados en los estados de cuenta bancarios proporcionados por Bansi, S.A, relativos a la cuenta clásica No. 97652546 y a la cuenta No. 97690790 del Fideicomiso 2213-3, mismos que suman un total de $ 27´141,807, como a continuación de detalla:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EFECTIVO 31-12-16	SALDO INVERSION AL 31-12-16	TOTAL
BANSI, S.A. No. 97652546, CUENTA CLÁSICA	$ 0	$ 14´156,019	$ 14´156,019
BANSI, S.A. No. 97690790 FIDEICOMISO 2213-3	2´384,389	10,601,399	12´985,788
	$ 2´384,389	$ 24´757,418	$ 27´141,807

c. Adicionalmente, la Entidad registró contablemente dos cuentas de bancos identificadas como "BANSI, S.A. No. 97652546 cuenta clásica" y "BANSI, S.A. No. 97652546 inversión cuenta clásica" por $ 128,854,811 y $ 52,741,109 respectivamente; sin embargo, en atención a los lineamientos emitidos por el CONAC, las cuentas contables en comento deben formar parte de la contabilidad del Fideicomiso, misma que se debe llevar por separado, así como elaborar conciliaciones bancarias mensuales, que durante el ejercicio 2016 y al 30 de septiembre de 2017, no han sido elaboradas por la entidad, situación que origina diferencias entre los

saldos contables de bancos y los presentados en los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2016 por Bansi, S.A. que al cierre del ejercicio 2016 asciende a un total de $ 179´211,532, como se detalla a continuación:

No. CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31-12-16	SALDO EDO.CTA. BANC. AL 31-12-16	DIFERENCIA POR CONCILIAR
1112-12-1	BANSI, S.A. No. 97652546, CUENTA CLÁSICA	$ 128´854,812	$ 0	$ 128´854,812
1114-7-1	BANSI, S.A. No. 97652546 INV. CTA CLÁSICA	52´741,109	2´384,389	50´356,720
		$ 181´595,921	$ 2´384,389	$ 179´211,532

De todo lo anterior, la Entidad incumple con los artículos 7 y 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con los lineamientos emitidos por el CONAC publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de diciembre de 2013 referente a los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos, teniendo este último diversos puntos señalados como normatividad contable que debe dar cumplimiento la Entidad.

d. Adicionalmente, la Entidad omitió revelar en la Notas a los Estados Financieros información referente al Fideicomiso celebrado con Bansi, S.A. por lo cual incumple con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado Revelación Suficiente.

29. Con fecha 5 de noviembre de 2012, dentro del recurso de coparticipación a destinarse por la Entidad, y en cumplimiento a los compromisos contraídos con SUBSEMUN ejercicio 2012, solicitó la reprogramación del recurso de

Reestructuración y Homologación Salarial por la cantidad de $ 10’000,000 para aplicarse a un programa de Mejoras de las Condiciones Laborales en el sub-rubro prioritario de Fondo de Retiro; la cual se consideró como procedente por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. Por lo anterior, con fecha 14 de febrero de 2013, se autorizó mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, la constitución del Fondo de Retiro para Personal Operativo del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, condicionado a que este fuera administrado por un Fideicomiso.

En consecuencia, con fecha 29 de octubre de 2013, la Entidad celebró contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración No. 407917-4, con carácter de Fideicomitente y como Fiduciaria BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; teniendo como aportación inicial ,la cantidad de $ 10’000,000 que comprende las aportaciones del Fideicomitente. Indicando en su Cláusula Tercera, como fecha de inicio el 15 de diciembre de 2013.

a. De conformidad a la minuta correspondiente a la segunda sesión del Comité Técnico del Fondo de Retiro, celebrada con fecha 15 de junio de 2016, se presentó y aprobó la primera distribución a los beneficiarios, correspondiente a 12 policías, por un monto a pagar de $ 2’379,221, solicitándole a la fiduciaria que se efectúe el pago, así como la transferencia de $ 132,155 a la cuenta bancaria de la Entidad BBVA Bancomer 01933853535 denominada General, mismo que fue depositado con fecha 23 de junio de 2016; para que la Entidad efectuara el pago del Impuesto sobre

la Renta retenido a los trabajadores. De lo anterior, se observa que dicho impuesto no fue enterado.

b. No se ha efectuado la conciliación de cifras, ya que, según estado de cuenta del mes de diciembre de 2016, el Fideicomiso cuenta con un activo total de $ 3’359,942; mientras que la Entidad presenta saldo al cierre del ejercicio de $ 10’077,700, incumpliendo con los Lineamientos que deben observar los entes públicos para registrar los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos emitidos por la CONAC y publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 2013.

c. Asimismo, es de señalarse la falta de registro contable de las aportaciones entregadas a los 32 elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, cuyo monto asciende a $ 7’615,982; siendo la primera aportación en el mes de junio de 2016 por $ 2’379,221 más Impuesto sobre la Renta retenido por $ 132,155 y la segunda efectuada el mes de noviembre de 2016 por $ 4’851,082 más Impuesto sobre la Renta retenido por $ 253,524. Adicionalmente, se observa la falta de entero de los impuestos retenidos por un monto de $ 385,679.

d. Mediante oficio de solicitud de documentación DEF-SD-047-AYTO-ENS-2016 de fecha 28 de septiembre de 2017, se solicitó a Oficialía Mayor lo siguiente: copia de los cálculos efectuados a los elementos de seguridad pública beneficiados con el fondo de retiro; de los cálculos de liquidación

laboral proporcionados; algunos no se encuentran debidamente firmados, y en dos casos, se detecta una diferencia pagada de menos, como se muestra a continuación:

No.	NO. EMPLEADO	NOMBRE COMPLETO	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN CALCULO	IMPORTE PAGADO POR FIDEICOMISO	DIFERENCIA PAGADA DE MENOS
1	23737	Mauricio Bejarano Huerta	$ 217,545	$ 174,036	43,509
2	23821	Martin Alfonso Terrones López	296,098	207,269	88,829
				TOTAL	$ 132,338

Adicionalmente, no se proporcionaron los Convenios de pago del Haber de Retiro, Retribución por años de Servicio y Bonos, para los Miembros en Retiro de la Dirección de Seguridad Pública celebrado con cada uno de los 32 elementos, bajo el cual se efectuaron los pagos correspondientes.

e. Adicionalmente, la Entidad no presenta en las Notas de desglose a los Estados Financieros información referente al Fideicomiso celebrado, por lo cual incumple con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", adicionalmente incumple con los Artículos 7 y 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a la falta de aplicación de la normativa en materia de armonización contable y en lo específico a los Lineamientos que deben observar los entes públicos para registrar los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos emitidos por la CONAC y publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 2013.

f. La Entidad no efectuó la aportación al fideicomiso, de la cantidad de $ 1´500´000 que debió efectuarse en cumplimiento a los

compromisos del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales ejercicio 2013 contraído con SUBSEMUN; ya que con fecha 18 de septiembre de 2015, la Entidad destinó el recurso para pago de nómina, el cual a dicha fecha presentaba un saldo de $ 1´622,102; cancelándose dicha cuenta bancaria con fecha 30 de septiembre de 2015 según oficio 3507 notificado a este órgano fiscalizador.

30. La Entidad al 31 de diciembre de 2016, presenta en la cuenta Deudores Diversos 1123-0001 "Gastos a comprobar" un total de saldos por comprobar por $ 1'660,906, provenientes del ejercicio de 2015 al 30 de noviembre de 2016 del cual no se ha efectuado la comprobación o recuperación de los mismos, que debió realizarse dentro del plazo de 20 días establecido en el Apartado de políticas de operación numerales 1 y 2 de la Norma Técnica Administrativa número 8.

Asimismo, presenta saldo al 31 de diciembre de 2016 por un importe de $ 662,926, por anticipos a salarios a funcionarios y empleados, desde el ejercicio 2015 y hasta el 30 de noviembre de 2016, observándose que no se han recuperado y carece de la documentación comprobatoria en los archivos contables para constatar la debida operación realizada.

31. La Entidad presenta al 31 de diciembre de 2016, en la cuenta de Deudores Diversos, subcuenta "Cheques devueltos" que fueron expedidos por los contribuyentes para el pago de contribuciones por un monto de $ 991,839, observándose cheques con una antigüedad mayor a 11 meses a la fecha de la

revisión por un importe de $ 928,902, de los cuales, no se ha concluido con las gestiones de cobro o depuración de los mismos.

Adicionalmente, se observa, que la Entidad proporcionó listado de cheques devueltos emitido por Recaudación de Rentas Municipal que asciende a la cantidad de $ 1'149,665, que al compararlo contra los registros contables por $ 991,839, existe una diferencia de menos en registros contables de $ 157,826, no conciliada por la Entidad.

32. La Entidad presenta al 31 de diciembre de 2016, en registros contables en el rubro de cuentas por cobrar, subcuenta "Otros Deudores diversos", la cantidad neta de $ 13'972,720, de los cuales el importe de $ 13'093,714, corresponden a préstamos otorgados a Entidades Paramunicipales, observándose la falta de recuperación conforme lo establece la cláusula Quinta que determina la forma de pago de las partes deudoras involucradas; asimismo en dos casos se observa también la falta de convenio donde se establezcan los derechos y obligaciones de las partes, siendo los siguientes:

Nombre de la Entidad Paramunicipal	**Importe por cobrar al 31-12-16**
Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada	$ 660,186
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia D.I.F.	5'123,036
Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Baja California- INMUDERE	6'242,820
Fideicomiso la Bufadora	887,672
Instituto Municipal de la juventud de Ensenada-IMJUVENS	80,000
Proturismo de Ensenada	100,000
Suman	**$ 13'093,714**

Cabe aclarar que la Entidades paramunicipales con base a los convenios de apoyo financieros recuperables suscritos y lo establecido en su cláusula Quinta se comprometen a

cubrir mediante descuentos de su subsidio, las cantidades que deberá de retener la Tesorería Municipal como descuentos catorcenales pactados, situación que no se ha dado cumplimiento.

33. Respecto a la falta de conciliación de saldos contables entre las cuentas por cobrar y por pagar de la entidad y cuentas por cobrar y pagar de las entidades públicas, se observa lo siguiente:

a. La Entidad al 31 de diciembre de 2016 no ha efectuado conciliación de saldos contables entre las cuentas por pagar del Ayuntamiento de Ensenada con su respectiva cuenta por cobrar del Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada como se muestra a continuación:

	Importe al 31-12-2016
Saldo en Cuentas por Pagar según el Ayuntamiento subcuentas 2112-1-3-23 y 2119-2-46	$(470,049)
Saldo en Cuentas por Cobrar según el CUME	6’348,607
Diferencia a favor del CUME no conciliado	$ 6’818,656

b. La Entidad al 31 de diciembre de 2016 no ha efectuado conciliación de saldos contables entre las Cuentas por Pagar del Ayuntamiento de Ensenada y la cuenta por Cobrar con el Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada como se muestra a continuación:

	IMPORTE AL 31-12-2016
Saldo en Cuentas por Pagar según el Ayuntamiento subcuenta 2119-2-483	$ 6’992,309
Saldo en Cuentas por Cobrar según el FIDUE	14’175,176
Diferencia a favor del FIDUE no conciliado	$ 7’182,867

La Entidad presenta al cierre del ejercicio diversas cuentas por cobrar por la cantidad de $ 3’622,542 y por pagar por $ 37’162,260 sin movimiento, provenientes de los ejercicios 2008 al 2015, de las cuales no se ha efectuado su recuperación, liquidación o corrección en el registro contable correspondiente, así mismo, presenta al cierre del ejercicio en Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar saldos contrarios a su naturaleza, por un monto de $ 57’318,814 y $ 36’350,823, respectivamente, los cuales no se han corregido o depurado.

35. La Entidad presenta al 31 de diciembre de 2016, pasivos a favor de empresas financieras por un monto total de $ 51’723,855 por descuentos nominales de los empleados municipales que contrataron un financiamiento con las empresas que a continuación se detallan:

a. La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, pasivo a favor de la empresa FIMUBAC, S.A. de C.V., por la cantidad de $ 30’525,586, mismo que se integra del importe de $11’787,839 del periodo de julio a diciembre de 2015, y un monto de $ 18’737,747 correspondiente al período de enero a diciembre de 2016, los cuales se derivaron de los descuentos nominales catorcenales a cargo de empleados municipales que contrataron un financiamiento con la citada empresa; dichas operaciones se realizan en el marco del convenio de fecha 1 de diciembre de 2013, donde la Entidad se compromete a actuar como retenedor y enterador de dichos descuentos, observándose que la Entidad no ha efectuado los pagos de los descuentos retenidos dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la cual se realice los respectivos descuentos, hasta la total liquidación del crédito contratado”, incumpliendo con la Cláusula Quinta del citado convenio.

Cabe mencionar que dicha empresa interpuso ante el Juzgado Décimo Primero de lo Civil de fecha 29 de junio de 2016 en vía jurisdicción voluntaria- interpelación judicial mediante expediente No. 0911/2016-C, la reclamación de las cantidades descontadas por el Ayuntamiento de Ensenada con base al convenio suscrito.

b. Asimismo, la Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, pasivo a favor de la empresa FINMART, S.A. de C.V. (CREDIAMIGO), por la cantidad de $ 1’751,103, mismo que se integra del importe de $ 289,490 por diferencias que corresponden a los meses de enero a octubre de 2013, y $ 642,821 por el período de octubre a diciembre de 2015, así como $ 818,792 por el periodo de enero a diciembre de 2016, respectivamente, los cuales se derivaron de los descuentos nominales catorcenales a cargo de empleados municipales que contrataron un financiamiento con la citada empresa; dichas operaciones se realizan en el marco del convenio de fecha 23 de febrero

de 2011, donde la Entidad actúa como retenedor y enterador de dichos descuentos; por lo anterior se observa que la Entidad no ha efectuado los pagos de los descuentos retenidos a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha en que el Ayuntamiento pague el salario a sus empleados", incumpliendo con la Cláusula Sexta del referido convenio.

Adicionalmente, se observa que la Entidad no proporcionó copia de la renovación del convenio suscrito con la empresa FINMART, S.A. de C.V. con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2013 hasta el término de la administración municipal que sería el 30 de noviembre de 2016, toda vez que el convenio firmado el 23 de febrero de 2011 tuvo una vigencia al 30 de noviembre de 2013.

c. La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, pasivo a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores FONACOT, por un monto de $ 255,080 más intereses por mora a la tasa que determine el Instituto, mismo que se integra por diferencias en los descuentos nominales catorcenales de los meses de enero a septiembre, y diciembre de 2016 a cargo de empleados municipales que contrataron un Crédito con FONACOT; los créditos y descuentos en comento se dan en el marco del Convenio de Afiliación para el Otorgamiento de Crédito FONACOT, de fecha 30 de noviembre de 2009, donde la Entidad actúa como retenedor y enterador de dichos descuentos, observándose que la Entidad no ha efectuado los pagos de los descuentos retenidos, el cual deberá ser pagado mensualmente mediante las amortizaciones sucesivas que el Municipio entere al Instituto a través de los documentos oficiales que le señale el Instituto e informarle a más tardar al día siguiente hábil del depósito efectuado y remitir la copia sellada del documento que acredité la cantidad y su fecha de pago", incumpliendo con la Cláusula Cuarta del citado convenio con relación al Artículo 5 de las Reglas de Operación del Anexo "A" de dicho instrumento.

d. La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, pasivo a favor de la Empresa Grupo Anisal, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.(Abonitos) por el importe de $ 4'132,100, derivado de los préstamos otorgados a los empleados municipales que contrataron con dicha empresa prestadora de efectivo y servicios y fungiendo el Municipio de Ensenada como retenedor y enterador de los descuentos nominales a sus empleados, observándose que la Entidad no ha efectuado los pagos de los descuentos retenidos catorcenalmente, a más tardar dentro de los (5) cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se pague el salarios, por lo que se incumple con las cláusulas Segunda, Decima Segunda y Décima Tercera del referido convenio.

e. La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, pasivo a favor de la empresa Emprendedores Tu Comunidad S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. (Tu Nómina Plus) por el importe de $ 2’143,274, derivado de los prestamos sobre créditos en efectivo y cualquier tipo de servicios y productos financieros; operaciones que se dan en el marco del convenio de fecha 30 de septiembre de 2015, actuar como retenedor y enterador, dichos descuentos deberán descontarse durante la vigencia de los créditos que se otorguen las cantidades totales que sus trabajadores le hayan autorizado a descontar para pagar los créditos, y enterar dentro de los (5) cinco primeros días hábiles siguientes a la fecha en que se lleve a cabo la retención al trabajador, los pagos que sean señalados en las cartas de autorización para descuentos a nomina, por lo que se incumple con la cláusula Quinta incisos i), y ii), respectivamente del citado convenio.

f. La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2016, pasivo a favor de la empresa Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. por un monto de $ 12’916,712, mismo que se integra de $ 3’856,192 del periodo de agosto a diciembre de 2015, y un importe de $ 9’060,520, del periodo de enero a diciembre de 2016 los cuales se derivaron de los descuentos nominales catorcenales a cargo de empleados municipales que contrataron un financiamiento con la citada empresa; operaciones del crédito que se dieron en el marco del convenio de fecha 19 de marzo de 2014, donde la Entidad actúa como retenedor y enterador de dichos descuentos; por lo anterior se observa que la Entidad no ha efectuado los pagos de los descuentos retenidos a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha en que el Ayuntamiento pague el salario a sus empleados”, incumpliéndose con las Cláusulas Cuarta y Quinta del referido convenio.

Cabe mencionar que dicha empresa interpuso ante el Juzgado Primero de lo Civil, Juicio Ordinario de incidentes de ejecución de convenios ambos de fechas 24 de enero de 2017 mediante expedientes No. 0252/2016-A y 0252/2016-A, la reclamación de las cantidades descontadas por el Ayuntamiento de Ensenada con base al convenio suscrito.

36. Se observan incumplimientos a convenios de pago por la concesión del servicio de arrastre y almacenaje de vehículos, que se enuncian a continuación:

36.1 La Entidad celebró con fecha 10 de julio de 2015, convenio transacción respecto al Juicio Sumario Civil bajo expediente número 580/2015-B, con el Sr. Pedro Ochoa Amezcua propietario de Grúas del Paseo por el reconocimiento de los adeudos derivados de la concesión de los servicios

públicos del arrastre y almacenaje de 953 vehículos por un importe de $ 34’900,000, por el periodo del 2 de octubre de 2000 al 10 de octubre de 2012, determinándose lo siguiente:

1) En la declaración segunda inciso a), del citado convenio se estableció que se realizaron 953 arrastres de vehículos por el periodo del 2 de octubre del 2000 al 30 de noviembre de 2001, que derivó un adeudo de $ 181,096.

2) En la declaración segunda inciso b), del citado convenio se estableció un adeudo de $ 33’825,545, por 953 vehículos almacenados por el periodo del 2 de octubre de 2000 al 10 de octubre de 2012.

3) En la declaración segunda inciso c), el pago de interese moratorios al tipo legal a razón del 9% anual sobre las cantidades reclamadas en los incisos a) y b) más el Impuesto al valor agregado por el arrastre y almacenaje de los vehículos por el periodo del 2 de octubre de 2000 al 10 de octubre de 2012, determinándose un interés moratorio de $ 3’060,598.

4) En la declaración segunda inciso d), se establece el pago de $ 3’400,694, de costas de acuerdo al porcentaje contemplado en la Fracción IV del Artículo 8 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, conforme al cual se generó un monto de $ 130.00 equivalente al 13% de los primeros $ 1,000, más la cantidad de $ 3’400,564 equivalente al 10% excedente.

5) En la declaración segunda inciso e), el pago de gastos que se generan con motivo del juicio, ante la negativa del Ayuntamiento de Ensenada en cuanto al cumplimiento del contrato base de la acción. La suma de las cantidades descritas en los incisos que anteceden hacen un total de $ 40’467,933.

6) Cláusula primera las partes acuerdan establecer como deuda total a esta fecha 31 de julio de 2015, la cantidad de $ 34’900,000 por el servicio de arrastre y almacenaje de 953 vehículos por el periodo comprendido del 2 de octubre de 2000 al 10 de octubre de 2012.

7) Cláusula tercera el Ayuntamiento se compromete a pagar a favor de la parte actora la Cantidad señalada en la cláusula primera mediante siete (7) pagos catorcenales consecutivos, siendo el primero de ellos por la Cantidad de $ 17’000,000 a partir del día 15 de julio de 2015 y seis (6) pagos catorcenales consecutivos por la cantidad de $ 2’983,333 a

realizarse a partir del día 29 de julio de 2015, debiéndose entregar el comprobante fiscal respectivo.

8) En la cláusula sexta las partes establecen, que en caso de incumplimiento a alguno de los (7) pagos catorcenales pactados, el demandante tendrá la facultad de demandar la ejecución del presente convenio en la vía de apremio el pago de todas y cada una de las prestaciones y monto reclamadas en el escrito inicial de demanda.

De lo anterior se observa lo siguiente:

a) La Entidad durante el ejercicio de 2015, reconoció contablemente un adeudo por el servicio de arrastre y almacenaje de vehículos de Grúas del Paseo, el importe de $ 17’000,000, sin embargo, se debió reconocer pasivo por el monto total de la deuda que ascendía a $ 34,900,000, mediante convenio suscrito.

b) Se observa el incumplimiento a la cláusula tercera, citada con antelación toda vez que el Ayuntamiento con fecha 5 de mayo de 2016, mediante póliza de egresos-cheque No. 35624 efectuó abono a cuenta por un importe de $1’000,000 sobre una parte del adeudo reconocido contablemente por $ 17’000,000, por lo que al cierre del ejercicio existe un saldo por liquidar de $ 16’000,000.

c) Se constata mediante oficio “Incidente de ejecución de convenio” de fecha 16 de diciembre de 2016, que el demandante acude ante el Juez Primero de lo civil a promover la vía de apremio solicitando la ejecución del convenio y cada una de las prestaciones generadas en el escrito inicial de demanda, por el incumplimiento a la cláusula sexta citada con antelación por haber transcurrido en exceso el termino pactado para cubrir dichas prestaciones económicas convenidas.

36.2 La Entidad celebró con fecha 12 de mayo de 2015, Convenio transacción respecto al Juicio ordinario Civil No. 1001/2014-C, con la empresa Grúas del Puerto, S.A. de C.V., por el reconocimiento de los adeudos derivados de la concesión de los servicios públicos del arrastre y almacenaje de 804 vehículos por un importe de $ 20’000,000, por el periodo del 2 de enero de 1999 al 15 de noviembre de 2012. Determinado con base lo siguiente:

1) En su declaración segunda con base al juicio ordinario civil bajo expediente 1001/2014-C, se requiere las siguientes prestaciones:

A) El pago de $ 138,961, por el arrastre de 804 vehículos remolcados durante el periodo del 2 de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2000.

B) El pago de $ 28’948,633, por el almacenaje de 804 vehículos durante el periodo del 2 de enero de 1999 al 15 de noviembre de 2012.

C) El pago de los intereses moratorios al tipo legal sobre cada una de las cantidades reclamadas, más el impuesto al valor agregado derivado del servicio.

2) En su cláusula tercera el Ayuntamiento de Ensenada se compromete a pagar a favor de la parte actora mediante diez pagos catorcenales consecutivos por la cantidad de $ 2’000,000 mediante títulos de crédito a favor de Grúas del Puerto, S.A. de C.V. quien deberá entregar el comprobante fiscal respectivo.

3) En su cláusula sexta se establece que, en caso de incumplimiento a alguno de los diez pagos catorcenales pactados, el demandante tendrá la facultad de demandar la ejecución del presente convenio en la vía de apremio el pago de todas y cada una de las prestaciones y monto reclamados en el escrito inicial de demanda.

De lo anterior se observa lo siguiente:

a) La Entidad incumplió con la cláusula tercera que establece pagos catorcenales a razón de $ 2’000,000, a partir del día 12 de junio de 2015, habiéndose liquidado durante el ejercicio 2015 un importe de $ 5’220,000, y $ 4’640,000 durante el ejercicio 2016, existiendo un saldo por liquidar a la fecha de $ 10’140,000.

b) Se constató mediante oficio “Incidente de ejecución de convenio” de fecha 16 de diciembre de 2016, que el demandante acude ante el Juez Segundo de lo civil a promover la vía de apremio solicitando la ejecución del convenio y cada una de las prestaciones generadas en el escrito inicial de demanda.

37. Se expidió Decreto del Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 13 de mayo de 2016, donde se establece la condonación al Municipio del 100% de los recargos generados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto por la falta de cumplimiento oportuno del pago de los derechos por consumo de agua, siempre y cuando cumplan con el pago total de

dichas obligaciones a su cargo a más tardar el 30 de junio de 2016, en efectivo o mediante pago en especie que se formalice a más tardar en la misma fecha.

El Artículo Primero establece lo siguiente, la citada condonación será del 50% de los recargos generados y del 100% de las multas, cuando no se cumpla con el crédito fiscal omitido mediante pagos a plazo, siempre que el mismo no exceda de 5 meses, se realice un pago inicial a más tardar el 30 de junio de 2016 de cuando menos el 20% de la contribución omitida y se garantice el crédito fiscal.

Se podrá exentar del 100% de los recargos generados por prorroga que se generen por plazo señalado en el párrafo anterior.

Quedará sin efecto el beneficio cuando el contribuyente incumpla con el pago oportuno de alguna parcialidad de la citada autorización y procederá el cobro de las contribuciones y los accesorios correspondientes.

Los sujetos beneficiados con la condonación deberán comprometerse a cubrir oportunamente el pago de los derechos que por consumo de agua se generan, durante el periodo de su gestión.

De lo anterior se desprende la celebración del convenio de coordinación para el reconocimiento de la condonación de adeudos por un importe de $ 70’366,194, que incluye derechos por $ 31’871,961 y recargos por $ 38’494,233, al 30 de junio de 2016.

Observándose lo siguiente:

a). Que el Municipio afectó contablemente el pasivo respectivo por los derechos por consumo de agua el importe de $ 31’871,961, que establece que deberá de cubrir mensualmente y de manera puntual los consumos que se generan como cuenta corriente, no existiendo pago alguno por los consumos del periodo de julio a diciembre de 2016, y esto en relación al Artículo Primero Párrafo Cuarto que establece “Quedará sin efecto el beneficio cuando el contribuyente incumpla con el pago oportuno de alguna parcialidad de la citada autorización y procederá el cobro de las contribuciones y los accesorios correspondientes” y Quinto que establece “Los sujetos beneficiados con la condonación deberán comprometerse a cubrir oportunamente el pago de los derechos que por consumo de agua se generan, durante el periodo de su gestión”, con base en el Decreto del Ejecutivo Estatal de fecha 13 de mayo de 2016.

b). Adicional a lo anterior no se obtuvo evidencia documental de la formalización de los documentos que dieron origen al convenio de coordinación respectivo como son:

- Solicitud de adhesión al decreto.
- Autorización por parte del organismo operador de agua a la solicitud de adhesión.
- Acta de entrega – recepción ante el Organismo operador de agua por el listado de obras sujetas a condonación de adeudos valuadas.
- Constancia de validación de las obras por el departamento técnico del órgano operador de agua, así como la evidencia en cedula del pago de las estimaciones por parte del municipio a los contratistas.

- Oficios de la evidencia de pruebas hidráulicas de las obras.

38. La Entidad presenta al 31 de diciembre de 2016, en Cuentas de Orden, saldos por recuperar de diversas contribuciones municipales por la cantidad de $ 434’110,666 de las cuales se efectuó revisión de una muestra por la cantidad de $ 161’977,598 que representa el 37.32% del total del padrón de rezagos, determinándose diversas observaciones, las cuales a continuación se indican por tipo de contribución:

1. Impuesto predial por la cantidad de $ 314’634,405 de los cuales se efectuó revisión por $ 95’504,535 que se integra de 101 deudores; al respecto, de 94 expedientes el Recaudador de Rentas Municipales solicitó al Director de Catastro y Control Urbano documentos consistentes en deslindes, medidas y colindancias de predio a efecto de emprender el procedimiento administrativo de ejecución, de los cuales sólo en algunos casos se llevó a cabo la etapa de notificación requerimiento de cobro, sin haber continuado con todas las etapas del procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión.

2. Rezago de multas de tránsito y estacionómetros por la cantidad de $ 26’305,068 que provienen de los ejercicios del 2008 al 2016, de las cuales el importe de $ 774,856 se integra de una muestra de 169 infractores de las principales cuentas del padrón proporcionado por Recaudación de Rentas Municipales, observándose la falta de gestión de cobro a 102 infractores.

3. Rezago de Zona Federal Marítima Terrestre o Terrenos ganados al mar, por la cantidad de $ 61’632,880 sobre el cual se efectuó revisión por $ 46’839,941 observándose que en algunos casos no hay gestión de cobro y en otros no se ha continuado con el procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión, existiendo adeudos provenientes desde 1991 a la fecha

4. Rezago por Multas federales no fiscales por la cantidad $ 24’344,020 de las cuales se efectuó revisión a una muestra por un importe de $ 14’775,857, observándose que no se ha concluido el proceso de cobro, existiendo adeudos provenientes del año 1992 al 2016

5. Rezago por Multas Administrativas por la cantidad de $ 2’717,956, de las cuales se determinó una muestra por $ 782,889 de las cuales no se han concluido con las gestiones de cobro.

6. Rezago por Permisos y/o Revalidaciones para la venta de alcoholes por la cantidad de $ 1’502,342, de los cuales la cantidad de $ 1’133,435 no se ha dado seguimiento a las gestiones de cobro, así como el Procedimiento Administrativo de Ejecución, existiendo adeudos provenientes del ejercicio 2008 al 2016.

7. Rezago por Convenios Generales por la cantidad de $ 2’973,993 de las cuales se efectuó revisión por un monto de $ 2’166,082 habiéndose determinado que no se dio cumplimiento en las fechas de pago pactadas en los convenios respectivos, así mismo, no se proporcionó evidencia documental de que se hayan realizado gestiones de cobro.

En relación a las observaciones señaladas en los puntos anteriores del 1 al 7 se observa incumplimiento en los Artículos 22, 32, 112 y 113 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, Artículo 61 Fracción VII y VIII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada vigente a partir del 30 de abril de 2005.

Adicionalmente, en la observación señalada en el numeral 4, se incumple también la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración para la administración de multas federales no fiscales celebrado con el Estado de Baja California de fecha 16 de enero de 2016.

39. La Entidad presentó la Cuenta Pública del ejercicio 2016 ante el Congreso del Estado el 31 de marzo del 2017, observándose que no se cumple con lo siguiente:

1. La Entidad adjuntó como parte integrante de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 los estados financieros consolidados, sin embargo, no adjunto sus respectivas notas de desglose, por lo anterior se incumple con los Artículos 50, 51, 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable que emana del Consejo Nacional de Armonización contable.

2. Con relación a las Notas a los Estados Financieros parte integral de los mismos, se omitió revelar en las notas de desglose lo siguiente:

- Bienes Muebles. - No se describe las altas y bajas del ejercicio auditado, así como el monto de depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicables y los criterios de la aplicación de los mismos, así mismo de las características significativas de estado en que se encuentran los activos.

Por lo anterior, se incumple con lo establecido en el Artículo 49 Fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Artículo 40 Fracción V de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y su Municipios, ordenamiento aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Así como el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental ¨Revelación suficiente¨.

3. Con relación al Sistema Contable al que debe sujetarse la Entidad conforme a la Normatividad emitida por el CONAC:

a. La Entidad dispone de los documentos técnicos-contables emitidos por el CONAC, sin embargo no realiza los registros contables con base acumulativa, ni cuenta con un sistema informático en el cual se realice las transacciones presupuestarias y contables que generen el registro automático y por única vez de los momentos contables, interrelacionando las operaciones presupuestarias y contables en apego al Marco Conceptual, Postulado Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores, y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, incumpliéndose con lo señalado en los Artículos 16, 19, 40, 41 y Sexto Transitoria de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo de CONAC publicado el 8 de agosto de 2013, por el que se determina la Norma de la Información Financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 Aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el cual se establece que los Ayuntamientos cumplirán con dichas disposiciones en el ejercicio 2015.

40. La Entidad celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple el 4 de febrero de 2015 con la institución financiera denominada Bansi, S.A. por $665´156,105, afectando en garantía el 60% de las participaciones federales de los derechos al cobro e ingresos presentes y futuros, de las participaciones federales que de manera mensual o con cualquier otra periodicidad le correspondan al Municipio de Ensenada, relativos al Fondo General de Participaciones Federales y al Fondo de Fomento Municipal. La contratación del crédito fue autorizada por el Congreso del Estado

mediante el Decreto No. 196 de fecha 31 de diciembre de 2014. Al respecto se observa lo siguiente:

a. Durante el ejercicio 2016 la Entidad efectuó erogaciones por un total de $ 21´412,000, mismo que se integra de los pagos por $12´412,000 a favor del Despacho Menchaca Pérez y Asociados, S.C. y $9´000,000 a favor de Nacional Financiera, S.N.C., de los cuales no nos fue proporcionada información y/o documentación que justifiquen los pagos con recursos crediticios, toda vez que dichos recursos fueron aplicados a conceptos distintos a los previstos en el Decreto autorizado por el Congreso del Estado. A continuación, se detallan dichos pagos:

BENEFICIARIO:	**FACTURA**						
	No.	**FECHA**	**SUBTOTAL**	**IVA 16%**	**TOTAL**	**FECHA PAGO**	
Menchaca Pérez y Asociados, S.C.	5805	09-nov-16	$ 4,500,000.00	$ 720,000.00	$ 5,220,000.00	09-nov-16	(1)
Menchaca Pérez y Asociados, S.C.	5932	25-nov-16	1,500,000.00	240,000.00	1,740,000.00	25-nov-16	(1)
Menchaca Pérez y Asociados, S.C.	5933	25-nov-16	2,500,000.00	400,000.00	2,900,000.00	25-nov-16	(2)
Menchaca Pérez y Asociados, S.C.	6000	30-nov-16	2,200,000.00	352,000.00	2,552,000.00	30-nov-16 01-dic-16	(3)
subtotal:			$ 10,700,000.00	$ 1,712,000.00	$ 12,412,000.00		
Nacional Financiera, S.N.C.					9,000,000.00	09-jun-16	(4)
Total:					**$ 21,412,000.00**		

1. Estos pagos corresponden a los honorarios pagados a favor del Despacho Menchaca Pérez y Asociados, S.C. derivados del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado en fecha 12 de octubre de 2016, por un total de $ 8´700,000 IVA incluido, en el cual el Despacho se obliga a presentar una controversia constitucional a nombre del Municipio de Ensenada, B.C. en contra del Congreso del Estado de Baja California, a fin de impugnar el Decreto por el que se aprobó el Dictamen 137 que resolvió la controversia territorial entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito. Cabe aclarar que la Entidad no proporcionó copia de la demanda de controversia constitucional, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalado en la cláusula tercera y cuarta inciso (b) del contrato en mención, misma que fue solicitada como parte de la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos efectuados a favor del despacho en comento, según oficio No. DEF-SD-48-AYTO-ENS-2016 de fecha 28 de septiembre de 2017.

2. La Entidad nos proporcionó un contrato de prestación de servicios de fecha 30 de julio de 2015 por la cantidad de $2´900,000 IVA incluido del 16%, el cual tiene por objeto "el análisis de la documentación de los trámites legales y recursos

a presentar ante el Congreso del Estado de Baja California con motivo del conflicto de límites territoriales existente entre los Municipios de Ensenada y Playas de Rosarito.", mismo que tiene una vigencia a partir de la firma del contrato y hasta la total conclusión del proyecto.

3. El pago corresponde a los honorarios pagados a favor del Despacho Menchaca Pérez y Asociados, S.A. resultantes de la firma del Adendum al Contrato de Prestación de Servicios de fecha 30 de julio de 2015, signado el 14 de agosto de 2015, en el cual se amplía el objeto del contrato consistente en la realización del trabajo de investigación y obtención de información y documentación necesaria para una adecuada defensa ante el Congreso del Estado de Baja California, dentro del conflicto territorial existente entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito.

(4) Este importe corresponde al pago del 50% para la creación del FOMIX Estatal 2016, para el desarrollo de una plataforma tecnológica que modernice de forma integral el funcionamiento de los trámites y servicios del Ayuntamiento de Ensenada, B.C., según se indica en el oficio No. 652/2016/DPGF fechado el 9 de junio de 2016, girado al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de B.C. Es de mencionar, que no nos fue proporcionado el convenio suscrito con el Organismo en mención, mismo que fue solicitado como parte de la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos efectuados a favor de Nacional Financiera, S.A. mediante oficio No. DEF-SD-AYTO-ENS-016 de fecha 28 de septiembre de 2017.

De lo anterior se incumple con el artículo 5 Fracción IV, y 20 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, asimismo, con el Decreto expedido por la Legislatura donde se señala el destino al cual deberá aplicarse el crédito autorizado.

41. Con fecha 21 de diciembre de 2011, la entidad celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple con BBVA Bancomer, S.A., en el cual esta última otorga un préstamo por la cantidad de $ 200’000,000, estableciéndose en la Cláusula Segunda del documento que el Ayuntamiento de Ensenada se obliga a destinar el importe del crédito para financiar obras públicas productivas, dicha contratación fue autorizada por el Congreso del Estado, mediante el Decreto No. 92 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de septiembre de 2011. Al respecto se observa lo siguiente:

a. Al cierre del ejercicio 2016, el monto de obras y acciones ejercidas asciende a
$ 194´370,464, observándose que la Entidad no ha concluido las obras autorizadas por el Congreso del Estado por un total de $ 5,629,536. incumpliendo con el Artículo 6 del Decreto No. 92 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de

septiembre de 2011, en el cual se señala que los recursos derivados del financiamiento deberán ejercerse antes del 30 de noviembre de 2013, resaltando que dicho plazo fue ampliado mediante el Decreto 274 de fecha 29 de mayo de 2015, en el cual se establece como fecha límite el 30 de noviembre de 2016. Cabe mencionar que el monto de obras realizadas pendientes de pago al cierre del ejercicio 2016 asciende a $ 3’412,257, y el monto de obras no contratadas se importan la cantidad de $ 2´217,279. Como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS:	**PARCIAL**		**SALDO AL 31-DIC-16**
Importe total de obra pendiente de pago:			**$ 3,412,257**
Obras provisionadas pendientes de pago	$ 2´557,588		
importe de obras pendientes de pago sin provisionar:	854,669		
Obras no contratadas:			**2,217,279**
Trabajos complementarios Estación de bomberos calle 9	1,650,531		
Mejoramiento de caminos rurales en Delegación Valle de la Trinidad, Ensenada B.C.	500,000	(1)	
2da. Etapa de subestación de policía, Del. Eréndira, Ensenada B.C.	6,650		
Otros	60,098		
Saldo por ejercer del crédito:			**5,629,536**
Importe total de obras y acciones ejercidas del crédito:			194,370,464
Monto del crédito suscrito con BBVA Bancomer			**----------**
			$200,000,000
			==========

1. Esta obra fue contratada con Cormar Construcciones, S. de R.L. de C.V. al amparo del contrato AS-XX-AYTO-ENS-BC-PRON-2013-UB-15 de fecha 25 de noviembre de 2013; sin embargo, por causas no imputables al contratista, consistentes en el retraso del inicio de la ejecución de obra, se rescindió el contrato según acta administrativa de fecha 12 de septiembre de 2016. De lo anterior, se desconoce si la Entidad ha hecho gestiones para adjudicar la obra a otro contratista, a fin de dar cumplimiento con el programa de obras autorizadas por la Legislatura local.

b. Es de señalarse, que de las obras pendientes de pago que ascienden a $ 3´412,257, el importe de $ 854,669 no ha sido registrado contablemente para la provisión de su pago. Como a continuación se detallan:

No. Futer	**Fecha**	**Contrato/ Contratista**	**Concepto**	**Factura/ fecha**	**Importe**
PRONCREDITO/15-007	08-nov-16	Flip Constructora, S.A. de C.V. IS-XXI-AYTO-ENS-BC-PRONCREDITO-2015-EP-01	2da. Etapa de subestación de policía, Del. Eréndira, Ensenada B.C.	A-1196 8-nov-16	$ 527,470.65

PRONCREDITO/15-010	28-nov-16	Jorge Alberto Magaña Díaz AD-XXI-AYTO-ENS-BC-PRONCREDITO-2015-EP-01	Obras complementarias y de mantenimiento en casa municipal	A-1515 25-nov-16	24,810.47
PRONCREDITO/13-080	14-oct-16	Constructora Robles, S.A. de C.V. XX-AYTO-ENS-BC-PRON-2013-EP-IS-03	Construcción de Oficinas para panteón municipal	290 12-oct-16	302,388.23
				TOTAL:	**$ 854,669.35**

Cabe señalar que mediante oficio No. DI:1694/17 de fecha 26 de septiembre de 2017, el Director de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura, nos informa que no se ha llevado a cabo ningún tipo de gestión ante el Congreso del Estado a fin de que éste emita un nuevo Decreto en el cual amplíe el periodo de ejecución de los recursos crediticios y se proceda a efectuar el pago de las obras.

c. En adición, la ejecución de obras al 31 de diciembre de 2016, autorizada por el Congreso del Estado, según la Matriz de Inversión en Obra Pública, indica que se han concluido obras por $194´370,464 por lo que en consecuencia debe existir un saldo en bancos por la cantidad de $5´629,536; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016 se tiene un saldo de $ 0.00, observándose que la Entidad no proporcionó información y/o documentación que integre la aplicación y/o destino del recurso.

De lo anterior se incumple con el artículo 5 Fracción IV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes puntos.

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO.- Se aprueban las Cuentas Públicas de Ingresos, y Deuda Pública al H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos al H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el periodo comprendido de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 1 al 8 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

TERCERO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Patrimonio al H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos 9 al 14 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios o ambos, que en su caso hubieren ocasionado a la entidad fiscalizada en los términos establecidos en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98 Fracción XVI y 103 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, también aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios

D A D O en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA
SECRETARIO

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES
VOCAL

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ
VOCAL

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
VOCAL

(CONCLUYE DICTAMEN No. 17)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; se declara abierto el debate del dictamen No. 17, Diputados se pregunta si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay intervenciones, solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal el dictamen, por favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones Diputada Presidenta. Se somete a votación nominal el dictamen No. 17 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar?

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?, de no ser así, de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 17			
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel			
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César			
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		

Dip. Molina García Juan Manuel			
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo			
Dip. Meléndrez Espinoza Juan			
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal			
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino			
Total de votos a favor	17		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se informa Diputada Presidenta, que el resultado de la votación es 17 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; se declara aprobado el dictamen No. 17 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Continua con el uso de la voz la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, para dar lectura al dictamen No. 19 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; adelante Diputada.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Dictamen No. 19

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DTCF/127/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto a la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Tecate Baja California, para el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública de Ingresos al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos del 1 al 6 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

TERCERO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Patrimonio al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos del 7 al 12 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Deuda Pública al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31

de diciembre de 2016, por motivo de las observación señalada en el punto 13 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios o ambos, que en su caso hubieren ocasionado a la entidad fiscalizada en los términos establecidos en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98 Fracción XVI y 103 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, también aplicables disposición… también aplicables de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

DADO en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Es cuanto Presidenta.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 19 DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
DICTAMEN NO. 19

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión, para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente, el oficio No. DTCF/127/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Baja California emite su opinión respecto de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Tecate Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

Para efectos de la emisión del presente dictamen se efectuó el estudio, análisis y evaluación de la información correspondiente, resultando los siguientes

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que con fecha 31 de marzo de 2017 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el día 29 de noviembre de 2016, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, inició la fiscalización de la información que comprende la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Baja California; así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracciones I, II, III y IV y 98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el examen se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales en materia de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.

TERCERO.- Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DTO/248/2017, DTMF/268/2017 y DTMP/343/2017 los dos primeros de fecha 31 de agosto y 17 de octubre de 2017, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios números TES/670/2017, TES/676/2017, TES/721/2017 y TES/822/2017 de fechas 14, 25, 29 septiembre y 2 de noviembre de 2017, respectivamente, remitidos a la Auditoría Superior del Estado de Baja California por el C.C.P. Juan Manuel Durán Morales, en su carácter de Tesorero Municipal de la Entidad.

CUARTO.- Que en fechas 12, 30 de octubre y 23 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo las confrontas entre los servidores públicos de la Entidad y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y Penúltimo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, con el objeto de darle a conocer los resultados preliminares de la revisión realizada a la Entidad por el ejercicio fiscal 2016 y se aclararan las observaciones que no quedaron totalmente solventadas en los plazos establecidos en dicha Ley.

QUINTO.- Asimismo, que como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, formuló oficio

número DTO/249/2017, DTO/250/2017, DTMF/269/2017, DTMF/304/2017 DTMP/344/2017 y DTMP/345/2017 de fechas 31 de agosto los primero tres, 4 de septiembre y 17 de octubre de 2017, respectivamente, para notificar el pliego de observaciones, a los CC. Ing. César Rafael Moreno González de Castilla y el C.P. Rodrigo de Bivar Castanedo Peñuñuri, quienes se desempeñaron como Presidente y Tesorero Municipal, del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, respectivamente, durante el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2015, mismo que no fueron atendidos.

Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior, mediante el oficio números DTO/325/2017, DTO/334/2017, DTMF/349/2017, DTMF/350/2017, DTMP/390/2017 y DTMP/391/2017 de fechas 4, 23 de octubre y 15 de noviembre de 2017, respectivamente se requirió la presencia de los CC. Ing. César Rafael Moreno González de Castilla y el C.P. Rodrigo de Bivar Castanedo Peñuñuri, en su carácter de Ex Presidente Municipal y Ex Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, habiendo comparecido los días 12, 19 de octubre, 8 y 29 de noviembre de 2017, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta Pública durante su periodo de gestión.

SEXTO.- Que una vez llevado a cabo el proceso de revisión, análisis y auditoría de la gestión financiera de la Entidad, de conformidad con los Artículos 58 al 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió Informe de Resultados mediante oficio número DTCF/127/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, que contiene la opinión sobre la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SÉPTIMO.- Que a partir del día 12 de agosto de 2017, entró en vigor la reforma al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través de la cual se modifica la denominación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por el de Auditoría Superior del Estado de Baja California, otorgándole a ésta las atribuciones para continuar tramitando hasta su terminación, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como los demás asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Transitorios Cuarto, Quinto y Octavo del Decreto No. 97 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 28 de julio de 2017, así como en los Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en sus Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Segundo Párrafo del Apartado C y 27 Fracción XII, establecen que es facultad del Congreso del Estado revisar la Cuenta Pública Anual tanto del Estado como de los Municipios y demás Entidades fiscalizables.

SEGUNDO.- Que de conformidad al Artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual de las Entidades fiscalizables, previstas en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

CUARTO.- Que de conformidad al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, vigente hasta el 11 de agosto de 2017, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California, es responsable de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que están obligados a rendir las Entidades que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, administración, el manejo o el ejercicio de recursos públicos estatales o municipales, como se establece en el Artículo 7 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicable por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO.- Que durante el ejercicio fiscal de 2016, fungieron como Presidentes Municipal del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California los CC. Ing. César Rafael Moreno González y la C. Lic. Nereida Fuentes González, por el período del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 y del 1 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

SEXTO.- Que con fundamento en los Artículo 37, 38 y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja

California y sus Municipios, se hicieron observaciones a las Cuentas Públicas del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, mismas que fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, a excepción de lo siguiente:

1. Con fecha 23 de febrero de 2016, se celebró el contrato de crédito bancario Bansi, S.A. IBM, por $160'000,000, a un plazo de 240 meses, con afectación de recursos provenientes de participaciones federales, el cual fue autorizado de acuerdo al Decreto No. 423 emitido por el H. Congreso del Estado de Baja California de fecha 9 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado del 28 de diciembre de 2015, cuyo destino autorizado corresponde primero al Refinanciamiento del Crédito con Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. hasta en $71'619,045 y segundo a Inversión Pública Productiva hasta en $88'380,955.

1.1. En cuanto al destino autorizado para refinanciamiento del crédito con Financiera Local, S.A, de C.V., SOFOM, E.N.R. hasta en $71'619,045, se aplicó como a continuación se integra:

Pago de 2% de comisiones por estructuración del crédito más IVA	$ 3'712,000
Honorarios fiduciarios	27,840
Constitución del Fondo de Reserva Fideicomiso Bansi # 2357-1	3'000,000
Gastos notariales	25,200
Liquidación del Crédito No. 002003 ABC CCC R28 080 a Financiera Local, S.A. de C.V. y Banca Mifel, S.A.	67'243,195
Pago de servicios de asesoría y consultoría relativos al crédito	22'704,750
Suma:	**$96'712,985**

En base a lo anterior se detectan las siguientes observaciones:

a. Respecto al monto autorizado de $71'619,045 para el concepto de refinanciamiento del crédito número 002 003 ABC CCC R28 080 con Financiera Local, S.A. de C.V. y Banca Mifel, S.A., fue rebasado en $23'319,260, para quedar en $96'712,985, incumpliendo con el ARTICULO PRIMERO del Decreto número 423 del 9 de diciembre de 2015 emitido por el H. Congreso del Estado de B.C.: "*Se autoriza al H. XXI Ayuntamiento de Tecate Baja California a través del Presidente Municipal, el Síndico procurador y el Secretario del Ayuntamiento, la contratación de un Financiamiento, a través de uno o varios créditos, hasta por la cantidad de $160,000,000 (Ciento sesenta millones de pesos con 00/100 M.N.) , cantidad en la que no se encuentran incluidos los intereses que se generen durante la vigencia del empréstito; así como comisiones,* ***honorarios****, intermediación, calificaciones, derechos, impuestos y gastos generados por la formalización e inscripción del empréstito autorizado, a un plazo de hasta 20 (veinte) años, con la o las instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones.****"***, El pago de Comisiones y Honorarios por Servicios a que nos referimos en esta observación se encontraban expresamente prohibidos en el mismo Decreto 423, el cual acabamos de transcribir para su mayor comprensión y por consecuencia estas

comisiones y honorarios debieron ser pagados con recursos propios. Incumpliendo además con el Artículos 5, Fracción IV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios :

“ARTÍCULO 5.- Los sujetos de la presente Ley no podrán:
IV.- Utilizar los recursos provenientes de operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública para un objeto distinto al que sustentó la autorización correspondiente;”

De los $22’704,750 de la cuenta bancaria Bansi, S.A. número 00098482750 citados en el cuadro informativo anterior, se identificaron pagos por $21’402,000, con motivo de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales que de acuerdo a los montos erogados, no fue proporcionada evidencia de haber aplicado el procedimiento de licitación pública, o invitación restringida en su caso, incumpliendo con los Artículos 19, Fracción I y II; 32 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, B.C. y 47, Fracción X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Adicional a dicho importe se incluye el pago de pasivos cuyos saldos provienen de ejercicios anteriores 2013 al 2015 y 2016 de $1’302,750, por concepto de servicios de difusión institucional en radio sin comprobantes, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Asimismo de los recursos citados por $21’402,000, se incluye un monto de $1’740,000 pagado a la empresa Industrias Recizap, S.A. de C.V., de lo cual, el Ayuntamiento no proporcionó informe de actividades o evidencia del servicio recibido, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

b. Se cumplió parcialmente con la liquidación del crédito número 002 003 ABC CCC R28 080 contratado con Financiera Local, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.; toda vez que al cierre del ejercicio presenta un saldo insoluto pendiente de pago, por un monto de $1’209,138 por concepto de intereses, comisiones y penas convencionales, según estados de cuenta del crédito, incumpliendo con el Artículo 14, Fracción XIII de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios y la Cláusula Primera, inciso (i) del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Participaciones Federales como Fuente de Pago.

Cabe señalar que el municipio recibió requerimiento de pago de Financiera Local, S.A. de C.V., con corte al 24 de enero de 2017, solicitando el pago de saldo insoluto de $1’209,138, más penalizaciones de $464,000 que en conjunto suman $1’673,138.

1.2. En cuanto a los recursos autorizados para destinarse a inversión pública productiva hasta en $88’389,700, se observa lo siguiente:

a. El Ayuntamiento entregó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado una relación de 29 obras que sustentaban la solicitud de autorización, del crédito en comento, valuadas en $88,389,700, las cuales fueron reclasificadas mediante Dictamen número 01 de fecha 6 de julio del 2016, por la Comisión de Hacienda del H. Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tecate Baja California, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de agosto de 2017; mismo que fue autorizado en todas y cada una de sus partes en el sexto punto del orden del día de la sesión extraordinaria de cabildo número 39 del 8 de septiembre de 2016, para inversión pública productiva; consistentes en la realización de 103 obras y/o acciones valuadas en $68,758,438, importe menor al tope autorizado por el Congreso del Estado por un monto de $88’389,700 a ejecutarse durante los meses de enero a octubre de 2016, para lo cual, el municipio aperturó la cuenta Banorte número 044231775-9, para el control de la ejecución de las obras, donde fueron transferidos recursos según auditoría por $62’884,318 provenientes de la cuenta donde se dispuso el crédito Bansi, S.A. número 00098482750.

b. Del listado de las 103 obras y acciones derivadas del Dictamen No. 01, el Ayuntamiento proporcionó comprobantes donde solamente fue posible identificar 22 conceptos de obra pagados por $28’757,241, equivalentes al 41.8% del monto reclasificado mediante el multicitado dictamen del Ayuntamiento. Del resto de los conceptos de obra y acciones enlistados valuados en $39’967,709, correspondientes a 92 obras y acciones, no se proporcionó información y/o documentación que sustente su ejecución.

Cabe señalar que los $28’757,241 de inversión pública productiva pagada con recursos del crédito, se pagaron pasivos provenientes de ejercicios anteriores de $8’428,127, obras en proceso de $19’904,114 y adquisición de bombera en $425,000. Sin embargo, el pago de pasivos y obras en proceso mencionados debieron pagarse con recursos etiquetados provenientes de la Federación y de otras fuentes de recursos, de acuerdo a los contratos de obra ejecutada y pagada, como se integra a continuación:

1. Ejecución de obra sin la obligación de aportaciones Municipales en coparticipación:

Contingencias Económicas 2014	$ 1’165,147
Contingencias Económicas 2015	847,851
FAIP 2015	3’732,870
FAIP 2016	8’126,473
Pago de servicios de traslado de residuos sólidos	117,500
Construyendo una Mejor Ciudad 2010-2013 (Crédito $80 millones)	6’581,773
SUBTOTAL:	**$20’571,614**

2. Ejecución de obra con la obligación de aportaciones Municipales en coparticipación:

Hábitat 2015	$ 785,904
PREP 2015	**6'974,723**
SUBTOTAL :	**$ 7'760,627**
TOTAL:	**$28'332,241**

Incumpliendo con el Artículo 117, Segundo Párrafo de la Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5, Fracción IV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California, Cláusula Primera inciso (ii) del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Participaciones Federales como Fuente de Pago de fecha 29 de febrero de 2016, Artículo 46, Fracción III y 47, Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

2. En relación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Productiva (FAIP), autorizados al Ayuntamiento de Tecate, por un monto de $10'000,000, de los cuales contrataron $9'977,684, para la ejecución de obras de pavimentación, se observó que el Ayuntamiento realizó pagos en exceso a contratistas por un importe de $201,198, de lo cual, en la reunión de confronta la Entidad se comprometió a entregar documentación relacionada para aclarar la situación, sin embargo, no presentó evidencia alguna que ampare la cantidad en comento o en su caso el requerimiento del reintegro respectivo a cada uno de los contratistas, referentes a los siguientes contratos de obra:

a. En la Pavimentación de calle Coalcomán colonia Militar de la ciudad de Tecate, B.C. ejecutada por la contratista Desarrollos INNOVA, S. de R.L. de C.V. amparada mediante contrato número C-FAIP-2016-PMTCT-01 de fecha 28 de abril de 2016 con importe contratado de $2'216,298, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $28,717 con I.V.A., compuesto por: diferencias en las cantidades de obras de los conceptos estimados y las identificadas mediante visita e inspección física $23,727 con I.V.A. y por anticipo no amortizado $4,989 con I.V.A.

b. En la Pavimentación de Rampa Azucena, colonia Jardín de la ciudad de Tecate, B.C. ejecutada por la contratista Espacio a Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. amparada mediante contrato número C-FAIP-2016-PMTCT-02, de fecha 28 de abril de 2016 con importe contratado de $2'324,941, la Entidad realizó un pago en exceso por cálculos indebidos en concepto de despalme un monto de $57,809 con I.V.A.

La Entidad reconoce el pago en exceso más los intereses generados y el impuesto al valor agregado, a la fecha del reembolso, sin embargo, no proporcionó oficio de reclamación al contratista.

c. En la Pavimentación de la calle Bugambilias colonia Jardín de la ciudad de Tecate, B.C., ejecutada por la contratista YEFER Construcciones, S.A. de C.V. amparada mediante contrato número C-FAIP-2016-PMTCT-03 de

fecha 28 de abril de 2016 con importe contratado de $1’430,378, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $63,592 con I.V.A., compuesto por: diferencias en las cantidades de obras de los conceptos estimados y las identificadas mediante visita e inspección física $4,653 con I.V.A; por duplicidad de cobro en concepto de carga y acarreo $4,808, y por falta de evidencia documental comprobatoria de los volúmenes estimados de carga y acarreo de material producto de corte de terreno $54,131 con I.V.A.

d. En la Pavimentación de calle José María Villagrana, entre calle Fundadores y Av. Ramón Salazar, colonia Fundadores de la ciudad de Tecate, B.C., ejecutada por la contratista Constructora Villas Cuchumá, S. de R.L. de C.V., amparada mediante contrato número C-FAIP-2016-PMTCT-04 de fecha 28 de abril de 2016 con importe contratado de $2’868,508, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $23,929 C/IVA, por diferencias en las cantidades de obras de los conceptos estimados y las identificadas mediante visita e inspección física.

e. En relación a obra Pavimentación de calle Manuel Bello col. Militar de la ciudad de Tecate B.C., ejecutada por la contratista Constructora SC Roca, de C.V. amparada mediante contrato número C-FAIP-2016-PMTCT-05 de fecha 29 de abril de 2016 con importe contratado de $1’020,434, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $27,150 con I.V.A., por diferencias en las cantidades de obras de los conceptos estimados y las identificadas mediante visita e inspección física.

Incumpliendo con el Artículo 55, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3. En relación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMDF), autorizados al Ayuntamiento de Tecate, por $ 6’725,664 para la ejecución de obra pública, contratados y ejercidos mediante 4 contratos por un importe de $6’725,664, se observó que el Ayuntamiento realizó pagos en exceso a contratistas por un importe de $1’236,411, a lo que la Entidad, en la reunión de confronta, se comprometió a entregar documentación correspondiente para aclarar lo observado, sin embargo, no presentó evidencia alguna que ampare la cantidad en comento o en su caso el requerimiento del reintegro respectivo a cada uno de los contratistas, referentes a los siguientes contratos de obra:

a. En relación a la obra Construcción de Piso Firme en la Ciudad de Tecate, B.C., ejecutada por el contratista MASOVA Construcciones, S.A. de C.V. amparada mediante contrato número C-FAISMDF-2016-PMTCT/01 de fecha 17 de mayo de 2016 por un importe de $1’499,098, la Entidad realizó un pago en exceso por $54,043 con I.V.A., por concepto de suministro y colocación de cimbra en lugares en donde no se necesitó, en virtud de que los muros existentes en las viviendas de

los beneficiarios funcionaron como cimbra y frontera para recibir el colado del piso firme.

b. En relación a la obra Movilidad, rehabilitación y construcción de mejoras en comedores comunitarios en municipio de Tecate, B.C., ejecutada por la contratista Arq. Hermes Cázares Pérez. amparada mediante contrato número
C-ACJ/FAISMDF-2016-PMTCT/01 de fecha 24 de marzo de 2016 con importe contratado de $398,364, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $20,793 C/IVA, por diferencias en las cantidades de obras de los conceptos estimados y las identificadas mediante visita e inspección física.

c. En relación a la obra Pavimentación de la calle Bernardino Borrariz, Fracc. Las Torres de la ciudad de Tecate, B. C., ejecutada por la contratista Arq. Hermes Cázares Pérez. amparada mediante contrato número C-FAISMDF-2016-PMTCT/02 de fecha 24 de junio de 2016 con importe contratado de $1’268,749, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $213,776 con I.V.A., siendo esto de la siguiente forma: $7,741 por diferencias en las cantidades de obras de los conceptos estimados y las identificadas mediante visita e inspección física, y $206,035 por falta de documentación comprobatoria y evidencia física de ejecución de: despalme de terreno, formación de terraplén, corte de material tipo B, carga y acarreo a 1km y subsecuentes a 3 km y tratamiento de terraplén.

d. En relación a la obra Rehabilitación de Biblioteca Lic. Benito Juárez, colonia Militar y suministro e instalación de tanque séptico y techos de lámina en el municipio de Tecate, Baja California, ejecutada por la contratista Arq. Hermes Cázares Pérez, amparada mediante contrato número C-FAISMDF-2016-PMTCT/03 de fecha 22 de agosto de 2016 con importe contratado de $3’439,820, la Entidad realizó un pago en exceso por un monto de $947,799 con I.V.A., conformado por: considerar en la tarjeta de análisis de precios unitarios el concepto con clave 2.2.-“Instalación de cubierta a base de láminas R72.” el insumo “pija autoroscable con empaque de neopreno” a un costo de 4.50 por pieza sin embargo, durante visita e inspección física a la obra, se pudo constatar que fue utilizado un tornillo de rosca fina, cuyo costo de mercado es de $0.88 por pieza, lo que representó un pago en exceso por $197,890 con I.V.A; y porque en el concepto con clave 5.1.-“Suministro e instalación de tanque séptico de 600 Lts tipo biodigestor autolimpiable”, no fue realizado acorde a las condiciones establecidos en la tarjeta de análisis de precios unitarios; en la cual, se consideraron 9 conceptos auxiliares, de los cuales sólo se realizaron dos, se realizó un pago en exceso por un monto de $749,908 con I.V.A.

Incumpliendo el Artículo 64, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, Cláusulas Primera y Décima del contrato.

e. El Ayuntamiento pactó contrato s/n de “Prestación de Servicios Profesionales” de fecha 2 de junio de 2016 con importe de contrato $124,731, para la supervisión externa de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ramo 33 Fondo III 2016. (FISMDF), al Arq. Benjamín Loya Grijalva, quien tenía como función la vigilancia, control, supervisión de los trabajos ejecutados, y autorización de estimaciones para pago; sin embargo, aun cuando en confronta respectiva, la entidad argumentó “aceptar en su totalidad la observación” referida, no se proporcionó la documentación soporte que acredite se haya llevado a cabo los servicios de supervisión externa como: elaboración de bitácoras de cada una de las obras, revisión de la calidad de los trabajos ejecutados, verificación de las modificaciones y cierre de los trabajos, trámite de los convenios modificatorios necesarios, informes periódicos, servicio de topografía y laboratorio.

Incumpliendo el Artículo 64, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, cláusulas Primera y Décima del contrato.

4. Durante el ejercicio fiscal de 2016, el Ayuntamiento recibió subsidio federal FORTASEG por $15’760,661, de lo cual se observa lo siguiente:

a. El municipio no utilizó de manera correcta la cuenta bancaria específica Banorte número 042435573-9, ya que al cierre del ejercicio realizó traspasos electrónicos de los recursos recibidos por $11’823,262 a otras cuentas bancarias Banorte números 0211250-306 y 0211870-197, utilizadas para pago de proveedores y sueldos, prestaciones y compensaciones al personal, conceptos distintos o ajenos a los objetivos del subsidio, y efectuó depósitos (reintegros a dicha cuenta) por $7’796,200, presentando un saldo pendiente al cierre del ejercicio de $4’027,062 sin reintegrar, por lo tanto se requiere que el Ayuntamiento reintegre dicho monto más los intereses correspondientes para su aplicación en el objetivo establecido en el citado Fondo.

b. En relación a los recursos del FORTASEG, autorizados al Ayuntamiento de Tecate, por $2’000,000, para la ejecución de obra pública, mismo que se comprometió un importe de $2,198,147, mediante contrato número C-FORTASEG2016-PMTCT-01 de fecha 24 de noviembre de 2016, adjudicado al contratista Asesoría y Construcciones Civiles, S. de R.L. de C.V. para la ejecución de la obra “Comandancia de Seguridad Pública Municipal, Colonia Industrial de la Ciudad de Tecate, B.C., se observó que la obra no fue ejecutada, y no se proporcionó evidencia documental de cumplimiento, situación técnica, legal y administrativa de dicho contrato, así como, suspensión

temporal o definitiva en su caso, penas convencionales, o recisión de contrato., por lo que se desconoce el destino y aplicación del recurso autorizado al Ayuntamiento.

Incumpliendo el Artículo 46 Bis, 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5. En relación al Programa de Recuperación de Espacios Públicos (PREP2015) autorizados al Ayuntamiento de Tecate, para su ejercicio en el 2015, por un monto de $14’616,774, correspondiente a la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría correspondiente durante el 2016, donde se observó que el Ayuntamiento realizó pagos en exceso por obra no ejecutada a contratistas por un importe de $9’205,428, mismo que en su momento no justificó ni presentó evidencia documental de requerimientos de los reintegros a los contratistas; al respecto, y en seguimiento a la Auditoría de Cuenta Pública 2015, se constató que persiste un pago en exceso por obra no ejecutada por un monto de $7’403,111, a lo que el Ayuntamiento en reunión de confronta respondió que justificaría el monto con evidencias documentales de los trabajos realizados, sin que a la fecha del presente Informe el Ayuntamiento haya presentado evidencia de trabajos ni de requerimiento de reintegro del monto aludido, correspondiente a los siguientes contratos de obra:

a. En relación de la obra: “Rehabilitación de campo de softbol Cuchumá, colonia Bella Vista de la ciudad de Tecate Baja California, adjudicada a la contratista COESCA Construcciones S.A. de C.V. mediante contrato número C-PREP2015-PMTCT-01 de fecha 28 de septiembre de 2015, con importe pagado mediante dos estimaciones de fechas 12 y 18 de agosto de 2016 de $1’736,461, en la auditoría practicada a la Entidad de la Cuenta Pública 2015, se observó “obra estimada no ejecutada” por un monto de $1’524,104 con I.V.A, que la Entidad no justificó en su momento. Dando seguimiento en la auditoría practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, en visita efectuada a la obra en junio de 2017, se constató que persiste un pago en exceso por obra no ejecutada por un monto de $1’110,477 con I.V.A., cantidad que la Entidad no requirió al contratista el reintegro correspondiente, encontrándose un avance físico aproximado del 30%, no obstante de haber sido recepcionada por el Ayuntamiento.

b. En relación a la obra: “Rehabilitación de parques: Parque Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas, Parque Margarita Maza de Juárez, colonia Benito Juárez, Parque Aldrete, colonia Aldrete, Parque Santa Anita, Fracc. Lomas de Santa Anita, de la ciudad de Tecate B.C., adjudicada a la contratista GRUPO GURSA S.A. de C.V. mediante contrato número C-PREP2015-PMTCT-02 de fecha 15 de octubre de 2015, con importe pagado de $8’457,140; acto efectuado mediante dos estimaciones, una de fechas 3 febrero 2016 y otra con fecha 12 de agosto de 2016; en la auditoría practicada a la Entidad en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, se observó “obra estimada no

ejecutada” por un monto de $7’681,324 con I.V.A., que la Entidad no justificó en su momento. Dando seguimiento en la auditoría practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, en junio del 2017 personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior realizó visitas a las obras en cuestión y se observó y constató que persiste un avance físico aproximado del 25% en cada una de ellas, sin embargo, las obras fueron recepcionadas por la Dirección de Desarrollo Social Municipal como obras concluidas físicamente. Por lo que el Ayuntamiento realizó un pago en exceso por obra no ejecutada por un monto de $6’292,634 con I.V.A., cantidad que el Ayuntamiento no ha requerido al contratista para su reintegro correspondiente.

Con fecha 1 de diciembre de 2015, las obras fueron recepcionadas por la Dirección de Desarrollo Social Municipal por conducto de los C. Lic. Abel Rodríguez Gutiérrez y Arq. Paulo Chávez Beltrán en su carácter de Director de Desarrollo Social Municipal y Jefe de Departamento Técnico Obra Comunitaria, respectivamente, y con fecha 31 de diciembre de 2015 fueron recibidas de conformidad por la comunidad organizada por conducto de sus representantes los C. Jesús Alfredo Sandoval, Oscar G. Noriega M. y Erika Lucia Moreno A., haciendo la entrega la Dirección de Desarrollo Social Municipal por conducto del C. Lic. Abel Guadalupe Rodríguez Gutiérrez fungiendo como testigo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), representada en ese acto por el Lic. José Lauro Arestegui Verdugo, evidenciando el acto en comento los documentos proporcionados por la entidad, mismos que a continuación se mencionan: copias de aviso de terminación de obra en la cual se omite fechar y recepcionar el documento; acta de entrega y recepción física de los trabajos, fechada el 1 de diciembre de 2015 y acta de entrega recepción del espacio público a la comunidad, fechada el 31 de diciembre de 2015.

Incumpliendo con lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6. De las modificaciones presupuestales realizadas por el Ayuntamiento se observa que del análisis al presupuesto de egresos modificado de $518’218,724 (que derivó del seguimiento a las modificaciones autorizadas durante el ejercicio por Cabildo Municipal) y el presupuesto de egresos modificado presentado en Cuenta Pública de $619’057,300, se determinaron modificaciones presupuestales consistente en ampliaciones ejercidas por $101’920,305, sin evidencia de autorización de Cabildo Municipal, consecuentemente no fueron remitidas al Congreso del Estado para su conocimiento y revisión de la Cuenta Pública.

Así mismo, el Ayuntamiento aplicó modificaciones al cierre del ejercicio consistentes en ampliaciones por $160’264,916, siendo autorizadas de manera

extemporánea por Cabildo Municipal en fecha 30 de marzo de 2017, mismas que fueron remitidas al Congreso del Estado el 31 de marzo de 2017 a través del oficio 143/2017 para efectos de conocimiento y revisión de cuenta pública.

Incumpliendo con el Artículo 50, Fracción IV, y Último Párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

7. El Ayuntamiento presenta al cierre del ejercicio 2016 un saldo acumulado de $306’205,174, por concepto de cuotas retenidas al personal de base y aportaciones patronales provenientes desde los ejercicios de enero de 2010 a diciembre de 2015 por $255’589,396 y de enero de 2016 a diciembre de 2016 por $50’615,778, dicho saldo no incluye recargos por la falta de pago.

Incumpliendo con el Artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Ayuntamientos del Estado de B.C.

Cabe mencionar que el adeudo correspondiente al ejercicio 2016, contablemente está integrado por cuotas retenidas al personal de base por $25’225,075 y aportaciones patronales por $25’390,703.

Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Ayuntamientos del Estado de B.C. (ISSSTECALI) confirmó adeudos por $309’253,265 en tanto que el Ayuntamiento tiene un pasivo registrado por $306’205,174, determinándose una diferencia no aclarada por la cantidad de $3’048,091.

8. El Ayuntamiento presenta al cierre del ejercicio pasivos de impuestos por pagar, de enero de 2013 a diciembre de 2016 por un monto de $69’506,283 los cuales no se han enterado a la instancia fiscal correspondiente, derivados de contribuciones federales por concepto de Impuesto Sobre la Renta Retenido en el Pago de Sueldos y Salarios, Impuesto Sobre la Renta Retenido por Pago de Honorarios Profesionales, ISR Retenido, Impuesto Sobre la Renta Retenido por Pago de Arrendamientos e Impuesto al Valor Agregado (IVA), retenidos durante los ejercicios 2013 y 2016, mismos que no incluyen recargos y actualizaciones; los impuestos no enterados de enero de 2016 a diciembre de 2016 ascienden a un importe de $20’855,578.

Incumpliendo con los Artículos 96, Primer Párrafo; 106, Último Párrafo y 116, Último Párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 6, Fracción I del Código Fiscal de la Federación; y 5D de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

9. La Entidad carece de los siguientes elementos de control interno y administrativo para la custodia y salvaguarda de bienes inmuebles como a continuación se enlistan:

a. Al 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento presentó en su Estado de Posición Financiera, en el rubro de Bienes Inmuebles, un saldo de $88’961,550 mismo que no fue posible verificar y comparar con el padrón que le es relativo, debido a que éste no fue proporcionado por Oficialía Mayor, incumpliendo con el Primer Párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Además no se encuentra clasificado por bienes de dominio público y privado, incumpliendo con el Artículo 13, Fracciones I y II de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de B.C.

b. El rubro de construcciones en proceso presenta un saldo al cierre del ejercicio de $366’504,860, cuya muestra seleccionada fue de 19 obras por un importe de $82'634,193, de las cuales solamente 5 quedaron en proceso al cierre del ejercicio 2016, por lo tanto las 14 restantes valuadas en $37'172,450 deben de reclasificarse de Obras en Proceso al Egreso, o bien a Resultado de Ejercicios Anteriores, según sea el caso, incumpliendo con lo establecido en las reglas 2.2 y 4, Primer Párrafo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

10. La Entidad carece de los siguientes elementos de control interno y administrativo para la custodia y salvaguarda de bienes muebles como a continuación se enlistan:

a. Se determinó una diferencia no aclarada de más en registros contables por $28’038,894 la cual se deriva de comparar el padrón de bienes muebles proporcionado por el municipio valuado al 31 de diciembre de 2016 en $54’406,030 con el saldo contable de bienes muebles de $82’444,924, presentado en el Estado de Situación Financiera, incumpliendo con el Primer Párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Artículo 62, Fracción II del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tecate, B.C.

b. En los padrones proporcionados solamente fue posible identificar tres altas registradas contablemente correspondientes a equipo de trasporte valuadas en $1’551,724 del total de altas de bienes muebles adquiridos durante el ejercicio 2016 por $6’973,548, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Artículos 31, Fracción XI y 62 Fracción II del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tecate, B.C., y Articulo 4 de la Norma Técnica No. 7 de Alta de Bienes Muebles de Activo Fijo.

11. De la revisión documental efectuada al Padrón de Rezagos de Impuesto Predial por $444´133,286 se observa que de 26 adeudos revisados selectivamente por un monto de $107´446,045; un total de 17 expedientes no cuentan con

requerimiento de cobro por un importe de $83’019,818, incumpliendo con los Artículos 112 y 113 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de B.C.

12. El Ayuntamiento presenta Cuentas por Cobrar por un monto de $12´525,881 con una antigüedad superior a un año sin movimiento, sin haber realizado las gestiones de cobro para su recuperación, comprobación o corrección contable en su caso, integrándose por las cuentas relativas a Ingresos por Depositar por $152,973, Deudores Diversos por $359,640, Gastos por Comprobar por $1’712,656, Préstamos a Funcionarios y Empleados por $351,297, Otros Deudores Diversos por $4’851,296, Documentos por Cobrar a Corto Plazo por $21,298 y Anticipos a Contratistas por $1’786,143, así como Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo por $3’290,267.

Además se observa la falta de actualización a su política de anticipo de sueldos y a su norma técnica y política correspondiente a gastos por comprobar debido a que no describe los montos permitidos, conceptos y personas autorizadas para asignarlos.

Cabe señalar que el formato denominado “Recibo de gastos por Comprobar” utilizado, cuenta con una leyenda que dice: “la comprobación se debe de realizar en un tiempo no mayor de 5 días hábiles a la fecha de expedición”, sin embargo no se apega a la misma.

13. La presente observación se muestra idéntica en la Observación 1 de Egresos por tener implicación también en la Cuenta Pública de Deuda Publica y se reproduce integra para su mejor análisis:

Con fecha 23 de febrero de 2016, se celebró el contrato de crédito bancario Bansi, S.A. IBM, por $160’000,000, a un plazo de 240 meses, con afectación de recursos provenientes de participaciones federales, el cual fue autorizado de acuerdo al Decreto No. 423 emitido por el H. Congreso del Estado de Baja California de fecha 9 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado del 28 de diciembre de 2015, cuyo destino autorizado corresponde primero al Refinanciamiento del Crédito con Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. hasta en $71’619,045 y segundo a Inversión Pública Productiva hasta en $88’380,955.

13.1. En cuanto al destino autorizado para refinanciamiento del crédito con Financiera Local, S.A, de C.V., SOFOM, E.N.R. hasta en $71’619,045, se aplicó como a continuación se integra:

Pago de 2% de comisiones por estructuración del crédito más IVA	$	3’712,000
Honorarios fiduciarios		27,840
Constitución del Fondo de Reserva Fideicomiso Bansi # 2357-1		3’000,000
Gastos notariales		25,200
Liquidación del Crédito No. 002003 ABC CCC R28 080 a Financiera		

Local, S.A. de C.V. y Banca Mifel, S.A. 67’243,195
Pago de servicios de asesoría y consultoría relativos al crédito 22’704,750
Suma:**$96’712,985**

En base a lo anterior se detectan las siguientes observaciones:

a. Respecto al monto autorizado de $71’619,045 para el concepto de refinanciamiento del crédito número 002 003 ABC CCC R28 080 con Financiera Local, S.A. de C.V. y Banca Mifel, S.A., fue rebasado en $23’319,260, para quedar en $96’712,985, incumpliendo con el ARTÍCULO PRIMERO del Decreto número 423 del 9 de diciembre de 2015 emitido por el H. Congreso del Estado de B.C.: “*Se autoriza al H. XXI Ayuntamiento de Tecate Baja California a través del Presidente Municipal, el Síndico procurador y el Secretario del Ayuntamiento, la contratación de un Financiamiento, a través de uno o varios créditos, hasta por la cantidad de $160,000,000 (Ciento sesenta millones de pesos con 00/100 M.N.) , cantidad en la que no se encuentran incluidos los intereses que se generen durante la vigencia del empréstito; así como comisiones, honorarios, intermediación, calificaciones, derechos, impuestos y gastos generados por la formalización e inscripción del empréstito autorizado, a un plazo de hasta 20 (veinte) años, con la o las instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones.”*, El pago de Comisiones y Honorarios por Servicios a que nos referimos en esta observación se encontraban expresamente prohibidos en el mismo Decreto 423, el cual acabamos de transcribir para su mayor comprensión y por consecuencia, estas comisiones y honorarios debieron ser pagados con recursos propios. Incumpliendo además con el Artículos 5, Fracción IV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios: “*ARTÍCULO 5.- Los sujetos de la presente Ley no podrán:*

IV.- Utilizar los recursos provenientes de operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública para un objeto distinto al que sustentó la autorización correspondiente;”

b. De los $22’704,750 de la cuenta bancaria Bansi, S.A. número 00098482750 citados en el cuadro informativo anterior, se identificaron pagos por $21’402,000, con motivo de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales que de acuerdo a los montos erogados, no fue proporcionada evidencia de haber aplicado el procedimiento de licitación pública, o invitación restringida en su caso, incumpliendo con los Artículos 19, Fracción I y II; 32 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, B.C. y 47, Fracción X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Adicional a dicho importe se incluye el pago de pasivos cuyos saldos provienen de ejercicios anteriores 2013 al 2015 y 2016 de $1’302,750, por concepto de servicios de difusión institucional en radio sin comprobantes, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Asimismo de los recursos citados por $21’402,000, se incluye un monto de $1’740,000 pagado a la empresa Industrias Recizap, S.A. de C.V., de lo cual, el Ayuntamiento no proporcionó informe de actividades o evidencia del servicio recibido, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

c. Se cumplió parcialmente con la liquidación del crédito número 002 003 ABC CCC R28 080 contratado con Financiera Local, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.; toda vez que al cierre del ejercicio presenta un saldo insoluto pendiente de pago, por un monto de $1’209,138 por concepto de intereses, comisiones y penas convencionales, según estados de cuenta del crédito, incumpliendo con el Artículo 14, Fracción XIII de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios y la Cláusula Primera, inciso (i) del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Participaciones Federales como Fuente de Pago.

Cabe señalar que el municipio recibió requerimiento de pago de Financiera Local, S.A. de C.V., con corte al 24 de enero de 2017, solicitando el pago de saldo insoluto de $1’209,138, más penalizaciones de $464,000 que en conjunto suman $1’673,138.

13.2. En cuanto a los recursos autorizados para destinarse a inversión pública productiva hasta en $88’389,700, se observa lo siguiente:

a. El Ayuntamiento entregó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
H. Congreso del Estado una relación de 29 obras que sustentaban la solicitud de autorización, del crédito en comento, valuadas en $88,389,700, las cuales fueron reclasificadas mediante Dictamen número 01 de fecha 6 de julio del 2016, por la Comisión de Hacienda del H. Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tecate Baja California, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de agosto de 2017; mismo que fue autorizado en todas y cada una de sus partes en el sexto punto del orden del día de la sesión extraordinaria de cabildo número 39 del 8 de septiembre de 2016, para inversión pública productiva; consistentes en la realización de 103 obras y/o acciones valuadas en $68,758,438, importe menor al tope autorizado por el Congreso del Estado por un monto de $88’389,700 a ejecutarse durante los meses de enero a octubre de 2016, para lo cual, el municipio aperturó la cuenta Banorte número 044231775-9, para el control de la ejecución de las obras, donde fueron transferidos recursos según auditoría por $62’884,318 provenientes de la cuenta donde se dispuso el crédito Bansi, S.A. número 00098482750.

b. Del listado de las 103 obras y acciones derivadas del Dictamen No. 01, el Ayuntamiento proporcionó comprobantes donde solamente fue posible identificar 22 conceptos de obra pagados por $28’757,241, equivalentes al 41.8% del monto reclasificado mediante el multicitado dictamen del Ayuntamiento. Del resto de los conceptos de obra y acciones enlistados

valuados en $39’967,709, correspondientes a 92 obras y acciones, no se proporcionó información y/o documentación que sustente su ejecución.

Cabe señalar que los $28’757,241 de inversión pública productiva pagada con recursos del crédito, se pagaron pasivos provenientes de ejercicios anteriores de $8’428,127, obras en proceso de $19’904,114 y adquisición de bombera en $425,000. Sin embargo, el pago de pasivos y obras en proceso mencionados debieron pagarse con recursos etiquetados provenientes de la Federación y de otras fuentes de recursos, de acuerdo a los contratos de obra ejecutada y pagada, como se integra a continuación:

1. Ejecución de obra sin la obligación de aportaciones Municipales en coparticipación:

Contingencias Económicas 2014	$ 1’165,147
Contingencias Económicas 2015	847,851
FAIP 2015	3’732,870
FAIP 2016	8’126,473
Pago de servicios de traslado de residuos sólidos	117,500
Construyendo una Mejor Ciudad 2010-2013 (Crédito $80 millones)	6’581,773
SUBTOTAL	**$20’571,614**

2. Ejecución de obra con la obligación de aportaciones Municipales en coparticipación:

Hábitat 2015	$ 785,904
PREP 2015	**6’974,723**
SUBTOTAL :	**$ 7’760,627**
TOTAL:	**$28’332,241**

Incumpliendo con el Artículo 117, Segundo Párrafo de la Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5, Fracción IV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California, Cláusula Primera inciso (ii) del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Participaciones Federales como Fuente de Pago de fecha 29 de febrero de 2016, Artículo 46, Fracción III y 47, Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California

14. El Ayuntamiento incumplió con la obligación de expedir sus comprobantes fiscales digitales por internet por las operaciones con los contribuyentes o público en general, por los ingresos que percibieron durante el ejercicio fiscal de 2016.

Incumpliendo con los Artículos 86, Fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y 18 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

15. Durante el ejercicio 2016, el Ayuntamiento recaudó ingresos por $8’227,129 correspondientes al 15% para el Fomento Deportivo y Educacional, observándose la falta de evidencia documental que muestre la entrega de éste a la Entidad o Dependencia correspondiente, para ser destinado a la construcción de áreas o unidades deportivas, a su mantenimiento y a programas deportivos y educacionales.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 75 BIS C, último párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de B.C.

16. De la muestra auditada al rubro de ingresos se determinaron las siguientes observaciones en la recaudación de distintos conceptos que derivaron en una captación menor de recursos del Ayuntamiento por un monto de $1’346,985, a continuación se describen:

a. En la verificación de 72 recibos de ingreso por concepto de impuesto predial, se determinó en 12, un importe neto recaudado de menos de $87,824, debido a la falta de actualización del valor fiscal catastral por metro cuadrado (m²) aplicado por el municipio en comparación al establecido en la Ley de Ingresos Municipal.

Incumpliendo con lo establecido en la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Título II, Capítulo I, Numeral 1, Artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, B.C. para el ejercicio fiscal del 2016.

b. Asimismo en la revisión de 52 recibos de ingreso del 30 de noviembre de 2016, por concepto de impuesto predial incluyendo el 15% del impuesto a la educación por un monto total de $380,348, se determinó la siguiente situación irregular:

Se recibió en caja de recaudación de rentas municipales el cheque número 3465 por $380,348 de fecha 30 de noviembre de 2016 de la cuenta bancaria Banorte número 211250-306, (utilizada para el pago de Proveedores) del Ayuntamiento de Tecate, a favor de quien ocupaba el puesto de Jefe de Relaciones Públicas en la Oficina de Presidencia del XXI Ayuntamiento de Tecate, dicho cheque está cubriendo el pago de los 52 recibos en comento. Este cheque se encuentra pendiente de cobro toda vez que la administración del XXII Ayuntamiento de Tecate no lo depositó y se encuentra registrado en la cuenta contable de Caja, sin embargo dicho documento perdió su vigencia, por lo tanto el trámite quedó inconcluso afectando la captación de recursos, toda vez que a la fecha no ha sido ingresado el cobro de las cuentas aplicadas, en base a los Artículos 181, 191 y 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En relación al cheque pendiente de cobro, mencionado en el párrafo anterior, el municipio expidió los cheques números 3465 y 3466 por $380,348 y $444,221, respectivamente, ambos de fecha 30 de noviembre de 2016 de la cuenta bancaria Banorte número 211250-306, (utilizada para el pago de Proveedores) del Ayuntamiento de Tecate, a favor del Jefe de Relaciones Públicas en la Oficina de Presidencia del XXI Ayuntamiento de Tecate, no presentan soporte documental ni registro contable respectivo, entregados por concepto de gastos comprobados. El primer cheque se encuentra pendiente de cobro en recaudación de rentas municipales y el segundo en Tesorería Municipal, como pendiente de entregar.

Incumpliendo con el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

c. De la muestra revisada al rubro de ingresos por concepto de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, se observa que el Ayuntamiento recaudó de menos $166,841, correspondiente a la clave catastral FH-525-181, del contribuyente Promoción de la Vivienda Magisterial de Tecate, A.C., debido a que en lugar de considerar como base de cálculo el "valor de la operación" por ser éste el de mayor valor, se tomó el valor catastral para la determinación y cobro del impuesto, incumpliendo con el Artículo 75 BIS B, Apartado A, Fracción II, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Baja California.

De la revisión documental practicada al ingreso de derechos por concepto de Servicio de Transporte Público Municipal al 31 de diciembre de 2016, al padrón de unidades y expedientes seleccionados en varias modalidades se observa lo siguiente:

d. El Ayuntamiento no mostró evidencia de haber cobrado los derechos por expedición de trece concesiones para prestar el Servicio de Transporte Público de Personal, el cual es de 23 a 46 salarios mínimos por unidad, dependiendo de los años de concesión, por lo que se presume se dejó de recaudar recursos por $384,202 por concepto de derechos y $217,918 por pago extemporáneo, incumpliendo con el Artículo 55 Letra L, Inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, B.C., para el Ejercicio Fiscal del 2016.

e. El Ayuntamiento dejó de percibir ingresos durante el ejercicio 2016 por concepto de revisión mecánica en todas las modalidades por $109,852, ni proporcionó evidencia de las gestiones de cobro correspondientes para conservar la concesión, incumpliendo con el Artículo 55, Inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, B.C. para el ejercicio fiscal de 2016.

f. Asimismo no mostró evidencia de haber realizado gestiones de cobro por los derechos de permiso por circular sin placas para prestar el Servicio Público de Transporte en todas sus modalidades, el cual es de 6 salarios mínimos por unidad y/o 25 salarios mínimos por mes por unidad, desconociéndose

el monto omitido al erario público municipal, incumpliendo con el Artículo 55, Letra R, incisos a) y b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, B.C., para el Ejercicio Fiscal del 2016.

17. De la revisión realizada a recepción y análisis de documentos y permisos relacionados con la venta, almacenaje y consumo público de bebidas con graduación alcohólica, se derivaron las siguientes observaciones:

a. No fue posible verificar el cobro correcto del pago por trámite extemporáneo por $114,979 de acuerdo a la muestra seleccionada del Padrón del ejercicio fiscal 2016 de Revalidaciones Extemporáneas proporcionado por el Departamento de Reglamentos valuado en $2’307,639, ya que el Ayuntamiento no cuenta con un Tabulador aprobado por Cabildo, donde se reglamente el uso de los rangos en los derechos a cobrar, conforme a la Ley de Ingresos, el cual es de 0.00 a 100.00 veces el salario mínimo general vigente, incumpliendo con el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, B.C. para el ejercicio fiscal del 2016.

b. No fue posible verificar el cobro correcto de los derechos por venta de bebidas con graduación alcohólica en eventos o espectáculos públicos, el cual en el ejercicio fiscal de 2016 fue de $45,942, debido a que el Ayuntamiento no cuenta con un tabulador aprobado por el Cabildo, donde se reglamente el uso de los rangos en los derechos a cobrar, conforme a la Ley de Ingresos que son de 15 a 50 veces el salario mínimo general vigente, incumpliendo con el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, B.C., para el Ejercicio Fiscal del 2016.

c. No se ha solicitado al Cabildo Municipal la revocación de 44 permisos para la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas Alcohólicas al Público, cuyos permisionarios no han revalidado por los ejercicios de 1995 al 2016; cabe señalar que los permisionarios no han sido requeridos por el Departamento de Reglamentos Municipal durante el ejercicio 2016 ya que los ejecutores manifiestan que algunos establecimientos ya no existen y que en otros casos los comercios tienen tiempo sin operar, incumpliendo con los Artículos 54 y 57 del Reglamento para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Tecate, B.C.

18. Del total de finiquitos al personal por conclusión de administración del XXI Ayuntamiento de Tecate en $7’626,378 de los cuales se han pagado vía transferencia electrónica de fecha 30 de noviembre de 2016, $1’630,103, de la cuenta bancaria Banorte número 02-1187019-7, utilizada para el pago de Sueldos, a la cuenta de nómina individual de cada empleado, según registro contable en póliza de Egresos, número 29 de fecha 1 de diciembre de 2016, en la muestra seleccionada, se detectaron registros contables indebidos o incorrectos por concepto de indemnizaciones, vacaciones y prima vacacional como se detallan a continuación:

El Ayuntamiento calculó y registró indebidamente en el rubro de egresos servicios personales un importe de $1’087,625; por concepto de indemnización a personal de confianza que continuó laborando en fecha posterior al 30 de noviembre de 2016 en la administración del XXII Ayuntamiento, según plantilla final del ejercicio fiscal 2016, incumpliendo con el Artículo 56 y 57, Fracción II, Numeral 1, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, incumpliendo con el Artículo 57, Fracción II, Numeral 1, de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California y 46 Fracción X y 47 Fracciones I y VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Del importe señalado en el párrafo anterior, se detecta el pago a un empleado por la cantidad de $70,000 de un total calculado después de impuestos de $196,202, por concepto de finiquito, mismo que fue cancelado contablemente con póliza de diario número 60 del 30 de diciembre de 2016, ya que actualmente se encuentra laborando en el puesto de Jefe de Departamento de Reglamentos del XXII Ayuntamiento de Tecate y no presentó evidencia de registro de cuenta por cobrar respectiva sobre lo pagado.

Asimismo, el Municipio calculó y registró en el rubro de egresos servicios personales, cuentas contables con terminación 11301 y 13202, incorrectamente la cantidad de $178,650 de más por concepto de vacaciones y prima vacacional, a personal de confianza, de acuerdo a la verificación de los cálculos cotejados con la fecha de ingreso, Incumpliendo con los Artículos 32, 33, 34 de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California y 46 Fracción X y 47 Fracciones I y VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Incumpliendo con los Artículos 32, 33, 34 y 57, Fracción II, Numeral 1, de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California y 46 Fracción X y 47 Fracciones I y VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

19. De la muestra revisada al rubro de arrendamiento de Equipo de Transporte por un importe erogado durante el ejercicio 2016 de $907,500 se observan las siguientes irregularidades detectadas:

a. El Ayuntamiento realizó pagos vía transferencia electrónica por $161,250 sin contrato que justifique dicha erogación, correspondientes a tres regidores: por la cantidad de $82,500, $56,250 y $22,500, respectivamente y de acuerdo a los recibos de pago emitidos en forma económica, incumpliendo con el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de B.C.

b. El Municipio en el mes de enero de 2016 pagó indebidamente $25,452 registrados en las cuentas contables Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y Reparación y mantenimiento de equipo de transporte; dichas reparaciones y refacciones corresponden al vehículo propiedad del Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento de Tecate, cuyas composturas debieron correr a cuenta del propietario, incumpliendo con la Cláusula Cuarta del Contrato de Arrendamiento de Vehículo firmado en fecha 2 de enero de 2016.

Por lo anteriormente expuesto el vehículo no cumplía con las disposiciones establecidas es decir, no se encontraba en condiciones óptimas para desempeñar las funciones inherentes al cargo, no obstante se pagó la cuota fija mensual por concepto de renta del vehículo establecida en $7,500 por el periodo del 2 de enero al 30 de noviembre de 2016, incumpliendo con los numerales 4 y 10 de las Normas y Políticas sobre Arrendamiento de Vehículos y la Cláusula Octava del Contrato de Arrendamiento del Vehículo firmado en fecha 2 de enero 2016.

20. Incumplimiento al Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, B.C., como se describen a continuación:

a. El Ayuntamiento contrató a la empresa Global Personnel Solutions, S.A. de C.V. por concepto de Servicios de consultoría administrativa en $580,000 por el procedimiento de adjudicación directa sin justificación, debiendo aplicar el procedimiento de Invitación Restringida de entre sus proveedores de acuerdo al monto de la operación, incumpliendo con los Artículos 19, Fracción II; 32 y 33 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, Baja California.

b. Falta de evidencia de cotizaciones en el procedimiento de adjudicación directa por $1’251,362 de adquisiciones de bienes y servicios para distintos eventos, donde se debió recabar como mínimo tres cotizaciones vía fax o correo electrónico con acuse de recibo o telefónicas, según corresponda en la muestra revisada del rubro de gasto de orden social.

Además no proporcionó evidencia documental de la recepción de los materiales o servicios pagados que amparen la erogación, incumpliendo con los Artículos 19, Fracción III y 36 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate.

c. Falta de evidencia de aplicación del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores por $313,200, para el evento Feria Mágica 2016, incumpliendo con el Artículo 19, Fracción II y 33 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, B.C.

d. Falta de evidencia de aplicación del procedimiento de licitación pública por $3’005,560, para el evento Feria Mágica 2016, incumpliendo con el Artículo 19, Fracción I y 23 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, B.C.

21. De la muestra revisada en el concepto de erogaciones por concepto de servicios médicos, se determinaron pagos en favor de tres regidores, correspondientes a las pólizas de diario números 2, 4, 2 y 3 de fechas 9 de agosto, 25 de octubre, 8 y 15 de noviembre de 2016, respectivamente, por un monto de $196,292 derivado de ello se observa lo siguiente:

a. El Ayuntamiento pagó indebidamente estas erogaciones ya que los regidores no se consideran trabajadores del Ayuntamiento, sino que corresponden a puestos de elección popular, por lo tanto se considera que no tienen derecho a recibir prestaciones adicionales a las previstas al cargo de Regidor.

b. Las facturas registradas no cuentan con información adicional que soporte y justifique el gasto, como expediente que contenga el diagnóstico médico, tratamiento o procedimiento aplicado, ya que en la descripción del servicio sólo señala atención médica en forma general, asimismo el municipio no cuenta con Norma Técnica en la cual se establezcan los procedimientos de control y administración que regulen los servicios a otorgar.

Incumpliendo con los Artículos 2, Fracción IV de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, 20, 37, primer párrafo; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56, primer párrafo y 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de B.C.

22. De la revisión al contrato de asociación publico privada entre el Ayuntamiento de Tecate y Técnicas Medioambientales de México, S.A. de C.V. para la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos del 7 de enero de 2015, se derivó lo siguiente:

a. El Ayuntamiento no ha pagado al cierre del ejercicio de 2016 un monto de $21’301,922 por el servicio de limpia, recolección, traslado al sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados en el municipio, a la empresa Técnicas Medioambientales de México, S.A. de C.V. (TECMED), ya que el pago por la prestación del servicio se debió realizar dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega de las facturas por parte de TECMED, incumpliendo con lo establecido en la Cláusula Séptima, Numeral IV, del Contrato.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento durante el ejercicio 2016, solamente realizó dos pagos en fechas: 27 de abril de $196,813 y el 1 de julio de 2016 por $5’280,315, quedando un saldo pendiente del ejercicio 2015 de $5’191,189, incrementando la deuda por los servicios prestados durante el ejercicio 2016 en $16’110,734, ya que no se realizó ningún pago.

b. Las once facturas expedidas por Técnicas Medioambientales de México, S.A. de C.V. carecen de las relaciones de pesos netos de entrada de las unidades de recolección al relleno sanitario, debidamente integrados por el PRESTADOR los cuales debieron ser proporcionados por el operador del basurero mediante sistema de pesaje instaurado en el sitio de disposición final, incumpliendo con lo establecido en la Cláusula Séptima, Fracción I, Segundo Párrafo del contrato y con el Artículo 59, Segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

c. Falta de elaboración de reportes periódicos (mensual, semanal etc.), o estadístico con el fin de controlar y comparar el tonelaje recolectado de residuos sólidos, que demuestre si en realidad se depositaron las 2,215 toneladas mensuales mínimas por concepto de disposición final de los residuos sólidos urbanos en el Relleno Sanitario Privado, y compruebe que el tonelaje mínimo no este sobrevaluado de la recolección real, incumpliendo con lo establecido en las Cláusulas Segunda y Tercera, del convenio modificatorio al contrato de fecha 10 de febrero de 2016.

23. Durante el ejercicio 2016, el Ayuntamiento otorgó apoyos por un importe de $2’619,142 por concepto de Ayudas Sociales a Personas, de lo cual se observa que no se cuenta con una Norma Técnica en la cual se establezcan los procedimientos de control y administración que regulen los apoyos a otorgar; mismos que no cuentan con documentación comprobatoria que sustente la entrega de apoyos a la comunidad, ya que sólo firman un recibo económico en forma catorcenal.

Incumpliendo con los Artículos 42, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 4, 56, 59, 62, inciso e) de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de B.C., 34 Fracción III del Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tecate, B.C., y al postulado Devengo Contable de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

24. El Ayuntamiento no proporcionó el avalúo que debió elaborarse por la Comisión Estatal de Avalúos para verificar el precio de adquisición de maquinaria de segundo uso, consistente en una Pipa Ford 700 con capacidad de 9600 lts., 1995, una retroexcavadora John Deere310SG y una niveladora Caterpillar 112F, 1987, por un importe de $1’385,620, incumpliendo con el Artículo 34, Fracción XII

del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tecate, Baja California.

25. Derivado de la evaluación del control interno aplicado a los recursos federales correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), Del Fondo IV Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y del Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), se observan las siguientes deficiencias:

a. El Ayuntamiento no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos y los resultados en el logro de objetivos y metas institucionales.

b. No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de vigilancia y supervisión de control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. Por lo anterior es necesario que el Presidente o Ayuntamiento, sean los responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y las instancias que establezca para tal efecto. Para ello es importante determinar una adecuada estructura de las instancias especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la corrección de las deficiencias detectadas.

c. No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. Asimismo no implementó políticas sobre la competencia profesional del personal, a fin de asegurar que los servidores públicos, mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control interno que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas del municipio.

d. No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, no cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado y carece de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

e. El Ayuntamiento no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas deben considerar la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la institución.

f. El Ayuntamiento no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente al titular o en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, así como, la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o riesgos a los sistemas informativos que apoyan el desarrollo de las actividades. Por lo anterior, es importante que el municipio establezca líneas de comunicación interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea comunicada hacia abajo, lateral y hacia arriba, es decir en todos los niveles de la institución. Esta información debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

g. El Ayuntamiento no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas oportunamente, así como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.

26. Durante el ejercicio fiscal 2016, el Ayuntamiento recibió recursos del Fondo III del Ramo General 33 por $8’315,428 cuya cuenta bancaria específica es de Banco Banorte, S.A. No. 0424933454, utilizada para el control y manejo de dicho fondo, de lo cual se observa lo siguiente:

a. El Ayuntamiento traspasó recursos de la cuenta específica por $171,523 a la cuenta bancaria Banorte número 0494543575 utilizada para depósito de recursos Fortaseg 2017, derivado de lo anterior se observa que el Ayuntamiento ejerció el recurso en conceptos distintos a lo establecido en el Artículo 33, Apartado A,

Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se requiere que el Ayuntamiento reintegre dicho monto más los intereses correspondientes para que se aplique en los objetivos del fondo; se observó también incumplimiento a los Artículos 42, Cuarto Párrafo del 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Cabe señalar que no fue proporcionado el Convenio de Desarrollo Institucional entre los tres órdenes de gobierno, sin embargo en oficio No. DTOC/064/2017, del 11 de mayo de 2017 remitido por Lic. Juan Carlos Montiel, Director de Desarrollo Social informa que no se ejerció este recurso por un monto de $166,308, incumpliendo el Artículo 33, Apartado B, Fracción I, Inciso b) Segundo Párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo tanto se requiere sea reintegrado a la Tesorería de la Federación el importe no ejercido mismo que forma parte del monto observado en el párrafo anterior.

b. El Ayuntamiento no canceló la documentación comprobatoria de cinco obras con la leyenda de “Operado FISM” que ascienden a un monto pagado de $7’352,171 mismas que están registradas en Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, incumpliendo con el Artículo 70, Fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c. De la transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo, se observa que el Ayuntamiento proporcionó copia de publicación en el periódico local El Sol de Tijuana, página 3-A de fecha 1 de diciembre de 2016, donde da a conocer en forma extemporánea a sus habitantes, el inicio del ejercicio los recursos del fondo, sobre obras y acciones a realizar, el costo de cada una y su ubicación, sin información sobre metas y beneficiarios; y en formato distinto al establecido en los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable.

d. El Ayuntamiento no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del fondo; así como los indicadores, mediante el Sistema de Formato Único a Nivel Proyecto, Financiero e Informe definitivo.

Así mismo, el Ayuntamiento omitió reportar las obras y/o acciones en los Informes de Avance de Gestión Trimestrales, Informe definitivo y Cuenta Pública, efectivamente realizadas con cargo al fondo de manera pormenorizada por cada una de las obras realizadas en el ejercicio fiscal 2016.

Además, el Ayuntamiento omitió proporcionar evidencia de haber informado a sus habitantes por internet o en publicaciones de medios locales, al cierre del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

Conjuntamente en su Programa Operativo Anual (POA), no estableció metas relacionadas con el avance en la ejecución de las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo, derivado a que sólo utilizó una meta en su POA donde se conjuntaron las obras del Fondo, no permitiendo verificar la congruencia con lo reportado a la Secretaría.

Subsecuentemente no incluyó la información relativa a la aplicación de los indicadores de desempeño.

El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de haber designado a Instancias Técnicas Independientes para evaluar con base en indicadores estratégicos, de gestión y desempeño, la efectividad del uso de los recursos y verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentra destinado el Fondo; por lo que consecuentemente no publicó resultados de evaluaciones en su página de Internet.

Incumpliendo con los Artículos 33 B, Fracciones I y III y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, 78, 85 fracciones I y II párrafos Primero y Segundo, 107, Fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

27. Durante el ejercicio fiscal 2016, el Ayuntamiento recibió recursos del Fondo IV del Ramo General 33 por $56’815,753 cuya cuenta bancaria específica es de Banco Banorte, S.A. No. 0424936491, utilizada para el control y manejo de dicho fondo, de lo cual se observa lo siguiente:

a. El Ayuntamiento realizó traspasos electrónicos de los recursos recibidos por $52’081,107 a otras cuentas bancarias utilizadas para pago a proveedores, a sueldos, al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP-2016), de coparticipación FORTASEG 2016 y a la denominada cuenta puente del crédito, no utilizando de manera correcta la cuenta bancaria específica, aperturada para el manejo y control de dicho recurso.

Incumpliendo con el Artículo 82, Fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

b. No tienen registros específicos del fondo ya que el sistema contable no genera reportes del gasto ejercido, por lo tanto no se pueden identificar, careciendo de controles que muestran el ejercicio del recurso, además no incluyó en la documentación que ampara la aplicación del Fondo IV, la leyenda “Operado Fortamun-DF-2016” o aquella que lo identifique con el programa.

Incumpliendo con el Artículo 70, Fracciones I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Cabe señalar que en el formato de aplicación de recursos el Ayuntamiento proporcionó del total del recurso recibido por $56’815,753, solamente la integración del gasto pagado por $54’855,124, sin presentar información y soporte documental de aplicación de un monto de $1’960,628.

c. En la aplicación de los recursos del Fortamun-DF no se dio prioridad al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales ya que al cierre del ejercicio el municipio presenta un saldo acumulado pendiente de pago a favor de CESPTE de $3’481,720, incumplimiento con el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y la Cláusula Primera del convenio de coordinación celebrado entre la CESPTE, el municipio de Tecate y el poder ejecutivo estatal del Gobierno del Estado de fecha 28 de septiembre de 2016.

d. El Ayuntamiento no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información trimestral de los indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas y proyectos en el cumplimiento de objetivos y metas.

En el cuarto trimestre en el formato Nivel Financiero presentó un presupuesto devengado de $54’885,124, en la partida 113 Sueldos base al personal permanente, reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, importe que no corresponde con lo informado en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2016 en su programa “Para el mantenimiento del orden público y supervisión del tránsito vehicular en el Ayuntamiento de Tecate, Seguridad pública”, en la partida 11300 Sueldo base al personal Permanente por $33’198,220; determinándose una diferencia de $21’656,904.

El Ayuntamiento no definió la programación para el cumplimiento de los objetivos del Fondo; y no proporcionó evidencia de haberse basado en lineamientos y políticas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo vigente por lo que no es posible evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos.

El Ayuntamiento omitió reportar en los Informes de Avance de Gestión Trimestrales y Cuenta Pública, lo relativo a las obras y/o acciones efectivamente realizadas con cargo al Fondo.

El Ayuntamiento omitió proporcionar evidencia de haber informado a sus habitantes, al cierre del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

Incumpliendo con los Artículos 33, Apartado B, Fracción II, Incisos a y c de la Ley de Coordinación Fiscal; 45 y 75, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; y Numerales Octavo y Décimo Noveno, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.

28. Durante el ejercicio fiscal de 2016, el Ayuntamiento recibió subsidio federal FORTASEG por $15’760,661, de lo cual se observa lo siguiente:

a. El municipio no utilizó de manera correcta la cuenta bancaria específica Banorte número 042435573-9, ya que durante el ejercicio realizó traspasos electrónicos de los recursos recibidos por $11’823,262 a otras cuentas bancarias Banorte números 0211250-306 y 0211870-197, utilizadas para pago de proveedores y sueldos, prestaciones y compensaciones al personal, conceptos distintos o ajenos a los objetivos del subsidio, y efectuó depósitos (reintegros a dicha cuenta) por $7’796,200, presentando un saldo pendiente al cierre del ejercicio de $4’027,062 sin reintegrar, por lo tanto se requiere que el Ayuntamiento reintegre dicho monto más los intereses correspondientes para su aplicación en el objetivo establecido en el citado Fondo.

b. El Ayuntamiento realizó la adquisición de equipo radio móvil a Cassidian México, S.A. de C.V., según factura número 6482 de fecha 28 de octubre de 2016, por $749,526, sin IVA, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, sin embargo por el importe erogado se debió aplicar el procedimiento de Invitación Simplificada, mencionando en el contrato de prestación de servicios que esta compañía es la única fabricante del sistema M9600 y creadores y propietarios de la tecnología Tetrapol, lo cual no quedó establecido o asentado en el procedimiento de adquisición, asimismo en el Anexo Técnico del FORTASEG, solamente mencionan "Accesorios para terminal digital portátil", sin especificaciones especiales o únicas.

c. Se efectuó la adquisición de 7 unidades patrullas con balizaje a Blindado Seguro, S.A. de C.V., según facturas números B 1879 de fecha 16 de agosto de 2016 y B1945, B1946, B1947, B1993, B1994, B1995 y B1996, todas del 15 de noviembre de 2016 por $3´620,690 sin IVA, mediante invitación a cuando menos tres personas, sin embargo debió aplicar el procedimiento de Licitación Pública.

d. Asimismo realizó la adquisición de 58 Kits de operación de primer respondiente (patrulla), 145 Kits de operación de primer respondiente (pie a tierra) y 203 cámaras digitales a Elite By Carga, S.A. de C.V., según facturas números 531 y 589, de fechas 12 de agosto y 23 de noviembre de 2016, respectivamente, por $1'500,000 sin IVA, mediante el procedimiento de Invitación Simplificada, los cuales debieron haber sido adquiridos mediante el procedimiento de Licitación Pública.

e. También se compraron uniformes a CSI Tactical and Balistic, S.A. de C.V., según facturas número 16280 y 17252 de fechas 24 de agosto y 17 de octubre de 2016, respectivamente por $2’651,283 sin IVA, mediante el procedimiento de adjudicación directa mediante tres cotizaciones, sin embargo debió aplicar el procedimiento de Licitación Pública.

Los incisos b) al e) incumplen con los Artículos 26, Segundo Párrafo, 40, Segundo Párrafo, 41 y 42, Primer Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y 4 de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016.

f. Relativo a la adquisición de bienes celebrado con Elite By Carga, S.A. de C.V., el Ayuntamiento, con Póliza de Diario número 30 de fecha 30 de diciembre de 2016, efectuó reclasificación de compra de 203 cámaras digitales valoradas en $1'116,500, al rubro de egresos, materiales y suministros, modificando indebidamente el registro contable de capitalización de bienes muebles, ya que los artículos cumplen con las características y requisitos para darles el tratamiento de activos del municipio, incumpliendo con el Artículo 10 de la Norma Técnica No. 7, Alta de Bienes Muebles de Activo Fijo y numeral 8 de la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por la CONAC.

Cabe señalar que en verificación física realizada el 16 de febrero de 2017 a las cámaras digitales se detectaron 101 unidades marca “NIKON S3700 Coolpix”, cuya descripción incumple con los requerimientos y especificaciones pactadas en la Cláusula Primera, Numeral 3 del contrato de adquisición de bienes a precios fijos suscrito entre las partes.

Asimismo a la fecha de la inspección mencionada, las cámaras todavía se encontraron almacenadas, incumpliendo con Artículo 1, Segundo Párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

g. De la muestra revisada al recurso ejercido por el municipio cuantificado en $10’729,538, la documentación comprobatoria no fue cancelada con la leyenda de “Operado FORTASEG”, incumpliendo lo establecido en el Artículo 70, Fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

h. Falta de cancelación de las dos cuentas bancarias específicas utilizadas en el ejercicio 2016, FORTASEG Federal y Municipal, incumpliendo con el Artículo 39, Fracción VI de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa

o coordinada la función de seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016.

i. El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de haber presentado en tiempo y forma el Acta de Cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016 a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incumpliendo con el Artículo 39 de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016.

j. El Ayuntamiento no proporcionó la evidencia haber reportado a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los informes mensuales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del Subsidio de los meses de noviembre y diciembre.

Además, no proporcionó la evidencia de haber reportado a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el informe trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del Subsidio del cuarto trimestre.

El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de haber reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del Subsidio e indicadores correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio, mediante el Sistema de Formato Único (SFU) a Nivel de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, Ficha Técnica de Indicadores y Evaluaciones; y en consecuencia de la publicación a través de medios oficiales, locales de difusión o mediante los portales de Internet.

El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de la información presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo correspondiente al Formato Gestión de Proyectos Definitivo, Avance Financiero Definitivo y Ficha técnica de indicadores al final del ejercicio 2016.

El Ayuntamiento omitió proporcionar evidencia de haber informado a sus habitantes, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron asignados y devengados al cierre del ejercicio 2016.

El Ayuntamiento omitió proporcionar evidencia de haber enviado a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Informe Anual sobre el avance físico-financiero de la aplicación de los recursos del FORTASEG 2016 y el informe descriptivo del impacto

generado por el grado de cumplimiento en sus programas y metas alcanzadas, por lo que no es posible evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos.

Incumpliendo con los Artículos 48 de la Ley de Coordinación fiscal; 72 párrafos Primero y Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 39 de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública FORTASEG 2016; 85 Fracción II, párrafos Primero y Tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Incisos F, G, H, I, J, K y L, del Convenio Específico de Coordinación y adhesión para el otorgamiento del subsidio FORTASEG para el ejercicio 2016, Décimo Noveno, Vigésimo, Fracciones I, II y IV, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

COPARTICIPACIÓN

k. Falta de depósito de $1´981,177 por concepto de segunda ministración de coparticipación equivalente al 50% de $3´962,354 que se convinieron**.** (La primera ministración del 50% se depositó el 10 de junio de 2016).

El inciso k) incumple con la Cláusula Segunda del Convenio Específico de Adhesión al FORTASEG 2016, Numeral 3, Fracción III del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión, y Artículo 22, Fracción IV de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016.

29. El Ayuntamiento con fecha 15 de agosto de 2016, celebró el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la vertiente Hábitat, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que suscriben por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con un monto de $2’528,046 de Aportación Federal y $1’769,634 de Aportación Municipal, derivándose al respecto las siguientes observaciones:

a. Falta de evidencia que el municipio haya realizado su aportación en la cuenta bancaria específica Banorte número 045917800-6, consistente en $1’769,634, incumpliendo con el Tercer Párrafo de la Cláusula Séptima del Convenio de Coordinación.

b. De los $2’528,046 correspondientes a la aportación federal, se recibieron al 13 de diciembre del 2016 la cantidad de $1’500,000; de estos recursos

se ejercieron $1’468,486 de los cuales se revisaron $992,789 cuya documentación comprobatoria del gasto carece del sello “operado PH”.

Incumpliendo con el Artículo 70, Fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c. No fue localizado el soporte documental relativo a los contrarecibos números 12061, 12074 y 12075 según pólizas de diario número 4 y de egreso número 32, ambas del 30 de diciembre de 2016, correspondientes a los pagos a las facturas números 288, 292 y 293, por concepto de anticipo y estimaciones 1 y 2, respectivamente por $1’794,933 relacionadas con el contrato de obra C-HABITAT-PMTCT2016-01 de pavimentación de la Calle Vicente Suárez, Col. XIII Ayuntamiento, incumpliendo con el Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el Capítulo 7, numeral 7.5, Fracción I, inciso d) de las Reglas del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016.

30. Durante el ejercicio fiscal 2016 la Entidad recibió recursos del Fidecomiso Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) por $10’000,000 en varias exhibiciones, las primeras durante el mes de febrero por $3’000,000 y la segunda en abril por $7’000,000, que fueron depositados en la cuenta 04-17954303 de Banorte S.A., de lo cual se observa no canceló la documentación comprobatoria de acuerdo a la muestra revisada de cinco obras por un importe de $9’820,214 con la leyenda de “OPERADO’’, incumpliendo con el Artículo 70, Fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

31. El Ayuntamiento realizó 7 licitaciones de obra, omitiendo hacer las publicaciones correspondientes tanto en el periódico local de mayor circulación como en la plataforma de compraNET, lo que limitó el proceso de competencia y libre concurrencia, es decir, la participación de mayor cantidad de ofertas; en las cuales solo se recepcionó una propuesta en cada una de ellas teniendo como consecuencia la asignación de los contratos a las únicas propuestas recibidas.

Incumpliendo los Artículos 24 Primer Párrafo, 32 y 44, Fracción I, de la Ley de Obras, Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31, 64 apartado A, Fracción III y 69 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

32. De las conciliaciones bancarias, se observa lo siguiente:

a. El Ayuntamiento presenta en conciliaciones bancarias partidas en conciliación por un monto total de $14´689,235, las cuales se integran por depósitos no considerados por el banco por $1´935,402; cargos bancarios no considerados por el Ayuntamiento por $6’980,367; depósitos no considerados por el Ayuntamiento por $4´367,014, cheques en tránsito por $1´075,950 y cargos del

Ayuntamiento no considerados por el banco por $330,501 provenientes de los ejercicios 2011 al 2016, las cuales no han sido aclaradas a la fecha.

b. El Ayuntamiento presenta en su balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016 doce saldos bancarios contrarios a su naturaleza por un monto de $(4’418,470).

c. De 15 conciliaciones bancarias seleccionadas de muestra para su revisión al mes de diciembre de 2016, ocho carecen de firmas de autorización por parte del Tesorero Municipal, y falta de firmas de elaboración y revisión. Además en cinco cuentas no se encontró elaborada la conciliación correspondiente al cierre del ejercicio.

d. Falta de notificación al Órgano de Fiscalización Superior durante el ejercicio de 2016 de los avisos por la apertura de diez cuentas bancarias, así como dos cancelaciones, incumpliendo con el Artículo 19 Segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de B.C.

e. Asimismo, de la cuenta Santander número 8250063243-1 de dólares americanos fue detectada la falta de valuación al cierre del ejercicio en base a las cotizaciones existentes de tipo de cambio emitidas por el Banco de México, S.A., incumpliendo con el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 8 del inciso c) de las Notas de Gestión Administrativa contenida en las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas y postulados de revelación suficiente, valuación e importancia relativa de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

33. La Entidad carece de los siguientes elementos de control interno y administrativo para la custodia y salvaguarda de bienes inmuebles como a continuación se enlistan:

a. No presentó evidencia de publicación del inventario de bienes inmuebles a través de internet por lo menos cada seis meses, o en otros medios de difusión distintos de acceso público, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b. No incluye en su Cuenta Pública la relación de bienes que componen su patrimonio de acuerdo al formato emitido por CONAC, incumpliendo con el Artículo 23, Último Párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c. En Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 39 celebrada el 16 de agosto de 2016 se aprobó la desincorporación de bienes del dominio público a bienes del dominio privado de 14 predios en diferentes ubicaciones, con una

superficie total de 368,497.88 M², con un valor catastral determinado en $8’936,796, los cuales no se tienen registrados contablemente, no pudieron ser verificados en padrón de bienes inmuebles y no cuentan con los avalúos correspondientes, por lo tanto tampoco fue posible verificar su propiedad.

Asimismo del listado mencionado, a 5 predios no fue posible determinarles su valor catastral debido a que no se encuentran debidamente regularizados por lo tanto no fueron localizados en el sistema catastral.

El destino de los inmuebles acordado también en el punto de acuerdo fue el de otorgarlos en dación en pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) a cuenta de adeudo municipal, cuya negociación quedó pendiente al cierre del ejercicio.

d. Se aprobó la aceptación de donación de servidumbres de paso en tres terrenos con valor catastral de $1’001,106, relativos a los acuerdos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo de orden del día de la sesión extraordinaria número 39 celebrada el 16 de agosto de 2016, los cuales no han sido formalizados a favor del Ayuntamiento mediante contrato de donación, ni se han registrado contablemente en cuentas de orden, ni reconocido dentro de su padrón la donación simple.

e. El Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2016 no ha formalizado a favor del Colegio de Arquitectos A.C., un terreno en donación con una superficie de 600 m2, el cual se desprende del polígono mayor identificado como lote 1 de la manzana 10 del fraccionamiento Magisterial propiedad del Ayuntamiento de Tecate, mediante contrato de donación, según acuerdo décimo de orden del día de la sesión extraordinaria número 43 celebrada el 26 de noviembre de 2016.

f. El Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2016 no ha formalizado a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 2 (SNTE), respecto del bien inmueble identificado conclave catastral 4-EA-008-062, con una superficie de 929.999 m2, con valor catastral de $927,671, propiedad del Ayuntamiento de Tecate, donde se aprueba la enajenación mediante contrato de donación, según acuerdo vigésimo cuarto de orden del día de la sesión extraordinaria número 43 celebrada el 26 de noviembre de 2016.

34. De la muestra revisada al rubro de obras en proceso se detectaron las observaciones siguientes:

a. El Ayuntamiento no reconoce los anticipos de obra entregados a los contratistas o constructoras en la cuenta contable número 1.1.3.4., en consecuencia a los importes de cada una de las estimaciones subsecuentes no se les aplica la

amortización contable del anticipo, conforme se aplica en los comprobantes de pago al contratista, incumpliendo con los Artículos 2, 17, 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los postulados de Importancia Relativa y Consistencia de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

b. En los registros contables del contrato de obra C-PDR-PMTKT-2014-17 denominado Construcción del Teatro de la Ciudad de Tecate, observamos las siguientes inconsistencias:

1) En las diez últimas estimaciones pagadas, identificadas con los números 22 al 31 ya no se amortizó el anticipo, por lo tanto no se distribuyó equitativamente la amortización del anticipo en relación a las estimaciones.

2) No fue proporcionado el Anexo 2 de referencia en el convenio modificatorio al convenio de coordinación de transferencia de recursos federales con cargo a Proyectos de Desarrollo Regional previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, del 16 de mayo de 2014, celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California y el Municipio el 11 de febrero de 2016, mismo que corresponde a la suspensión de aplicación de recursos del SINVP para trasferir el remanente de recursos pendiente de ejecutar de acuerdo al calendario de ejecución previsto, asimismo no se proporcionaron los convenios modificatorios al contrato inicial ni el acta de entrega-recepción del contrato, por lo tanto se desconoce el estatus del avance financiero ejercido al cierre del ejercicio 2016.

Incumpliendo lo establecido en los Artículos 2, 17, 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los postulados de Importancia Relativa y Consistencia de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

35. La Entidad carece de los siguientes elementos de control interno y administrativo para la custodia y salvaguarda de bienes muebles como a continuación se enlistan:

a. No incluye en su Cuenta Pública la relación de bienes que componen su patrimonio, de acuerdo al formato emitido por CONAC, incumpliendo con el Artículo 23, Último Párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b. Falta de publicación del inventario de bienes muebles a través de internet por lo menos cada seis meses, o en otros medios de difusión distintos de acceso público, incumpliendo con el Segundo Párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c. El Ayuntamiento no proporcionó evidencia de haber depreciado y revaluado sus activos, incumpliendo con el numeral 6 de las reglas

específicas de registro y valoración del patrimonio y con los parámetros de estimación de vida útil, emitidos por CONAC así como el Artículo 23 de la Norma Técnica No. 7 de Alta de Bienes Muebles de Activo Fijo.

36. Al cierre del ejercicio de 2016, el municipio no ha reconocido contablemente pasivo a favor de la empresa Administración, Desarrollo, Disposición y Operación, S. de R.L. de C.V. (ADDO), por $9’352,512, que corresponde a los servicios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos tipo comercial prestados al municipio del año 2007 al 2014, de acuerdo al contrato administrativo para la concesión relativa a la construcción y operación por cualquier método de eliminación del servicio de disposición final de los residuos sólidos domésticos, comerciales e industriales no peligrosos para el municipio de Tecate, B.C. (Concesión del Basurero), dicha información fue obtenida en compulsa recibida de fecha 4 de octubre de 2016, a la cual adjuntan copia de oficio sin número de fecha 21 de noviembre de 2014 emitido por el representante legal de la empresa C. Roberto Romandia Tamayo al municipio con acuse de recibido en el mismo día, así como copia de las facturas que se emitieron por los servicios pendientes de pago con listado mensual que soportan el cobro.

Incumpliendo con los Artículos 22, segundo párrafo, 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el postulado Devengo Contable de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

37. El Ayuntamiento no ha liquidado y/o depurado sus cuentas por pagar por un importe de $21’980,830 que corresponden a proveedores y acreedores de bienes y servicios, provenientes de los ejercicios 2001 al 2015.

38. El Ayuntamiento presenta en los rubros de Cuentas por Pagar y Acreedores Diversos 32 cuentas con saldos contrarios a su naturaleza al cierre del ejercicio fiscal de 2016 por $3’191,297 los cuales no han sido reclasificados o corregidos contablemente en su caso.

39. Falta de conciliación de cuentas por pagar a favor de las Entidades Paramunicipales de $4’668,824 y las cuentas por cobrar de la Paramunicipales de $3’047,780 existiendo una diferencia no aclarada entre las partes de $1’621,044 integrado de la siguiente manera:

a) El Instituto Municipal de la Mujer de Tecate, B.C. (IMMUJER), confirma saldo de la cuenta por cobrar por $1’057,225, en tanto que el Ayuntamiento tiene registrado una cuenta por pagar de $766,033, existiendo una diferencia no aclarada de $(291,191).

b) El Instituto Municipal del Deporte de Tecate (IMDETE), confirma saldo de la cuenta por cobrar de cero en tanto que el Ayuntamiento tiene una cuenta por pagar de $698,631, existiendo una diferencia no aclarada de $698,631.

c) El Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, (INPLADEM), confirmó una cuenta por cobrar $1’381,368 y el Ayuntamiento tiene registrado una cuenta por pagar de $2’565,473, determinándose una diferencia no aclarada de $1’184,104.

d) El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET), confirmó una cuenta por cobrar $609,187 en tanto que el Ayuntamiento tiene registrado una cuenta por pagar de $638,687 determinándose una diferencia no aclarada de $29,500.

40. El Ayuntamiento presenta al cierre del ejercicio saldos acumulados desde el mes de agosto de 2015 a diciembre de 2016 correspondientes a retenciones descontadas vía nómina por créditos personales otorgados a sus empleados no pagadas de $2’821,506; y $7’995,168 a favor de las empresas Ficali, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. S.F.O.M. E.N.R. y Finmart S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. y/o Crediamigo, respectivamente.

Incumpliendo con el plazo de pago establecido entre los cinco días hábiles siguientes de haber efectuado los descuentos, según lo pactado en el Segundo Párrafo de la Cláusula Quinta, y Cláusula Sexta de los convenios de colaboración celebrados en fechas 17 de junio y 28 de noviembre de 2014, respectivamente.

41. De la revisión a los créditos contratados a corto plazo para financiamiento temporal, se observa lo siguiente:

1) Respecto al crédito bancario No. 002 003 ABC CCC R28 136 realizado con Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, ENR., contratado el 1 de noviembre de 2015 por un monto de $12’000,000 con vigencia de 9 meses, se observa lo siguiente:

a) Durante los meses de enero a junio de 2016, el municipio no dio cumplimiento puntual a los compromisos de pago toda vez que en los estados de cuenta del crédito respectivo presentan saldos pendientes de pago por concepto de capital devengado por $342,495; $316,474; $996,897; $1’207,936 y $1’223,611, respectivamente, más comisiones por administración e I.V.A., por consiguiente el Ayuntamiento fue sujeto de
cargos por penas convencionales acumuladas en el ejercicio de $696,000, e intereses moratorios de $186,883, mismos que fueron aplicados en los periodos mencionados por no haberse dado cumplimiento de pago, los cuales fueron registrados en la cuenta denominada Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios, afectando su patrimonio, incumpliendo con el Artículo 59, Segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja

California y 7, Fracción I, inciso c) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

b) Se detecta una diferencia contable de $586,231, misma que disminuye en forma incorrecta el saldo insoluto del crédito, porque corresponde a conceptos pagados distintos del capital, por consiguiente el municipio, presenta al cierre del ejercicio un saldo pendiente de pago de $7’124,057, importe menor con respecto al saldo mostrado de $7’710,288 en el estado de cuenta del crédito.

c) El financiamiento temporal se debió liquidar a más tardar el 1 de noviembre de 2016, sin embargo se tiene un saldo vencido al cierre del ejercicio de $8'734,256, los cuales se integran por el saldo insoluto de $7'710,288 de capital, $225,447 de intereses ordinarios, $155,778 de intereses moratorios, $120,743 de comisiones más IVA de comisiones y $522,000 de penas convencionales acumuladas al cierre del ejercicio, por haberlo dejado de pagar desde el mes de abril de 2016, incumpliendo con los Artículos 59, Segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y 7, Fracción I, inciso c) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

Cabe señalar que el municipio recibió requerimiento de pago de Financiera Local, S.A. de C.V., con corte al 24 de enero de 2017, solicitando el pago de saldo insoluto de $7’710,288, más intereses y comisiones vencidas, intereses moratorios, penalizaciones y gastos legales que en conjunto suman $17’180,617. En consecuencia con fecha 16 de enero de 2017 fue congelada la cuenta bancaria Banorte S.A., número 0466216885 por el importe equivalente al capital, recurso que corresponde al programa de obra pública denominado Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura, (FORTALECE) 2da. Asignación para obras del parque Los Encinos.

2) Del crédito bancario No. 300163368 realizado con Banco Interacciones, S.A., contratado el 24 de diciembre de 2015 por un monto de $30’000,000.00, de los cuales el Ayuntamiento recibió $26’900,000 con vigencia de 8 meses, se observa que durante los meses de mayo y junio de 2016, el municipio rebasó su capacidad de pago toda vez que en los estados de cuenta del crédito presentan saldos insolutos por falta de pago, por consiguiente el Ayuntamiento fue sujeto de cargos por intereses moratorios acumulados de $11,949, los cuales fueron registrados en la cuenta denominada Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios, afectando su patrimonio, incumpliendo con el Artículo 59 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y 7, Fracción I, inciso c) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

42. En relación al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (L.G.C.G.) y de la normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se observa que el municipio durante el ejercicio 2016 no contó con un sistema contable armonizado donde emanen sus estados financieros e integración automática del ejercicio presupuestal. Sin embargo, a mediados del ejercicio 2017 lo implementó y presenta un avance del 35.6% de acuerdo a la evaluación en la plataforma SEVAC, Incumpliendo con los Artículos 16, 19 Fracciones III, IV, V y VI, 20, 40, 41, 48 en correlación con el Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

43. Derivado de la falta de un adecuado control interno, que permita validar las afectaciones realizadas a los padrones de adeudos, se identificaron las siguientes observaciones:

IMPUESTO PREDIAL

a. El padrón incluye 989 claves catastrales registradas a nombre de la Federación, Estado, Ayuntamiento, Entidades Paraestatales y Paramunicipales, mismas que presentan adeudos de los años 1994 al 2016, por un monto de $16’425,044, más el 15% impuesto fomento deportivo y educacional de $2’463,757, existiendo incertidumbre respecto a si dichas claves son objeto del Impuesto Predial o están exentas de pago, debido a que no fue proporcionada información que permita corroborar que los predios se encuentran en el supuesto señalado en el Artículo 75 Bis A Fracción IX Punto 1 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de B.C.

PAVIMENTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, RECOLECCIÓN DE BASURA, MULTAS DE TRÁNSITO Y MULTAS FEDERALES

b. De la revisión documental efectuada al Padrón de Rezagos de Pavimentación, Electrificación, Recolección, Multas de Tránsito Municipal y Multas Federales no Pagadas por un total de $21’023,923 se observa que de 41 adeudos revisados selectivamente por un monto de $1’490,020; 30 expedientes no cuentan con requerimiento de cobro por un importe de $580,904, incumpliendo con los Artículos 112 y 113 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de B.C.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes puntos.

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública de Ingresos al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos del 1 al 6 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

TERCERO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Patrimonio al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observaciones señaladas en los puntos del 7 al 12 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- No se aprueba la Cuenta Pública de Deuda Pública al H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por motivo de las observación señalada en el punto 13 del Considerando Sexto del presente Dictamen.

CUARTO.- Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 Primer Párrafo y 63 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se estima que las observaciones señaladas en el Considerando Sexto del presente Dictamen, deberán notificarse a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios o ambos, que en su caso hubieren ocasionado a la entidad fiscalizada en los términos establecidos en los Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98 Fracción XVI y 103 Fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, también aplicables por disposición de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

D A D O en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA
SECRETARIO

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES
VOCAL

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ
VOCAL

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
VOCAL
(CONCLUYE DICTAMEN No. 19)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; se declara abierto el debate del dictamen No. 19, Diputados, se pregunta si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay intervenciones, solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal el dictamen por favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones Diputada Presidenta. Se somete a votación nominal el dictamen No. 19 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, empezando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, con las consideraciones hechas en los dictámenes precedentes, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?,¿Falta algún Diputado por votar? de no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 19			
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		

Dip. Ruvalcaba Flores David			
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia			
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel			
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat			
Dip. Vázquez Castillo Julio César			
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo			
Dip. Meléndrez Espinoza Juan			
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal			
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino			
Total de votos a favor	16		
Total de votos en Contra		0	

Total de Abstenciones			0

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; se declara aprobado el dictamen No. 19 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Siguiendo con el orden del día, pasamos a los dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García, para dar lectura a los dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Adelante Diputado.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Una disculpa Diputada Vicepresidenta. Primero que nada a nombre de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y como Presidente de la misma, pediría, dado que el dictamen fue circulado con la debida oportunidad entre los integrantes de este, de esta Legislatura, que se dispensara la lectura total del documento que contiene el dictamen No. 8, para efectos de que se leyera el considerando, el proemio y punto resolutivo de los mismos, del mismo, Diputada Vicepresidenta. Sometería primero que nada la solicitud de dispensa de la lectura total del documento.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muy bien Diputado, vamos a solicitar a la Diputada Secretaria, someta a votación económica la dispensa de trámite presentada y le voy a pedir aquí a mi compañera Geraldo, para que levante la votación si es tan amable; adelante Diputada.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que se encuentren a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Una observación Diputada Secretaria, la dispensa de la lectura total, de favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Perdón; la dispensa de la lectura del dictamen total, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad, gracias.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias, continúe con el uso de la voz Diputado Juan Manuel Molina García, para dar lectura al dictamen No. 3 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; adelante Diputado.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Es el dictamen No. 8.

DICTAMEN 8 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A INICIATIVAS DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADAS EL 22 Y 29 DE AGOSTO DE 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las siguientes iniciativas: 1) Iniciativa de reforma y adición a los artículos 49, 69 y 83 de la

Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Baja California; y 2) Iniciativa de reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California:

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló sus trabajos conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

Único. Se aprueban las reformas a los artículos 7, 83; la adición de las fracciones XXVII y XXVIII al artículo 49 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- (…)

Primer párrafo queda igual

El Estado reconoce y protege la Institución… sigue igual

El siguiente párrafo, igual

Los titulares de los Poderes Públicos, de los… igual

APARTADO A.- (…) igual

Siguiente párrafo igual Las normas relativas a los…

Siguiente párrafo igual Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia…

Siguiente párrafo igual Esta Constitución asume a plenitud todos…

Siguiente párrafo igual Las comunidades indígenas pertenecientes…

Siguiente párrafo queda igual Sin poner en riesgo la unidad estatal…

Siguiente párrafo queda igual Para promover la igualdad de oportunidades…

Siguiente párrafo queda igual Toda persona tiene el derecho a la práctica del…

Siguiente párrafo queda igual El acceso al agua para consumo personal…

Siguiente párrafo queda igual Toda persona tiene el derecho de adquirir…

(Parte de la reforma) El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases, programas, y autoridades competentes para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado.

Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción.

APARTADO B.- (…) queda igual

APARTADO C.- (…) queda igual

APARTADO D.- (…) queda igual

APARTADO E.- (…) queda igual

ARTÍCULO 49.- (…) primer párrafo queda igual

I a la XXV.- (…) queda igual

XXVI.- Intervenir mediante el organismo de la administración pública paraestatal que determine la Ley, en la formulación y aplicación de programas de movilidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y el transporte público, así como en la prestación y regulación de dicho servicio, conforme a la Ley de la materia.

XXVII.- Promover y fomentar el derecho a la movilidad, garantizando la seguridad vial del peatón, conductor, pasajero así como el acceso a un transporte público y privado de calidad para los habitantes del Estado.

XXVIII.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes Federales.

ARTÍCULO 83.- (…) primer párrafo queda igual

I.- a la VIII.- (…) quedan igual

IX.-Instrumentar mecanismos de coordinación, cooperación y participación con las autoridades competentes en materia de transporte público, para mejorar y ampliar la calidad de la prestación de los servicios públicos de transporte, en los términos que fijen las leyes.

X.- a la XIII.- (…) quedan igual

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, o si transcurrido un mes después de recibir el presente decreto sin que emitan una votación, procédase a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

CUARTO.- El Congreso del Estado deberá emitir las disposiciones jurídicas materia de movilidad.

QUINTO.- El Congreso del Estado deberá expedir dentro de los treinta días siguientes a que entren en vigor las presentes reformas, la legislación que instrumente las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Dado en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los dos días del mes de octubre dos mil diecinueve.

Y firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; es cuanto Diputada Vicepresidenta.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 08 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES)

DICTAMEN 8 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A INICIATIVAS DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADAS EL 22 Y 29 DE AGOSTO DE 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las siguientes iniciativas: 1) Iniciativa de reforma y adición a los artículos 49, 69 y 83 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Baja California; y 2) Iniciativa de reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, por lo que sometemos a consideración el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado **"Fundamento"** se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado **"Antecedentes Legislativos"** se da cuenta del trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

III. El apartado denominado **"Contenido de la Reforma"** se compone de dos capítulos: el relativo a **"Exposición de motivos"** en el que se hace una descripción sucinta de la propuesta en estudio, así como su motivación y alcances, haciendo referencia a los temas que la componen. En el capítulo denominado **"Cuadro Comparativo"** se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado **"Valoración jurídica de la reforma"** se realiza un análisis de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.

V. En el apartado de **"Consideraciones"** se determina el sentido del presente dictamen y los integrantes de este órgano colegiado expresan razonamientos

y argumentos referentes a la viabilidad, oportunidad y necesidad de cada porción normativa.

VI. En el apartado de **"Propuestas de modificación y articulado propuesto"** se describe puntualmente las adiciones, modificaciones y eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al proyecto de decreto.

VII. En el apartado de **"Régimen Transitorio"** se describen puntualmente las disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al proyecto de decreto.

VIII. En el apartado denominado **"Impacto Regulatorio"** se enuncian los ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen; o bien, se señala que no existe necesidad de armonización, pues la propuesta no genera impacto regulatorio.

IX. En el apartado denominado **"Resolutivo"** se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción I, 57, 62, 63, 90, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedentes Legislativos.

1. En fecha 22 de agosto del 2019, el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno de la XXIII Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa de reforma los artículos 49, 69 y 83 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Baja California.

La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a las iniciativas mencionadas.

En fecha 28 de agosto de 2019, se recibió la iniciativa en la Dirección de Consultoría Legislativa, oficio signado por el Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual remite la iniciativa señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.

2. En fecha 29 de agosto de 2019, el Diputado Rodrigo Aníbal Otañez Licona, integrante del Partido de Baja California; presentó ante Pleno de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa que Reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a las iniciativas mencionadas.

En fecha 04 de septiembre de 2019, se recibió en la Dirección de Consultoría Legislativa, oficio PCG/004/2019 signado por el Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual remite la iniciativa señalada en el numeral 2 de esta sección, con la finalidad de elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Reforma.

A. Exposición de motivos.

Por lo que hace al planteamiento de la exposición de motivos de la iniciativa identificada con el numeral 1, de los antecedentes legislativos, el promovente expuso lo siguiente:

1.- Modernización y necesidades actuales del servicio público de transporte.

El Problema que pretende resolver esta reforma del transporte es causado y agravado por que cada día crece un caótico, excluyente, caro, peligroso y contaminante servicio de transporte en prácticamente cada uno de los municipios del Estado de Baja California. Eso se traduce en alargamiento de los tiempos de trayecto e incremento de las tarifas y costos de oportunidad que sufren las personas que desean ir a trabajar, acceder a servicios de salud, educación y cultura, así como el deterioro de la seguridad vial debido a accidentes y perdida de tiempos en embotellamientos de tránsito, incremento de la contaminación atmosférica que inciden negativamente en la salud pública.

El derecho al tránsito en condiciones óptimas de economía, cobertura, seguridad, inclusión y corresponsabilidad con el medio ambiente es un verdadero derecho humano que es transversal y tiene la posibilidad de potenciar el alcance y satisfacción a otros derechos humanos como es el del acceso al trabajo, a la salud, a la cultura, al deporte y al ocio por lo que debemos asegurarnos que siempre sea barato, abundante, incluyente, seguro y responsable con el medio ambiente y la salud de las personas.

MORENA tiene como objetivo principal lograr el desarrollo permanente y sustentable del Estado, así como la obligación de garantizar el bienestar de la población, por lo que se hace necesario revisar de forma permanente la normatividad vigente que le da sustento a este tema, ya que resulta indispensable generar las adecuaciones que faciliten las acciones a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, para ser rector del transporte público, privado y movilidad urbana, con una visión de modernidad, sustentabilidad y equidad. Nuestro propósito en, en suma incidir específicamente en valores como la protección a la salud, incremento de la seguridad vial, protección al medio ambiente y en general, el abatimiento de costos y tiempos reales de traslado para las personas y mercancías en las zonas metropolitanas, las comunidades y zonas suburbanas del Estado.

La mayoría de los municipios han intentado ordenar y regular el servicio de transporte prestado a través de Autobuses, Furgonetas -“Calafias” o “Vans”- Taxis colectivos, Taxis individuales y han realizado frustrados intentos de regulación de los transportes ofrecidos vía sistemas electrónicos como Uber, Didi, Bird o Lime etc., también han fallado en su intento de construir infraestructura multimodal del transporte que hagan seguro el desarrollo del ciclismo urbano y suburbano, la accesibilidad peatonal y el uso de patinetas o motocicletas eléctricas de renta como complemento o alternativa amigable de transporte con el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

Estos fracasos gubernamentales para asegurar el derecho humano a la movilidad son en gran parte causados por no contar con una serie de instrumentos jurídicos basados en la Constitución y en Ley que deberían ser los adecuados para reordenar a los distintos modos de transporte público y privado de una forma permanente que asegure el derecho a la movilidad y plenitud democrática. Los municipios, además de carecer de los instrumentos

legales idóneos, no han sabido ni han podido crear ni darle vida a entes gubernamentales que trasciendan en sus cortos mandatos y que impacten permanentemente en un sistema amplio, complejo y en la realidad que constituye la vida diaria del ciudadano, quien todos los días necesita de un modo o varios modos de transporte baratos, abundantes, seguros e incluyentes que le permitan el desarrollar de su personalidad gozando de sus derechos humanos cabalmente.

Para la consecución del objetivo principal y las obligaciones de la administración pública, resulta necesario actualizar el marco legal vigente en la entidad, sin que sea una excepción la legislación constitucional, fiscal, administrativa, civil y penal que rige el transporte público, y de su estudio se determina que el marco legal existente no responde ya a los requerimientos de la realidad social que permite en este siglo XXI la aplicación y uso masivo de tecnologías de la información que rebasan los límites actuales del marco normativo como lo son los sistemas tecnológicas del transporte llamados Uber, Didi y otros de arrendamiento o administración de patinetas o motocicletas eléctricas como Bird o Lime, etc.

El Constituyente Permanente cumple su función al advertir que le corresponde al Estado Federado el desplegar sus mayores poderes legales y organizativos para aprovechar los desarrollos tecnológicos de este siglo XXI.

Es indispensable crear y modernizar las instituciones a efecto de garantizar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, y en caso específico del transporte público y privado como servicio fundamental para impulsar el desarrollo social y económico, además es preciso garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de este servicio en todos los municipios del estado, el respeto irrestricto a sus derecho humanos, así como generar los escenarios idóneos para permitir la participación de los sectores privados y sociales en la toma de decisiones gubernamentales a nivel estatal en la materia para atender a la creciente metropolización de los centros urbanos, sobre todo en la zona costa occidental del Estado de Baja California.

Este proyecto de reforma constitucional, incorpora el concepto de Movilidad, bajo los nuevos modelos de desplazamiento de la población, contemplados en la legislación y políticas públicas del orden federal vigente en materia de asentamientos humanos, reconociendo además su trascendencia como un derecho humano de todos los bajacalifornianos, siendo el transporte la forma más importante de movilidad humana, toda vez que representa el eje central del desplazamiento de los ciudadanos de todo el Estado, por lo que con esta iniciativa se pretenden buscar las garantías de cumplimiento uniforme, igualdad, regularidad del servicio, y continuidad, con el fin de que el servicio de transporte público sea:

1.- Barato

2.- De cobertura amplia y frecuencias óptimas para todas las ciudades, áreas metropolitanas y comunidades suburbanas del estado de Baja California

3.- Incluyente para todas las personas independientemente de su capacidad física para movilizarse,

4. Que el Estado, con un Ejecutivo fuerte y sus entes especializados sean respectivamente el rector y cogestores principales que revolucionen al transporte público y privado para el siglo XXI, para que se convierta en un verdadero coadyuvante en el aumento de la calidad de vida de los Bajacalifornianos, y

5.- Que la movilidad se transforme en un nuevo motor del desarrollo social y económico en toda la entidad generando empleos formales, dignos, bien remunerados, y con perspectiva de futuro aplicando tecnologías del siglo XXI a problemas reales del presente que nos impone cada día un transporte cada vez más caótico, excluyente, caro, peligroso y contaminante.

Para impulsar una nueva visión de servicio de transporte, se propone la transformación innovadora de las dependencias encargadas del transporte público y privado, por lo que la presente propuesta trae a la mesa, un organismo Paraestatal, que será quien tendrá un carácter normativo que analice, compare, planifique y resuelva aplicar en definitiva los mecanismos, procesos y para que dirima las controversias técnicas que se susciten en las decisión de reconocer la existencia o modificación de cuencas gestionadas de transporte, así como la de concesionar, permisionar, crear, modificar y extinguir rutas, tarifas aplicables al transporte, así como a la creación, revocación y ampliación del objeto o fines de los sistemas de recaudo y dispersión de medios de pago para todos los modos de transporte público y privado en los que se intercambien contraprestaciones en dinero físico o electrónico o en medios de pago o intercambio de valor algorítmicos de cualesquier tipo.

Por lo antes expuesto resulta el reto más importante para el Ejecutivo estatal el tema de movilidad y transporte el cual como ya lo mencionamos, representa uno de los elementos indispensables para el desarrollo y para una calidad de vida digna de los habitantes del estado, inclusive equiparado a los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta magna, tales como la educación, el trabajo o la salud.
En consecuencia, la prestación del servicio público y privado de transporte y la modernidad del mismo, se traduce en un bien necesario para toda la sociedad y que es el Estado el que debe proveerlo, a través de diferentes formas de organización, centralizadas o bien mediante instituciones paraestatales, pero que finalmente garantice la prestación del servicio, y que tenga un funcionamiento eficiente y acorde a las necesidades de la población.

En contraprestación, resulta oportuno resaltar, que en la actualidad se están llevando a cabo importantes esfuerzos en la modernización del transporte público, como en el caso de Tijuana, en donde desde la administración del XXI Ayuntamiento de esa ciudad, se está trabajando en el Sistema Integral del Transporte Público, también conocido como el SITT y se aprobaron diversas reformas para la aplicación de programas para resolver la movilidad y prevenir la contaminación, resulta lo mismo en el municipio de Mexicali, donde existe un sistema de transporte publico inclusive con sistemas de pago muy parecidos a los de ciudad de México.

Bajo ese mismo orden de ideas la presente reforma constitucional va encaminada a buscar dar continuidad a la visión de modernidad del transporte público urbano al permitirle al Ejecutivo estatal la facultad de injerencia directa a través de un órgano paraestatal, en los temas de mayor relevancia en cada uno de los cinco municipios, con el fin de homologar la modernidad del sistema de transporte público y privado, así como la movilidad.

Aunado a lo anterior existe la necesidad de implementar nuevas políticas de transporte público y privado, enfocadas a garantizar el derecho a una movilidad eficiente, incluyente y segura, por lo que se considera de vital importancia establecer dicho derecho en nuestra Constitución local y garantizarlo con los organismos públicos como la autoridad paraestatal, y los organismos de gestión que sean necesarios a cargo del Ejecutivo, los cuales defenderán con claridad la referida movilidad sustentable.

Como antecedente, en diversos estados de la república, se han implementado una serie de acciones sobre el tema, especialmente el Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Guanajuato, pero Baja California siendo vecino del Estado de California que es más desarrollado de Norteamérica y siendo puerta de Latinoamérica a Asia, tiene la oportunidad de adaptar y adoptar las mejores prácticas de movilidad con mayor cercanía y facilidad que otras entidades federativas en México.

En el tema de transporte público urbano, el reto es buscar niveles de calidad, confort, eficiencia, economía y seguridad, con lo cual se beneficia al medio ambiente, se reducen los costos, se incrementa la productividad de las comunidades y se promueva un verdadero servicio social y humano, en pocas palabras se logra la sustentabilidad.

Otro de los asuntos que debe destacar mediante el presente proyecto de reforma constitucional es la metrópoli como asunto de mayor importancia para esta propuesta de creación del órgano paraestatal, toda vez que las particularidades del mundo actual es el de poseer una población altamente urbanizada, dando origen en la mayoría de los países a áreas metropolitanas y cuencas conformada por ciudades y poblaciones cuyo tejido urbano rebasa sus límites político-administrativos originales.

En México la CONAPO, INEGI, y SEDESOL, en su trabajo conjunto para establecer y analizar las diversas zonas metropolitanas del país, establecieron que existen 59 zonas metropolitanas, enlistando el municipio de Tijuana, como la sexta ciudad y la ciudad de Mexicali en el treceavo lugar, de acuerdo con su población conurbana que conforman una Zona Metropolitana.

También se clasificaron las zonas metropolitanas en la frontera con los Estados Unidos, ya que mantienen una interacción demográfica y económica intensa, otorgan a la zona Tijuana-San Diego, el primer lugar en este rubro, y a Mexicali-Calexico, la quinta posición.

Como centros de actividad económico y de prestación de servicios, las zonas metropolitanas, representan un gran potencial para el desarrollo extralimites, que requiere para lograrse, un óptimo aprovechamiento de sus ventajas competitivas de ahí la necesidad de la creación de un órgano independiente, como será la entidad paraestatal denominada Instituto de

Movilidad, dándole suma importancia a los temas metropolitanos y transporte público de todo el estado.

El desarrollo de una zona metropolitana con impacto directo en la prestación de servicios públicos no es un fenómeno reciente, tiene más de diez años en Baja California, siendo el de mayor relevancia el del municipio de Tijuana, por su constante crecimiento demográfico y al hecho de la municipalización de Playas de Rosarito, que permitieron en su época, acelerar la conurbación de lo que hoy es la zona metropolitana conformada por los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana, y Tecate.

Sin olvidarnos de los transportistas y empresarios del rubro, los cuales se han involucrado de manera proactiva en las políticas públicas de movilidad, haciendo hincapié en demostrar su inconformidad por la forma en que han venido desempeñando las autoridades en el manejo del servicio de transporte en todas sus modalidades, así mismo, las constantes quejas y peticiones de los usuarios del servicio exigiendo una mayor calidad tanto en la prestación del mismo como en uso de unidades modernas y confortables.

En el mismo tenor, el empresario transportista ve limitada su capacidad de obtener créditos bancarios para la compra de unidades nuevas derivado de que las instituciones de crédito otorgan prestamos limitados al periodo de tiempo de duración de una administración municipal, ello provocado por la política pública incierta al modificarse el esquema de transporte en cada cambio de ayuntamiento y a la carencia de una huella digital confiable que demuestre matemáticamente los aforos de cada ruta o cuenca natural de transporte, que son hoy día condiciones generalmente exigidas por las instituciones financieras nacionales y extranjeras que concurren al mercado de financiamiento de vehículos de autotransporte, sus sistemas de gestión, recaudo y expansión multimodal.

Por lo tanto, al traspasarse las facultades de transporte público al Estado, este tiene un lapso de duración más largo que una administración municipal, e igualmente al crearse una autoridad en la materia, con carácter de paraestatal en la que los cambios de gobierno no tendrían un impacto nocivo en la calidad, volumen, permanencia y uniformidad en la prestación del servicio público y privado de transporte, generando con ello reglas claras y de larga duración que ocasionan un efecto de rebote al permitirle al empresario transportista obtener créditos a largo plazo soportados por leyes de vanguardia y un entramado institucional con figuras paraestatales sólidas que organicen, vigilen y gestionen la correcta operación de las concesiones, permisos y sistemas de soporte del transporte que otorguen certeza y claridad de sus operaciones en el tiempo.

Es muy importante dejar claro desde ahora que se tiene previsto que la legislación reglamentaria que creará el organismo de la administración pública paraestatal también creará un organismo consultivo que agrupará a las organizaciones de transportistas para poder escuchar todas las voces de los actores en un proceso tan difícil de regular.

Para concluir, otro de los asuntos de gran importancia es la inseguridad en el transporte público y privado es el relativo a la opinión que ha planteado insistentemente la necesidad de

establecer un estado de derecho que garantice el orden y la paz en las relaciones de la vida social, el cual suele oponerse a una situación de confusión y de inseguridad jurídica como se da en el y entre el transporte público y privado en México y en específico en Baja California, pero sobre todo, de inseguridad pública, este asunto no es ajeno al servicio de transporte público, en particular cuando hablamos que se estima que existen más de tres mil unidades irregulares solamente en Tijuana, sin tomar en cuenta los otros cuatro municipios, dicho calculo fue estimado por profesionales en el tema en los últimos años. Tanto usuarios del transporte público, como permisionarios y transportistas, se quejan de dicho fenómeno, toda vez que a la fecha han sido nulas las estrategias para contrarrestar tales irregularidades, mencionados hechos constan en los periódicos de mayor circulación de todo el Estado de aproximadamente doce años atrás a la fecha actual.

Nuestra carta magna en su artículo 21, párrafo noveno, hace hincapié en que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, de las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción administrativa, en términos de las leyes en la materia, y en las respectivas competencias de nuestra Constitución local.

Como ya se mencionó invariablemente uno de los factores determinantes en el desarrollo de un Estado es la movilidad sustentable por lo que respecto a los delitos en materia de transporte público no es un tema aislado, es decir, este asunto es parte integral de la modernización y sustentabilidad de esta reforma.

Lo anterior, además de constituir un riesgo a la seguridad de los usuarios del transporte público, especialmente mujeres y grupos vulnerables, representa también una competencia desleal e ilegal a quienes de manera legal son titulares de concesiones y permisos para la prestación de dicho servicio en sus distintas modalidades, es por eso que traemos a colación además de la reforma antes señalada, también sugerimos a este Congreso, las adiciones respectivas al artículo 69 de la Constitución local, con el fin de que el organismo paraestatal propuesto tenga los instrumentos necesarios e idóneos para llevar a cabo sus gestiones y atribuciones.

2.- Marco legal actual y sus fundamentos

Nuestra Constitución Federal establece que nuestro Estado asume la forma federal, como entidad federativa, libres y soberanas, entregándole de manera expresa, aquellas facultades necesarias para constituir el orden federal como dimensión distinta de los órdenes de gobierno locales.

Así pues, a nivel estatal las legislaturas locales poseen la facultad para dictar las leyes con base en las cuales los municipios emiten su normatividad interna para organizar la prestación de los servicios públicos de su competencia, como es el caso del transporte púbico, de conformidad con el contenido del artículo 115 constitucional, fracción V, inciso h), en conclusión en la entidad contamos con la Ley General de Transporte Público, la cual tiene por objeto establecer las bases generales mediante las cuales los municipios del Estado,

proporcionaran el servicio y regularán el ejercicio de sus atribuciones en materia de transporte publico dentro de sus competencias.

Es importante resaltar que los Municipios seguirán estando facultados para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, con lo cual se garantiza que la voz de cada uno de los cinco Municipios del Estado seguirá siendo escuchada para tales efectos.

4.- Propuesta final

Por todas las razones expuestas sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la siguiente iniciativa de reforma en los términos que a continuación se detallan:

Respecto a la iniciativa identificada en el numeral 2 de los antecedentes legislativos, el inicialista manifestó en su exposición de motivos lo siguiente:

Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados.

Como ustedes recordaran en la última sesión, puse a consideración de esta tribuna, el inicio de los trabajos para generar una Ley de Movilidad en el Estado de Baja California, entre otras cosas mencione la importancia que tiene para este congreso y para toda la sociedad en su conjunto legislar en esta materia.

Es importante nuevamente recordarles que la movilidad humana forma parte de la naturaleza de toda persona, que es una realidad inevitable, ante las necesidades que cada día aumentan de contar con más vialidades, y medios de transportes que permitan traslados seguros, eficientes, y sustentables, que tengan en su centro de atención al peatón.

Luego entonces, requerimos establecer bases constitucionales para avanzar como uno de los primeros estados en reconocer a la movilidad como un derecho humano de toda persona y de la colectividad.

Bajo esta premisa, la nueva legislación en materia de movilidad, debe atender a los parámetros constitucionales que se proponen y que permitan crear el marco normativo que permita la seguridad vial del peatón, el conductor, el pasajero, incluyendo aquellos no motorizados.

La propuesta que hoy se les presenta, también tiene por objeto establecer su obligatoriedad tanto a las autoridades del Estado y Municipios de Baja California, al señalar que la Ley establecerá las bases, programas y la competencia de la autoridades para garantizar la seguridad vial.

De igual forma se propone que establecer un mayor alcance a la movilidad y seguridad vial en el estado y municipios, al señalar que las bases, programas y demás disposiciones que sean previstas en la Ley, tengan un alcance respecto a las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado.

Como ya lo había anunciado, la presente iniciativa de reforma será publica y accesible a toda persona interesada, y en breve tiempo será discutida con diversos sectores de la sociedad, especialistas, y ciudadanos interesados en el tema, en forma directa o a través de la Plataforma electrónica que hemos denominado "RED DE MOVILIDAD POR BAJA CALIFORNIA".

B. Cuadro Comparativo

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la iniciativa en el numeral 1, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:	**ARTÍCULO 49.-** (…) I a la XXV.- (…)

I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado. II.- Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que redunden en beneficio del pueblo. Dentro de los noventa días siguientes a la instalación de cada legislatura constitucional, podrá optar por el Gobierno de Coalición, en cuyo caso y sin perjuicio de lo anterior, acordará las políticas públicas convenidas, turnándolas para su registro y seguimiento al Congreso del Estado. III.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida. IV.- Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día primero de Diciembre, los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente. V.- Rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias; sin perjuicio de lo anterior, podrá emitir un mensaje ante el Congreso, bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso cada grupo parlamentario tendrá derecho a expresar su opinión sobre el contenido del mismo. Tanto el Gobernador del Estado, como los grupos parlamentarios, tendrán por una sola ocasión, derecho de réplica.	

VI.- Pedir y dar informes al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia. VII.- Designar a un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial; VIII.- Visitar los Municipios del Estado cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo, dando cuenta al Congreso, o al Tribunal Superior, de las faltas que notare y cuyo remedio corresponda a dichos Poderes, y solicitar al Congreso del Estado la suspensión de Ayuntamientos, que declare que éstos han desaparecido y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley prevenga, proponiendo al Congreso en su caso los nombres de los vecinos, para que designe a los integrantes de los Consejos Municipales, en los términos de esta Constitución y las Leyes respectivas. IX.- Prestar a los Tribunales el auxilio que éstos requieran para el ejercicio expedito de sus funciones y hacer cumplir sus fallos y sentencias. X.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad. Los nombramientos del Secretario de Desarrollo Social, y del Director de Control y Evaluación Gubernamental, estarán sujetos a la ratificación del Congreso conforme lo señala esta Constitución; Cuando opte por el Gobierno de Coalición, someterá a cada uno de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, por separado a ratificación del Congreso del Estado por mayoría	

simple de los miembros presentes. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará un segundo nombramiento distinto, que deberá ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará el nombramiento definitivo; XI.- Cuidar la recaudación y correcta inversión de los caudales del Estado. XII.- Fomentar, impulsar y promover el desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura en el Estado, considerando la participación del sector social y privado, así como coordinarse con la Federación y los Municipios de nuestra Entidad, cuando su intervención sea requerida para el ejercicio de las atribuciones que en esta materia les competan de conformidad con la presente Constitución y las leyes que correspondan. XIII.- Expedir los títulos profesionales con arreglo a las leyes y reconocer la validez de los que se expidan, en otras entidades de la Federación, observando lo dispuesto en la fracción V del Artículo 121 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. XIV.- Conceder, conforme a la Ley, conmutación de penas. XV.- Celebrar convenios sobre límites del Estado sometiéndolos a la aprobación del Congreso para los efectos del artículo 27 fracción XX de esta Constitución.	

XVI.- Formular y expedir los reglamentos para el buen despacho de la administración pública. XVII.- Decretar expropiación de bienes por causas de utilidad pública, en la forma que determinen las leyes. XVIII.- Tener el mando directo de la fuerza pública de los municipios cuando el Congreso del Estado suspenda o declare desaparecidos a los Ayuntamientos, y tomar en caso de invasión o de trastornos interiores, medidas extraordinarias para hacer respetar la Soberanía del Estado y restablecer el orden con la aprobación del Congreso del Estado. XIX.- Conceder licencias de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y demás disposiciones aplicables en la materia y aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados del Ejecutivo. XX.- Proveer a la ejecución de las obras públicas y dictar las medidas necesarias para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sustentable, así como participar en coordinación con los Municipios, en la planeación y regulación de las zonas de conurbación, en los términos que establezcan las leyes aplicables. XXI.- Fomentar el turismo, el desarrollo industrial, agrícola, ganadero y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. XXII.- Celebrar convenios con la Federación sobre participación de impuestos y coordinar sus esfuerzos en el Estado, a efecto de atender lo relativo a educación, salubridad y asistencia	

pública y para la construcción de caminos vecinales, así como en aquellas obras cuya ejecución pueda llevarse a cabo en cooperación con el Gobierno Federal y sujetándose el Ejecutivo Local a lo dispuesto por las Leyes respectivas. XXIII.- Nombrar libremente al Procurador General de Justicia del Estado, quien deberá reunir los requisitos que establezca la Ley de la materia; XXIV.- Remover al Procurador General de Justicia del Estado, en los términos de la Ley de la materia. XXV.- Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia, establecer procedimientos de participación y de consulta popular en el Sistema de Planeación Democrática, coordinar la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, integrando a este los planes municipales que formulen los Ayuntamientos y con la participación de los grupos sociales organizados; de conformidad con las disposiciones legales que emita el Congreso del Estado, y XXVI.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes Federales.	

	XXVI.- Intervenir mediante el organismo de la administración pública paraestatal que determine la Ley, en la formulación y aplicación de programas de movilidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y el transporte público, así como en la prestación y regulación de dicho servicio, conforme a la Ley de la materia. **XXVII.- Promover y fomentar el derecho a la movilidad, a gozar de ciudades, comunidades y zonas suburbanas sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida de sus habitantes y acceder a un transporte público y privado, privilegiando el monitoreo y control a través de sistemas electrónicas, que sea barato, seguro, con bajo impacto nocivo al medio ambiente y salud pública, de manera digna y eficiente y que siempre permita al usuario elegir la mejor opción a la luz de las mejores prácticas científicas de movilidad a nivel mundial, dando preferencia en todo momento a la seguridad y comodidad del peatón, en primera instancia y en segundo lugar en beneficio del usuario del transporte masivo de pasajeros; en tercer lugar a las motocicletas guiadas por personas, en cuarto lugar al automóvil privado guiado por personas, y en un último lugar y por igual a los vehículos autónomos, que deberán en todo momento ceder el paso, dar preferencia y proteger a las personas, sus animales o posesiones.** **El Ejecutivo proveerá lo necesario para garantizar a todas las personas el acceso a estos derechos a la movilidad y seguridad vial, así como la prelación de los mismos.**

	XXVIII.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes Federales.
ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público es la Institución encargada de la investigación y persecución de los delitos, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y tendrá las atribuciones y estructura que la Ley le establezca. Asimismo, intervendrá en todos los demás negocios que determinen esta Constitución y las leyes. La persecución de Delitos Electorales estará a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en los términos de esta Constitución. La persecución de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, atendiendo a lo previsto en esta Constitución y las Leyes.	**ARTÍCULO 69.-** (…) (…) (…) **En relación con los delitos del transporte público en sus diferentes modalidades, se seguirán de oficio aquellos cometidos por personas que presten el servicio sin ser permisionarios o concesionarios autorizados, por lo que cualquier persona podrá poner a disposición del Ministerio Público a la persona que sea sorprendida realizando dicha actividad sin las autorizaciones correspondientes.**

	Por lo que hace al vehículo utilizado en la comisión del ilícito, es decir la prestación de servicio público sin concesión o permiso, será puesto a disposición de la oficina más cercana de la entidad de movilidad con el carácter de asegurado, conjuntamente con los sistemas e instrumentos que fueran utilizados para transportar personas de forma insegura, ser accesorios de otros delitos o que contaminen en exceso después de haber recibido sanciones administrativas reincidentes, en los términos de la normatividad de la materia, independientemente de las demás sanciones a que se hagan acreedores los responsables de conformidad con la legislación penal aplicable y de la extinción de dominio que pudiera aplicarse.
ARTÍCULO 83.- En los términos de las leyes federales y estatales relativas, corresponde a los municipios: I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como participar en la formulación de los planes de desarrollo regional. Cuando el Gobierno del estado formule proyectos de planes o programas de desarrollo urbano o regional, asegurará la intervención de los municipios que deban involucrarse; II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; III.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; asimismo, participar en la vinculación del catastro municipal y el Registro Público de la Propiedad, para la armonización y homologación de la información inmobiliaria; IV.- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y, en la elaboración y	**ARTÍCULO 83.-** (…) I.- a la VIII.- (…)

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; V.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; VI.- Formular y conducir la política ambiental dentro del territorio municipal, que garantice un medio ambiente adecuado para el bienestar y desarrollo de su población e incorpore la dimensión ambiental en sus planes y programas de desarrollo; VII.- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; VIII.- Garantizar la sustentabilidad del desarrollo en su territorio, creando las condiciones para la adecuada prestación de los servicios sociales a su cargo y alentando la coordinación y concertación de acciones con los gobiernos federal y estatal, así como la participación social, a fin de elevar la calidad de vida de las personas; IX.- Prestar y regular en sus competencias territoriales el servicio de transporte público; X.- Reglamentar en los términos de la Ley aplicable, el transporte sustentable de personas no motorizado, así como su incorporación a la política ambiental y de desarrollo urbano municipal; XI.- Regular, autorizar, controlar y vigilar en sus competencias territoriales, la venta, almacenaje y	

consumo público de bebidas con graduación alcohólica; XII.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y XIII.- Las demás que establezcan las Leyes.	IX.- **Derogada.** X.- a la XIII.- (…)
	TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor el día primero de noviembre del año en curso. SEGUNDO.- Remítase la presente reforma a los Ayuntamientos para el proceso legislativo previsto en el artículo 112 de nuestra constitución local. TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado deberá expedir, dentro de los treinta días siguientes a que entre en vigor la presente reforma, la legislación reglamentaria que instrumentará las disposiciones contenidas en la presente iniciativa.

Ahora por lo que hace a la propuesta legislativa identificada con el numeral 2 de los antecedentes legislativos, con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. El Estado reconoce y protege la Institución del Matrimonio como un derecho de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer. Los titulares de los Poderes Públicos, de los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado, así como de los Ayuntamientos, deberán publicar dentro de la primera semana del mes de julio de cada año, en sus páginas oficiales de internet, un informe en el que se señalen las acciones, programas y resultados de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, conforme lo establezcan las leyes respectivas.	ARTÍCULO 7.- (…) (…)

APARTADO A. De la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos.	(…)
Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.	
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado y los Municipios deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.	APARTADO A.- (…)
	(…)
Esta Constitución asume a plenitud todos los derechos, prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas; así como las obligaciones de las instituciones públicas establecidas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, reconoce los derechos colectivos, a los siguientes pueblos indígenas autóctonos: Kiliwas, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimí, así como a las comunidades que conforman estos pueblos.	(…)
Las comunidades indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo indígena, procedentes de otro Estado de la República y que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado de Baja California, quedan protegidos por los derechos señalados en esta Constitución y la ley respectiva. La conciencia de la identidad indígena será criterio fundamental	

para determinar a quienes aplican las disposiciones que sobre pueblos indígenas se establezcan en esta Constitución y Leyes de la materia.	
	(…)
Sin poner en riesgo la unidad estatal, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia a su autonomía.	
Para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el Estado y los Municipios establecerán las instituciones y las políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.	
	(…)
Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación; la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión; a recibir educación pública, obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Las autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de estos derechos.	
	(…)
El acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho que tiene toda persona. La Ley garantizará su distribución y saneamiento;	

las autoridades en la materia tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la prestación de éste servicio en los términos de la Ley.	
	(…)
Toda persona tiene el derecho de adquirir y disfrutar una vivienda digna, decorosa y adecuada a las necesidades del hogar. El Estado y los Municipios promoverán los instrumentos, políticas y apoyos necesarios para la inversión, construcción, financiamiento y adquisición de viviendas con la participación de los sectores privado y social, a fin de alcanzar un nivel de vida adecuado.	
Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción.	
	(…)
APARTADO B. De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	
Corresponde a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la protección, observancia, y promoción de los derechos humanos que amparan las disposiciones jurídicas. Será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión.	

Estará a cargo de un Presidente, que será electo por las dos terceras partes de los Diputados que integran el Poder Legislativo, por un periodo de cuatro años, dentro del cual solo podrá ser removido por las causas que se señalan en ésta Constitución y la Ley. No podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docente, científicas o de beneficencia.	(…)
El procedimiento para la elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a una consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley.	(…)
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos contará con las siguientes funciones:	
I. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:	
a) Por actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que tengan carácter estatal o municipal, que violen derechos humanos. Este órgano no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.	**El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases, programas, y autoridades competentes para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado.**
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente le correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.	APARTADO B. (…) (...)

II. Formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.	
	(...)
III. Podrá solicitar al Congreso del Estado, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables que incumplan con las obligaciones mencionadas en la fracción anterior, para que acudan ante el Pleno del Congreso, y expliquen el motivo de su negativa, en los términos que señale la Ley.	
IV. Promoverá las acciones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones jurídicas, emitidas por el Poder Legislativo y publicadas en el periódico oficial del estado que vulneren derechos humanos.	(...)
V. Aprobará por medio de su Consejo Consultivo, las disposiciones reglamentarias internas para su eficaz funcionamiento, y ejercerá las demás atribuciones que establezca la ley.	
	(...)
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, contará con un Consejo Consultivo integrado por seis consejeros honoríficos predominantemente de ciudadanos sin cargo público y con reconocido prestigio en la sociedad los cuales deberán ser ratificados por el Poder Legislativo. Asimismo contará con un Secretario Ejecutivo y hasta cinco Visitadores Generales, de conformidad con los procedimientos y los requisitos que señale la Ley.	(...)

	(...)
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidente, quien lo será también del Consejo Consultivo, presentará anualmente, por escrito, a los Poderes del Estado, un informe de sus actividades. Al efecto, comparecerá ante el Pleno del Poder Legislativo en los términos que disponga la ley.	
APARTADO C. De la Transparencia y Acceso a la Información Pública.	(...)
El derecho humano de acceso a la información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.	
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, deberán atenderse las siguientes bases:	
I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones de interés público en los términos que fije la Ley.	(...)
II.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La Ley determinará los supuestos específicos en que	(...)

procederá la declaración de inexistencia de la información.	
III.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fije la Ley.	
IV.- Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de éstos en los términos que establezca la Ley.	(...)
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.	(...)
V.- Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.	(...)
VI.- La Ley determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.	
VII.- La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que disponga la Ley.	(...)

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, es el organismo constitucional autónomo especializado, imparcial y colegiado al que corresponderá garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados; fomentar la cultura de transparencia y estimular la participación ciudadana; emitir políticas de transparencia proactiva; coadyuvar en la implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto y resolver los recursos de revisión en los términos que establezca la Ley. El Instituto estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con plena autonomía técnica, de gestión y de decisión sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de determinación de su organización interna.	APARTADO C. (...)
	(...)
El Instituto contará con un presupuesto que cada año deberá ser incrementado en un porcentaje mayor al índice inflacionario. Para estos efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales que se hubiesen realizado en el ejercicio fiscal anterior.	(...)
	(...)
En su funcionamiento el Instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.	
La Ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.	
El Instituto se integrará por tres Comisionados Propietarios que formarán parte del Pleno y un Comisionado Suplente que cubrirán las ausencias	

de aquellos, en los términos previstos en la Ley. Los Comisionados durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de ser ratificados y serán designados de conformidad con las bases siguientes:	(...)
a.- Inmediatamente que exista una o varias vacantes de Comisionados o ciento veinte días naturales antes si la misma fuere previsible; el Comité Ciudadano el cual estará integrado por siete ciudadanos nombrados en términos de la ley y dos representantes del Poder Ejecutivo, deberá expedir la convocatoria que debe ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y dos diarios de mayor circulación en el Estado.	(...)
b.- El Comité Ciudadano deberá elaborar una lista de personas que contenga una opinión de los méritos, trayectoria, experiencia y resultados de las entrevistas de cada uno de las personas que se inscribieron en términos de la convocatoria señalada en el inciso anterior. La opinión deberá ser enviada al Congreso Local, dentro de los sesenta días naturales siguientes contados a partir de la publicación de la convocatoria.	(...)
c.- El Pleno del Congreso Local en un término no mayor a treinta días naturales contados a partir de que recibió la opinión del Comité Ciudadano, por mayoría calificada de sus integrantes, deberá nombrar al Comisionado. El Presidente del Congreso dentro de los tres días naturales siguientes al nombramiento del Comisionado deberá remitirlo al Gobernador del Estado.	(...)
d.- El Gobernador, por una sola vez, podrá objetar de manera fundada y motivada el nombramiento en un término no mayor a cinco días naturales contados a partir del momento en que lo reciba del Congreso. Si el Gobernador no objetara el	(...)

nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona nombrada por el Congreso.	
e.- En caso de que el Gobernador objetara el nombramiento, el Congreso Local realizará un nuevo nombramiento por una votación de mayoría calificada, tomando en consideración las personas que forman parte de la lista a la que alude el inciso b.	(...)
f.- En todas las etapas del proceso de nombramiento de Comisionados a cargo del Comité Ciudadano y del Congreso Local, deberán observarse los principios de transparencia y participación ciudadana.	(...)
Los Comisionados deberán reunir los requisitos que señalan las fracciones I, V, VI, VII y VIII del artículo 60 de la Constitución Local. Además poseer en ese momento título profesional con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y haber realizado por lo menos durante tres años anteriores a su nombramiento, una actividad profesional relacionada con la aplicación, interpretación, elaboración o investigación relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública. En la conformación del Pleno del Instituto deberá atenderse a la equidad de género.	(...)
Los Comisionados no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.	
El Instituto contará con un Consejo Consultivo, integrado por seis Consejeros honoríficos, designados por mayoría calificada del Congreso	

Local. Los Consejeros deberán reunir los mismos requisitos que los Comisionados, pero tendrán que poseer título profesional con antigüedad mínima de tres años y provenir de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Los Consejeros durarán tres años en el encargo con posibilidad de ser ratificados y serán designados conforme a lo que establezca la Ley.	
	(...)
El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por mayoría calificada del Congreso Local. El procedimiento de designación y requisitos serán establecidos en la Ley.	
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.	
	(...)
APARTADO D. De los Juicios Orales y Medios Alternativos.	
Las leyes señalarán aquellos casos en que los juicios serán predominantemente orales, así como su procedimiento.	
	(...)
Las personas tendrán derecho a acceder a los medios alternativos de justicia para resolver sus controversias, en la forma y términos establecidos por las leyes respectivas.	
	(...)
APARTADO E. De las Víctimas.	
Esta constitución reconoce y garantiza los Derechos de la víctima o del ofendido derivadas de las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este	

derecho y su garantía será exigido por medio de los preceptos jurídicos y a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes en los términos que dispongan las leyes.	(...) (...) (...)

	(...) (...) (...) (...)

	(...) (...) (...)

	(...) APARTADO D. (...) (...) (...) APARTADO E. (...) (...)
	TRANSITORIOS

	ARTICULO PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. ARTICULO SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, o si transcurrido un mes después de recibir el presente decreto sin que emitan una votación, procédase a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente. ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. ARTICULO CUARTO.- El Congreso del Estado deberá emitir las disposiciones jurídicas materia de movilidad.

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente tabla indicativa que describe de manera concreta la intención de los legisladores:

INICIALISTA	PROPUESTA	OBJETIVO
Dip. Víctor Manuel Moran Hernández	1) Reformar los artículos 49, 69 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.	Otorgar al Gobernador del Estado la facultad de formular y aplicar los programas de movilidad, así como la regulación de la prestación del servicio de transporte público. Establecer directrices de actuación por parte del Ministerio Público del Estado, en hechos con apariencia de delito relacionados con la prestación irregular del servicio de transporte público. Eliminar la facultad de los municipios de la entidad la prestación y regulación del servicio de transporte público.
Dip. Rodrigo Anibal Otañez Licona	2) Reformar el artículo 7 de Constitución Local.	Establecer la movilidad como un derecho humano.

IV. Valoración jurídica de la iniciativa

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer el legislador.

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.
3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica del gobernado que las que resulten indispensables para la consecución de un fin social superior.

4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición de motivos.

Considerando lo anterior, se procedió al análisis del proyecto que contiene diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los términos siguientes:

1. En primer término esta Comisión se avoca al estudio de constitucionalidad del primer proyecto legislativo, es decir, aquel que busca reformar los artículos 49, 69 y 83 de nuestra Constitución Local.

Así, por cuanto hace a la propuesta contenida en el artículo 49 de la nuestra Constitución Local (otorgar al Gobernador del Estado la facultad de formular y aplicar los programas de movilidad, así como la regulación de la prestación del servicio de transporte público) esta Comisión coincide con la propuesta formulada por el inicialista a partir de tres fundamentos básicos que se razonan a continuación.

Primero, el artículo 116 en su párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que "Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos…". Segundo, el artículo 115 fracción III de la Constitución Federal establece las funciones y servicios que son exclusivos de los municipios, en el que se enlistan ocho funciones específicas en las que no se encuentra expresamente la definición de políticas públicas en materia de transporte ni tampoco la prestación del servicio de transporte público, como competencia exclusiva para los municipios. Tercero, el artículo 124 de la Constitución Federal precisa que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados en los ámbitos de sus respectivas competencias.

2. Por cuanto hace a la propuesta legislativa contenida en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (establecer directrices de actuación por parte del Ministerio Público del Estado, en hechos con apariencia de delito relacionados con la prestación irregular del servicio de transporte público) si bien es cierto existe una base constitucional en la fracción IX del artículo 116 de nuestra Constitución Federal, la cual menciona que las constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de

procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, también lo es que, del texto propuesto en esta porción normativa, su construcción gramatical y alcances jurídicos que persigue, se advierte que estas son de naturaleza orgánica o secundarias y no de carácter constitucional, pues no pasa inadvertido para esta Comisión que uno de los principios hermenéuticos más elementales del derecho constitucional es que una constitución constituye (derechos, obligaciones, instituciones, facultades) por lo que sin prejuzgar el fondo o análisis de viabilidad de lo que aquí se ha propuesto, esto en todo caso puede ser objeto de planteamiento, estudio y análisis en instrumento diverso.

3. En lo que respecta a la pretensión formulada en el artículo 83 de nuestra Constitución Local (eliminar la facultad de los municipios de la entidad la prestación y regulación del servicio de transporte público) es de advertirse que la fracción V inciso h, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente federal otorgó expresamente facultad a los municipios del país para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, por lo que la propuesta hecha en los términos propuestos podría colisionar con el mandato constitucional antes citado, por lo que será analizado en capítulos subsecuentes del presente dictamen.

4. Referente a la propuesta realizada al artículo 7 de la Constitución Local (establecer la movilidad como un derecho humano) esta encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos generales por la coincidencia con los proyectos legislativos puesto a consideración de este órgano deliberativo, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra en lo previsto por los artículos 1, 115, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Consideraciones.

Esta Comisión considera jurídicamente viables las reformas planteadas por los inicialistas, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. De acuerdo con el marco jurídico de nuestro Estado, en materia de transporte público contamos con un instrumento específico para el ejercicio y regulación de esta materia, siendo esta la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California.

El artículo 3 del citado instrumento señala a las autoridades en materia de transporte público, ubicando en primer lugar al Gobernador del Estado. Por su parte el artículo 4 del mismo ordenamiento refiere que el Gobernador del Estado por conducto de la unidad administrativa que por materia corresponda, es la autoridad facultada para Establecer sistemas o autorizar rutas, itinerarios, tarifas, expedir los permisos y concesiones respecto del transporte público intermunicipal, dentro del territorio del Estado, cuando no existan convenios relativos a la prestación del servicio público del transporte entre Municipios conurbados.

De igual manera, el Ejecutivo del Estado se encuentra facultado para celebrar convenios con la federación en materia de la prestación del servicio de transporte público interestatal o federal, expedir la reglamentación correspondiente en materia de transporte público intermunicipal, interestatal o derivado de los convenios celebrados con la federación, expedir y reglamentar la expedición, canje y revalidación de licencias de motociclistas, automovilistas y choferes de diversos tipos. Aspectos que son plenamente coincidentes y armónicos con lo que se propone en el artículo 49 de la Constitución Local.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que, en un ejercicio de derecho comparado a nivel nacional, se advierte que diversas entidades federativas han modificado su legislación para que sea el Ejecutivo del Estado quien dirija lo concerniente al transporte público y privado, entre esos Estado se encuentra Hidalgo, Quintana Roo, Puebla, Jalisco y Oaxaca.

Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, destina acciones concretas al transporte y movilidad en nuestro Estado, a través de esquemas jurídico-administrativas para atender la problemática de la entidad en materia de movilidad, aspecto que también son plenamente coincidentes con la propuesta del inicialista.

Ahora bien, por lo que hace a la propuesta de adición de una fracción XXVII al artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, esta Comisión considera necesario realizar modificaciones a la fracción referida a razón de técnica

legislativa, pues de un análisis pormenorizado a la estructura gramatical que se propone, se advierte que la naturaleza de la misma es de carácter descriptiva, lo que no se ajusta del todo a la estructura que debe prevalecer en el texto constitucional, por lo que en el capítulo subsecuente se realizará la propuesta de modificación, en su parte conducente.

2. Por cuanto hace a la propuesta contenida en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ha sido ya objeto de análisis en el apartado anterior (IV. Valoración jurídica de la iniciativa) por lo que, sin prejuzgar el fondo o análisis de viabilidad jurídica, esta Comisión recomienda -si así lo estima conveniente el inicialista- que sea objeto de planteamiento, estudio y análisis en instrumento diverso, pues la naturaleza jurídica de su construcción gramatical no es de orden constitucional.

3. Respecto a la pretensión legislativa contenida en el artículo 83 de nuestra Constitución Local, relativa a derogar la facultad de los municipios de la entidad, para la prestación y regulación del servicio de transporte público, en primer término diremos que el planteamiento hecho en esos términos genera una oposición directa con el contenido del artículo 115 fracción V, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esta disposición contempla para los municipios la facultad de intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. En ese sentido, el artículo 4 de nuestra Constitución Local establece que Baja California es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior sin más limitaciones que las que establece la Constitución Federal.

Por otro lado, también debe decirse que atendiendo al mismo artículo 115 de la Constitución Federal, no reserva de manera exclusiva a los municipios la facultad de prestar el servicio de transporte público, o bien, definir las políticas públicas de esta materia. El constituyente habló y expresó en la norma solamente la intervención en la formulación y aplicación de programas cuando estos afecten su ámbito jurisdiccional y esto es así porque, de no considerar la participación, la intervención, las opiniones y propuestas de acción de un municipio cuando estas acciones afectarán su ámbito territorial, evidentemente se estaría actualizando una invasión de competencias, aspecto que es prohibido por nuestra Constitución Federal, tal como lo dispone el artículo 115 fracción I en su parte conducente "La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado".

No obstante lo anterior, el propio diseño constitucional permite acceder a las bases de coordinación institucional incluyendo Estado-Municipio, para lograr los fines públicos deseados. En ese sentido, es de advertirse por parte de esta Comisión dictaminadora que, la base jurídica para determinar la viabilidad jurídica que propone el inicialista en esta

porción normativa, se encuentra al amparo de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso i), del artículo 115 cuando este señala que sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales, sin embargo, es necesario realizar modificaciones al texto propuesto a razón de técnica legislativa, lo que será objeto de análisis en el apartado siguiente.

4. Por lo que hace a la propuesta de adicionar un párrafo al artículo 7 de nuestra Constitución Local, con el propósito de incorporar la movilidad como un derecho humano, esta Comisión coincide con la visión del inicialista por los argumentos que a continuación se expresan.

El derecho y las normas positivas codificadas en instrumentos legales, han sido, son y serán, una expresión de la sociedad que atiende la naturaleza cambiante y dinámica de esta, por tanto, el reconocimiento, protección y derechos de las personas no puede entenderse como un sistema cerrado o rígido, sino todo lo contrario, se irá confeccionando y evolucionará con el paso del tiempo según las necesidades que exprese la sociedad.

En ese sentido, cierto es que el derecho humano a la movilidad en muchas partes del mundo se encuentra en proceso de configuración, pero también lo es que en el caso que nos ocupa el legislador pretende positivizarlo en la Constitución de Baja California, visión que se comparte pues este derecho se encuentra vinculado directamente con la vida de las personas en la sociedad, relacionados a su vez con otros valores jurídicos de gran trascendencia como lo es la construcción de un modelo sustentable en la sociedad y vida urbana, la solidaridad, la libertad, equidad, dignidad y justicia social, además de evidenciar un carácter colectivo del derecho a la ciudad.

En palabras del especialista en este tema Ricardo Moctezuma señala que la exclusión de ciertas infraestructuras de espacio público ha traído resultados no deseados, puesto que ha polarizado la acción y reflexión en la materia en disciplinas aisladas. Por un lado, se ha dejado a la arquitectura lo concerniente al espacio peatonal, y por otro lado el espacio vehicular ha quedado como dominio de la ingeniería vial y de transporte. No obstante, se debería considerar que el espacio público urbano es uno solo, que requiere equilibrio y sobre todo se le debería dar prioridad al ser humano. La complejidad y pluralidad del espacio público urbano exige una visión integral de forma multidimensional e interdisciplinaria, tal como hoy lo propone el inicialista.

Por otro lado, el derecho humano a la movilidad puede ser visto y valorado desde dos dimensiones, primeramente, una dimensión individual, consistente en el derecho de cada

persona a decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollo en un lugar determinado. También, una dimensión colectiva, siendo esta el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

En suma, la movilidad como derecho humano, tiene un amplio respaldo internacional, tanto en la parte obligatoria como en la de declaraciones y principios. Su importancia en el desarrollo de las personas y el mejoramiento sensible de las condiciones de los individuos que viven en zonas metropolitanas, refuerzan la necesidad de establecer al más alto nivel normativo este derecho fundamental.

Diversas entidades federativas han modificado su legislación en este sentido, muestra de ello son: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco.

Finalmente, no pasa inadvertido para esa Comisión dictaminadora que en el proyecto legislativo que se atiende, la pretensión consiste en adicionar un párrafo décimo al artículo 7 de la Constitución Local, dentro del apartado A denominado "De la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humano" sin embargo, actualmente dicho apartado donde se pretende incorporar la reforma cuenta con diez párrafos, lo que produce una derogación tácita o involuntaria que nunca expresó el inicialista la intención por eliminar, por lo que se advierte una imprecisión de técnica legislativa que será atendida y subsanada en el apartado siguiente.

5. El presente Dictamen cubre el principio de exhaustividad del estudio, toda vez que fueron analizadas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas por los inicialistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos en el presente estudio así como el texto propuesto por los inicialistas, este resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE las iniciativas en los términos que han quedado precisados en el cuerpo del presente dictamen.

VI. Propuestas de modificación y articulado propuesto.

Si bien es cierto esta Comisión considera jurídicamente procedentes las reformas planteadas por los inicialistas, al entrar en el estudio de la construcción gramatical de algunas porciones normativas del texto originalmente propuesto, se advierte la necesidad de realizar algunas modificaciones a razón de técnica legislativa, siendo las que a continuación se precisan:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO PROPUESTO EN LA INICIATIVA	TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 49.- (…)	**ARTÍCULO 49.-** (…)
I a la XXV.- (…)	I a la XXV.- (…)
XXVI.- Intervenir mediante el organismo de la administración pública paraestatal que determine la Ley, en la formulación y aplicación de programas de movilidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y el transporte público, así como en la prestación y regulación de dicho servicio, conforme a la Ley de la materia.	XXVI.-(…)
XXVII.- Promover y fomentar el derecho a la movilidad, a gozar de ciudades, comunidades y zonas suburbanas sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida de sus habitantes y acceder a un transporte público y privado, privilegiando el monitoreo y control a través de	**XXVII.-Promover y fomentar el derecho a la movilidad, garantizando la seguridad vial del peatón, conductor, pasajero así como el acceso a un transporte público y privado de calidad para los habitantes del Estado.**

sistemas electrónicas, que sea barato, seguro, con bajo impacto nocivo al medio ambiente y salud pública, de manera digna y eficiente y que siempre permita al usuario elegir la mejor opción a la luz de las mejores prácticas científicas de movilidad a nivel mundial, dando preferencia en todo momento a la seguridad y comodidad del peatón, en primera instancia y en segundo lugar en beneficio del usuario del transporte masivo de pasajeros; en tercer lugar a las motocicletas guiadas por personas, en cuarto lugar al automóvil privado guiado por personas, y en un último lugar y por igual a los vehículos autónomos, que deberán en todo momento ceder el paso, dar preferencia y proteger a las personas, sus animales o posesiones. El Ejecutivo proveerá lo necesario para garantizar a todas las personas el acceso a estos derechos a la movilidad y seguridad vial, así como la prelación de los mismos. XXVIII.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes Federales.	XXVIII.- (…)
ARTÍCULO 83.- (…) I.- a la VIII.- (…) IX.- Derogada. X.- a la XIII.- (…)	**ARTÍCULO 83**.- (…) I.- a la VIII.- (…) IX.-**Instrumentar mecanismos de coordinación, cooperación y participación con las autoridades competentes en materia de transporte público, para mejorar y ampliar la calidad de la prestación de los servicios públicos de transporte, en los términos que fijen las leyes.** X.- a la XIII.- (…)
ARTÍCULO 7.- (…) (…) (…)	**ARTÍCULO 7**.- (…) (…) (…)

APARTADO A.- (…)	APARTADO A.- (…)
(…)	(…)
(…)	(…)
(…)	(…)
(…)	(…)
(…)	(…)
(…)	(…)
(…)	(…)
(…)	(…)
El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases, programas, y autoridades competentes para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado.	El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases, programas, y autoridades competentes para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado. **Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción.**
APARTADO B.- (…)	APARTADO B.- (…)
APARTADO C.- (…)	APARTADO C.- (…)
APARTADO D.- (…)	APARTADO D.- (…)
APARTADO E.- (…)	APARTADO E.- (…)

VII. Régimen Transitorio.

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio que proponen las iniciativas de mérito.

VIII. Impacto Regulatorio.

En su oportunidad, deberán generarse las reformas legislativas necesarias en la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, a fin de armonizar el instrumento secundario a las disposiciones constitucionales señaladas en el presente dictamen.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

Único. Se aprueban las reformas a los artículos 7, 83; la adición de las fracciones XXVII y XXVIII al artículo 49 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- (…)

El Estado reconoce y protege la Institución…

Los titulares de los Poderes Públicos, de los…

APARTADO A.- (…)

Las normas relativas a los…

Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia…

Esta Constitución asume a plenitud todos…

Las comunidades indígenas pertenecientes…

Sin poner en riesgo la unidad estatal…

Para promover la igualdad de oportunidades…

Toda persona tiene el derecho a la práctica del…

El acceso al agua para consumo personal…

Toda persona tiene el derecho de adquirir…

El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases, programas, y autoridades competentes para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado.

Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción.

APARTADO B.- (…)

APARTADO C.- (…)

APARTADO D.- (…)

APARTADO E.- (…)

ARTÍCULO 49.- (…)

I a la XXV.- (…)

XXVI.- Intervenir mediante el organismo de la administración pública paraestatal que determine la Ley, en la formulación y aplicación de programas de movilidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y el transporte público, así como en la prestación y regulación de dicho servicio, conforme a la Ley de la materia.

XXVII.- Promover y fomentar el derecho a la movilidad, garantizando la seguridad vial del peatón, conductor, pasajero así como el acceso a un transporte público y privado de calidad para los habitantes del Estado.

XXVIII.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes Federales.

ARTÍCULO 83.- (…)

I.- a la VIII.- (…)

IX.-**Instrumentar mecanismos de coordinación, cooperación y participación con las autoridades competentes en materia de transporte público, para mejorar y ampliar la calidad de la prestación de los servicios públicos de transporte, en los términos que fijen las leyes.**

X.- a la XIII.- (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, o si transcurrido un mes después de recibir el presente decreto sin que emitan una votación, procédase a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

TERCERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

CUARTO.- El Congreso del Estado deberá emitir las disposiciones jurídicas materia de movilidad.

QUINTO.- El Congreso del Estado deberá expedir dentro de los treinta días siguientes a que entren en vigor las presentes reformas, la legislación que instrumente las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Dado en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los dos días del mes de octubre dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA **P R E S I D E N T E**			

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS **S E C R E T A R I A**			
DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ **V O C A L**			
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ **V O C A L**			

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES **V O C A L**			

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ V O C A L			
DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ V O C A L			
DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO V O C A L			

DICTAMEN No. 8 - INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

DCL/FJTA/DACM/SGDM*

(CONCLUYE DICTAMEN No. 08)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Gracias Diputado. Voy a solicitar un receso Diputados, porque traigo aquí una moción que quiero comentarla con el Diputado y con algunos de ustedes, si me permiten en cinco minutos, por favor, ¿Están de acuerdo? Gracias. (Receso: 12:42 hrs.; reanuda: 12:59 hrs.) Diputados si son tan amables de tomar sus curules, para dar inicio a la sesión.

Muchas gracias Diputados, agradeciendo el receso, damos inicio nuevamente y solicito a la Diputada Secretaria el pase de lista.

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia Presidenta: "Agatón Claudia Josefina, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa, Zavala Márquez Catalino; tenemos quórum Presidenta.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Secretaria; se declara formalmente el quórum y preguntarles para dar inicio al debate de la iniciativa presentada por el Diputado Juan Manuel Molina García, si hay alguien que quiera intervenir Diputados, se abre el debate en la propuesta; en mi caso particular yo quería agradecer el receso y mencionarles que en la Ley Reglamentaria, se de certeza de que los ayuntamientos puedan también ellos, tener oportunidad de prestar el servicio de transporte público, que obviamente están alguno de los grupos de transporte y una de sus preocupaciones, que obviamente los tiene aquí el día de hoy, es que también los ayuntamientos puedan tener injerencia en esa parte, donde también se puedan aportar o sobre todo, decidir

en el caso de los ayuntamientos, lo que viene siendo el servicio del transporte público, que refiere todo concesionarios y permisos, etc., etcetera .; era nuestra moción y la observación que nosotros teníamos en cuanto a la lectura del dictamen No. Y agradecemos pues obviamente también la respuesta muy oportuna de nuestros compañeros inicialistas del Diputado Molina; si no hay alguna otra intervención para solicitar a la Diputada Escrutadora, someta a votación nominal el dictamen No. 8 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Vicepresidenta. Se somete a votación nominal el dictamen No. 08 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor en lo general, con una reserva en lo particular.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Fausto, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar? De no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
DICTAMEN NÚMERO 08			
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David	X		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		
Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		

Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	25		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: El resultado de la votación es el siguiente: con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Se declara aprobado el dictamen No. 08 de la Comisión de Gobernación, Legislación y … una reserva, adelante Diputado.

- EL C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Vicepresidenta.

A nombre, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA y a nombre propio, atentamente solicito que para la discusión en lo particular del Dictamen número 08 de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales me reservo los artículos 7 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los siguientes términos:

Para empezar, quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para elaborar y aprobar el dictamen que ahora nos ocupa, en virtud de tratarse de un tema fundamental para todos los Bajacalifornianos.

Ahora bien, por lo que hace a la adición al artículo 7 propuesta por el dictamen, atentamente solicito se elimine las palabras "autoridades competentes" en virtud de que la presente reforma precisamente se trata de dejar claro cuál será la autoridad competente en esta materia.

Por ello, la adición al artículo 7 de la Constitución deberá quedar en la parte conducente de la siguiente manera:

El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases y programas para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo al no motorizado.

Ahora bien, por lo que hace al artículo 83, atentamente solicito que se elimine la fracción IX propuesta en el dictamen en virtud de que podría prestarse a una confusión sobre las atribuciones que tendrán a partir de que se publique esta reforma las autoridades de los órdenes de gobierno Estatal y Municipal. Por lo tanto, dicha fracción deberá quedar DEROGADA.

Lo anterior en virtud de que el artículo 115 en el inciso h) fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción V del

artículo 83 de la propia Constitución de Baja California ya aseguran la participación de los Ayuntamientos cuando se trate de programas de transporte público.

Por todo lo anterior atentamente solicito a esa Presidencia:

PRIMERO.- Tenerme por presentado reservándome para su discusión los artículos 7 y 83 de la Constitución de Baja California en los términos arriba descritos.

SEGUNDO.- Someter a discusión y votación las reservas aquí planteadas y en su caso decretar su procedencia.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Congreso del Estado de Baja California, a los 10 días del mes de octubre del año en curso 2019.

Es cuanto Vicepresidenta.

(SE INSERTA RESERVA AL DICTAMEN No. 08 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES)

C. Diptutado Catalino Zavala Márquez

Presidente del H. Congreso del Estado de

Baja California

Presente

Víctor Manuel Morán, Diputado miembro del Grupo Parlamentario de MORENA, atentamente solicito que para la discusión en lo particular del Dictamen número 8 de la Comisión de Gobernación y Puntos

Constitucionales me reservo los artículos 7 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los siguientes términos:

Para empezar, quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para elaborar y aprobar el dictamen que ahora nos ocupa, en virtud de tratarse de un tema fundamental para los Bajacalifornianos.

Ahora bien, por lo que hace a la adición al artículo 7 propuesta por el dictamen, atentamente solicito se elimine las palabras "autoridades competentes" en virtud de que la presente reforma precisamente se trata de dejar claro cuál será la autoridad competente en esta materia.

Por ello, la adición al artículo 7 de la Constitución deberá quedar en la parte conducente de la siguiente manera:

El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases y programas para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado.

Ahora bien, por lo que hace al artículo 83 Atentamente solicito que se elimine la fracción IX propuesta en el dictamen en virtud de que podría prestarse a una confusión sobre las atribuciones que tendrán a partir de que se publique esta reforma las autoridades de los órdenes de gobierno Estatal y Municipal. Por lo tanto, dicha fracción deberá quedar DEROGADA.

Lo anterior en virtud de que el artículo 115 en el inciso h) fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción V del artículo 83 de la propia Constitución de Baja California ya aseguran la participación de los Ayuntamientos cuando se trate de programas de transporte público.

Por todo lo anterior atentamente solicito a esa Presidencia:

PRIMERO.- Tenerme por presentado reservándome para su discusión los artículos 7 y 83 de la Constitución de Baja California en los términos arriba descritos.

SEGUNDO.- Someter a discusión y votación las reservas aquí planteadas y en su caso decretar su procedencia.

Dado en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del mes de octubre de 2019.

(CONCLUYE RESERVA)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Morán; se declara compañeros Diputados y Diputadas, abierto el debate de la reserva, en consecuencia, se pregunta Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores en contra, voy a solicitar a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal, si es tan amable por favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete en votación nominal la reserva presentada del dictamen No. 08 en votación nominal, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor de la reserva.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Tope Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, solamente, le solicito de la manera mas atenta a la Diputada Secretaria, si da cuenta de mi presencia, para que mi voto tenga validez.

- LA C. SECRETARIA: Con gusto Diputada, damos cuenta de la presencia de la Diputada Triny Vaca.

- Vaca Chacón María Trinidad, gracias Diputada, mi voto es a favor de la reserva.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Fausto, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar? De no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019			
RESERVA AL DICTAMEN NÚMERO 08			
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. López Montes Gerardo	X		
Dip. Ruvalcaba Flores David	X		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	X		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	X		
Dip. Topete Robles Elí	X		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	X		
Dip. Vásquez Hernández Eva María	X		
Dip. Quintero Quintero Loreto	X		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	X		
Dip. Del Villar Casas Rosina	X		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	X		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	X		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	X		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	X		
Dip. Molina García Juan Manuel	X		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	X		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	X		
Dip. Gallardo García Fausto	X		

Dip. Moreno Hernández Luis	X		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	X		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	X		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	X		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	X		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	X		
Dip. Zavala Márquez Catalino	X		
Total de votos a favor	25		
Total de votos en Contra		0	
Total de Abstenciones			0

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Vicepresidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Se declara aprobado el dictamen No. 08 en lo general y con la reserva presentada por el Diputado Morán, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, dictamen No. 08. Se concede, continuando, se concede con el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García, para dar lectura al dictamen No. 01 de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Con su permiso Diputada Vicepresidenta.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Adelante Diputado.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Primero que nada, este pediría, se sometiera a votación del pleno, a nombre de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que presido, la dispensa de la lectura total del documento que contiene el dictamen No. 01 de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Comisión de Justicia, el trámite de la circulación previa, con los días que previene de anticipación la Ley Orgánica a los integrantes del Pleno, ya se circuló, pero no con la anticipación debida, pediría la votación de dispensa del trámite y de la lectura total del documento, para efecto de que únicamente se lea el proemio y los puntos resolutivos del mismo.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Muy bien Diputado, entonces para dar seguimiento solicitamos Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica lo que sería dispensar la lectura total del dictamen y lo comentado por el Diputado Molina, adelante.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Diputada, nada mas con una precisión para el Diputado, a ver si nos pudiera aclarar, ¿Se estaría votando solamente la dispensa de la lectura total en este momento, y después la dispensa del procedimiento? o ¿Son los dos elementos en este momento?

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Como la Vicepresidencia, considere conveniente, estoy solicitando la dispensa del trámite y la dispensa de la

lectura total, como considere la Vicepresidencia someter a consideración del pleno, estarán satisfechos los requisitos de la Ley Orgánica.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Sería ambas entonces.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su venia Vicepresidenta, se somete a consideración, la dispensa del trámite, y dispensar la lectura total del dictamen, los Diputados que se encuentren a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; por mayoría Presidenta, 23 votos y ¿Alguien en contra? Los que estén en contra, 23 a favor y dos en contra.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Gracias. Muchas gracias Diputada Secretaria, una vez ya tomado por mayoría, continua con el uso de la voz el Diputado Juan Manuel Molina.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias Diputada Vicepresidenta, le pediría nada mas por adelantado una consideración en cuanto al tiempo marcado, este como límite, ya que el documento aun en la sola lectura del proemio y puntos resolutivos, es extenso, entonces solo pido desde ahorita la consideración en el término, en el tiempo marcado para la practica parlamentaria por esta Legislatura.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Si, no tenga cuidado Diputado, adelante.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: DICTAMEN 01 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CREA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Justicia les fueron turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CREAN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, estas Comisiones Unidas desarrollaron sus trabajos conforme a la siguiente:

RESOLUTIVO

Único. Se reforman los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del CAPÍTULO IV del TÍTULO QUINTO, para denominarse "DE LA FISCALÍA GENERAL" todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California para quedar como sigue:

ARTÍCULO 18.- (...)

I- (...);

II.- Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección;

III a VII.- (...) quedan igual

ARTÍCULO 22.- (...) primer párrafo queda igual

APARTADO A.- (...) queda igual

(...)

(…)

APARTADO B. (...) queda igual

(...)

(Parte de la reforma) Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, así como los titulares e integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, estarán obligados a acudir a comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o las Comisiones

respectivas, cuando así lo acuerde el Congreso del Estado, por votación mayoritaria de sus integrantes.

(...)

APARTADO C.- (...)

(...)

(...)

APARTADO D (...)

(...)

(...)

(...)

ARTÍCULO 27.- (...)

I a **XXIII.- (...)**

XXIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros; en la forma y términos establecidos en esta Constitución y por la Ley de la materia.

Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior del Estado, funcionará la Comisión Especial en los términos que determine el Congreso del Estado.

XV a XXXVI.- (...)

XXXVII.- Citar a los Secretarios del ramo, Fiscal General del Estado, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, a los Titulares o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se discute una Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Para los efectos de la citación del Fiscal General del Estado se estará a lo dispuesto en el Artículo 70 de esta Constitución.

(...)

XXXVIII a XLV.- (...)

XLVI.- Designar al Fiscal General del Estado, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, por mayoría calificada de conformidad con las reglas contenidas en esta Constitución.

ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina Gobernador del Estado.

El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las

Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.

La administración de las entidades paraestatales estará a cargo del titular de la entidad, y por un órgano de gobierno integrado con no menos de cinco ni más de trece integrantes propietarios, de los cuales la mayoría deberá pertenecer a la administración pública.

ARTÍCULO 42.- (...)

El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales los Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.

(...)

(...)

ARTÍCULO 49.- (...)

I a la XXII.- (...)

XXIII.- Presentar propuestas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales;

XXIV.- Solicitar la remoción de los Fiscales a los que se refiere la fracción anterior en términos de esta Constitución;

XXV a XXVI.- (...)

CAPÍTULO IV

DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 69.- La institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión y que tendrá a su cargo, la investigación y persecución de los delitos, ejercicio de la acción penal; promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. La Fiscalía General Ejercerá atribuciones de Seguridad Pública, a través del organismo que la ley determine para cumplir los fines establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para la investigación de los delitos, el Ministerio Público se auxiliará de una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta atribución. La Ley le

establecerá su estructura y atribuciones. Asimismo, intervendrá en todos los demás asuntos que determinen esta Constitución y las leyes.

Se crea el Centro Estatal de Inteligencia, integrado por la Fiscalía General y las Secretarías y Direcciones de Seguridad de los Ayuntamientos de Baja California, como órgano de coordinación en materia de seguridad pública. La coordinación del Centro estará a cargo del Fiscal General del Estado, con respeto a las autonomías de los municipios. La Ley fijará las atribuciones y responsabilidades del Fiscal General y demás participantes del Centro Estatal de inteligencia.

La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control que contará con las atribuciones previstas en las leyes aplicables, denominado Fiscalía de Contraloría y Visitaduría; cuyo titular al igual que los demás fiscales que formen parte de la Fiscalía General del Estado serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado.

El Fiscal General del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda.

ARTÍCULO 70.- Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, durará en su cargo seis años.

Para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de la designación;

III.- Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho;

IV.- No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso;

V.- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables;

VI.- Haber residido en el Estado en forma continua e ininterrumpida durante los cinco años anteriores al día de la designación;

VII.- Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja California; y

VIII.- Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente.

El Fiscal General del Estado será nombrado y removido de conformidad con esta Constitución por las causas graves que establezca la misma.

La solicitud de remoción del Fiscal General estará a cargo del Congreso del Estado o del titular del ejecutivo Estatal. Para que se dé la remoción deberá aprobarse por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes del Congreso. La solicitud de remoción podrá ser objetada dentro de un plazo de diez días hábiles, por el Ejecutivo o por el Congreso del Estado. Si el Ejecutivo o el Congreso no se pronunciaren sobre la remoción solicitada, se entenderá que no existe objeción y previo el procedimiento

previsto en la Ley, será el Congreso quien con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes determine su remoción. En todo caso, el Congreso deberá otorgar el derecho de audiencia.

Contra la resolución del Congreso del Estado no se admitirá recurso alguno.

El Fiscal General del Estado no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El Fiscal General del Estado presentará anualmente al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Asimismo, comparecerá ante el Pleno del Congreso del Estado cuando éste se lo solicite para rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General del Estado será designado con base al procedimiento siguiente:

I. Tres meses antes de que concluya el cargo del Fiscal General del Estado o a Partir de la ausencia definitiva, el Gobernador contará con veinte días hábiles para integrar una propuesta al cargo de Fiscal General del Estado, la cual enviará al Congreso.

II. Recibida la propuesta, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal General del Estado por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación.

III. En caso de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada, el Gobernador del Estado enviará una segunda propuesta. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación de esta segunda propuesta le solicitará al Gobernador del Estado que

haga llegar una tercera propuesta, misma que si no fuere aprobada provocará que la designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 71.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estará a cargo de la investigación y persecución de delitos electorales. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.

La investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.

Los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelectos por una sola ocasión; serán nombrados por mayoría calificada del Congreso del Estado a través del procedimiento que se establezca en la Ley.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 70 de esta Constitución y serán nombrados por mayoría calificada del Congreso del Estado, a través del siguiente procedimiento:

I. Tres meses antes de que concluya el cargo o a partir de la ausencia definitiva, el Gobernador del Estado contará con veinte días hábiles para hacer llegar al Congreso del Estado una propuesta para ocupar la titularidad de la Fiscalía que corresponda.

II. Recibida la propuesta, el Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal que corresponda por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación.

III. En caso de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada, el Gobernador del Estado enviará una segunda propuesta. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación de esta segunda propuesta le solicitará al Gobernador del Estado que haga llegar una tercera propuesta, misma que si no fuere aprobada provocará que la designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Los Titulares de las Fiscalías estarán sujetos al sistema de responsabilidades que fija esta Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y podrán ser removidos de su cargo cuando incurran en alguna de las causas previstas en esta Constitución y las Leyes.

ARTÍCULO 72.- El Fiscal General del Estado, El Fiscal Especializado en Atención a Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los Fiscales y Agentes del Ministerio Público que determine la Ley, ejercen y representan a la institución del Ministerio Público.

La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de las Fiscalías, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

ARTÍCULO 80.- (…)

I a la IV.- (…)

V.- (…)

1.- (…)

2.- Los Magistrados y los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.

3 a 4.- (…)

ARTÍCULO 93.- (...)

(…)

APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado para la

Atención de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos.

(...)

(…)

(…)

(…)

(…)

APARTADO B. De la Moción de Censura.- (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Secretario General de Gobierno, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

ARTÍCULO 110.- El Secretario de Gobierno, y demás altos funcionarios del Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que determinen las leyes respectivas. El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especializado

para la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción rendirán protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO.- El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción que sean designados con motivo de la presente reforma tomarán protesta ante el Pleno de Congreso del Estado. Los anteriores fiscales designados en el año dos mil diecinueve durarán en su encargo 5 años.

TERCERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CUARTO.- Dentro del plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y las Leyes que deberán regir el trabajo de las Fiscalías previstas en la presente reforma.

En el mismo plazo, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como a los demás ordenamientos legales que fueren necesarios.

Hasta en tanto se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y se realizan las modificaciones señaladas en el párrafo anterior, se seguirán aplicando las disposiciones normativas a que haya lugar, siempre que ello no contravenga el presente Decreto.

QUINTO.- El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto seguirá en funciones hasta que el Congreso del Estado efectúe la designación del Fiscal General del Estado en términos del presente Decreto.

SEXTO.- Los Subprocuradores que se encuentren en funciones deberán mantenerse en el cargo, hasta en tanto se designen a los Fiscales que correspondan conforme al presente Decreto.

SÉPTIMO.- Una vez hecha la declaratoria de incorporación de estas reformas a la Constitución del Estado, se deberá dar inicio al procedimiento de designación del Fiscal General del Estado, así como del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

OCTAVO.- Los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y demás activos con los que opere la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se entenderán transferidos como patrimonio de la Fiscalía General del Estado y en su caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Congreso del Estado deberán

proveer en conjunto los recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que los recursos materiales, humanos y financieros pertenecientes a la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario deberán pasar íntegramente a formar parte de la Secretaría General de Gobierno a fin de cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

NOVENO.- Se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva, aunque en un término de seis meses contados a partir de la publicación de la presente reforma la Fiscalía General deberá instrumentar un programa de depuración para los Elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el artículo 69 de la presente reforma. De la misma forma se declara desaparecida la Secretaría de Seguridad Pública, aunque los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que formen parte de la Fiscalía General de Estado mantendrán sus derechos laborales en los mismos términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados. En el caso de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales conservarán con el Estado su relación administrativa, en los mismos términos y condiciones previstos en las leyes aplicables.

DÉCIMO.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto, se constituirá un Comité Intersecretarial integrado por el Secretario General de Gobierno, quien lo presidirá, el Oficial Mayor de Gobierno, el Secretario de Planeación y Finanzas y el Fiscal General del Estado, con el objeto de planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores

que sean necesarias para la correcta implementación del presente Decreto, así como coordinar las tareas entre las distintas áreas involucradas.

DÉCIMO PRIMERO.- El trámite y demás asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ante la Procuraduría General de Justicia o ante la Secretaría de Seguridad Pública, serán continuados ante la Fiscalía General del Estado. Toda referencia que se haga en otras disposiciones legales y reglamentarias a la Procuraduría General de Justicia se entenderá hecha a la Fiscalía General del Estado.

DÉCIMO SEGUNDO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia y/o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, con dependencias y entidades de la Federación y de los Municipios, y con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Fiscalía General del Estado.

Dado en la Sala de Comisiones "Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los 9 días del mes de octubre de 2019. Y Firman los integrantes de la Comisión, de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y de la Comisión de Justicia.

Por regularidad del procedimiento parlamentario, este, Diputada Vicepresidenta, este, en este momento plantearía este, la razón de la dispensa de trámite que fue planteado y pediría se sometiera a consideración del Pleno este tema de la Fiscalía

General, la razón de la solicitud de dispensa del trámite, dada la, dada la urgencia derivado de que es una obligación constitucional federal, de la que ya se ha dilatado el Estado de Baja California años. Estamos muy atrasados en Baja California en este asunto que es urgente cumplir con el mandato de la Constitución General de la República para la creación de un organismo persecutor de delitos autónomo en su, en su funcionamiento con las características del Dictamen y no podemos seguir aplazando ese mandato de la Constitución General de la República. Este, la obviedad del trámite lo implica precisamente que, la Constitución General marcó los parámetros a los Estados en la reforma al Artículo 116 para que se homologaran este, los esquemas de Fiscalías, Órganos Autónomos Persecutores de Delito en Garantía de la salvaguarda de los derechos de víctimas, ofendidos y demás personas que, de la sociedad, que son ofendidos o agredidos este, en la comisión de estas conductas. Esa es la razón de la urgencia este, de resolver este asunto, de la obviedad de trámite y pediría por regularidad del procedimiento y con base en las consideraciones que le planteo de la urgencia del trámite y obviedad del mismo, se sometiera de nueva cuenta a consideración del pleno, previo a la votación de fondo.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 01 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, LEÍDO POR EL DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA)

DICTAMEN 01 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CREA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Justicia les fueron turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CREAN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, estas Comisiones Unidas desarrollaron sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado "Fundamento" se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos" se da cuenta del trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

III. El apartado denominado "Contenido de la Reforma" se compone de dos capítulos: el relativo a "Exposición de motivos" en el que se hace una descripción sucinta de la propuesta en estudio, así como su motivación y alcances, haciendo referencia a los temas que la componen. En el capítulo denominado "Cuadro Comparativo" se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado "Valoración jurídica de la reforma" se realiza un análisis de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.

V. En el apartado de "Consideraciones" se determina el sentido del presente dictamen y los integrantes de este órgano colegiado expresan razonamientos y argumentos referente a la viabilidad, oportunidad y necesidad de cada porción normativa.

VI. En el apartado de "Propuestas de modificación y articulado propuesto" se describe puntualmente las adiciones, modificaciones y eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al proyecto de decreto.

VII. En el apartado de "Régimen Transitorio" se describen puntualmente las disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al proyecto de decreto.

VIII. En el apartado denominado "Impacto Regulatorio" se enuncian los ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen; o bien, se señala que no existe necesidad de armonización, pues la propuesta no genera impacto regulatorio.

IX. En el apartado denominado "Resolutivo" se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracciones I y VII, 57, 60 inciso d), 62, 63, 90, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, estas Comisiones Unidas, son competentes para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedentes.

1. En fecha 11 de septiembre de 2019, el DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió a esta H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, para la creación de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.

2. Presentada que fue la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo

50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la misma para su trámite legislativo.

3. En fecha 19 de septiembre de 2019, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa, Oficio No. PCG/0024/2019, signado por el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual remite la iniciativa señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de que sea elaborada la opinión correspondiente.

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Reforma.

A. Exposición de motivos

Señalan los inicialistas en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y argumentos para motivar la propuesta:

> La seguridad pública y el acceso expedito a la justicia, se constituyen como elementos indispensables en la construcción de un Estado de Derecho sólido y vigente, donde impere el respeto a la legalidad y la paz social.
>
> Como ya es conocido, el fenómeno delictivo tiene causas múltiples y resultantes de fuerzas antisociales muy diversas. Por ello el Gobierno Estatal, los Gobiernos Municipales y todas las instancias en materia de procuración e impartición de justicia, deben privilegiar esquemas de colaboración y trabajo conjunto y bien sistematizado con normas, procedimientos y protocolos de actuación, amparados en las demandas sociales para prevenir, perseguir y castigar los delitos y garantizar la seguridad e integridad de la población.
>
> En materia de seguridad pública y acceso a la justicia, los diputados que integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional, nos comprometimos a revisar y en su caso promover reformas de leyes que den más herramientas legales para hacer efectiva la persecución penal del crimen organizado, modernizar la investigación científica del delito, fortalecer el control en los centros penales y combatir la corrupción.

Nuestro País y en particular nuestro estado de Baja California, cuentan con un enorme reto en el área de seguridad pública; las soluciones a la fecha aportadas no han sido suficientes para contener los índices delictivos; por ello, los representantes populares en el ámbito de nuestras competencias, debemos contribuir con normas vanguardistas que conlleven acciones para garantizar la seguridad y la paz en nuestro Estado.

Tarea imperativa y obligada de esta Soberanía, es procurar que el orden jurídico se encuentre armonizado, para permitir a los demás poderes públicos su correcta actuación y el desenvolvimiento pleno de los ciudadanos en un Estado de Derecho. Sin embargo, los delitos de alto impacto social han alcanzado, por mucho tiempo, la atención de la población y las primeras planas de los diversos medios de comunicación, tanto locales, nacionales e incluso internacionales, generando con ello una afectación directa a una de nuestras principales fuentes de inversión económica, como es el turismo.

Así, al remitirnos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho humano a la seguridad pública, cuya función se encontrará a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física, las libertades y el patrimonio de las personas; la preservación del orden público y la paz social y que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos para hacerla efectiva.

De tal suerte que para cumplir con dichos objetivos, es esencial contar con instituciones sólidas encargadas de garantizar la seguridad pública, la procuración de justicia y el Estado de Derecho, como se planea en la presente Iniciativa y en virtud de ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado debe de pasar de ser un ente centralizado a un Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado, que debe contar con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión; respondiendo con ello a la exigencia constitucional de transformar los entes de Procuración de Justicia a Fiscalías Generales y de las cuales veintiséis entidades federativas ya cumplieron, siendo Baja California una de las seis que faltan por cumplir con dicha transformación.

Esta Fiscalía estará a cargo de las funciones conferidas al Ministerio Público en Baja California, así como las funciones relativas a la seguridad pública en el ámbito de competencia estatal. Como objetivo tiene la de investigar los delitos

y el esclarecimiento de los hechos; la procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho, entre otras, por lo que requiere de facultades específicas para poder dar certeza y seguridad jurídica a los bajacalifornianos, especialmente, cuando se intenta combatir los altos índices delictivos y garantizar la tranquilidad en los municipios del Estado.

Cierto es, que un Estado debe de contar con una rama encargada de la Seguridad Pública y en Baja California, hasta el momento, dicha función le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, siendo esta la responsable de Desarrollar políticas de seguridad pública, coordinar el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Representar al Ejecutivo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras. Es cierto también que su encomienda más importante recae en salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en el ámbito estatal.

Debe indicarse que esta Secretaría y sus funciones fueron instituidas en octubre del 2001, mediante la presentación de una serie de reformas con el propósito de dar nacimiento a estas obligaciones, que trajo aparejada la creación de la Policía Estatal Preventiva y su ley.

A casi veinte años de estas reformas, es necesario redimensionar el sistema de seguridad pública estatal, dotando a los cuerpos de seguridad pública de autonomía respecto a los poderes tradicionales del estado, a fin de que su actuación se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y que fomente la participación ciudadana y rendición de cuentas, tal y como se instituye en el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, es vital reformar nuestros ordenamientos jurídicos para poder dar un nuevo enfoque a la Seguridad Pública, aparejándola con la creación de la Fiscalía General del Estado, esto es, que un ente autónomo sea el responsable de manera integral de seguridad pública y procuración de justicia.

Con esta reforma, se busca redimensionar y reestructurar el área encargada de la Seguridad Pública; dotarla de plena autonomía e injerencia respecto al Poder Ejecutivo y asimismo, desconcentrar dicho ente de las funciones a cargo del Fiscal General del Estado. Así, deberá existir una sinergia de trabajo entre el órgano investigador y persecutor de delitos (Fiscalía General) y el órgano de

prevención y protección ciudadana (Seguridad Pública), garantizando con ello el abatimiento de la impunidad y la disminución de los índices delictivos.

Recordemos que todo gobierno es un ente creciente que debe ajustar sus políticas públicas a la realidad que se vive cotidianamente; que nunca se debe perder de vista el bienestar respecto a las tareas de seguridad y combate a la delincuencia, para así poder iniciar con detener este agudo problema.

En ese sentido, es necesario que con sustento en una política criminal integral se atienda el fenómeno delincuencial desde un enfoque jurídico, social, cultural, económico y tecnológico; se cree un ente con la capacidad suficiente para que con un marco jurídico, con el apoyo y participación de la sociedad bajacaliforniana, se atiendan las conductas reprochables que nos aquejan, se evite queden impunes, pero además, se generen las acciones para evitar que se repitan y se realicen las actividades necesarias para atender las causas generadoras; dicha respuesta la encontramos en la creación de una Fiscalía General que cuente con todas y cada una de las facultades descritas durante el desarrollo de la presente exposición.

En ese orden de ideas, es que se propone reformar los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94 y 110, así como la denominación del CAPÍTULO IV del TÍTULO QUINTO, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para crear la Fiscalía General del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, observando así lo dispuesto en el artículo 116 fracción IX de la Constitución federal, respecto a la autonomía del Ministerio Público.

Por tanto, las bases de creación de la Fiscalía, serán las siguientes:

• Que el Ministerio público se organizará en una Fiscalía General del Estado, la cual será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión que tendrá a su cargo las funciones de seguridad pública, investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal.

• Que se auxiliará de una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y tendrá las atribuciones y estructura que la Ley le establezca.

• Que la Fiscalía contará con un Órgano Interno de Control con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la vigilancia, disciplina y fiscalización de la misma, ejerciendo las facultades que en materia de responsabilidad administrativa derivan de las disposiciones aplicables.

• Que el Fiscal General, presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda, estableciéndose como garantía para su funcionamiento, que el presupuesto no podrá ser reducido respecto del autorizado para el ejercicio anterior.

• Que el titular de la Fiscalía será un Fiscal General, que durará en su cargo nueve años, a fin de dotar de estabilidad y permanencia en el encargo, precisándose los requisitos mínimos para ser nombrados, siendo: (1) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; (2) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; (3) Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho; (4) No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso; (5) Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja California; y (6) Contar con evaluación de control de confianza aprobado, entre otros.

Se reitera que el periodo de nueve años en el cargo, tiene como finalidad evitar sujetarse a determinaciones políticas y dar mayor fortaleza institucional al tener una gestión transexenal. Y que los requisitos exigidos, se preservan los que se exigen para ser Procurador General de Justicia, toda vez que el estándar para ocupar al cargo no deberá ser bajo, por el contrario, se tendrá que seleccionar a la mejor persona para dicha responsabilidad.

• Se establece la obligación del Fiscal de presentar anualmente al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades; debiendo comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado cuando éste se lo solicite para rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

• Respecto a la designación del Fiscal, se determina un proceso de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, debiendo el primero remitir una terna de candidatos, para que el segundo proceda a su análisis y designación en su caso.

Procedimiento que involucra a dos poderes en virtud de la corresponsabilidad que debe existir entre ambos en la materia, y que en términos del artículo 11 de la Constitución local deben cooperar armónicamente en la realización de los fines del Estado.

Aunado a que, conforme el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia; comprendiendo la seguridad pública, la prevención, investigación y persecución de los delitos. Por ende la importancia de la colaboración armónica para la definición del responsable de la investigación y persecución del delito.

Así, al no depender su designación de un poder público exclusivamente, se fortalece la independencia y autonomía del Fiscal General, permitiendo al Ministerio Público sostener con imparcialidad y de forma profesional su función sin injerencia del Poder Ejecutivo.

• Asimismo, se precisa que la Fiscalía General contará al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, tal y como ya se contempla en el actual artículo 70 de la Constitución local, congruente con las reformas en materia de combate a la corrupción, adoptadas en su momento por el constituyente local.
Se comenta que las anteriores bases se reflejarán en los artículos 69 al 72 de la Constitución local, siendo necesario además la reforma de diversos numerales a fin de adecuar la denominación de la procuraduría por el de fiscalía.

Finalmente, en normas transitorias se establecen las bases necesarias para transitar al funcionamiento de la Fiscalía General, previéndose aspectos medulares para ello, entre otros: la obligación del Congreso de adecuar la normatividad secundaria respectiva; la continuidad del Procurador y Secretario

de Seguridad en funciones hasta en tanto se designe al Fiscal; la obligación de dar inicio al proceso de designación; la transferencia de los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y demás activos con los que opere la Procuraduría General y la Secretaría de Seguridad hacia la nueva Fiscalía General; y la salvaguarda de los derechos laborales.

B. Cuadro Comparativo

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos diputados: I- (...); II.- Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección; III a VII.- (...)	ARTÍCULO 18.- (...) I- (...); II.- Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección; III a VII.- (...)
ARTÍCULO 22.- (...) APARTADO A.- (...) APARTADO B. (...) (...) Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares de las Dependencias	ARTÍCULO 22.- (...) APARTADO A.- (...) APARTADO B. (...) (...) Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares de las Dependencias

del Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del Estado, así como los titulares e integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, estarán obligados a acudir a comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o las Comisiones respectivas, cuando así lo acuerde el Congreso, por votación mayoritaria de sus integrantes. (...) APARTADO C a APARTADO D (...)	del Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del Estado, así como los titulares e integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, estarán obligados a acudir a comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o las Comisiones respectivas, cuando así lo acuerde el Congreso, por votación mayoritaria de sus integrantes. (...) APARTADO C a APARTADO D (...)
ARTÍCULO 27.- (...) I a XXXVI.- (...) XXXVII.- Citar a los Secretarios del ramo, Procurador de Justicia del Estado, Titulares o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se discute una Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. (...)	ARTÍCULO 27.- (...) I a XXXVI.- (...) XXXVII.- Citar a los Secretarios del ramo, Fiscal General del Estado, Titulares o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares Órganos Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se discute una Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Para los efectos de la citación del Fiscal General del Estado se estará a lo dispuesto en el artículo 70 de esta Constitución. (...)

XXXVIII a XLI.- (...) XLII.- Designar al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mediante convocatoria pública y conforme al procedimiento que establezca la Ley. La convocatoria pública, a que hace referencia el párrafo anterior, deberá darse amplia publicidad en los periódicos de mayor circulación del Estado y en la página oficial del Congreso del Estado; XLIII a XLV.- (...)	XXXVIII a XLI.- (...) XLII.- Designar al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, conforme al procedimiento que establezca la Ley. XLIII a XLV.- (...) XLVI.- Designar al Fiscal General del Estado por mayoría calificada de conformidad con las reglas contenidas en el artículo 70 de esta Constitución.
ARTÍCULO 40.- (...) El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de	ARTÍCULO 40.- (...) El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.

Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo. (...)	(...)
ARTÍCULO 42.- (...) El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de Judicatura del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección. (...) (…)	ARTÍCULO 42.- (...) El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Fiscal General del Estado, los Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección. (...) (...)
ARTÍCULO 49.- (...) I a la XII.- (...) XXIII.- Nombrar libremente al Procurador General de Justicia del Estado, quien deberá reunir los requisitos que establezca la Ley de la materia; XXIV.- Remover al Procurador General de Justicia del Estado, en los términos de la Ley de la materia. XXV a XXVI.- (...)	ARTÍCULO 49.- (...) I a la XII.- (...) XXIII.- Presentar terna al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado; XXIV.- Solicitar la remoción del Fiscal General del Estado en términos de esta Constitución; XXV a XXVI.- (...)
CAPÍTULO IV DEL MINISTERIO PÚBLICO	CAPÍTULO IV DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público es la Institución encargada de la investigación y	ARTÍCULO 69.- La institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía

persecución de los delitos, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y tendrá las atribuciones y estructura que la Ley le establezca. Asimismo, intervendrá en todos los demás negocios que determinen esta Constitución y las leyes.	General del Estado, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión y que tendrá a su cargo las funciones de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Prevención del Delito, la investigación y persecución de los delitos, ejercicio de la acción penal, de ejecución de penas y medidas cautelares; promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. Para la investigación de los delitos, el Ministerio Público se auxiliará de una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y tendrá las atribuciones y estructura que la Ley le establezca. Asimismo, intervendrá en todos los demás asuntos que determinen esta Constitución y las leyes. La Fiscalía General del Estado contará con un órgano Interno de Control con las atribuciones señaladas en términos de las leyes aplicables. El Fiscal General del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda. Este presupuesto no podrá ser reducido respecto del autorizado para el ejercicio anterior, actualizándose en términos inflacionarios.

ARTÍCULO 70.- El Procurador General de Justicia, los Subprocuradores y Agentes del Ministerio Público que determine la Ley, ejercen y representan al Ministerio Público. La Procuraduría General de Justicia del Estado y las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales del Estado y en combate a la Corrupción, de acuerdo con la Ley Orgánica que las rige, sentarán las bases de coordinación para la investigación de los delitos, así como el auxilio de peritos y técnicos, y de la Policía Ministerial. Las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y la de Combate a la Corrupción, son órganos con autonomía técnica administrativa y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales, función que deberá de realizar con la más estricta reserva. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables. El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, será nombrado por mayoría calificada del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública en los términos, requisitos y condiciones que establezcan las Leyes, durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión.	ARTÍCULO 70.- Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, durará en su cargo nueve años. Para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, se requiere: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; II.- Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de la designación; III.- Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho; IV.- No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso; V.- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables; VI.- Haber residido en el Estado en forma continua e ininterrumpida durante los cinco años anteriores al día de la designación; VII.- Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja California, y VIII.- Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente. El Fiscal General del Estado será nombrado y removido de conformidad con esta Constitución por las causas graves que establezca la misma. La solicitud de remoción del Fiscal General estará a cargo del Congreso del Estado por

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares, en los términos de la Ley. La designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se realizará mediante convocatoria pública y será nombrado por mayoría calificada del Congreso del Estado. Los requisitos, términos y procedimientos serán los que establezca la Ley de la materia. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Solo podrá ser removido por mayoría calificada del Congreso por haber incurrido en faltas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de la materia. Para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se creará una Comisión Especial integrada por tres Diputados de la Comisión de Dictamen Legislativo pertenecientes a distintas fracciones parlamentarias y cuatro ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la cual tendrá a su cargo el proceso de evaluación y comparecencia de los aspirantes al cargo, conforme a lo que establezca la Ley de la materia. Las Fiscalías deberán realizar sus funciones con la más estricta reserva. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.	el voto de las dos terceras partes de sus integrantes o del Ejecutivo Estatal. La solicitud de remoción podrá ser objetada dentro de un plazo de diez días hábiles, por el Ejecutivo o por el Congreso del Estado. Si el Ejecutivo o el Congreso no se pronunciaren sobre la remoción solicitada, se entenderá que no existe objeción y previo el procedimiento previsto en la Ley, será el Congreso quien por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes determine su remoción. Contra la resolución del Congreso del Estado no se admitirá recurso alguno. En ambos casos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública podrá emitir opinión respecto a la remoción del Fiscal General y remitirla al Congreso del Estado. El Fiscal General del Estado no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. El Fiscal General del Estado presentará anualmente al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Asimismo, comparecerá ante el Pleno del Congreso del Estado cuando éste se lo solicite para rendir cuentas o a informar sobre su gestión. El Fiscal General del Estado será designado con base al procedimiento siguiente: 1. Tres meses antes de que concluya el cargo del Fiscal General del Estado o a Partir de la ausencia definitiva, el Gobernador contará con veinte días hábiles

Los Titulares de las Fiscalías, estarán sujetos al sistema de responsabilidades que fija esta Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y podrán ser removidos de su cargo cuando incurran en alguna de las causas previstas en esta Constitución y las Leyes. Los Titulares de las Fiscalías, deberán enviar un informe Semestral al Congreso, sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado del número único de casos iniciados, los archivados, en los que no se ejercitó acción penal y los enviados a reserva, así como las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso, así como de las funciones que en materia de prevención del delito le corresponden.	para integrar una terna de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, la cual enviará al Congreso. 2. Recibida la terna de candidatos, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal General del Estado por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación. 3. En una primera votación, se deberá designar como Fiscal General del Estado a quien, de los tres candidatos, haya alcanzado una mayoría calificada. 4. Si lo anterior no es posible, de entre los dos candidatos que más votos hayan obtenido se designará como Fiscal General del Estado a quien logre una mayoría calificada. 5. De no lograrse lo previsto en el apartado que antecede, el Gobernador del Estado designará al Fiscal General del Estado de entre los aspirantes que integren la terna enviada al Congreso.
ARTÍCULO 71.- El Procurador General de Justicia dirigirá al Ministerio Público, y será nombrado y removido de conformidad a esta Constitución y a la Ley.	ARTÍCULO 71.- La Fiscalía General del Estado contará con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, y estas con un órgano de control interno. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estará a cargo de la investigación y persecución de delitos electorales. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley de la Fiscalía

	General del Estado establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables. El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión; será nombrado por mayoría calificada del Congreso del Estado a través del siguiente procedimiento: 1. Tres meses antes de que concluya el cargo del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales o a partir de la ausencia definitiva, el Gobernador del Estado contará con veinte días hábiles para integrar una terna de candidatos al cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, la cual enviará al Congreso. 2. Recibida la terna de candidatos, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación. 3. En una primera votación, se deberá designar como Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales a quien, de los tres candidatos, haya alcanzado una mayoría calificada. 4. Si lo anterior no es posible, de entre los dos candidatos que más votos hayan obtenido se designará como Fiscal Especializado para la Atención de Delitos

	Electorales a quien logre una mayoría calificada. 5. De no lograrse lo previsto en el apartado que antecede, el Gobernador del Estado designará al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de entre los aspirantes que integren la terna enviada al Congreso. La investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley de la Fiscalía General del Estado establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión; será nombrado por mayoría calificada del Congreso del Estado a través del siguiente procedimiento: 1. Tres meses antes de que concluya el cargo del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción o a Partir de la ausencia definitiva, el Gobernador contará con veinte días hábiles para integrar una terna de candidatos al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, la cual enviará al Congreso. 2. Recibida la terna de candidatos, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal

	Especializado en Combate a la Corrupción por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación. 3. En una primera votación, se deberá designar como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción a quien, de los tres candidatos, haya alcanzado una mayoría calificada. 4. Si lo anterior no es posible, de entre los dos candidatos que más votos hayan obtenido se designará como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción a quien logre una mayoría calificada. 5. De no lograrse lo previsto en el apartado que antecede, el Gobernador del Estado designará al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de entre los aspirantes que integren la terna enviada al Congreso. Las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y la de Combate a la Corrupción deberán realizar sus funciones con la más estricta reserva. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables. Los Titulares de las Fiscalías estarán sujetos al sistema de responsabilidades que fija esta Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y podrán ser removidos de su cargo cuando incurran en alguna de las

	causas previstas en esta Constitución y las Leyes. La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control que contará con las atribuciones previstas en las leyes aplicables, denominado Fiscalía de Contraloría y Visitaduría; cuyo titular al igual que los demás fiscales que formen parte de la Fiscalía General del Estado serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado.
ARTÍCULO 72.- Los Subprocuradores serán nombrados y removidos por el Gobernador a propuesta del Procurador, en la forma que determine la Ley.	ARTÍCULO 72.- El Fiscal General del Estado, los Fiscales y Agentes del Ministerio Público que determine la Ley, ejercen y representan a la institución del Ministerio Público. La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
ARTÍCULO 80.- (…) I a la IV.- (...) V.- (…) 1.- (...) 2.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de	ARTÍCULO 80.- (…) I a la IV.- (...) V.- (…) 1.- (...) 2.- Los Magistrados y los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.

sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección. 3 a 4.- (...)	 3 a 4.- (...)
ARTÍCULO 93.- (...) (…) APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos. (…) (…) (…) (…) (…) B.- (...) (…) (…) (…) (…)	ARTÍCULO 93.- (...) (…) A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos. (…) (…) (…) (…) (…) B.- (...) (…) (…) (…) (…)

(…)	(…)
ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)	ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Secretario General de Gobierno, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
ARTÍCULO 110.- El Secretario de Gobierno, el Procurador de Justicia y demás altos funcionarios del Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que determinen las leyes respectivas	ARTÍCULO 110.- El Secretario de Gobierno y demás altos funcionarios del Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que determinen las leyes respectivas.
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja

	California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, o si transcurrido un plazo de 30 días naturales después de recibir el presente decreto sin que emitan una contestación o resolución, procédase a pronunciar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente. TERCERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. CUARTO.- Dentro del plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. En el mismo plazo, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como a los demás ordenamientos legales que fueren necesarios. Hasta en tanto se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y se realizan las modificaciones señaladas en el párrafo anterior, se seguirán aplicando las disposiciones normativas a que haya lugar, siempre que ello no contravenga el presente Decreto.

	QUINTO.- El Procurador General de Justicia del Estado y el Secretario de Seguridad Pública que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán en funciones hasta que el Congreso del Estado efectúe la designación del Fiscal General del Estado en términos del presente Decreto. SEXTO.- Los Subprocuradores que se encuentren en funciones deberán mantenerse en el cargo, hasta en tanto se designen a los fiscales que correspondan conforme al presente Decreto. La Subsecretarios y demás titulares de las diversa estructura de la Secretaría de Seguridad Pública que conforme al presente Decreto estará a cargo de la Fiscalía General, continuará en su encargo, hasta en tanto el Fiscal General realice las designaciones conforme a la estructura orgánica que se reglamente. SÉPTIMO.- Una vez hecha la declaratoria de incorporación de estas reformas a la Constitución del Estado, se deberá dar inicio al procedimiento de designación del Fiscal General del Estado con la presentación de una terna de aspirantes por parte del Ejecutivo al Congreso del Estado, para que se siga el trámite previsto por esta Constitución. OCTAVO.- Los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y demás activos con los que opere la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se entenderán transferidos como patrimonio de la Fiscalía General del Estado, en conjunto con los

	recursos presupuestales que para el presente ejercicio fiscal se hayan previsto. NOVENO.- Los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que formen parte de la Fiscalía General de Estado mantendrán sus derechos laborales en los mismos términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados. En el caso de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales conservarán con el Estado su relación administrativa, en los mismos términos y condiciones previstos en las leyes aplicables. DÉCIMO.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto, se constituirá un Comité Intersecretarial integrado por el Secretario General de Gobierno, quien lo presidirá, el Oficial Mayor de Gobierno, el Secretario de Planeación y Finanzas y el Fiscal General del Estado, con el objeto de planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la correcta implementación del presente Decreto, así como coordinar las tareas entre las distintas áreas involucradas. DÉCIMO PRIMERO.- El trámite y demás asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ante la Procuraduría General de Justicia o ante la Secretaría de Seguridad Pública, serán continuados ante la Fiscalía General del Estado. Toda referencia que se haga en otras disposiciones legales y reglamentarias a la Procuraduría General

	de Justicia se entenderá hecha a la Fiscalía General del Estado. DÉCIMO SEGUNDO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia y/o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, con dependencias y entidades de la Federación y de los Municipios, y con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Fiscalía General del Estado.

IV. Valoración jurídica de la iniciativa.

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

En primer término, se analizó la constitucionalidad de la reforma planteada, tomando en consideración que la propuesta se encuentra dentro de los márgenes constitucionales, ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 102, proporciona las bases constitucionales que dan origen al modelo de procuración de justicia, a cargo de una Fiscalía General, en sustitución de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas.

En dicho numeral se establece, entre otras disposiciones, que: "El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio." Por tanto, el nuevo modelo de procuración de justicia que se propone, encuentra su fundamento constitucional en el numeral de referencia.

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este órgano deliberativo, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra en lo previsto por los artículos 21, 102, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Consideraciones.

Esta Comisión considera jurídicamente viable la reforma planteada por el inicialista, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. En la última década México, los niveles de delincuencia común y organizada, han ido en aumento, por ello, se han implementado reforma constitucionales y legales tendentes a dotar a las instituciones de procuración y administración de justicia de herramientas jurídicas para el mejor desempeño de sus funciones.

El 18 de junio de 2008, el Congreso de la Unión llevó a cabo un proceso de reforma integral de justicia, modificando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde sentó las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral, estableciendo como finalidad del proceso penal, lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable del delito no quede sin sanción y que los daños causados por el delito se reparen. Por tanto, las autoridades encargadas de la aplicación del Sistema de Justicia Penal (primeros respondientes, ministerios públicos y jueces), se enfrentaría a un nuevo reto, evitar que el culpable quede impune, o que un auténtico inocente sea tenido por culpable, lo que constituye un presupuesto fundamental para que el Estado pueda garantizar a sus habitantes, el pleno respeto a los derechos humanos.

2. Después de un proceso de observación y reflexión, se llegó a la convicción de que lo más conveniente para el país era la emisión de un código único procesal, que reemplazara la multiplicidad de ordenamientos procesales, lo cual incrementaría la seguridad jurídica y el respeto de los derechos de los sujetos involucrados en hechos delictivos, de tal forma que todos los procesos penales en el país se tramitaran conforme a las mismas reglas, homogéneas y claras tanto para las entidades federativas como para la Federación; por esta razón, el Congreso de la Unión emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

Este Código Nacional, consolida un sistema de justicia penal que se ajusta a las exigencias de un Estado democrático de derecho, cumpliendo con lo que se buscó con la reforma constitucional, y con sustento en una serie de principios y criterios garantistas de corte liberal y democrático, el cual no sólo garantiza la protección de todos los derechos de las partes en el proceso penal, sino también satisface la necesidad de protección de los bienes jurídicos de la sociedad frente al delito.

Una vez en marcha la vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que comenzaron a fluir los datos estadísticos y resultados preliminares de su implementación, se llevó a cabo un diagnóstico sobre las

condiciones que guarda la operación del Sistema de Justicia Procesal Penal Adversarial, con la finalidad de adoptar las acciones necesarias para consolidarlo.

Es así que, el 10 de febrero de 2014 se publicaron reformas a la Constitución en materia política electoral, entre ellas, se estableció la autonomía del Ministerio Público de la Federación, para evitar el uso político de la facultad de persecución penal del Estado.

La reforma de febrero de 2014, modifica el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar la autonomía del Fiscal frente al Ejecutivo y de esta manera, legitimar su actuación en las funciones de investigación y persecución de los delitos, los cuales deben ejercerse con base en criterios estrictamente técnicos y no políticos.
3. Por tanto, con la finalidad de fortalecer la democracia de los bajacalifornianos, la cual, se ha logrado por con el impulso de todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, se hace necesaria la actualización y armonización de las normas constitucionales y legales que actualicen el entramado institucional de nuestra democracia a las condiciones políticas, económicas y sociales de los tiempos en que vivimos.

De tal forma que, el inicialista presenta propuesta de reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, encaminadas a "prever la existencia de la Fiscalía General del Estado con la misma naturaleza de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como una dependencia de la Administración Pública. Asimismo, se contempla la figura del Fiscal General, como su titular, facultándose al Congreso del Estado para su designación y/o remoción, con base en las reglas dispuestas para ello en la propia Constitución del Estado, como lo expresa en su exposición de motivos al señalar que:

> "En ese sentido, es necesario que con sustento en una política criminal integral se atienda el fenómeno delincuencial desde un enfoque jurídico, social, cultural, económico y tecnológico; se cree un ente con la capacidad suficiente para que con un marco jurídico, con el apoyo y participación de la sociedad bajacaliforniana, se atiendan las conductas reprochables que nos aquejan, se evite queden impunes, pero además, se generen las acciones para evitar que se repitan y se realicen las actividades necesarias para atender las causas generadoras; dicha respuesta la encontramos en la creación de una Fiscalía General que cuente con todas y cada una de las facultades descritas durante el desarrollo de la presente exposición."

Continúa señalando que:

"…, las bases de creación de la Fiscalía, serán las siguientes:

• Que el Ministerio público se organizará en una Fiscalía General del Estado, la cual será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión que tendrá a su cargo las funciones de seguridad pública, investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal.

• Que se auxiliará de una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y tendrá las atribuciones y estructura que la Ley le establezca.

• Que la Fiscalía contará con un Órgano Interno de Control con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la vigilancia, disciplina y fiscalización de la misma, ejerciendo las facultades que en materia de responsabilidad administrativa derivan de las disposiciones aplicables.

• Que el Fiscal General, presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda, estableciéndose como garantía para su funcionamiento, que el presupuesto no podrá ser reducido respecto del autorizado para el ejercicio anterior.

• Que el titular de la Fiscalía será un Fiscal General, que durará en su cargo nueve años, a fin de dotar de estabilidad y permanencia en el encargo, precisándose los requisitos mínimos para ser nombrados, siendo: (1) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; (2) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; (3) Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho; (4) No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso; (5) Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja California; y (6) Contar con evaluación de control de confianza aprobado, entre otros.

Se reitera que el periodo de nueve años en el cargo, tiene como finalidad evitar sujetarse a determinaciones políticas y dar mayor fortaleza institucional al tener una gestión transexenal. Y que los requisitos exigidos, se preservan los que se exigen para ser Procurador General de Justicia, toda vez que el estándar para ocupar al cargo no deberá ser bajo, por el contrario, se tendrá que seleccionar a la mejor persona para dicha responsabilidad.

• Se establece la obligación del Fiscal de presentar anualmente al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades; debiendo comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado cuando éste se lo solicite para rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

• Respecto a la designación del Fiscal, se determina un proceso de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, debiendo el primero remitir un terna de candidatos, para que el segundo proceda a su análisis y designación en su caso.

Procedimiento que involucra a dos poderes en virtud de la corresponsabilidad que debe existir entre ambos en la materia, y que en términos del artículo 11 de la Constitución local deben cooperar armónicamente en la realización de los fines del Estado.

Aunado a que, conforme el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia; comprendiendo la seguridad pública, la prevención, investigación y persecución de los delitos. Por ende, la importancia de la colaboración armónica para la definición del responsable de la investigación y persecución del delito.

Así, al no depender su designación de un poder público exclusivamente, se fortalece la independencia y autonomía del Fiscal General, permitiendo al Ministerio Público sostener con imparcialidad y de forma profesional su función sin injerencia del Poder Ejecutivo.

• Asimismo, se precisa que la Fiscalía General contará al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, tal y como ya se contempla en el actual artículo 70 de la Constitución local, congruente con las reformas en materia de combate a la corrupción, adoptadas en su momento por el constituyente local."

Esta Comisión coincide plenamente con la pretensión legislativa del inicialista, sin embargo, considera oportuno, hacer algunas precisiones y adecuaciones al texto normativo propuesto, lo que se verá reflejado en el resolutivo final del presente dictamen.

4. La arquitectura institucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya no resulta idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversarial, como lo mandatan, en esencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden. Por lo tanto, resulta indispensable diseñar una arquitectura institucional para atender los principios que sostienen el modelo constitucional de justicia penal, a través de las mejores prácticas y estándares internacionales; así como establecer un plan de acción que permita a la institución administrar la gestión del cambio, en beneficio del pueblo de Baja California.

5. Por tanto, se propone la reforma de los artículos 18, 22, 27, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94 y 110, así como la denominación del CAPÍTULO IV del TÍTULO QUINTO de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para armonizar la norma a la nueva terminología, por ello se sustituye la referencia que se hace del Procurador General de Justicia del estado, por Fiscal General del Estado, así como la referencia de Procuraduría General a Fiscalía General, para como hemos afirmado, se armonice y adecue con las disposiciones emanadas de la reforma federal de 2014, la que crea la Fiscalía General de la Nación, en su artículo 102 Constitucional, que en su primera parte señala lo siguiente:

> "Artículo 102.
> A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio".

Por otro lado se modifica la denominación del CAPÍTULO IV del TÍTULO QUINTO denominado "Del Ministerio Público" a "De la Fiscalía General del Estado".
Los artículos relativos a este capítulo establecen que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía general del Estado, la cual será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión que tendrá a su cargo las funciones de investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal, en congruencia con lo señalado en la Carta Magna, así se puede afirmar que:

> "En tal virtud, se estima que la autonomía constitucional del Ministerio Público mejorará la percepción de confianza de la sociedad y contribuirá a la credibilidad de esta institución".

De igual forma, se establece la obligatoriedad de la incorporación de un Órgano Interno de Control, que tendrá a su cargo la vigilancia, disciplina y fiscalización de

la Fiscalía General y ejercerá las facultades a que se refiere la fracción III del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Para el nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control se estará al procedimiento contenido en la fracción XLIII del artículo 27 de la Constitución Política del Estado.

> "Por otro lado, la Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control con autonomía técnica y de gestión con las atribuciones señaladas en los términos de las leyes aplicables. Conviene hacer notar que el Titular del Órgano Interno del Control de la Fiscalía será nombrado por el Congreso del Estado, ello en armonía a la atribución que ya tiene encomendada en términos del Artículo 27, Fracción XLIII de la Constitución Local".

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, estará a cargo de un Fiscal General, que será designado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, de acuerdo con la nuevas disposiciones incorporadas en el texto constitucional, a través de convocatoria pública, abierta a todos los profesionales del derecho interesados, estableciendo como requisitos para su designación, los siguientes:

- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;
Tener cuando menos treinta y cinco años de edad y no más de sesenta y cinco años el día de la designación;

- Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho;
- No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso;

- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables;

- Haber residido en el Estado en forma continua e ininterrumpida durante los cinco años anteriores al día de la designación;

- Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja California, y

- Contar con evaluación de control de confianza aprobado.

Por otra parte, se especifica que la Fiscalía General contará por lo menos con dos fiscalías especializadas, las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, señalándoles atribuciones.

Asimismo, se contempla que la Fiscalía General contará con Fiscales y Agentes del Ministerio Público que determine la ley correspondiente, así como las necesidades que la procuración de justicia vaya exigiendo, haciendo énfasis en la obligación de contar con personal debidamente formado y capacitado, para que pueda incorporarse a un esquema profesional de carrera.

6. Mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2019, signado por el Diputado Juan Manuel Molina García, en su calidad de Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de esta XXIII Legislatura, convocó a sus integrantes para el día 9 de octubre de 2019, a Comisión de trabajo.

En el orden del día de la referida convocatoria, se advierte enlistado en el numeral V el desahogo y presentación de Proyecto de Dictamen de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución del Estado, con la finalidad de crear la Fiscalía General del Estado.

Abiertos los trabajos en su parte conducente los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas realizaron diversas y amplias manifestaciones al contenido del presente Dictamen. Algunos de ellas fueron precisiones, otros más de carácter argumentativo y algunas otras fueron propuestas de modificación al resolutivo. Así después de un amplio debate y consenso a cada una de las consideraciones expuestas por los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, se arribó al acuerdo del resolutivo que se propone en el presente instrumento.

En conclusión, tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad, las modificaciones al texto normativo propuesto por el inicialista, resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público, aunado a que su redacción cumple a plenitud con las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la iniciativa en los términos precisados en el cuerpo del presente estudio.

VI. Propuestas de modificación y articulado propuesto.

Parte de los cambios que pretende introducir el inicialista tienen que ver con la búsqueda de fórmulas que permitan alcanzar la autonomía a organismos como la

Fiscalía General del Estado, La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En otras palabras, la búsqueda de un entorno de autonomía es el presupuesto del que hay que partir para que organismos de esta importancia puedan llevar a cabo sus actividades con eficacia.

Es por ello que esta Comisión considera pertinente dotar a las tres Fiscalías de los mismos atributos con los que se propone la Fiscalía General del Estado, incluyendo a cada una de ellas el mismo procedimiento para designación de su titular, así como de remoción, en su caso, del mismo. En este último supuesto, esta Comisión estima que debe incluirse en el texto constitucional el derecho de audiencia que deberá respetarse durante el citado procedimiento de remoción.

En este mismo orden de ideas se considera que las atribuciones de seguridad pública deberán llevarse a cabo por un organismo desconcentrado que se creará para tal efecto. Por ello será necesaria la aprobación de una Ley que establezca la estructura y atribuciones de la nueva policía.

De la misma forma, para el caso de las tres Fiscalías que nos ocupan se considera que la propuesta para ocupar la titularidad de cada una de ellas debe partir del Gobernador del Estado, pero en forma de propuesta única, en lugar de una terna como lo está proponiendo el inicialista. Lo anterior, en virtud de que en procedimiento para designación de servidores públicos a través de ternas ha resultado, en la práctica, una forma de simulación ya que en muchos casos se hacen llegar tres candidatos a ocupar un cargo, de entre los cuales uno cuenta con muchos más atributos, experiencia y en general un mejor perfil que los otros dos, con lo cual se pretende justificar la designación de ese.
Asimismo, esta Comisión estima que el procedimiento de votación para la designación por parte del Congreso de los titulares de las Fiscalías se deberá sujetar fundamentalmente al marco normativo del Poder Legislativo, resultando ocioso entrar al detalle en la presente reforma sobre las reglas de dichos procedimientos en el texto constitucional como se propone.

Por otro lado y en virtud de que la presente serie de reformas resulta vital para el mejoramiento del entorno social específicamente relacionado con la seguridad pública, esta Comisión estima en atención a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se transfieran íntegramente los recursos materiales y humanos que actualmente forman la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario a la Secretaría General de Gobierno a fin de cumplir con lo dispuesto por la legislación citada.

Por último, esta Comisión estima que para esta primera ocasión que el Fiscal General del Estado nombrado en el presente año deberá durar en el cargo el mismo tiempo que esté en el cargo el Gobernador del Estado electo durante el proceso electoral celebrado en dos mil diecinueve. Desaparece tanto la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo desde luego la Policía Estatal Preventiva, por lo que en los artículos transitorios se dispone la forma en que se va a sustituir a dicha corporación.

VII. Régimen Transitorio.

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio que propuso el inicialista y que fue complementado por esta Comisión, en los términos que se precisan en el resolutivo.

VIII. Impacto Regulatorio.

En su oportunidad, deberán realizarse diversas reformas legislativas a distintos ordenamientos que hagan mención o referencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

De igual manera, se deberá realizar las reformas correspondientes a la Ley de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, Ley de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria de Baja California, así como la Ley de Seguridad del Estado de Baja California.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

Único. Se reforman los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del CAPÍTULO IV del TÍTULO QUINTO, para denominarse "DE LA FISCALÍA GENERAL" todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California para quedar como sigue:

ARTÍCULO 18.- (...)

I- (...);

II.- Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección;

III a VII.- (...)

ARTÍCULO 22.- (...)

APARTADO A.- (...)

(...)

(…)

APARTADO B. (...)

(...)

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, así como los titulares e integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, estarán obligados a acudir a comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o las Comisiones respectivas, cuando así lo acuerde el Congreso, por votación mayoritaria de sus integrantes.

(...)

APARTADO C.- (...)

(...)

(...)

APARTADO D (...)

(...)

(...)

(...)

ARTÍCULO 27.- (...)

I a XIII.- (…)

XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros; en la forma y términos establecidos en esta Constitución y por la Ley de la materia.

Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior del Estado, funcionará la Comisión Especial en los términos que determine el Congreso del Estado.

XV a XXXVI.- (...)
XXXVII.- Citar a los Secretarios del ramo, Fiscal General del Estado, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, a los Titulares o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se discute una Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Para los efectos de la citación del Fiscal General del Estado se estará a lo dispuesto en el Artículo 70 de esta Constitución.

(...)

XXXVIII a XLV.- (...)

XLVI.- Designar al Fiscal General del Estado, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, por mayoría calificada de conformidad con las reglas contenidas en esta Constitución.
ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina Gobernador del Estado.

El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.

La administración de las entidades paraestatales estará a cargo del titular de la entidad, y por un órgano de gobierno integrado con no menos de cinco ni más de trece integrantes propietarios, de los cuales la mayoría deberá pertenecer a la administración pública.

ARTÍCULO 42.- (...)

El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales los Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.

(...)

(...)

ARTÍCULO 49.- (...)

I a la XXII.- (...)

XXIII.- Presentar propuestas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales;

XXIV.- Solicitar la remoción de los Fiscales a los que se refiere la fracción anterior en términos de esta Constitución;

XXV a XXVI.- (...)

CAPÍTULO IV
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 69.- La institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión y que tendrá a su cargo, la investigación y persecución de los delitos, ejercicio de la acción penal; promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. La Fiscalía General Ejercerá atribuciones de Seguridad Pública, a través del organismo que la ley determine para cumplir los fines establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para la investigación de los delitos, el Ministerio Público se auxiliará de una policía que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta atribución. La Ley le establecerá su estructura y atribuciones. Asimismo, intervendrá en todos los demás asuntos que determinen esta Constitución y las leyes.

Se crea el Centro Estatal de Inteligencia, integrado por la Fiscalía General y las Secretarías y Direcciones de Seguridad de los Ayuntamientos de Baja California, como órgano de coordinación en materia de seguridad pública. La coordinación del Centro estará a cargo del Fiscal General del Estado, con respeto a las autonomías de los municipios. La Ley fijará las atribuciones y responsabilidades del Fiscal General y demás participantes del Centro Estatal de inteligencia.

La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control que contará con las atribuciones previstas en las leyes aplicables, denominado Fiscalía de Contraloría y Visitaduría; cuyo titular al igual que los demás fiscales que formen parte de la Fiscalía General del Estado serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado.

El Fiscal General del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda.

ARTÍCULO 70.- Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, durará en su cargo seis años.

Para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de la designación;

III.- Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho;

IV.- No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso;

V.- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables;

VI.- Haber residido en el Estado en forma continua e ininterrumpida durante los cinco años anteriores al día de la designación;

VII.- Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja California; y

VIII.- Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente.

El Fiscal General del Estado será nombrado y removido de conformidad con esta Constitución por las causas graves que establezca la misma.

La solicitud de remoción del Fiscal General estará a cargo del Congreso del Estado o del titular del ejecutivo Estatal. Para que se dé la remoción deberá aprobarse por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes del Congreso. La solicitud de remoción podrá ser objetada dentro de un plazo de diez días hábiles, por el Ejecutivo o por el Congreso del Estado. Si el Ejecutivo o el Congreso no se pronunciaren sobre la remoción solicitada, se entenderá que no existe objeción y previo el procedimiento previsto en la Ley, será el Congreso quien por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes determine su remoción. En todo caso el Congreso deberá otorgar el derecho de audiencia.

Contra la resolución del Congreso del Estado no se admitirá recurso alguno.

El Fiscal General del Estado no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El Fiscal General del Estado presentará anualmente al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Asimismo, comparecerá ante

el Pleno del Congreso del Estado cuando éste se lo solicite para rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General del Estado será designado con base al procedimiento siguiente:

I. Tres meses antes de que concluya el cargo del Fiscal General del Estado o a Partir de la ausencia definitiva, el Gobernador contará con veinte días hábiles para integrar una propuesta al cargo de Fiscal General del Estado, la cual enviará al Congreso.

II. Recibida la propuesta, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal General del Estado por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación.

III. En caso de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada, el Gobernador del Estado enviará una segunda propuesta. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación de esta segunda propuesta le solicitará al Gobernador del Estado que haga llegar una tercera propuesta, misma que si no fuere aprobada provocará que la designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 71.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estará a cargo de la investigación y persecución de delitos electorales. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.

La investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.

Los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales durarán en su cargo cuatro años y podrá ser reelectos por una sola ocasión; serán nombrados por mayoría calificada del Congreso del Estado a través del procedimiento que se establezca en la Ley.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales así como el titular la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 70 de esta Constitución y serán nombrados por mayoría calificada del Congreso del Estado a través del siguiente procedimiento:

I. Tres meses antes de que concluya el cargo o a partir de la ausencia definitiva, el Gobernador del Estado contará con veinte días hábiles para hacer llegar al Congreso del Estado una propuesta para ocupar la titularidad de la Fiscalía que corresponda.

II. Recibida la propuesta, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal que corresponda por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación.

III. En caso de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada, el Gobernador del Estado enviará una segunda propuesta. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación de esta segunda propuesta le solicitará al Gobernador del Estado que haga llegar una tercera propuesta, misma que si no fuere aprobada provocará que la designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Los Titulares de las Fiscalías estarán sujetos al sistema de responsabilidades que fija esta Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y podrán ser removidos de su cargo cuando incurran en alguna de las causas previstas en esta Constitución y las Leyes.

ARTÍCULO 72.- El Fiscal General del Estado, El Fiscal Especializado en Atención a Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los Fiscales y Agentes del Ministerio Público que determine la Ley, ejercen y representan a la institución del Ministerio Público.

La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de las Fiscalías, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

ARTÍCULO 80.- (…)

I a la IV.- (…)

V.- (…)

1.- (…)

2.- Los Magistrados y los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.

3 a 4.- (…)

ARTÍCULO 93.- (...)

(…)

APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos.

(...)

(…)

(…)

(…)

(…)

APARTADO B. De la Moción de Censura.- (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Secretario General de Gobierno, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bastará que el juez de control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

ARTÍCULO 110.- El Secretario de Gobierno, y demás altos funcionarios del Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que determinen las leyes respectivas. El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción rendirán protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO.- El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción que sean designados con motivo de la presente reforma tomaran protesta ante el Pleno de Congreso del Estado. Los anteriores fiscales designados en el año dos mil diecinueve durarán en su encargo 5 años.

TERCERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CUARTO.- Dentro del plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y las Leyes que deberán regir el trabajo de las Fiscalías previstas en la presente reforma.

En el mismo plazo, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como a los demás ordenamientos legales que fueren necesarios.

Hasta en tanto se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y se realizan las modificaciones señaladas en el párrafo anterior, se seguirán aplicando las disposiciones normativas a que haya lugar, siempre que ello no contravenga el presente Decreto.

QUINTO.- El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto seguirá en funciones hasta que el Congreso del Estado efectúe la designación del Fiscal General del Estado en términos del presente Decreto.

SEXTO.- Los Subprocuradores que se encuentren en funciones deberán mantenerse en el cargo, hasta en tanto se designen a los Fiscales que correspondan conforme al presente Decreto.

SÉPTIMO.- Una vez hecha la declaratoria de incorporación de estas reformas a la Constitución del Estado, se deberá dar inicio al procedimiento de

designación del Fiscal General del Estado, así como del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

OCTAVO.- Los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y demás activos con los que opere la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se entenderán transferidos como patrimonio de la Fiscalía General del Estado y en su caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Congreso del Estado deberán proveer en conjunto los recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que los recursos materiales, humanos y financieros pertenecientes a la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario deberán pasar íntegramente a formar parte de la Secretaría General de Gobierno a fin de cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

NOVENO.- Se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva, aunque en un término de seis meses contados a partir de la publicación de la presente reforma la Fiscalía General deberá instrumentar un programa de depuración para los Elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el artículo 69 de la presente reforma. De la misma forma se declara desaparecida la Secretaría de Seguridad Pública, aunque los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que formen parte de la Fiscalía General de Estado mantendrán sus derechos laborales en los mismos términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados. En el caso de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales conservarán con el Estado su relación administrativa, en los mismos términos y condiciones previstos en las leyes aplicables.

DÉCIMO.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto, se constituirá un Comité Intersecretarial integrado por el Secretario General de Gobierno, quien lo presidirá, el Oficial Mayor de Gobierno, el Secretario de Planeación y Finanzas y el Fiscal General del Estado, con el objeto de planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la correcta implementación del presente Decreto, así como coordinar las tareas entre las distintas áreas involucradas.

DÉCIMO PRIMERO.- El trámite y demás asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ante la Procuraduría General de Justicia

o ante la Secretaría de Seguridad Pública, serán continuados ante la Fiscalía General del Estado. Toda referencia que se haga en otras disposiciones legales y reglamentarias a la Procuraduría General de Justicia se entenderá hecha a la Fiscalía General del Estado.

DÉCIMO SEGUNDO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia y/o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, con dependencias y entidades de la Federación y de los Municipios, y con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Fiscalía General del Estado.

Dado en la Sala de Comisiones "Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los 9 días del mes de octubre de 2019.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA P R E S I D E N T E			
DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS S E C R E T A R I A			
DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ V O C A L			

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ V O C A L			

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES V O C A L			
DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ V O C A L			
DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ V O C A L			

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO V O C A L			

COMISIÓN DE JUSTICIA

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ P R E S I D E N T E			
DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ S E C R E T A R I A			
DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ V O C A L			
DIP. RODRIGO ANÍBAL OTÁÑEZ LICONA V O C A L			

COMISIÓN DE JUSTICIA

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ V O C A L			
DIP. ELÍ TOPETE ROBLES V O C A L			
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA V O C A L			
DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ V O C A L			

DICTAMEN No 01 COMISIONES UNIDAS - INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. FISCALÍA GENERAL

(CONCLUYE DICTAMEN)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien Diputado, de hecho se votó, pero lo volvemos a considerar a petición de, de los que solicita Diputado, no tenemos ningún…

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Antes de la votación.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: …ningún inconveniente. Le solicitaría a la Diputada Secretaria Escrutadora, Diputado a solicitud suya, someta nuevamente la dispensa de trámite…

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Del trámite por obvia y urgencia.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: …por urgencia y obvia resolución.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputados, se solicita a los Diputados la dispensa de trámite, por lo expuesto por el Diputado, en votación económica. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias, por mayoría. A continuación, pasamos a hacer la declaración formal y abierta, Diputados de la Iniciativa de este Dictamen No. 01, expuesto por el Diputado Molina, así que, si alguien trae o quiere hacer alguna participación, este es el momento.

- EL C. DIP. ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Sí Diputada traigo un tema, una reserva.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Aquí le pediría a nuestra Secretaria, si es tan amable, de hacer lo propio para enlistarlos a los

compañeros y compañeras Diputadas. Estamos en el debate, eh, Diputados; el debate es en contra o igual si traen alguna participación, es el momento para hacerlo. Diputada Eva y posteriormente creo que es el Diputado, ok, perfecto, después de la votación para la reserva. Adelante Diputada Eva María.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Presidente en funciones. Primero que nada, este es un tema muy delicado y no podemos dejar de lado el hecho de que tanto el Dictamen no cumplió en su fase de análisis ni en Comisión, ni en el pleno, con la debida circulación y esto contraviene en lo dispuesto en el Artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Consciente estoy que ya se votó, sin embargo, es importante esta precisión. Aunado al anterior, a lo anterior, es importante señalar que las Diputadas Loreto Quintero Quintero y su servidora, Eva María Vásquez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, si bien estamos a favor de mejorar la procuración de justicia en el Estado, que actualmente presenta áreas de oportunidad, de ahí que sea sumamente importante crear una Institución Especializada en combatir la corrupción y abatir la impunidad. Por ello, recalco la importancia de tener una Fiscalía General Autónoma e Independiente; sin embargo, sin embargo, con el Dictamen que se presenta el día de hoy para votación con dispensa de trámite en el pleno de esta asamblea, no se cumple con la demanda social, es decir no se lograr una Fiscalía General Autónoma e Independiente. La Diputada Loreto Quintero y yo estamos en contra de este Dictamen por las siguientes razones: Primera, no se garantiza que no se pueda imponer un Fiscal a modo. Segunda, no se garantiza que quien esté al

frente de la Fiscalía General sea independiente del próximo Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Tercero, tampoco se garantiza que quien esté al frente de la Fiscalía General no sea militante de un partido político, familiar o incondicional de las próximas autoridades. Número cuatro, no se garantiza que el Fiscal General no esté siempre maniatado por el Titular del Poder Ejecutivo. Porque es justamente el Ejecutivo quien presentará la propuesta de aspirantes y en última instancia ante la falta de acuerdo del Poder Legislativo, quien pueda realizar el nombramiento. Número cinco, se permite que los Fiscales Especiales, con excepción del Fiscal Anticorrupción y de Delitos Electorales sean nombrados y removidos libremente por el Fiscal General. Entonces, no hay Fiscalía General Autónoma e Independiente, sino que se advierte que se trata de un traje a la medida. En primer lugar, se flexibilizan los requisitos, ya que no se establece un límite máximo de edad, como sí ocurre por ejemplo en el caso de Magistrados del Poder Judicial. Tampoco se exige como requisito la experiencia profesional, ojo, la experiencia profesional especializada en procuración de justicia, investigación delictiva o al menos en materia penal, no se garantiza la independencia en el procedimiento de designación del Fiscal General, ya que ante la falta de acuerdo por parte de los integrantes de esta asamblea, después de tres propuestas el Titular del Poder Ejecutivo podrá nombrar a quien desee. Se permite que el propio Fiscal General, quien nombre a su órgano interno de control, cuando la finalidad del Sistema Anticorrupción es que las Contralorías de los Órganos Constitucionales Autónomos sean nombradas por mayoría calificada del Congreso del Estado. Se establece, sin ninguna justificación razonable, que los

Fiscales General Anticorrupción y de Delitos Electorales nombrados el 2019, durarán en su encargo cinco años. Por último, para garantizar la autonomía se requiere brindar todo el esquema de la Fiscalía General de los Fiscales Especiales, dales un, darles un andamiaje que permita que operen y hagan su trabajo de manera correcta. Todos aquí vinimos a decir que queremos acabar con la impunidad, todos aquí estamos convencidos y venimos también a decir que queremos que funcione bien el gobierno; pues yo les digo algo: esta reforma constitucional no va a dar resultados, pues está sesgada. Les anticipo, en este caso el sentido de nuestro voto es en contra, y como les decía, es en contra de este Dictamen porque, definitivamente es insuficiente para garantizar la autonomía e independencia de la Fiscalía General. Es cuanto.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias

- **EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA:** Sí Diputada Vicepresidenta, este, como a lo marca la Ley Orgánica y en el caso de este, observaciones de esa naturaleza corresponde a la, a un integrante de la Comisión poder hacer las precisiones en relación a la, a las objeciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante Diputado, adelante Diputado.

- **EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA:** Con su permiso Diputada Vicepresidenta, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. De las primeras este, puntualidades este, que hace la diputada Eva María Vásquez, sí, sí le precisaría de que, bueno el trámite ya fue dispensado conforme a la Ley Orgánica en este

Pleno. En la Comisión se circuló, se circuló el Dictamen con anticipación y en el desarrollo del trabajo se escuchó la opinión, muy puntual de sus observaciones Diputada Eva María Vásquez este, entre, durante el desarrollo del debate se respondieron a todas las observaciones que hizo y al final de la ronda de intervenciones se le preguntó si estaban satisfechas y ya no tuvo ninguna otra intervención. Entonces este, esa parte, tuvo conocimiento del Dictamen, tuvo la oportunidad en la sesión de la, de las Comisiones Unidas participó ahí estuvo, consta en el acta. Respecto a que, los señalamientos de que no se cumple el objetivo de la Fiscalía, ahí se están estableciendo todos los, todas las razones por las cuales se va a seguir un procedimiento muy detallado para la designación de la persona y se establecen una serie de requisitos y se establece una serie de situaciones por las cuales en su momento será el Congreso del Estado en un ejercicio soberano, en un ejercicio democrático y en un ejercicio responsable, tomar la mejor decisión; yo lo dije este, durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de, de las Comisiones Unidas. Y lo vuelvo a repetir, es el ejercicio, sí, de la persona, es el desempeño en el cargo lo que marca la decisión bien tomada o como también, inclusive, en la Constitución se establece este, no es un blindaje el nombramiento, hay un procedimiento de remoción y está establecido como facultado el mismo Congreso para hacerlo y lo único que se exige es que haya garantía de audiencia y que obviamente se cumpla con ese procedimiento que marca. Entonces, nadie está blindado, ni siquiera nosotros compañeros Diputados. Entonces, hay un procedimiento para hacerlo y es el nombramiento, el más responsable que se haga;

pero es su desempeño el que nos va a marcar si tomamos la decisión correcta o no. Y pongo como ejemplo, Eduardo Medina Mora fue Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Vicente Fox, fue Procurador General de la República en el gobierno de Felipe Calderón, fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y acabamos de recibir, como pueblo de México, porque la Corte sirve al pueblo, la renuncia de Eduardo Medina Mora. Y simplemente fue un adelanto de lo que él sabía que iba a pasar, ¿sí? que el Senado iba a reconocer que se equivocó cuando lo ratificó a nombramiento expreso del Presidente Enrique Peña Nieto, porque ya es por demás sabido que está sujeto a investigaciones de corte internacional por cuestiones de manejo indebido de recursos muy elevados en su cuantía. Entonces, yo no dudo que el Senado iba a reconocer que se había equivocado, que lo iba a destituir y el Presidente de la República ya aceptó la renuncia de la persona, y había estado a cargo de dos dependencias muy importantes a nivel nacional, las más importantes diría yo, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y era Ministro de la Corte. Entonces, me queda claro que se equivocó Vicente Fox, y se equivocó también Felipe Calderón, y se equivocó también Enrique Peña Nieto cuando lo propuso al Senado. Entonces, hay reversas, ¿sí? Vamos a tratar de tomar la decisión más correcta, va a estar en manos de nosotros compañeros Diputados verlos así. De que no se le exige experiencia profesional, es clara, claro el Artículo que establece que se le exige una experiencia profesional por más de diez años contados a partir de la expedición de la cédula profesional y esa experiencia profesional no puede ser en otra área que la

que se va a abocar o incursionar, ¿sí?, y va a ser de nosotros analizar que esta tenga que ver con el área penal. Yo en lo personal adelanto, no votaría a favor de nadie que no tuviera experiencia profesional en el área de materia penal que es la que va a atender y de procedimiento penal, no, no lo haría. Entonces, eso ya va a depender una decisión de ustedes compañeros este, y compañeras Diputados. Sí hay esquemas este, esquemas de, de resolución, yo creo que tres vueltas al Congreso del Estado de una propuesta son suficientes para que nos pongamos de acuerdo; pero no podríamos dejar a que, si no nos pusiéramos de acuerdo, nos quedáramos sin Fiscal General y al final de cuentas en el equilibrio de Poderes, si nos enseñaron en la Facultad de Derecho desde el, desde el tema de la división de Montesquieu ¿sí? que hay un, pesos y contrapesos. Esto que se plantea al final es un contrapeso, el Congreso no decide, no se pone de acuerdo, función del contrapeso, que es la designación del Ejecutivo en beneficio del pueblo, que al final de cuentas el Gobernador fue electo por el pueblo y tiene, tiene intervención en este procedimiento. De los cinco años, los cinco años en el transitorios es precisamente porque ahorita lo vigente, ahorita lo vigente en la Constitución, es que marca un período de gubernatura de 2 años, es lo que está vigente, ¿sí? a este momento, y tenemos que ver el tema de la, de la renovación escalonada de la Fiscalía. Ahí está la razón de los cinco años y que no va a dar el resultado porque es una reforma sesgada este, un trabajo acucioso. Ya la Legislatura anterior había analizado el tema este, de la Fiscalía, algunos de los que están aquí ya la habían votado a favor, no sí si ahora piensen distintos; pero, esta reforma este, cumple con el procedimiento

legislativo, el alcance constitucional federal. Y lo vuelvo a decir, la designación que este Congreso tome respecto a la persona va a ser lo que va a marcar que la reforma alcance su objetivo y seguramente tomaremos la decisión más responsable, no lo dudo, al menos de la mayoría de ustedes compañeros y compañeras; es cuanto.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Molina, ¿algún otro orador? Diputados, ¿o participación? Adelante Diputada Eva María.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Nada más para que quede constancia también de la precisión. Si bien es cierto, ayer se, estas observaciones fueron señaladas, no se incorporó ninguna de ellas, sí se me explicó algunos de los elementos; pero, se iba, se dio un tiempo para analizarlos. Y en el Dictamen que se me entregó, por cierto, ya una vez que había votado en abstención, pues me doy cuenta que ninguna de ellas está considerado. Solamente para la precisión respectiva.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada. Si ya no hay ninguna intervención, voy a, a pedir a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones, Diputada Presidenta en funciones, se somete a votación nominal el Dictamen No. 01 de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y de Justicia, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor en lo general y en lo particular también.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, en contra.

- Quintero Quintero Loreto, en contra.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor y debo decir que entiendo que alguna de las inquietudes manifestadas en tribuna serán abordadas en una reserva que se presentará en unos minutos. Por ese sentir, por esa razón reitero mi voto a favor del proyecto.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? De no ser así, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor en lo general, con una reserva.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019			
DICTAMEN No. 01			
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA.			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Dip. López Montes Gerardo	**X**		
Dip. Ruvalcaba Flores David	**X**		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	**X**		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		

Dip. Topete Robles Elí	**X**		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
Dip. Vásquez Hernández Eva María		**X**	
Dip. Quintero Quintero Loreto		**X**	
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	**X**		
Dip. Del Villar Casas Rosina	**X**		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Dip. Molina García Juan Manuel	**X**		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Dip. Gallardo García Fausto	**X**		
Dip. Moreno Hernández Luis	**X**		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X/R**		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Dip. Zavala Márquez Catalino	**X**		
Total de votos a favor	**23**		
Total de votos en Contra		**2**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se informa Diputada Presidenta en funciones, que el resultado de la votación es: 23 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada. Vamos a dar el uso de la voz al Diputado Rodrigo Anibal Otañez, para que dé lectura a la reserva comentada.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Gracias Diputada Presidenta en funciones.

Rodrigo Otañez, Diputado miembro del Partido Baja California, me permito solicitar ante, ante esta soberanía, de la discusión del Dictamen número 8 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículo 131, fracción I de la Ley Orgánica de este Congreso, se reserven para su discusión en esta sesión el artículo 49 fracción XXIII y 71, fracción I, II y III del presente Dictamen para que, en lugar de que sea una propuesta del Gobernador, se someta a esta Soberanía, se modifique para que sea en ternas las que haga llegar el Gobernador del Estado ante este Congreso para la designación del Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado en Atención a Delitos Electorales.

En esa virtud, los artículos citados deberán quedar redactados de la siguiente forma:

ARTÍCULO 49.- (...)

Del I al XXII.- (...) quedan igual.

XXIII.- Presentar ternas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales;

ARTÍCULO 71.- (…)

I. Tres meses antes de que se concluya el cargo o a partir de la ausencia definitiva, el Gobernador del Estado contará con veinte días hábiles para hacer llegar al Congreso del Estado la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía que corresponda.

II. Recibida la terna, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal que corresponda por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación.

III. En caso de que el Congreso no apruebe la terna enviada, el Gobernador del Estado enviará una segunda terna. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación de esta segunda terna le solicitará al Gobernador del Estado que haga llegar una tercera terna, misma que si no fuere aprobada provocará que la designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta Presidencia se someta a consideración la presente reserva.

Gracias Diputada.

(SE INSERTA RESERVA AL DICTAMEN No. 01 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, LEGISLACIÓN Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES, LEÍDA POR EL DIPUTADO RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA)

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

H. XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO

DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

Rodrigo Anibal Otañez Licona, Diputado por el Partido de Baja California me permito solicitar que en la discusión de Dictamen número 8 de la Comisión de Gobernación y Legislación y Puntos Constitucionales con fundamento en el artículo 131, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se reserven para su discusión en esta sesión los siguientes artículos: 49 en su fracción XXIII y 71, fracciones I, II y III del presente dictamen para que, en lugar de que sea una propuesta del Gobernador la que se someta a esta Soberanía, se modifique para que sean ternas las que haga llegar el Gobernador del Estado a este Congreso para la designación del Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.

En esa virtud, los artículos citados deberán quedar redactados de la siguiente forma:

RESOLUTIVO

ARTÍCULO 18.- (...)

ARTÍCULO 22.- (...)

ARTÍCULO 27.- (...)

ARTÍCULO 40.- (…)

ARTÍCULO 42.- (...)

ARTÍCULO 49.- (...)

I a la XXII.- (...)

XXIII.- Presentar ternas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales;

XXIV a XXVI.- (...)

ARTÍCULO 69.- (…)

ARTÍCULO 71.- (…)

I. Tres meses antes de que concluya el cargo o a partir de la ausencia definitiva, el Gobernador del Estado contará con veinte días hábiles para hacer llegar al Congreso del Estado la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía que corresponda.

II. Recibida la terna, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal que corresponda por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación.

III. En caso de que el Congreso no apruebe la terna enviada, el Gobernador del Estado enviará una segunda terna. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación de esta segunda terna le solicitará al Gobernador del Estado que haga llegar una tercera terna, misma que si no fuere aprobada provocará

que la designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado.

(…)

ARTÍCULO 72.- (…)

ARTÍCULO 80.- (…)

ARTÍCULO 93.- (...)

ARTÍCULO 94.- (…)

ARTÍCULO 110.- (…)

(…)

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta Presidencia que se someta a consideración la siguiente reserva.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del Mes de octubre de 2019.

Atentamente

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado. Preguntaría Diputados si desean intervenir en contra de la reserva expuesta por el Diputado Rodrigo Anibal Otañez. Si no hay ninguna intervención Diputados, solicitaría a la Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la reserva.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto, se somete a votación nominal la reserva presentada, empezando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor, y le pido al Diputado que me dé una copia ahí de la reserva, para analizarla.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor de la reserva.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, en contra.

- Quintero Quintero Loreto, en contra.

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?

- A favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: El nombre por favor, Diputado, ¿puede dar su nombre?, por favor y el sentido de su voto.

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Sí Diputada.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado más que falte por votar? Adelante, Diputado.

- Ruvalcaba Flores David, con la certeza que las reformas presentadas sean un acierto, a favor Ruvalcaba.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Muy bien, continuamos con la Mesa Directiva.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Zavala Márquez Catalino, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor de la reserva.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019			
RESERVA AL DICTAMEN No. 01			
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA.			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Dip. López Montes Gerardo	**X**		
Dip. Ruvalcaba Flores David	**X**		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	**X**		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Dip. Topete Robles Elí	**X**		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
Dip. Vásquez Hernández Eva María		**X**	
Dip. Quintero Quintero Loreto		**X**	
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	**X**		
Dip. Del Villar Casas Rosina	**X**		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Dip. Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Dip. Molina García Juan Manuel	**X**		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Dip. Gallardo García Fausto	**X**		
Dip. Moreno Hernández Luis	**X**		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		

Dip. Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Dip. Zavala Márquez Catalino	**X**		
Total de votos a favor	**23**		
Total de votos en Contra		**2**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: El resultado es: 23 votos a favor y 2 en contra y 0 abstenciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada. Se declara aprobado en lo general el Dictamen No. 01 de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia; y la reserva presentada por el Diputado Rodrigo Anibal Otañez. Continuamos con los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, se le concede el uso de la voz al Diputado Rodrigo Anibal Otañez, para dar lectura al Dictamen No. 01; adelante Diputado.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LINCONA: Gracias Diputada Presidenta en funciones. Diputado Catalino Zavala Márquez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Honorable Asamblea. A la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, Proposición de Acuerdo Económico San Felipe. Por el cual le cedo el uso de la voz al Diputado inicialista, el Diputado Elí Topete Robles, del Partido

Movimiento Ciudadano, para que dé lectura al Dictamen No. 01 de la Comisión que presido; adelante Diputado.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Gracias Diputado. Con su venia Presidenta en funciones, Diputada.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante Diputado.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: A la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, Proposición de Acuerdo Económico, San Felipe, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la dispensa de la lectura, para sólo leer el proemio y resolutivo, y la dispensa de no haberse circulado con tres días de anticipación a los Diputados, conforme al artículo 18 fracción VII de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado, ahorita le vamos a solicitar a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación lo solicitado.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones Diputada Presidenta en funciones, se somete a votación económica la dispensa de la lectura total, para sólo leer el proemio y los resolutivos. Los que estén a favor, y la formalidad también del…

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Sí, así es, también.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Sí, también, del envío, muy bien. Los que estén a favor, favor de levantar su mano; por unanimidad de los presentes, se aprueba la dispensa de la lectura y todo lo demás.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Secretaria Escrutadora, tiene nuevamente el uso de la voz, Diputado Topete.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Gracias Diputado. Siendo así, procedo a dar lectura.

Proemio:

Dictamen 01 de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, relativo a la Proposición de Acuerdo Económico, mediante el cual se exhorta a las diversas autoridades federales y estatales, para que realicen el estudio de factibilidad del diseño de un sistema logístico comercial para el traslado de mercancías provenientes al Puerto de San Felipe, Baja California, presentando, presentado en sesión de pleno de esta XXIII Legislatura el 29 de agosto de 2019.

Resolutivo:

Primero. Se aprueba la Proposición de Acuerdo Económico para quedar como sigue: La Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, exhorta respetuosamente al Almirante Secretario José Rafael Ojeda Durán de la Secretaría de Marina, Ing. Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dra. Graciela Márquez Colín de la Secretaría de Economía Federal, L.A.E. Carlo Humberto Bonfante Olache

de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, C.P. Oscar Escobedo Carignan Secretario de Turismo del Estado de Baja California y el Arq. Alfonso Padrés Pesqueira Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, para que realicen el estudio de factibilidad del diseño de un sistema logístico comercial para el traslado de mercancías provenientes al puerto de San Felipe, Baja California y hacia otros puertos en el país, así como para el transbordo para la exportación hacia diversos mercados internacionales.

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo, a los Titulares de las Secretarías Federal y Estatal.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California, "Lic. Benito Juárez García", a los 10 días del mes de octubre de 2019.

Es cuanto, Presidenta.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 01 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO BINACIONAL, LEÍDO POR EL DIPUTADO ELÍ TOPETE ROBLES)

DICTAMEN 01 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO BINACIONAL, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTAN A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, PARA QUE REALICEN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE UN SISTEMA LOGÍSTICO COMERCIAL PARA EL TRASLADO DE MERCANCÍAS PROVENIENTES AL PUERTO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA. PRESENTADO EN SESIÓN DE PLENO DE ESTA H.XXIII LEGISLATURA EN 29 DE AGOSTO DE 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, Proposición de Acuerdo Económico, por lo que sometemos a consideración el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción VI y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

X. En el apartado denominado "Fundamento" se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

XI. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos" se da cuenta del trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

XII. El apartado denominado "Contenido de la proposición" contiene un capítulo denominado "Exposición de motivos" en el que se hace una descripción sucinta de la propuesta en estudio, así como su motivación y alcances, haciendo referencia a los temas que la componen.

XIII. En el apartado denominado "Valoración jurídica de la proposición" se realiza un análisis de constitucionalidad y procedencia legal.

XIV. En el apartado de "Consideraciones" se determina el sentido del presente dictamen y los integrantes de este órgano colegiado expresan razonamientos

y argumentos referente a la viabilidad, oportunidad y necesidad de cada porción normativa.

XV. En el apartado denominado "Resolutivo" se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción VI, 60 inciso a) 90, 110 fracción III, 115 fracción I, 116, 122, 123, 124, 145 BIS, y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedentes Legislativos.

I. En fecha 29 de agosto de 2019, el Dip. Elí Topete Robles, del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la XXIII Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja California, Proposición de Acuerdo Económico, por medio del cual solicita el apoyo de autoridades Federales y Estatales, para realizar estudios de factibilidad del diseño de un sistema logístico comercial para el traslado de mercancías provenientes al puerto de San Felipe, hacia otros puertos en el país, así como para el transbordo para la exportación hacia diversos mercados internacionales.

II. Presentado que fue la Proposición en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la misma para su trámite legislativo.

III. En fecha 05 de septiembre de 2019, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa, oficio CDECB/RAOL/002/2019, signado por el Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, con el cual remite la Proposición de Acuerdo Económico, señalada en el numeral I de esta sección, con la finalidad de que sea elaborado el proyecto de dictamen correspondiente.

IV. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones III, IV y V de nuestra Ley Interior, procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Proposición.

Exposición de motivos

Señala el inicialista en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y argumentos para motivar la propuesta:

Los puertos son un conjunto de instalaciones y servicios que permiten el intercambio de mercancías entre medio terrestre y acuático a nivel nacional e internacional. Son el principal medio de paso de la mayoría de los productos del comercio económico internacional, e igualmente la interface entre el transporte terrestre y marítimo. Los puertos son parte de la cadena de transporte nacional e internacional y del comercio mundial, y en general representan el 80% de su

movilización, con un potencial de transporte y almacenamiento con tasas de crecimiento superiores al 5% durante la última década, lo que ha permitido a naciones como Singapur, convertirse en potencias económicas en el sureste asiático, y al desarrollo de polos regionales como en el noroeste de China, el sur de Estados Unidos y en España, sólo por mencionar algunos. En definitiva y para desarrollar la estructura competitiva en esta materia y los beneficios regionales, se hace indispensable contar con planes y proyectos estratégicos y de gran visión, que sustentarán las inversiones requeridas.

Un sistema logístico de esta naturaleza implica infraestructura desde el ingreso de la mercancía, hasta su despacho al destino final, con mecanismos y protocolos de recepción, vigilancia, servicios administrativos, almacenamiento, y transportación, lo que nos obliga a realizar de manera inteligente, los estudios de pre factibilidad que en su caso determinen su viabilidad técnica, comercial y financiera, así como sus condicionantes.

El aumento del transporte de mercancías por vía marítima, y la ventajosa posición geográfica de Baja California, brindan a los puertos de la entidad, la oportunidad de explotar el tráfico marítimo en la zona y aprovechar su vecindad con Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, que dicho sea de paso, tiene un déficit en su capacidad proyectada. Esto representa una gran oportunidad que debemos explorar para esta región, considerando que San Felipe contiene una serie de ventajas competitivas y comparativas para la estimación del éxito de la implementación de un

sistema logístico comercial para el traslado y trasbordo de mercancías para la exportación, entre las que destacan:

1. La ubicación geográfica, próxima al sur, oeste y centro de Estados Unidos, a las zonas de consumo y producción y, especialmente a pocas horas de Phoenix, Arizona; Las Vegas, Nevada; Albuquerque, Nuevo México y el Sur de California que es el estado más rico de Estados Unidos y la novena economía del mundo, en donde se ubica uno de los principales centros de distribución de mercancías hacía Centro y Sudamérica. Se cuenta con una envidiable ubicación cerca del Valle de Mexicali, que es el segundo más importante de la región con 200 mil Hectáreas de cultivo. Otra ventaja para la interconexión de mercancías hacia diversas regiones de nuestro país y para la exportación desde las mismas, se cuenta con la cercanía de los puertos fronterizos a Estados Unidos en Mexicali, Algodones, Tecate, Tijuana y San Luis Río Colorado en Sonora, lo que hace presumible y con esto necesario el análisis de pre factibilidad.

2. Abundancia de espacio para las operaciones y establecimiento de infraestructura, equipamiento, así como telecomunicaciones disponibles.

3. Condiciones naturales adecuadas para la realización de los trabajos en el diseño y construcción de la infraestructura para la movilización y tránsito de embarcaciones del tamaño y calado requeridos.

4. Rutas terrestres que permitan la conexión con las grandes rutas de los diferentes medios de transporte y garanticen la eficiencia y costos competitivos.

5. Mejoramiento notorio de la red carretera hacia el resto de los puertos fronterizos señalados.

6. Costos básicos para la operación de un puerto de esta naturaleza, competitivos con los de puertos similares en otras regiones del país y el mundo.

Con esta iniciativa se analizaría el potencial de un sistema logístico comercial para el traslado de mercancías proveniente y hacia otros puertos en el país, así como para el transbordo para la exportación hacia diversos mercados, y con el siguiente beneficio para la región:

- San Felipe se convertiría en un punto de interacción logística con el resto de los puertos del Pacífico en México, para disminuir costos de traslado, haciendo más competitiva la dinámica de transporte de mercancías.
- Un punto especializado para el transbordo de mercancías en tránsito para la importación y exportación hacia el extranjero, especialmente desde y hacia Estados Unidos.
- Un complemento logístico y una oportunidad para el desarrollo económico regional de Mexicali y el Estado y una estrategia complementaría para apalancar la industria, el Comercio, las

Comunicaciones, el Transporte y el turismo nacional e internacional en toda la zona.

San Felipe destaca por su interés turístico a nivel internacional, ya que se encuentra a menos de 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, aun cuando en los últimos años se ha visto fuertemente afectado por la disminución drástica de visitantes y compradores de segundas viviendas provenientes de Estados Unidos, limitando la oferta de empleo y desarrollo a la pesca y en menor escala a los visitantes nacionales y extranjeros de temporada.

Con esta iniciativa, daremos cauce a una de las urgentes necesidades del puerto en términos de su economía, que además de los centros turístico y pesquero que le dan vida, requieren de una estrategia con mayor proyección, lo que sumaría a Mexicali el potenciamiento de una de sus vocaciones competitivas que es la logística de mercancías de exportación.

El Objetivo es obtener el compromiso y los recursos para iniciar la etapa de estudios y así presentar este acuerdo ante el Pleno del Congreso de la Unión como un proyecto estratégico de impacto regional.

Esta Soberanía debe promover el desarrollo de actividades que añadan valor y permitan un mejor aprovechamiento de la posición geográfica de nuestras ciudades y, en este caso en particular, de San Felipe, el Valle de Mexicali y la ciudad en general. Debemos en este sentido y como requerimiento elemental, contar con un estudio de pre factibilidad y eventualmente un plan

maestro de desarrollo portuario en los términos que indique el estudio citado, con estimaciones y pronósticos confiables donde el gobierno Federal y Estatal tengan la figura de regulador en materia portuaria.

IV. Valoración jurídica de la iniciativa

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

5. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer el legislador.
6. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.
7. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica del gobernado que las que resulten indispensables para la consecución de un fin social superior.
8. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al

cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición de motivos.

Considerando lo anterior, se procedió al análisis de la Proposición de Acuerdo Económico en los términos siguientes:

Se analizó la constitucionalidad de la Proposición de Acuerdo Económico, tomando en consideración que, el artículo 39 de nuestra Constitución Federal dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Por su parte el numeral 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores.

El artículo 124 de la misma Constitución Federal refiere que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Por lo que se entiende que, los Estados conservan todo el poder no delegado al gobierno federal.

No pasa inadvertido para esta Comisión que el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California señala que los Diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del Estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones, tal como hoy acontece en la especie.

Por otro lado, es facultad del Congreso del Estado, resolver lo relativo a las iniciativas de ley, iniciativas con proyecto de decreto y proposición de acuerdo económico, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con relación directa al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este órgano deliberador, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra en lo previsto por los artículos 39, 41, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 y 27 de la Constitución Local; 110 y 145 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California.

V. Consideraciones

Esta Comisión considera jurídicamente viable el Punto de Acuerdo presentado por el inicialista, en virtud de los siguientes razonamientos:

El Puerto de San Felipe, se encuentra localizado a 200 kilómetros al sur del cruce fronterizo entre Mexicali y Calexico, separado de la ciudad de Mexicali, capital del Estado de Baja California, por un estrecho de desierto de 200 kilómetros, pero legalmente siempre ha sido delegación del Municipio de Mexicali.

Ahora bien, la pretensión del inicialista, tal y como lo menciona, en la exposición de motivos busca impulsar un plan maestro de desarrollo portuario en los términos que en su oportunidad se detallan en el estudio correspondiente, con estimaciones y pronósticos confiables donde el gobierno Federal y Estatal, promuevan el desarrollo

de actividades que añadan valor y permitan un mejor aprovechamiento de la posición geográfica de nuestras ciudades y, en este caso en particular, de San Felipe, el Valle de Mexicali y la ciudad en general.

Así lo menciona en su exposición de motivos, "El Objetivo es obtener el compromiso y los recursos para iniciar la etapa de estudios y así presentar este acuerdo ante el Pleno del Congreso de la Unión como un proyecto estratégico de impacto regional."

De lo anterior se desprende, que la Proposición de Acuerdo Económico formulado por el inicialista constituye una invitación a continuar con los trabajos que se han venido desarrollando para que el Puerto de San Felipe, obtenga los impulsos necesarios para contribuir en la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes, así como la inclusión del puerto de San Felipe, como un puerto comercial competitivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos en el presente estudio así como el texto propuesto por el inicialista, este resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden tutelar con la proposición, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE las iniciativas en los términos que han quedado precisados en el cuerpo del presente dictamen.

VI. Resolutivo

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

Primero. Se aprueba la Proposición de Acuerdo Económico para quedar como sigue: La Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, exhorta respetuosamente al Almirante Secretario José Rafael Ojeda Duran de la Secretaría de Marina, Ing. Javier Jiménez Espriú de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Dra. Graciela Márquez Colín de la Secretaría de Economía Federal, L.A.E. Carlo Humberto Bonfante Olache de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, C.P. Oscar Escobedo Carignan Secretario de Turismo del Estado de Baja California y Arg. Alfonso Padres Pesqueira Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, para que realicen el estudio de factibilidad del diseño de un sistema logístico comercial para el traslado de mercancías provenientes al puerto de San Felipe, Baja California y hacia otros puertos en el país, así como para el transbordo para la exportación hacia diversos mercados internacionales.

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo, a los Titulares de la Secretarías Federales y Estatales.

Dado en la Sala de Comisiones "Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los 03 días del mes de octubre de 2019.

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO BINACIONAL

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. RODRIGO ANÍBAL OTÁÑEZ LICONA P R E S I D E N T E			
DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO S E C R E T A R I O			
DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA V O C A L			
DIP. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ V O C A L			
DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS V O C A L			

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO BINACIONAL

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ V O C A L			
DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO V O C A L			
DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ V O C A L			

DICTAMEN No. 1 - PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTAN A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES.

(CONCLUYE DICTAMEN)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado. En consecuencia, se pregunta si desean intervenir en contra, abriendo el debate en el Dictamen No. 01, si no hay ninguna participación o algún orador en

contra, voy a solicitar a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones, Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen No. 01 de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, iniciando por la derecha.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Moreno Hernández Luis, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar? De no ser así, continuamos con la Mesa Directiva, por favor.

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor de la reserva.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019			
DICTAMEN No. 01			
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO BINACIONAL			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Dip. López Montes Gerardo	**X**		
Dip. Ruvalcaba Flores David	**X**		
Dip. Morán Hernández Víctor Manuel	**X**		
Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Dip. Topete Robles Elí	**X**		
Dip. Vaca Chacón María Trinidad	**X**		

Dip. Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Dip. Quintero Quintero Loreto	**X**		
Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel	**X**		
Dip. Del Villar Casas Rosina	**X**		
Dip. Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Dip. Caballero Ramírez Monserrat			
Dip. Vázquez Castillo Julio César			
Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Dip. Molina García Juan Manuel	**X**		
Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Dip. Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Dip. Gallardo García Fausto	**X**		
Dip. Moreno Hernández Luis	**X**		
Dip. González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Dip. Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Dip. Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Dip. Zavala Márquez Catalino			
Total de votos a favor	**22**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Diputada.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria. Se declara aprobado el Dictamen No. 01 de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional. Pasamos a la penúltima parte Diputados, que son Proposiciones, le concedemos el uso de la voz a la Diputada…

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Diputada Presidente.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante, perdón.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Voy a abusar, si me da unos minutitos, adelante Diputado, que sea breve.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante Diputado, que sea breve.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: No, nada más agradecerles, agradecerles a todos los Diputados, agradecerle al Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, por la, por la aprobación de una, de un punto de acuerdo que es trascendental y muy importante para la economía no nomás de San Felipe, sino también regional. Y a manera de informarles brevemente, estuvimos en la ciudad de México el día martes, en el Congreso de la Unión, hicimos agenda durante todo el día y precisamente el tema que llevamos y que tocamos fue el puerto cabotaje. Estuvimos con la Diputada Federal, Presidenta del Congreso, acogió muy bien el tema del puerto cabotaje de San Felipe. Estuvimos con el Diputado Federal Ricardo Exsome, Presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso, igual, inclusive

hará una visita en el mes que entra, en noviembre. Y, igual estuvimos con el Presidente de la Comisión de Energía, el Diputado Manuel Rodríguez; igual este, estuvo inclusive el Comisionado Nacional de, de PESCA, porque tocamos el tema de San Felipe. Y cómo esta alternativa va a ayudar a reactivar y rescatar a nuestros hermanos de San Felipe que están en una crisis difícil, lo tocamos con esas autoridades, esas instancias y la verdad nos fue muy bien, lo acogieron, se está en discusión. Regresamos a la ciudad de México para que en el próximo presupuesto federal se den los recursos para el estudio de factibilidad de este gran proyecto. Así que, pues yo contento, aquí el Diputado que acogió y se sumó a esta Iniciativa de nosotros los Diputados locales, fue el Diputado Federal Jorge Alcibíades García Lizar, Lara, perdón, que nos apoyó y nos abrió las puertas con las personas que les dije. Entonces, enhorabuena, yo se los quería transmitir, vengo emocionado, contento porque eso sin duda va a ayudar al sueño que tiene la gente de San Felipe y que es la, lo que está promoviendo el Diputado Molina, me sumé con él para que se haga Municipio San Felipe. ¡Enhorabuena!, gracias.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien Diputado. Pasamos al apartado de Proposiciones, damos el uso de la voz, ¿está la Diputada Monserrat? Damos el uso de la voz, que es de manera conjunta con el Diputado Juan Manuel Molina García, adelante Diputado.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias, con su permiso Diputada Vicepresidenta, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Y antes de dar lectura diría que qué bueno que coincide lo que les voy a plantear con lo que vivimos

en, en la explanada de gobierno e inclusive aquí en el Congreso hace unas horas este, de la presencia de, la marcha del orgullo cimarrón y la, el Rector de la, nuestra Máxima Casa de Estudios, de mi Alma Mater.

Los suscritos Diputados MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ y JUAN MANUEL MOLINA GARCIA, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de MORENA, en uso de la facultad que nos confieren los artículos correspondientes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y los relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo con dispensa de trámite, por el cual, SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, A RENDIR UN INFORME POR ESCRITO A LOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA, RELATIVO A LOS ADEUDOS, CONVENIOS Y PAGOS REALIZADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA, ANTE LA COMISION DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN AMPLIADA A LOS 25 DIPUTADOS, PARA QUE EXPLIQUEN LAS MEDIDAS DE SOLUCIÓN QUE ESTÉN IMPLEMENTANDO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, ASÍ TAMBIEN, SE EXHORTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE RECONSIDERE Y VIGILE EL ACTUAR DEL PATRONATO UNIVERSITARIO, QUE HABÍAN EMITIDO UNA CONVOCATORIA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE CONVOCAR a POSTORES PARA OFERTAR OCHO INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE

MEXICALI Y TIJUANA. BAJA CALIFORNIA, PATRIMONIO DE DICHA INSTITUCIÓN, Y EN SU CASO, SE ABSTENGAN DE FIRMAR ESCRITURA ALGUNA CON ESTE PROPÓSITO; ASI TAMBIEN AL PATRONATO UNIVERSITARIO, CONSEJO UNIVERSITARIO Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENAJENAR BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN, PARA QUE NO SE RECIBAN CANTIDADES POR ESTE CONCEPTO. Y POR ÚLTIMO, EXHORTO AL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE NO EXPIDAN ESCRITURAS CON MOTIVO DE ENAJENACIÓN DEL PARTIMONIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para los Diputados de nuestro Grupo Parlamentario, es de vital importancia garantizar una educación de calidad, sabemos de la calidad educativa que brinda la Universidad Autónoma de Baja California, fundada desde 1957, después de varios años de lucha para impulsar la educación superior en el Estado. Nuestra Máxima Casa de estudios, debe ser engrandecida ya que esta institución nodriza, ha generado distinguidos profesionistas en ámbitos nacionales e internacionales, orgullo cimarrón, al haber obtenido reconocimientos a nivel internacional, al ser el 100 por ciento acreditados sus programas educativos y entrar en el ranking de 2019, de la empresa Times Higher Education, este logro, es avalado por organismos nacionales y extranjeros que revisan a las instituciones de educación superior. La UABC, se posiciona dentro de las 600 mejores universidades a nivel mundial en ciencias de la vida, entre las 800 mejores en ciencias físicas y las 1000 mejores

evaluadas en forma general, actualmente ocupa el primer lugar a nivel nacional entre las universidades públicas estatales por el porcentaje de programas educativos acreditados, el indicador más importante que utiliza la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, para nadie resulta desconocido, que la Administración Estatal se encuentra en una situación financiera, sin precedentes, misma que ha generado una serie de atrasos en el cumplimiento de diversas obligaciones y convenios, resultando perjudicadas principalmente instituciones como nuestra máxima casa de estudios, hecho que desde todos los puntos de vista es lamentable ya que atenta contra nuestros jóvenes estudiantes y por lo tanto, requiere de una solución inmediata y eficiente. La última actualización pública de la deuda del Gobierno del Estado con la UABC, al 27 de septiembre, señala un monto de 1,597.4 millones de pesos que se le adeudan, lo cual sin duda pone en un serio riesgo la operación óptima de nuestra máxima casa de estudios, al grado que el pasado 23 de abril la Universidad comenzó a trabajar bajo protesta, acto que no debemos pasar por alto, ya que sin duda alguna pone de manifiesto lo delicado de la situación. Si bien, la Universidad continúa con sus operaciones de forma normal, debemos atender y exigir al Gobierno del Estado resuelva este problema en calidad de urgente, para evitar un daño irreversible en los planes y programas de la Institución Universitaria. Es preciso recordar que el Gobierno del Estado se comprometió a la entrega de los recursos atrasados mediante la firma de un convenio fechado el 12 de marzo del presente año, mediante el cual se garantizó que se pudiera llevar a cabo con

normalidad y cumplir con la matrícula prevista para el próximo ciclo escolar, mismo que estuvo en riesgo, ante el atraso o incumplimiento del acuerdo mencionado.

Quiero precisar y solicitando que se redacte íntegro en el diario de los debates y en la gaceta parlamentaria el contenido íntegro de este punto de acuerdo y para obviar el tiempo, porque es de nosotros conocido y la presencia del Rector de la UABC el día de hoy lo hizo más patente, que la Universidad está en una seria situación financiera que de ninguna manera justifica, y lo hemos precisado también, la enajenación de bienes patrimoniales de la Universidad que es materia de otro análisis; pero que agradecemos, reconocemos y felicitamos la decisión del Rector de haber solicitado junto con el Contador de esa, de nuestra máxima casa de estudios, la suspensión de la convocatoria a la enajenación y subasta de bienes patrimoniales de nuestra máxima casa de estudios. Ese punto ya está logrado, a este momento; sin embargo, no la solución de su situación financiera que les aqueja y por la cual miles de estudiantes universitarios marcharon el día de hoy hasta la plaza de los tres Poderes de este, de este Centro Cívico. No nos queda la menor duda que necesita la Universidad inmediata atención y por esa razón se expide este exhorto para el Gobernador del Estado, ya que el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador expresó de manera clara que no se le adeudan cantidades económicas al Gobierno del Estado destinados a la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, el problema lo tenemos aquí, la razón de esa carencia está aquí y por eso pedimos este punto de acuerdo:

PRIMERO. – ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, A RENDIR INFORME POR ESCRITO A LOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA, RELATIVO A LOS ADEUDOS, CONVENIOS Y PAGOS REALIZADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA, ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y LA DE FISCALIZACIÓN AMPLIADA A LOS 25 DIPUTADOS, PARA QUE EXPLIQUEN LAS MEDIDAS DE SOLUCIÓN QUE ESTÉN IMPLEMENTANDO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE NO SE EJECUTE LA VENTA DE LOS INMUEBLES PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD Y SE ABSTENGA DE FIRMAR ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD, NI RECIBAN CANTIDAD ALGUNA POR ESE CONCEPTO, Y QUE SE DETENGA, COMO YA PRECISÉ, SE DETUVO; PERO PARA QUE NO SE VUELVA A REITERAR, E INICIE UNA REVISIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ACTUAR DEL PATRONATO UNIVERSITARIO, AL REALIZAR CONVOCATORIA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE CONVOCAR POSTORES PARA OFERTAR OCHO INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI Y TIJUANA. B. C, Y NO SE DILAPIDEN EL PATRIMONIO DE DICHA INSTITUCIÓN Y DE LOS UNIVERSITARIOS.

TERCERO: SE EXHORTA AL PATRONATO UNIVERSITARIO Y AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE

SE ABSTENGAN DE ENAJENAR BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN Y PARA QUE NO SE RECIBAN CANTIDADES POR ESTE CONCEPTO, QUE TIENDAN A DISMUIR SU HABER PATRIMONIAL.

CUARTO: SE EXHORTA AL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS NOTARÍAS ADCRITAS AL TERRITORIO DEL ESTADO PARA QUE NO CELEBREN ACTOS NI EXPIDAN ESCRITURAS TENDIENTES A LA ENAJENACIÓN DEL PARTIMONIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, POR EXISTIR PROHIBICIÓN EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE LA MISMA.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a la fecha de su presentación. Y firman, compañera Diputada MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. Su servidor, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, LEÍDO POR EL DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA XXIII LEGISLATURA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

P R E S E N T E.

Los suscritos Diputados MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ y JUAN MANUEL MOLINA GARCIA, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de MORENA, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los artículos 27

fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y los artículos 115, 119, 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, someto a consideración de esta Honorable Asamblea proposición de punto de acuerdo con dispensa de trámite, por la cual, SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO VEGA DE LA MADRID, AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, A RENDIR INFORME POR ESCRITO A LOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA, RELATIVO A LOS ADEUDOS, CONVENIOS Y PAGOS REALIZADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA, ANTE LA COMISION DE HACIENDA Y FISCALIZACION AMPLIADA A LOS 25 DIPUTADOS, PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS DE SOLUCIÓN QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, ASI TAMBIEN, SE EXHORTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE SE RECONSIDERE Y VIGILE EL ACTUAR DEL PATRONATO UNIVERSITARIO, AL REALIZAR CONVOCATORIA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE CONVOCAR POSTORES PARA OFERTAR OCHO INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI Y TIJUANA. B. C, PATRIMONIO DE DICHA INSTITUCIÓN, Y SE ABSTENGA DE FIRMAR ESCRITURA ALGUNA CON ESTE PROPOSITO; ASI TAMBIEN AL PATRONATO UNIVERSITARIO, CONSEJO UNIVERSITARIO Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENAJENAR BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION, PARA QUE NO SE RECIBAN CANTIDADES POR ESTE CONCEPTO, POR

ULTIMO EXHORTO AL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE NO EXPIDAN ESCRITURAS CON MOTIVO DE ENAJENACION DEL PARTIMONIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, ESTO AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para los diputados de nuestro Grupo Parlamentario, es de vital importancia garantizar una educación de calidad, sabemos de la calidad educativa que brinda la Universidad Autónoma de Baja California, fundada desde 1957, después de varios años de lucha para impulsar la educación superior en el estado. Nuestra Máxima Casa de estudios, debe ser engrandecida ya que esta institución nodriza, ha generado distinguidos profesionistas en ámbitos nacionales e internacionales, orgullo cimarrón, al haber obtenido reconocimientos a nivel internacional, al ser el 100 por ciento acreditados sus programas educativos y entrar en el ranking de 2019, de la empresa Times Higher Education, este logro, es avalado por organismos nacionales y extranjeros que revisan a las instituciones de educación superior. La UABC, se posesiona dentro de las 600 mejores universidades a nivel mundial en ciencias de la vida, entre las 800 mejores en ciencias físicas y las 1000 mejores evaluadas en forma general, actualmente ocupa el primer lugar a nivel nacional entra las universidades públicas estatales por el porcentaje de programas educativos acreditados, el indicador más importante que utiliza la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, para nadie resulta desconocido, que la Administración Estatal se encuentra en una situación financiera, sin precedentes, misma que ha generado

una serie de atrasos en el cumplimiento de diversas obligaciones y convenios, resultando perjudicadas principalmente instituciones como nuestra máxima casa de estudios, hecho que desde todos los puntos de vista es lamentable ya que atenta contra nuestros jóvenes estudiantes y por lo tanto, requiere de una solución inmediata y eficiente. La última actualización pública de la deuda del Gobierno del Estado con la UABC, del 27 de septiembre, señala un monto de 1,597.4 millones de pesos que se le adeudan, lo cual sin duda pone en un serio riesgo la operación óptima de nuestra máxima casa de estudios, al grado que el pasado 23 de abril la Universidad comenzó a trabajar bajo protesta, acto que no debemos pasar por alto, ya que sin duda alguna pone de manifiesto lo delicado de la situación. Si bien, la Universidad continúa con sus operaciones de forma normal, debemos atender y exigir al Gobierno del Estado resuelva este tema en calidad de urgente, para evitar un daño irreversible en los planes y programas de la Institución Universitaria. Es preciso recordar que el Gobierno del Estado se comprometió a la entrega de los recursos atrasados mediante la firma de un convenio fechado el 12 de marzo del presente año, mediante el cual se garantizó que se pudiera llevar a cabo con normalidad y cumplir con la matrícula prevista para el próximo ciclo escolar, mismo que estuvo en riesgo, ante el atraso o incumplimiento del acuerdo mencionado, ya que esta situación financiera llevo al rector a suspender la convocatoria de nuevo ingreso, realizándose con retardo debido a la incertidumbre económica. Cabe destacar que el Rector de la Universidad ha informado que han podido operar haciendo uso del fondo de contingencia que superaba los 350 millones de pesos,

mismo que ya se ha agotado. Ante la crisis de recursos por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), por la deuda que tiene el Gobierno del Estado con la institución, desde mayo de 2019, se planeó vender terrenos, reducir su matrícula y disminuir maestros, informó el presidente del Patronato Universitario. Gustavo de Hoyos Walther, deuda sí corresponde al Estado, pues estuvo en su presupuesto establecido por el Congreso local y ese dinero no se entregó, es una práctica que ha venido creciendo, señalo en su momento, el Presidente del Patronato Universitario.

Ahora bien, la UABC, con intención de hace frente a esta situación adversa, licita a través del Patronato universitario 8 inmuebles, procedimiento que se realiza a través del Comité para la Regulación de los Ingresos Propios de la UABC, mediante una subasta pública, nada clara, dado que dicho procedimiento de venta es contrario al procedimiento que se sigue en una subasta, ya que NO ESTABLECEN EN LA CONVOCATORIA EL PRECIO DE LA POSTURA LEGAL, lo que implica que no se tiene un precio base del que deba de partir el remate, dejando a la voluntad de los postores los precios que van a ofrecer por la compra, después el Comité decidirá, qué precio es el que les conviene, debido a que la convocatoria se establece lo siguiente, La Universidad se reserva el derecho de no asignar, en caso de que la oferta mayor no cubra los valores mínimos deseables, siendo esto contario a lo que en otras subastas, el patronato ha establecido pues, los valores que han determinado en otras convocatorias señalaban la Universidad se reserva el derecho de no asignar, en caso de que la oferta mayor no cubra los valores mínimos

razonables. Debemos de impedir que la UABC venda terrenos que son el patrimonio de los estudiantes. También cambiar leyes y ciertas disposiciones para que no vuelva a suceder que el Patronato de la UABC tome ese tipo de iniciativas. "No debemos permitir que se subasten esos bienes y se venda el patrimonio de los estudiantes. Es un hecho que el patrimonio de los estudiantes de la UABC no se deba de tocar." Es apremiante, realizar reformas con el objeto de regular los supuestos normativos que se señalan en la Ley Orgánica que rige a la Universidad, ya que esta data desde 1957, y contiene preceptos ambiguos, que generan contradicciones como lo es, el artículo 31, ya que de conformidad con dicho numeral, Los inmuebles que formando parte del patrimonio de la Universidad estén destinados a sus servicios serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y no podrá constituirse sobre ellos gravamen alguno de carácter estatal o municipal. De ahí, que el Patronato Universitario no debiera realizar venta alguna sobre cualquier predio, pues dentro del marco jurídico de la Universidad, no existe dispositivo alguno que expresamente faculte al Patronato a la venta de inmuebles, ni se establece en el artículo citado los supuestos en los cuales dichas ventas podrían realizarse.

Los ochos predios que se detallan en la página de internet www.uabc.mx/convocatorias/inmuebles, en la que también se encuentran las bases para la realización del mismo. Son los siguientes:

"

Ciudad	Descripción	Ubicación	Superficie	Tipo	Clave Catastral
Mexicali	Dos polígonos (A y B)	Av. Castellón y río Nuevo, Col. Río Nuevo.	27,720.61 m2 y 58,390.93 m2 respectivamente	Urbano	RN-500-000 y RN-600-000

					respectivamente
Mexicali	Lotes 13 al 17	Calle Río Mocorito y Monclova, Ex Ejido Coahuila	4,701 m2 total	Urbano	EC-020-013 al 017
Mexicali	Lote Calle "D"	Calle D No. 470, Colonia Segunda Sección.	675 m2	Urbano	SS-065-032
Mexicali	Predio Heriberto Jara	Terreno al Sur de la Colonia Progreso, Delegación Progreso	96 hectáreas	Rústico	RU-004-923
Mexicali	Casa habitación	Atenas No. 153, Fraccionamiento Villa fontana	614.35 m2 y construcción 240 m2	Urbano	VF-070-001
Tijuana	Dos Condominios INFONAVIT (A1 y B1)	Avenida Paseo del Centenario, Condominios Zona Río	155 m2 cada uno	Urbano	RG-903-001 y RG-903-031
Tijuana	Lotes 6,11 y 12	Calle Leona Vicario, Zona río.	3,731.25 m2 el total	Urbano	RG-076-006
Tijuana	Edificio y terreno (CUPIS)	Garibaldi No. 3230 Colonia Juárez	7,000 m2	Urbano	JU-022-001

Cabe agregar, que entre los bienes que se pretende vender se encuentran el CUPIS, (Centro Universitario de Posgrado e Investigación en Salud), este es un edificio en la Juárez, en el cual se encontraba la Escuela Preparatoria de la UABC y posteriormente COBACH, en los años ochenta y el cual albergo en sus inicios a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en agosto de 1986, que contaba con cuatro licenciaturas: Lengua y Literatura Inglesas, Lengua y Literatura de Hispanoamérica, Historia, y Filosofía; CUPIS es una clínica de Odontología que apoya

a gente de escasos recursos y aun cuando cobran cuotas de recuperación, sus precios son muy económicos ya que en un consultorio privado, una endodoncia cuesta alrededor de 360 dólares, en CUPIS el costo es de entre 450 y 500 pesos. Además organiza programas de salud comunitaria de primer nivel (prevención), con charlas sobre el cuidado dental en escuelas, asilos y orfanatos. Otros son los terrenos que son utilizados para colocar módulos de Sorteos para el pago de los boletos, ubicados en la zona rio a una calle del CECUT, atrás de Bancomer, por lo tanto, al encontrarse en uno de los supuestos, previstos en el citado dispositivo, cuentan con el carácter de inalienables.

Por lo que es necesario cumplir con la obligación que tenemos como diputados, de exigir a las autoridades Estatales nos informen detalladamente la situación que prevalece al respecto, no sólo de las actuaciones y gestiones presentes, sino del manejo de los últimos años de este problema en la UABC, y retomando las palabras del Rector Dr. Daniel Valdez "no hay Universidad que resista un adeudo de mil millones". Por la realización plena del hombre, sigamos siendo parte de la grandeza de esta institución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicito la dispensa del trámite del presente acuerdo, toda vez que a partir del día 09 de octubre del presente año, en los casos que esta Universidad considere conveniente vender, se notificará a las personas que hayan presentado las mejores propuestas para cada inmueble.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. – ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID, AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, A RENDIR INFORME POR ESCRITO A LOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA, RELATIVO A LOS ADEUDOS, CONVENIOS Y PAGOS REALIZADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA, ANTE LA COMISION DE HACIENDA Y FISCALIZACION AMPLIADA A LOS 25 DIPUTADOS, PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS DE SOLUCIÓN QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE NO SE EJECUTE LA VENTA DE LOS INMUEBLES PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD, SE ABSTENGA DE FIRMAR ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD, NI RECIBA CANTIDAD ALGUNA POR ESE CONCEPTO, Y QUE DETENGA E INICIE UNA REVISION E INVESTIGACION DEL ACTUAR DEL PATRONATO UNIVERSITARIO, AL REALIZAR CONVOCATORIA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE CONVOCAR POSTORES PARA OFERTAR OCHO INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI Y TIJUANA. B. C, Y NO SE DILAPIDEN EL PATRIMONIO DE DICHA INSTITUCIÓN Y DE LOS UNIVERSITARIOS.

TERCERO: SE EXHORTA AL PATRONATO UNIVERSITARIO Y AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENAJENAR BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION Y

PARA QUE NO SE RECIBAN CANTIDADES POR ESTE CONCEPTO, QUE TIENDAN A DISMUIR SU HABER PATRIMONIAL.

CUARTO: SE EXHORTA AL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS NOTARIAS ADCRITAS AL TERRITORIO DEL ESTADO PARA QUE NO CELEBREN ACTOS NI EXPIDAN ESCRITURAS TENDIENTES A LA ENAJENACION DEL PARTIMONIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a 10 de octubre de 2019

LIC. MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ

D I P U T A D A

LIC. JUAN MANUEL MOLINA GARCIA

D I P U T A D O

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada, Diputado, perdón. Se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo; se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite. Solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse

manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes Presidente en funciones.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada, quería hacer uso de la voz Diputada Julia, adelante.

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Así es, si me lo permiten los Diputados Monserrat y Juan Molina, unirme a su exhorto a esta proposición, porque todos somos cimarrones y vamos por una universidad gratuita, digna, democrática para todos, los felicitos Diputados.

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: De igual manera.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien.

- LA C. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: De igual manera.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien, si no tienen inconveniente pues yo creo que todos Diputados, si, muy bien, entonces nos sumamos todos a la iniciativa de nuestros compañeros, ahora vamos abrir el debate de la proposición, pregunto Diputados si desean intervenir, si no hay alguna otra intervención, voy a solicitar a la Secretaria Escrutadora someta a votación económica la proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la proposición presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Secretaria Escrutadora se declara aprobada la proposición leída por el Diputado Juan Molina, concedemos el uso de la voz al Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona, para presentar su proposición.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Gracias Diputada Presidenta en funciones. Rodrigo Anibal Otañez Licona, Diputado por el Partido de Baja California, en uso de las facultades conferidas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I y 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante esta H. Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE QUE EXHORTA A LOS 4 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN EL CONTAR CON UN ÓRGANO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN, Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA.

El inicio de una administración municipal, siempre será visto por la ciudadanía como una nueva oportunidad de lograr los cambios que permitan elevar el nivel de bienestar dentro de una sociedad.

Por lo tanto, los cabildos que dieron inicio el pasado primero de octubre tienen una serie de retos y obligaciones al cumplir, que podrán tal vez ser distintos en cada uno

de los municipios, sin embargo, tienen un objetivo en común, realizar el mejor posible su labor, y llevar los servicios al mayor número de personas.

Uno de estos servicios es el de movilidad urbana, que no solo comprende a las personas en el uso del transporte público, sino también su traslado en vehículos privados, en vehículos no motorizados y evidentemente los peatones.

Un cambio de política en movilidad urbana, no solo requiere romper con vicios, y obstáculos, sino de realizar un cambio de paradigma, donde los principales sean la ciudadanía, todo esto alrededor de la movilidad, todos los funcionarios municipales, desde el Presidente o Presidenta Municipal, hasta los niveles de menor jerarquía, deberán de entender estos conceptos.

Siendo necesario, que un órgano rector especializado en movilidad, sea el encargado de diseñar y aplicar las políticas municipales en materia de movilidad urbana.

La ONU a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Estudio denominado "Políticas de Logística y Movilidad" sostienen que:

"…es obligación indeclinable del Estado asegurar la accesibilidad de su población a servicios de transporte con una calidad razonable, a precio alcanzable en un costo aceptable para la comunidad… El concepto de la movilidad, por lo tanto, se refiere a la provisión de servicios que resuelvan eficientemente las distintas necesidades de transporte de cada segmento de la población que de forma digna, oportuna, confiable, eficiente, segura y sostenible."

Como podemos advertir, para lograr establecer políticas públicas de movilidad, se requiere de contar con dos elementos indispensables, el primero un marco normativo en la materia, que por cierto el día de hoy se avanzó y segundo, un organismo especializado y responsable de diseñar, y ejecutar las nuevas políticas de movilidad.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Diputado me permite un minuto, falta un Diputado, ahorita que regrese la Diputada, un minuto, ya nos quedan 20 minutos Diputados, espérense poquito, adelante Diputado y gracias Diputado.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: En este sentido, debemos reconocer que en el Municipio de Tijuana se han dado pasos importantes, al contar con una Secretaria de Movilidad Urbana Sustentable, la cual se debe mantener y fortalecer.

Así mismo se considera que para lograr los objetivos que se plantean, se debe avanzar en el resto de los Ayuntamientos hacia la transición de un organismo rector en materia de movilidad, ya sea Secretaria, Dirección o cualquier otra denominación que determine cada Cabildo.

Por lo antes expuesto, Compañeras y Compañeros, pongo a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE:

ÚNICO. - QUE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA GIRE UN ATENTO EXHORTO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES: MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA

PRESIDENTA MUNICIPAL DE MEXICALI, ARMANDO AYALA ROBLES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO PRESIDENTA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO Y OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECATE, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL CONTAR CON UN ÓRGANO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN, Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" A LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA, gracias Presidenta.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, LEÍDO POR EL DIPUTADO RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA)

Dip. Catalino Zavala Márquez.

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Baja California;

RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA, Diputado por el Partido de Baja California, en uso de las facultades conferidas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 110 fracción I, 112, 115

fracción I y 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante esta H. Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE QUE EXHORTA A LOS 5 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN EL CONTAR CON UN ÓRGANO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN, Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El inicio de una nueva administración municipal, siempre será vista por la ciudadanía como una nueva oportunidad de lograr los cambios que permitan elevar el nivel de bienestar dentro de una sociedad.

Por lo tanto, los cabildos que dieron inicio el pasado primero de octubre tienen una serie de retos y obligaciones que cumplir, que podrán tal vez ser distintos en cada uno de los municipios, sin embargo, tienen un objetivo en común, realizar lo mejor posible su labor, y llevar los servicios al mayor número de personas.

Uno de estos servicios es el de movilidad urbana, que no solo comprende a las personas en el uso del transporte público, sino también su traslado en vehículos privados, en vehículos no motorizados y evidentemente el peatón.

Un cambio de política en movilidad urbana, no solo requiere romper con vicios, y obstáculos, sino de realizar un cambio de paradigma, donde los principios fundamentales de una nueva política, sea implementada por todos los funcionarios

municipales, desde el Presidente o Presidenta Municipal, hasta los niveles de menor jerarquía.

Siendo necesario, que un órgano rector especializado en movilidad, sea el encargado de diseñar, y aplicar las políticas municipales en materia de movilidad urbana.

La ONU a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Estudio denominado "Políticas de Logística y Movilidad" sostienen que:

"…es una obligación indeclinable del Estado asegurar la accesibilidad de su población a servicios de transporte con una calidad razonable, a precio alcanzable a todo ciudadano, y por un costo aceptable para la comunidad… El concepto de la movilidad, por lo tanto, se refiere a la provisión de servicios que resuelvan eficientemente las distintas necesidades de transporte de cada segmento de la población de una forma digna, oportuna, confiable, eficiente, segura y sostenible."

Como podemos advertir, para lograr establecer políticas públicas de movilidad, se requiere de contar con dos elementos indispensables, el primero un marco normativo en la materia, y segundo un organismo especializado y responsable de diseñar, y ejecutar las nuevas políticas de movilidad.

En este sentido, debemos reconocer que en el Municipio de Tijuana se han dado pasos importantes, al contar con una Secretaria de Movilidad Urbana Sustentable, la cual se debe mantener y fortalecer por la administración municipal entrante.

Así mismo se considera que para lograr los objetivos que se plantean, se debe avanzar en el resto de los Ayuntamientos hacia la transición de un organismo rector

en materia de movilidad, ya sea Secretaria, Dirección o cualquier otra denominación que determine cada Cabildo.

Por lo antes expuesto, Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE para quedar como sigue:

ÚNICO. - QUE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA GIRE UN ATENTO EXHORTO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES: MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MEXICALI, ARTURO GONZÁLEZ CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA, ARMANDO AYALA ROBLES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO PRESIDENTA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO Y OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECATE, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL CONTAR CON UN ÓRGANO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN, Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" A LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA.

(SE CONCLUYE PROPOSICIÓN)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Gracias Diputado, se declara abierto el debate de la dispensa del Acuerdo, se pregunta Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, si no hay ningún inconveniente, voy a solicitar a la Diputada Secretaria, someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de tramite presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarse levantando su mano; por unanimidad de los presentes.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada, se declara abierto el debate de la Proposición, pregunto Diputados si desean intervenir en contra de la misma, si no hay intervenciones, solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la Proposición presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias se declara aprobada la proposición leída por el Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona. Concedemos el uso de la voz al Diputado Luis Moreno Hernández, a nombre propio y en representación de transformemos por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transporte, adelante Diputado.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Muchas gracias compañera Diputada, Diputados y Diputadas muy buenas tardes, por obviedad de tiempo porque ha sido

una sesión larga donde se han debatido y presentado temas muy importantes la vida política de nuestro Estado, voy a resumir el tiempo y explicando de manera, quiero que sea mena en el sentido de este exhorto, solicitándole primero de la Mesa Directiva si tiene a bien insertar íntegramente en el diario de los debates el documento presentado y que me cuesta un poco hablarlo un exhorto a la Secretaria de comunicaciones y transporte, toda vez que se trata una atenta petición de un tema que todos, sobre todo los que venimos en la zona costa hemos sido testigos y de que estoy hablando de la infinidad de accidentes que habido en la rumorosa de camiones de carga, prácticamente quienes venimos de otras ciudades, no hay viaje que no veamos, algún camión que lleve transporte, que lleve carga quiero decir que este volteado, y hace pocos días supimos ya de un fallecimiento de un trabajador de FIARUM al ver bajar un camión quiso correr pero no alcanzo a huir y lamentablemente el camión le cayo encima y la persona perdió la vida, un joven por cierto trabajador, por esa razón, por la vida, por la perdida de vidas humanas por las lamentables perdidas que existen también que es menos importante económicas por las empresas, por muchas otras personas que a diario conducen y que pueden ser también victimas de algún descuido, es que yo le estoy presentando esta petición a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte para que pongan una estación de pesaje en la rumorosa, no hay carreteras en el mundo, en las condiciones como en la rumorosa, no existe una estación de peso, quienes han tenido la oportunidad a lo largo del país y seguramente en otras partes del mundo y de países desarrollados, se darán cuenta que siempre hay camiones esperando para ser pesados y que se

revisen los frenos, por alguna razón que desconozco, no la hay y es un buen momento para prevenir y que esta Legislatura pueda mandar a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, como ya lo dije una atenta solicitud, de que comiencen los estudios para que antes de que comience la zona descendiente, esa gran pendiente llena de curvas se pueda establecer esa zona de pesaje, ya sea basculas o ya sea una estación de pesaje, lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decida, tengo datos y tengo estadísticas que obviare en este momento, creo que están insertos en el documento que todas y todos ustedes ya tienen acceso y de nuevo solicitarle y darles las gracias y solicitarle tenga a bien apoyar esta propuesta, pues se trata de la vida de muchas personas, la integridad y el patrimonio de muchas familias y también que es importante la cuestión de cuidar el patrimonio y finanzas de muchas empresas de carga en el Estado, muchas gracias y es cuanto.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, LEÍDO POR EL DIPUTADO LUIS MORENO HERNÁNDEZ)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

COMPAÑERAS DIPUTADAS

COMPAÑEROS DIPUTADOS:

Buenos días a todos:

El que suscribe, DIPUTADO LUIS MORENO HERNANDEZ, miembro integrante de esta H. Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del

Estado de Baja California, por el Partido "TRANSFORMEMOS", atento a lo previsto por los artículos 27 fracción I y 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Baja California, en relación con los artículos 110 fracción III, y 119, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea: "PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE, CUYO PROPÓSITO ES EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INGENIERO JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, CON LA FINALIDAD DE QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS A EFECTO DE REGULAR EL PESO Y DIMENSIONES DEL AUTOTRASPORTE DE CARGA QUE UTILIZAN LAS CARRETERAS DEL PAIS Y EN PARTICULAR AL TRAMO CONOCIDO COMO "LA RUMOROSA" BAJA CALIFORNIA, ESTO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE SE TRADUCEN EN PERDIDAS HUMANAS Y ECONOMICAS". Propuesta que someto al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contabilizó en todo el territorio nacional 16 mil 925 accidentes de tránsito donde al menos un camión de carga estuvo involucrado, un aumento del 10% respecto al año anterior. En 90% de los casos la responsabilidad del accidente se le atribuyó al conductor; 3% a una falla del vehículo; 2% a la mala condición del camino y en el 0.5% al peatón o algún pasajero.

En ese contexto es de resaltar que desgraciadamente en 246 accidentes con camión de carga se registraron víctimas fatales, un incremento de 3% respecto al 2016.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los daños materiales por accidentes de tránsito en carreteras durante 2017 son superiores a los mil millones de pesos.

Dicho lo anterior, en nuestro Estado, según datos del Instituto Mexicano del Transporte relativos al año 2017, se registraron un total de 377 accidentes arrojando un total de 83 personas fallecidas y 265 lesionados, ahora bien, del total, 119 accidentes con saldo de 24 personas fallecidas y 77 lesionados se dieron en el tramo Mexicali- Tijuana, aun mas especifico, en el estudio del Instituto, especifica contundentemente que en el tramo de "La Rumorosa", es decir del kilómetro 42 al 65.5, en el lapso de 2017, se registraron 42 colisiones de las cuales trágicamente perdieron la vida 6 personas y 7 resultaron lesionadas. El factor común de los accidentes de autotransporte de carga es la sobre peso y la velocidad que alcanzan las unidades al descender

por tramo en comento, como es frecuente constatar por los medios de comunicación que cubren este tema. No puedo pasar por alto que la carretera "La Rumorosa", en su descenso, es considerada por la Policía Federal de Caminos, como una de las 5 carreteras más peligrosas de todo el país.

Aunado a lo antes expuesto, exhibo ante ustedes, lo que con relación al peso de las unidades del autotransporte de carga que circulan por nuestra extensa red de carreteras, manifiesta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en relación a la revisión de la regulación del transporte de carga en México durante 2017, los límites de pesos y dimensiones para vehículos comerciales en México que aplica a vehículos que utilizan carreteras federales. Y que de las revisiones a la normatividad de aplicación, publicadas el 14 de noviembre de 2014 que entraron en vigor a mediados de enero de 2015, hoy en día aún vigentes, establece que los pesos máximos se determinan de acuerdo con las configuraciones de eje y rueda. El mayor peso de un tractocamión con remolque articulado es de 54 toneladas. El mayor vehículo doblemente articulado (conocido como "completo" o "full") está limitado a 75.5 toneladas (66.5 toneladas

más un peso adicional permitido de 1.5 toneladas por eje de dirección y 1.0 toneladas por eje estándar). La revisión hecha en 2014 a la norma redujo este límite máximo para los tractocamiones doblemente articulados a 80 toneladas, aun así, esta exagerada carga que oficialmente un camión de doble semirremolque puede transportar, son en promedio 24 toneladas más, en términos generales, a lo permitido en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ocasiona en los hechos, que solo en 2017 provocaron la perdida de cientos de vidas humanas así también un deterioro acelerado de la carpeta asfáltica que genera inversiones millonarias para su mantenimiento.

Reitero, la carretera "La Rumorosa" es de mucho cuidado por sus curvas, sus pendientes y sus vientos cruzados. Éstos hacen que cualquier distracción pueda resultar en un trágico accidente.

Compañeras y compañeros Diputados hoy les pido que tutelemos sobre todo la vida, la salud el patrimonio y la economía, que impulsemos este planteamiento para tener un México más prospero y sano y en particular no ver más seres humanos que pierden la vida en las carreteras de nuestra Entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, considero razón suficiente para proponer a esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Punto de Acuerdo con dispensa de trámite, para que se resuelva en esta misma sesión. Todo ello, en términos del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – SE APRUEBA POR ESTA VIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA "PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE, CUYO PROPÓSITO ES EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INGENIERO JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, CON LA FINALIDAD DE QUE

REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS A EFECTO DE REGULAR EL PESO Y DIMENSIONES DEL AUTOTRASPORTE DE CARGA QUE UTILIZAN LAS CARRETERAS DEL PAIS Y EN PARTICULAR AL TRAMO CONOCIDO COMO "LA RUMOROSA" BAJA CALIFORNIA, ESTO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE SE TRADUCEN EN PERDIDAS HUMANAS Y ECONOMICAS".

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García" al día de su presentación.

"Construyendo juntos un futuro diferente"

DIPUTADO. LUIS MORENO HERNÁNDEZ.
INTEGRANTE DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

(SE CONCLYE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO)

- EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ: Presidenta en funciones, me sumo a este proyecto.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante.

- EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ: Del Diputado Luis Moreno, que esta bien planteado Diputado, mis respetos y me sumo.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Gracias Diputado.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: De igual manera Diputado.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: De igual manera.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Yo creo que todos los presentes a bien, Diputados y Diputadas.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Bienvenidas, bienvenidas las adhesiones, les agradezco mucho la gentileza.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien, entonces por obvio no hay en contra, vamos, nada mas por formalidad Diputada Secretaria Escrutadora, se votará en lo económico la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarse levantando su mano; por unanimidad de los presentes Diputada Presidenta.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias y se declara abierto el debate de la proposición, pregunto Diputados si tiene interés en intervenir en la proposición, de no ser así pediría de una vez Diputada someta a votación económica la proposición.

LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la proposición presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes Diputada Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Se declara aprobada la proposición leída por el Diputado Luis Moreno Hernández. Voy a pedir a mis compañeras que tomen mi asiento para presentar una proposición, compañera.

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Diputadas y Diputados. En el Partido del Trabajo estamos siempre con la gente de Baja California, estamos siempre con las y los ensenadenses, quiero decirles con toda seguridad que el PT que está siempre con la gente para gestionar soluciones a sus problemas, desde esta Tribuna, hago presente esta problemática, que una servidora viene dando

seguimiento desde la Legislatura anterior que actualmente he estado llevando acabo gestiones con el Delegado en Baja California de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, cuyo resultado el día de hoy han quedado demostrados con la aprobación por parte del pleno de este Congreso, del Dictamen No. 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que agradezco el apoyo, en relación al Acuerdo económico que presente ante esta Soberanía con la finalidad de que el Gobierno del Estado en coordinación con el ayuntamiento de Ensenada, ponga de nueva cuenta a disposición de las y los ensenadenses una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores que atienda las citas para la tramitación de pasaportes, lo anterior resolverá la afectación económica provocada las y los ensenadenses que tienen que trasladarse hasta Tijuana para la tramitación de su pasaporte, esto en el mejor de los casos cuando no hay ninguna observación requerida, puesto que en caso contrario de no reunir alguno de los requisitos, tiene que regresar de nuevo para continuar con el tramite correspondiente, precisamente esta problemática es la que ahora pongo en alto desde esta Tribuna que refiere en ningún momento la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana, les informo y les aclaro a los usuarios que únicamente se reciben actas de nacimiento, dadas de alta en el sistema integral de impresión de actas, provocando con ello un gasto infructuoso y que de nueva cuenta tendrán que hacer en una posterior cita para poder obtener su pasaporte, lo anterior se traduce en un alto costo para la ciudadanía, por el hecho de que por ejemplo en el año 2017 se dieron mas de veinte

mil quinientas revisiones de documentación y expedición de casi 9 mil pasaportes mexicanos, esto cuando a un la oficina de enlace en Ensenada estaba abierta a la ciudadanía, en paralelo a la solución de esta problemática hago públicamente en este momento que estaré presentando una Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Baja California, para que las Oficialías del Registro Civil en los municipios tengan la facultad y atribución de dar de alta a las actas de nacimiento que se encuentran legalmente firmes en el sistema integran de impresión de actas y de no de menor importancia que se establezca que en ningún caso se cobrara por búsqueda de datos, esto junto con lo que exhortare mas adelante será un circulo virtuoso en favor de la economía de las y los bajacalifornianos, por lo anterior y fundamento a los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta Soberanía, someto a su consideración el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hace un sensible exhorto al Delegado en Baja California de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ismael Burgueño Ruiz, a que dentro del proceso de tramitación del pasaporte, se informe con anticipación al usuario, que únicamente serán aceptadas las actas de nacimiento que se encuentren dadas de alta en el Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA), con la finalidad de proteger la economía y el tiempo de las personas, en especial, de las que se trasladan de lugares lejanos a las Oficinas de Enlace para llegar a su cita de pasaporte, como es el caso de las y los Ensenadenses.

SEGUNDO.- La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hace un sensible exhorto al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, a que se plasme en la "Hoja de Requisitos para Pasaporte y Matrícula Consular" publicada en el portal de internet de la Secretaría a su cargo, la aclaración de que únicamente serán aceptadas las actas de nacimiento que se encuentren dadas de alta en el Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA) de la Secretaría de Gobernación.

Es cuanto y muchas gracias.

(SE INSERTA PUNTO DE ACUERDO, LEÍDO POR LA DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ)

DIP. CATALINO ZAVALA MARQUEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
XXIII LEGISLATURA
PRESENTE.-

La suscrita Diputada CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ, en representación de la ciudadanía y del PARTIDO DEL TRABAJO en la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado de Baja California, 110, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, hago uso de esta Tribuna para presentar PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO POR EL QUE SE EXHORTA AL DELEGADO EN BAJA CALIFORNIA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A QUE DENTRO DEL PROCESO DE TRAMITACIÓN DEL PASAPORTE, SE INFORME CON

ANTICIPACIÓN AL USUARIO, QUE ÚNICAMENTE SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS DE NACIMIENTO QUE SE ENCUENTREN DADAS DE ALTA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE IMPRESIÓN DE ACTAS (SIDEA), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Existe una afectación económica a las y los ensenadenses que tienen que trasladarse hasta Tijuana para la tramitación de su pasaporte, esto en el mejor de los casos cuando no hay ninguna observación en la documentación requerida, puesto que en caso contrario de no reunir alguno de los requisitos, tienen que regresar de nuevo para continuar con el trámite correspondiente, este es el caso de las personas que en ningún momento la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores les informó o aclaró que únicamente reciben actas de nacimiento dadas de alta en el Sistema Integral de Impresión de Actas, provocando con ello, un gasto infructuoso y que de nueva cuenta tendrán que hacer en una nueva cita para poder obtener su pasaporte.

Lo anterior se traduce en un alto costo para la ciudadanía, por el hecho de que por ejemplo en el año 2017, se dieron más de 20 mil quinientas revisiones de documentación y expedición de casi 9 mil pasaportes mexicanos, esto, cuando aún la Oficina de Enlace de Ensenada estaba abierta a la ciudadanía.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta Soberanía, someto a su consideración el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hace un sensible exhorto al Delegado en Baja California de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ismael Burgueño Ruiz, a que dentro del proceso de tramitación del pasaporte, se informe con anticipación al usuario, que únicamente serán aceptadas las actas de nacimiento que se encuentren dadas de alta en el Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA), con la finalidad de proteger la economía y el tiempo de las personas, en especial, de las que se trasladan de lugares lejanos a las Oficinas de Enlace para llegar a su cita de pasaporte, como es el caso de las y los Ensenadenses.

SEGUNDO.- La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hace un sensible exhorto al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, a que se plasme en la *"Hoja de Requisitos para Pasaporte y Matrícula Consular"* publicada en el portal de internet de la Secretaría a su cargo, la aclaración de que únicamente serán aceptadas las actas de nacimiento que se encuentren dadas de alta en el Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA) de la Secretaría de Gobernación.

Dado en el Recinto Parlamentario "Benito Juárez García" del edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a los 10 días del mes de octubre del 2019.

¡UNIDAD NACIONAL, TODO EL PODER AL PUEBLO!
A T E N T A M E N T E

DIPUTADA CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ
PARTIDO DEL TRABAJO

(SE CONCLUYE PROPOSICIÓN)

- LA C. SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Yo nada más me quiero sumar Diputada a su iniciativa por favor.

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Con todo gusto Diputada Loreto.

- LA C. SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Se somete a la votación económica, le pido a la Secretaria que somete la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes, se aprueba.

- LA C. SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la proposición presentada.

- EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ: Diputada, nada mas ahí como precisión, para corregir el nombre ya vez que no esta Ismael Burgueño al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nada más como punto.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Muy bien, se somete a votación económica la proposición presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes.

- LA C. SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Se declara aprobada la proposición leída por la Diputada Claudia Agatón Muñiz.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada, se le concede el uso de la voz a la Diputada Eva María Vásquez Hernández para presentar su proposición, adelante Diputada.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Gracias Diputada Presidenta en funciones, solicito se reproduzca el texto integro de la presente proposición en los instrumentos legislativos correspondientes.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Así se hará Diputada.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Gracias Diputada. La suscrita Eva María Vásquez Hernández, en mi calidad de Diputada de la Vigésima Tercera Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por lo establecido en el Artículo 110 fracción 111, 114, 119 y demás aplicables de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta tribuna, Proposición con Punto de Acuerdo Económico, relativa al tema PANTEONES MUNICIPALES, en razón de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera clara y categorica la Constitución Mexicana y la particular del Estado de Baja California distribuyen competencias a los ordenes de gobierno municipales en materia de funciones y servicios públicos de panteones.

Dicho servicio publico municipal requiere para su prestación de una infraestructura que cuente cuando menos, con fosas, tumbas o criptas para inhumación o re inhumación de cadáveres o restos humanos, fosa común para los cadáveres de personas desconocidas o no identificadas, así como de aquellas cuyos deudos sean indigentes, osario para el deposito de restos humanos áridos, capilla para celebrar actos religiosos para los usuarios, es decir, los deudos de las personas cuyos cadáveres se pretenden inhumar o cremar; calles, andadores, áreas verdes y redes de agua, drenaje y alumbrado.

El gran número de fallecimientos de personas que no pueden ser identificados o reclamadas por sus deudos ha propiciado una sobre saturación de fosas comunes. Esto es, ya no hay suficiente espacio para brindar una digna sepultura a estas personas, sumando ello al caso de quienes no cuentas, no pueden y no tienen para cubrir los elevados gastos funerarios de los servicios que existen.

Conforme las definiciones de acceso universal, se llama fosa común al lugar donde se entierran los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura por los propios o cercanos familiares. Las fosas comunes han sido, a lo largo de la humanidad, un método muy usado para disponer de los cadáveres de dos o más personas.

En recorridos y contactos directos de la suscrita con personas y servicios públicos vinculados con las necesidades derivadas de los fallecimientos, hemos encontrado esta lamentable necesidad de fosas cuya esfera de gestión tiene que ser necesariamente de interés público dentro de las prioridades que puede y que debe asumir esta Legislatura

Se hace necesario entonces, solicitar de los cinco Ayuntamientos de la entidad que realicen las gestiones necesarias y las autorizaciones correspondientes para aumentar la capacidad instalada de los cementerios y especialmente de las fosas comunes en aras de contar con una capacidad suficiente para la atención de las necesidades en esta materia.

El servicio de panteones, como así lo previene el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es plenamente una atribución de los Gobiernos Municipales, es por ello que respetuosamente y por resultar de su competencia específica, considero necesario tengan en cuanta esta necesidad y se vislumbren en consecuencia las siguientes bases:

1.- Evaluar la necesidad de nuevos espacios para fosas comunes.

2.- Particular atención en Municipio de Tijuana en donde por su densidad poblacional y su realidad territorial, se hace necesario una previsión de tierra para efectos de instalación de fosas.

3.- Las previsiones presupuestales y tramites gubernamentales correspondientes para la asignación de la tierra mas adecuada para estos fines.

4.- La gestión con el Gobierno del Estado de Baja California, así como con el Gobierno de la República para un eventual apoyo concreto con espacios físicos que pudieren albergar estos fines.

5.- Las autorizaciones previas de las autoridades sanitarias, los acuerdos de cabildo correspondientes a su establecimiento y particularmente que existan estas previsiones dentro de los planes aprobados y en los planos correspondientes a las áreas competentes en materia de obras públicas municipales.

En recientes fechas el Subprocurador de Justicia de Baja California, informó que 30 por ciento de los cuerpos que llegan al Semefo son enviados a la fosa común.

En Tijuana, continua la cita, las autoridades han cavado más de 60 fosas comunes para almacenar entre 6 y 30 cuerpos por fosa.

La sobresaturación de las fosas genera también conflictos jurídicos dado que, tratándose de personas no identificadas, existen procedimientos en donde se solicita por ejemplo la exhumación, que supone la existencia de indicios claros y probados de que una persona estará en una fosa en donde puede haber entre 6 y 30 personas.

Previamente quien quiere y obtiene una resolución de inhumación debe con cuidado revisar el denominado "Libro de los Muertos"…

Y esto es así ya que, como parte del proceso que deben seguir quienes buscan a un desaparecido, está la consulta de lo que se puede llamar este libro, que son hojas parecidas a las de un cuaderno escolar en el que se pegan fotografías.

Esta referencia que deriva de una nota de www.multimedios.com que fue publicada a nivel nacional y la expongo en la presente proposición para hacer referencia al lado humano de la necesidad de fosas comunes dentro de cementerios o panteones.

COMPAÑEROS DIPUTADOS:

Les pido respetuosamente su apoyo a la presente proposición a efecto de concretizar y lograr esta gestión ante las autoridades que han sido aquí referidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicitando se someta a consideración de esta Soberanía la DISPENSA DE TRÁMITE correspondiente, me permito presentar PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en los términos siguientes:

ÚNICO: "Con fundamento en el inciso e) Fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la fracción V, inciso B del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la XXIII Legislatura, remite atento y respetuoso exhorto a los Presidentes Municipales de los cinco Ayuntamientos en la entidad, a efecto de que tengan a bien

previa valoración y estudio de sus necesidades y realidades locales realizar las gestiones necesarias y las autorizaciones correspondientes para aumentar la capacidad instalada de los cementerios y especialmente de las fosas comunes en aras de contar con una capacidad suficiente para la atención de las necesidades en esta materia."

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

ATENTAMENTE

"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos"

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Eva María Vásquez Hernández

Coordinadora.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, LEÍDO POR LA DIPUTADA EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ)

DIP. CATALINO ZAVALA MARQUEZ
Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo
Presente:

La suscrita EVA MARIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en mi calidad de Diputada; con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por lo establecido en el Artículo 110 fracción III, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta tribuna, Proposición con Punto de Acuerdo Económico, relativa al tema PANTEONES MUNICIPALES, en razón de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera clara y categórica la Constitución Mexicana y la particular del Estado de Baja California distribuyen competencias a los órdenes de gobierno municipales en materia de funciones y servicios públicos de panteones.

Dicho servicio público municipal requiere para su prestación de una infraestructura que cuente cuando menos, con fosas, tumbas o criptas para inhumación o re inhumación de cadáveres o restos humanos; fosa común para los cadáveres de personas desconocidas o no identificadas, así como de aquellas cuyos deudos sean indigentes; osario para el depósito de restos humanos áridos; capilla para celebrar actos religiosos de los usuarios, es decir, los deudos de las personas cuyos cadáveres se pretenden inhumar o cremar; calles, andadores, áreas verdes, y redes de agua, drenaje y alumbrado.

El gran número de fallecimientos de personas que no pueden ser identificadas o reclamadas por sus deudos ha propiciado una sobre saturación de fosas comunes. Esto es, ya no hay suficiente espacio para brindar una digna sepultura a estas personas, sumando ello al caso de quienes no cuentan, no pueden y no tienen para cubrir los elevados gastos funerarios de los servicios que existen en la actualidad.

Conforme las definiciones de acceso universal, se llama fosa común al lugar donde se entierran los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura propia. Las fosas comunes han sido, a lo largo de la humanidad, un método muy usado para disponer de los cadáveres de dos o más personas.

Así también, desde la antigüedad, las fosas comunes se utilizaron y pueden emplearse en caso de catástrofes naturales y epidemias cuando existe riesgo de

contagios masivos. Durante la época de la peste negra, por ejemplo, se abrieron fosas comunes para contener los cadáveres de los infectados con este mal.

En algunos pueblos, aún persiste la tradición de contar con una fosa común en los cementerios para enterrar los cadáveres de las personas no identificadas y/o no reclamadas.

Ante esta adversidad, en recorridos y contactos directos de la suscrita con personas y servidores públicos vinculados con las necesidades derivadas de los fallecimientos, hemos encontrado esta lamentable necesidad de fosas cuya esfera de gestión tiene que ser necesariamente de interés público dentro de las prioridades que puede y que debe asumir esta Legislatura.

Se hace necesario entonces, solicitar de los cinco Ayuntamientos de la entidad, realicen las gestiones necesarias y las autorizaciones correspondientes para aumentar la capacidad instalada de los cementerios y especialmente de las fosas comunes en aras de contar con una capacidad suficiente para la atención de las necesidades en esta materia.

El servicio de panteones, como así lo previene el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es plenamente una atribución de los Gobiernos Municipales, es por ello que respetuosamente y por resultar de su competencia específica, considero necesario tengan en cuanta esta necesidad y se vislumbren en consecuencia las siguientes bases:

1.- Evaluar la necesidad de nuevos espacios para fosas comunes.

2.- Particular atención en Municipio de Tijuana en donde por su densidad poblacional y su realidad territorial, se hace necesario una previsión de tierra para efectos de instalación de fosas.

3.- Las previsiones presupuestales y tramites gubernamentales correspondientes para la asignación de la tierra más adecuada para estos fines.

4.- La gestión con el Gobierno del Estado de Baja California, así como con el Gobierno de la República, para un eventual apoyo concreto con espacios físicos que pudieren albergar estos fines.

5.- Las autorizaciones previas de las autoridades sanitarias, los acuerdos de cabildo correspondientes a su establecimiento y particularmente que existan estas previsiones dentro de los planes aprobados y en los planos correspondientes a las áreas competentes en materia de obras públicas municipales.

En recientes fechas el Subprocurador de Justicia de Baja California, informó que 30 por ciento de los cuerpos que llegan al Semefo son enviados a la fosa común.

En Tijuana, continua la cita, las autoridades han cavado más de 60 fosas comunes para almacenar entre 6 y 30 cuerpos por cada hoyo.

La sobresaturación de las fosas genera también conflictos jurídicos dado que, tratándose de personas no identificadas, existen procedimientos en donde se solicita por ejemplo la exhumación, que supone la existencia de indicios claros y probados de que una persona estará en una fosa en donde puede haber entre 6 y 30 cuerpos

Previamente quien quiere y obtiene una resolución de inhumación debe con cuidado revisar el denominado "Libro de los Muertos"…

Y esto es así ya que, como parte del proceso que deben seguir quienes buscan a un desaparecido, está la consulta de lo que se puede llamar El Libro de los Muertos, que son hojas parecidas a las de un cuaderno escolar en el que se pegan fotografías (o, según algunos, fotocopias) de personas fallecidas sin identificar.

Esta referencia que deriva de una nota de www.multimedios.com que fue publicada a nivel nacional y la expongo en la presente proposición para hacer referencia al lado humano de la necesidad de fosas comunes dentro de cementerios o panteones.

SEÑORES DIPUTADOS:

Les pido respetuosamente su apoyo a la presente proposición a efecto de concretizar y lograr esta gestión ante las autoridades que han sido aquí referidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicitando se someta a consideración de esta Soberanía la DISPENSA DE TRÁMITE correspondiente, me permito presentar PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en los términos siguientes:

ÚNICO: "Con fundamento en el inciso e) Fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la fracción V, inciso B del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la XXIII Legislatura, remite atento y respetuoso exhorto a los Presidentes Municipales de los cinco Ayuntamientos de la entidad, a efecto de que tengan a bien previa valoración y estudio de sus necesidades y realidades locales realizar las gestiones necesarias y las autorizaciones correspondientes para aumentar la capacidad instalada de los cementerios y especialmente de las fosas comunes en aras de contar con una capacidad suficiente para la atención de las necesidades en esta materia."

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

ATENTAMENTE

"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos"

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Eva María Vásquez Hernández

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

(SE CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se

pregunta Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así, solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantado su mano; por unanimidad de los presentes.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma, adelante Diputado.

- EL C. DIP. MIGUAL ÁNGEL BUJANDA RUIZ: No en contra solo reiterar si me permite sumarme a la propuesta, es algo muy sensible por experiencia en el distrito que me toco estar en campaña, nos toco saber de una persona que fue este enterrada como es conocido, y después este hubo inicios de que se presumía que el era el que estaba ahí y le cobraban un dineral para exhumarlo, entonces si tenemos que ampliar el tema y pues que me permita la oportunidad de sumarme en algo tan sensible como esto, gracias.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Diputada Carmen Hernández y después la Diputada Loreto.

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Sumarme también Eva, es algo necesario de reforzar y creo que la sensibilidad que tenemos por el tema, tenemos que reforzar, gracias.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: También Diputada sumarme ya que también los de Tijuana sabemos que hay muchos problemas por los espacios.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Si no hay alguna otra intervención, voy a solicitar a la Diputada Secretaria someta a votación económica la proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la proposición presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes Diputada.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muchas gracias se declara aprobada la proposición leída por la Diputada Eva María Vásquez Hernández, tiene el uso de la voz la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, para presentar su proposición y es la última de este apartado, pasamos después a los posicionamientos.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Diputado Catalino Zavala Márquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

EVA GRICELDA RODRÍGUEZ, en lo personal y en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de esta XXIII Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción III, 114 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante la Honorable Asamblea del Congreso del Estado, PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO CON DISPENSA DE

TRÁMITE, en el que se hace un atento EXHORTO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, PARA QUE SE REALICEN INMEDIATAMENTE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN AL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y PARA QUE EN LO SUCESIVO DICHAS TRANSFERENCIAS SE EFECTÚEN EN LAS FECHAS PREVISTAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Por medio de oficio de fecha 4 de octubre del año en curso, recibido el día 7 del mismo mes y año, la Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, informó a este Congreso que el Ejecutivo del Estado de Baja California ha retrasado, a la fecha del oficio, hasta en 53 días naturales, la transferencia de recursos que corresponden al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California por diversos conceptos que suman el importe de $211,255,706.37 Pesos.

SEGUNDA.- Los servicios públicos y tareas que tienen encomendados los Municipios del Estado tienen una muy relevante importancia para sus habitantes, por lo que deben prestarse ininterrumpidamente con calidad y eficacia, lo que exige contar con los flujos de efectivo suficientes y con oportunidad, cuestión que de ninguna manera se logra si se presentan incumplimientos a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California como el denunciado por la Presidenta Municipal de Mexicali.

TERCERA.- La delicada situación financiera de los Municipios del Estado, les ha generado toda clase de complicaciones administrativas, muy especialmente la Auditoría Superior del Estado ha encontrado en sus revisiones que las Tesorerías Municipales han dispuesto de recursos que están etiquetados para un fin específico y los han utilizado para atender las urgencias del gasto corriente. Esto es una irregularidad injustificable que a su vez genera en las administraciones municipales un ambiente de falta de control y permisividad que permea a muchas de sus áreas administrativas. Sin embargo, en parte tiene su explicación en situaciones como la expuesta por la Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, en las que el retraso en la transferencia de recursos por parte del Ejecutivo, y la conveniencia de evitar el pago de recargos y comisiones en financiamientos contraídos, llevan a tomar este tipo de decisiones.

CUARTA.- Por la naturaleza y alcance de la problemática expuesta estimo conveniente y propongo que esta H. Legislatura se pronuncie al respecto y exhorte al Gobernador del Estado de Baja California para que inmediatamente se transfieran al Ayuntamiento de Mexicali los recursos que le corresponden y se encuentren pendientes de entregarle; así como que en lo sucesivo se realicen dichas transferencias en las fechas establecidas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, propongo a esta respetable Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La H. XXIII Legislatura del Estado de Baja California, exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID para que realice lo conducente a fin de que INMEDIATAMENTE se transfieran al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, los recursos que le corresponden por diversos conceptos que se encuentran pendientes de entregarle por el Ejecutivo del Estado, por el importe de $211,255,706.37 Pesos.

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID a que gire sus instrucciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, para que en lo subsecuente transfiera al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California los recursos que le corresponden en las fechas preestablecidas.

TERCERO.- Se solicita al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, que en el término de tres días informe por escrito a este Congreso los motivos del retraso en la transferencia de recursos al Municipio de Mexicali, así como los conceptos, montos y días de atraso que en su caso tuviera la transferencia de recursos a los demás Municipios del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García", en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del mes octubre del año 2019.

FIRMA: DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, LEÍDO POR LA DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA.

EVA GRICELDA RODRÍGUEZ, en lo personal y en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en esta XXIII Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción III, 114 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante la Honorable Asamblea del Congreso del Estado, PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE, en el que se hace atento EXHORTO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, PARA QUE SE REALICEN INMEDIATAMENTE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN AL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y PARA QUE EN LO SUCESIVO DICHAS TRANSFERENCIAS SE EFECTÚEN EN LAS FECHAS PREVISTAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Por medio de oficio de fecha 4 de octubre del año en curso, recibido el día 7 del mismo mes y año, la Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, informó a este Congreso que el Ejecutivo del Estado de Baja California ha retrasado, a la fecha del oficio, hasta en 53 días naturales, la transferencia de recursos que corresponden al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California por diversos conceptos que suman el importe de $211,255,706.37 Pesos.

SEGUNDA.- Los servicios públicos y tareas que tienen encomendados los Municipios del Estado tienen una muy relevante importancia para sus habitantes, por lo que deben prestarse ininterrumpidamente con calidad y eficacia, lo que exige contar con los flujos de efectivo suficientes y con oportunidad, cuestión que de ninguna manera se logra si se presentan

incumplimientos a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California como el denunciado por la Presidenta Municipal de Mexicali.

TERCERA.- La delicada situación financiera de los Municipios del Estado, les ha generado toda clase de complicaciones administrativas, muy especialmente la Auditoría Superior del Estado ha encontrado en sus revisiones que las Tesorerías Municipales han dispuesto de recursos que están etiquetados para un fin específico y los han utilizado para atender las urgencias del gasto corriente. Esto es una irregularidad injustificable que a su vez genera en las administraciones municipales un ambiente de falta de control y permisividad que permea a muchas de sus áreas administrativas. Sin embargo, en parte tiene su explicación en situaciones como la expuesta por la Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, en las que el retraso en la transferencia de recursos por parte del Ejecutivo, y la conveniencia de evitar el pago de recargos y comisiones en financiamientos contraídos, llevan a tomar este tipo de decisiones.

CUARTA.- Por la naturaleza y alcance de la problemática expuesta estimo conveniente y propongo que esta H. Legislatura se pronuncie al respecto y exhorte al Gobernador del Estado de Baja California para que inmediatamente se transfieran al Ayuntamiento de Mexicali los recursos que le corresponden y se encuentren pendientes de entregarle; así como que en lo sucesivo se realicen dichas transferencias en las fechas establecidas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, propongo a esta respetable Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La H. XXIII Legislatura del Estado de Baja California, exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, FRANCISCO ARTURO VEGA

DE LA MADRID para que realice lo conducente a fin de que INMEDIATAMENTE se transfieran al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, los recursos que le corresponden por diversos conceptos que se encuentran pendientes de entregarle por el Ejecutivo del Estado, por el importe de $211,255,706.37 Pesos.

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID a que gire sus instrucciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, para que en lo subsecuente transfiera al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California los recursos que le corresponden en las fechas preestablecidas.

TERCERO.- Se solicita al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, que en el término de tres días informe por escrito a este Congreso los motivos del retraso en la transferencia de recursos al Municipio de Mexicali, así como los conceptos, montos y días de atraso que en su caso tuviera la transferencia de recursos a los demás Municipios del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García", en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del mes octubre del año 2019.

ATENTAMENTE

DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ

(SE CONCLUYE PUNTO DE ACUERDO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así,

solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes, se aprueba.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la proposición, pregunto Diputados si desean intervenir en contra de la misma.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Yo, no quiero manifestarme en contra, si me permite el uso de la voz.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Decirle a la Diputada que presenta este exhorto, que a mí me interesa mucho incorporar al documento, con, a nombre de mi partido político, porque creo que es un asunto de solidaridad, a un esfuerzo que empieza, a un nuevo gobierno municipal, de todas maneras distinta, yo creo que ha dado muestra de ello y por esa razón que mejor que el Congreso pueda acompañarle con actos de autoridad como esta, donde se solicita al Ejecutivo que envíe los recursos necesarios para hacer su trabajo, no hace otra cosa más que eso.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Gracias Diputado, con gusto, gracias Diputada.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUIINTERO: Que pudiera participar de igual manera, gracias.

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: De igual manera Diputada, que nos sumes.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Gracias, gracias, Julia, Carmen, gracias. Gracias Diputado Juan Melendrez.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien, si no hay alguna otra participación Diputados, solicito Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la proposición presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobada la proposición leída por la Diputada Eva Gricelda Rodrigue, continuamos con el último apartado "Posicionamientos", se continúa dando el uso de la voz a la Diputada Eva María Vázquez Hernández, muy bien, damos el uso de la voz a la Diputada Araceli Geraldo Núñez.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Con su venia Presidenta.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Adelante.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Compañeras y compañeros Diputados y personas que nos acompañan. La suscrita Diputada ARACELI GERALDO NUÑEZ, en nombre propio y representación del Grupo Parlamentaria MORENA de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hago uso de esta Tribuna para presentar el siguiente POSICIONAMIENTO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

¨SER JOVEN Y NO SER REVOLUCIONARIO ES UNA CONTRADICCIÓN HASTA BIOLÓGICA¨

SALVADOR ALLENDE

El congreso de Baja California honra a todos los jóvenes del Estado sin distinción alguna y nos recuerda que para hacerle frente a los retos y obstáculos que todos vivimos actualmente se necesitan jóvenes con valores y principios firmes, con ganas de salir adelante, de sumar y de apoyarse, porque son ellos los que van a construir el Baja California del mañana.

La generación actual de juventud es de cambio y transformación, los jóvenes son el pilar fundamental para que una nación pueda crecer y desarrollarse plenamente en los ámbitos político, económico y social, y por ello su tarea primordial es vivir cuestionando, evaluando, proponiendo, para exigir un Estado mejor y trabajar para lograrlo.

Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California atraviesa la crisis económica más fuerte en toda su historia producto de los malos manejos, de quien

hasta ahora es el Gobernador del Estado de Baja California y con ello, el riesgo de que miles de jóvenes pierdan la oportunidad de seguir con sus estudios de nivel superior en la máxima casa de estudios.

Lo anterior, debido a los diversos intentos de manera sistemática por parte del gobierno del Estado, en tratar a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California, como plato de segunda mesa y no otorgarles a todos los jóvenes lo que por derecho y legítimamente les corresponde, los cimarrones tienen que seguir adelante, y en estos tiempos turbulentos y llenos de incertidumbre, la juventud es la encargada de alzar la voz para defender a la máxima institución de educación superior en el Estado, exigiendo que todo el peso de la ley se les aplique a los responsables de tan inmundo y grotesco acto.

Los jóvenes universitarios son los motores de la revolución social en el Estado y presentan el futuro y el presente de Baja California. Las Manifestaciones llevadas a cabo por los jóvenes bajacalifornianos, como la de hoy, impactan el proceso de transición que estamos llevando a cabo, y a su vez exigen una ruptura radical con el pasado.

Para fraseando a Silvio Rodríguez en su emblemática canción: "La era está pariendo un nuevo corazón" podemos decir que Baja California está pariendo una nueva era, una nueva esperanza impulsada por los miles de jóvenes que salieron hoy a las calles. Y tenemos que acudir corriendo, pues se cae el porvenir, nuestra máxima casa de estudios está sufriendo, y no puede más, se muere de dolor y Tendremos

que quemar el cielo si es preciso por darle vida a la Universidad Autónoma de Baja California, por cualquier alumno en cualquier facultad.

Por nuestra parte, las diputadas y diputados de Morena desde nuestra trinchera, el Congreso del Estado, seguiremos trabajando arduamente en aras de mejorar el desarrollo pleno de los jóvenes en todos los ámbitos.

Caminando por las calles de las diferentes ciudades del Estado se escucha a los jóvenes universitarios que pregonan una consigna fuerte y clara. Un fantasma recorre todo el Estado, EL FANTASMA DEL MILES DE JOVENES QUE PROCLAMAN Y GRITAN:

¡GOBERNADOR, PAGA EL ADEUDO DE NUESTRA UNIVERSIDAD.!

Jóvenes, tengan siempre presente que el compromiso es con México, con la patria y es con Baja California.

Es cuanto.

(SE INSERTA POSICIONAMIENTO, LEÍDO POR LA DIPUTADA ARACELI GERALDO NÚÑEZ)

DIPUTADO CATALINO ZÁVALA MÁRQUEZ
Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Compañeras y compañeros Diputados

Presente. -

La suscrita Diputada ARACELI GERALDO NUÑEZ, en nombre propio y representación del Grupo Parlamentaria MORENA de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hago uso de esta Tribuna para presentar el siguiente POSICIONAMIENTO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

¨SER JOVEN Y NO SER REVOLUCIONARIO ES UNA CONTRADICCIÓN HASTA BIOLÓGICA¨
SALVADOR ALLENDE

El congreso de Baja California honra a todos los jóvenes del Estado sin distinción alguna y nos recuerda que para hacerle frente a los retos y obstáculos que todos vivimos actualmente se necesitan jóvenes con valores y principios firmes, con ganas de salir adelante, de sumar y de apoyarse, porque son ellos los que van construir el Baja California del mañana.

La generación actual de juventud es de cambio y transformación, los jóvenes son el pilar fundamental para que una nación pueda crecer y desarrollarse plenamente en los ámbitos político, económico y social, y por ello su tarea primordial es vivir cuestionando, evaluando, proponiendo, para exigir un Estado mejor y trabajar para lograrlo.

Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California atraviesa la crisis económica más grande en toda su historia producto de los malos manejos, de quien hasta ahora es el

Gobernador del Estado y con ello, el riesgo de que miles de jóvenes pierdan la oportunidad de seguir con sus estudios de nivel superior en la máxima casa de estudios.

Lo anterior, debido a los diversos intentos de manera sistemática por parte del gobierno del Estado, en tratar a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California, como plato de segunda mesa y no otorgarles a todos los jóvenes lo que por derecho y legítimamente les corresponde, los cimarrones tienen que seguir adelante, en estos tiempos turbulentos y llenos de incertidumbre, la juventud es la encargada de alzar la voz para defender a la máxima institución de educación superior en el Estado, exigiendo que todo el peso de la ley se les aplique a los responsables de tan inmundo y grotesco acto.

Los jóvenes universitarios son los motores de la revolución social en el Estado y representan el futuro y el presente de Baja California. Las Manifestaciones llevadas a cabo por los jóvenes baja californianos, como la de hoy, impactan el proceso de transición que estamos llevando a cabo, y a su vez exigen una ruptura radical con el pasado.

Para fraseando a Silvio rodríguez en su emblemática canción: "*La era está pariendo un nuevo corazón¨ podemos decir que Baja California está pariendo una nueva era, una nueva esperanza impulsada por los miles de jóvenes que salieron hoy a las calles. Y tenemos que acudir corriendo, pues se cae el porvenir, nuestra*

máxima casa de estudios está sufriendo, no puede más, se muere de dolor y Tendremos que quemar el cielo si es preciso por darle vida a la Universidad Autónoma de Baja California, por cualquier alumno en cualquier facultad.

Por nuestra parte, las diputadas y diputados de Morena desde nuestra trinchera, el Congreso del Estado, seguiremos trabajando arduamente en aras de mejorar el desarrollo pleno de los jóvenes en todos los ámbitos.

Caminando por las calles de las diferentes ciudades del Estado se escucha a los jóvenes universitarios que pregonan una consigna fuerte y clara. Un fantasma recorre todo el Estado, EL FANTASMA DEL MILES DE JOVENES QUE PROCLAMAN Y GRITAN:

¡GOBERNADOR, PAGA EL ADEUDO CON NUESTRA UNIVERSIDAD.!!

Jóvenes, tengan siempre presente que el compromiso es con México, con la patria y con Baja California.

¡MUCHAS GRACIAS!!!!!!

ATENTAMENTE

DIPUTADA ARACELI GERALDO NUÑEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Y RELACIONES PÚBLICAS.

(SE CONCLUYE POSICIONAMIENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien Diputada, damos el uso de la voz al Diputado Juan Melendrez Espinoza, relativo a reparar el puente vehicular de la entra a Islas Agrarias.

- EL C. DIP. JUAN MELENDREZ ESPINOZA: Con su venia Diputada Presidenta en funciones, buenas tardes a las Diputadas y Diputados y ciudadanos que nos acompañan. Diputado Catalino Zavala Márquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable XXIII Legislatura del Congreso de Baja California.

JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA, en lo personal y en calidad de miembro del Grupo Parlamentario de Morena de esta XXIII Legislatura, hago uso de la tribuna para hacer el siguiente posicionamiento relativo a la necesidad de REPARAR EL PUENTE VEHICULAR DE LA ENTRADA A ISLAS AGRARIAS B, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. ANTECEDENTES.

Islas Agrarias Grupo B, Ejido Islas Agrarias Grupo B o simplemente Islas Agrarias B, es una localidad mexicana, del municipio de Mexicali, Baja California, enclavada en la delegación González Ortega. De acuerdo al Censo realizado por INEGI, la población que tiene 1,068 habitantes. Islas Agrarias B tiene relevancia municipal ya que es una de los dos localidades en las que se celebra tradicionalmente el "Día del Ejido", la otra localidad es Michoacán de Ocampo, en la delegación Cerro Prieto.

El nombre Islas Agrarias, es un recordatorio del movimiento agrarista del Valle de Mexicali, después denominado: El Asalto a las Tierras, en el que se vieron involucrados sus fundadores, algunos de los cuales fueron arrestados y enviados a las Islas Marías en el año de 1930.

Está comunicada por la carretera estatal No. 128, que conduce al Norte al poblado: Los Manantiales y al sur con el poblado: Ejido Cuernavaca, conecta con la carretera federal No. 2.

El 9 de marzo de 1937 el General Rodolfo Sánchez Taboada, gobernador del entonces Territorio Norte de Baja California, entregó las dotaciones ejidales a los miembros de Álamo Mocho formando con ellos dos ejidos, el Islas Agrarias Grupo A y el Islas Agrarias Grupo B. En 1957 el primer gobernador constitucional del Estado de Baja California, Braulio Maldonado Sández, oficializó la celebración del aniversario del "Asalto a las Tierras", designándolo como "Día del Ejido" y en 1984, el 27 de enero, el gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, en la ceremonia de celebración correspondiente, reinhuma los restos de la Sra. Felipa Velázquez viuda de Arellano en éste poblado, develando la estela y epitafio de esta figura esclarecida del movimiento agrarista del Valle de Mexicali.

La población total de Islas Agrarias Grupo B es de 1068 personas, de cuales 546 son hombres y 522 mujeres. El índice de fecundidad es de 2.53 hijos por mujer. Del total de la población, el 25.62% proviene de fuera del Estado de Baja California.

Edades de los ciudadanos

Los ciudadanos se dividen en 388 menores de edad y 680 adultos, de cuales 106 tienen más de 60 años.

Habitantes indígenas en Islas Agrarias Grupo B

53 personas en Islas Agrarias Grupo B viven en hogares indígenas. El número de los que solo hablan un idioma indígena pero no hablan español es 0, y los habitantes que hablan un idioma indígena y también español son 26.

TERCERO. PROBLEMA.

Las compañías extranjeras asentadas en la zona al principio del siglo hicieron un arroyo en lo que es ahora valle de Mexicali y utilizaron ese arroyo para construir un canal con el que irrigarían estas tierras, DONDE POSTERIORMENTE EN ESTE CANAL SE CONSTRUYO UN PUENTE PARA PERMITIR EL PASO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS, COMO CAMIONES DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE PUEDEN CRUZAR Y TRASLADAR SU MERCANCIA PROVENIENTE DE LA AGRICULTURA Y OTROS PRODUCTOS O OTRAS ACCIONES. PUENTE QUE SE CONSTRUYO COMO CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL POBLADO DE ISLAS AGRARIAS B, DANDO UN SERVICIO AL 88.7% DE LA POBLACIÓN, Y SIENDO UTILIZADO POR EL 85.2% DE LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS, ACTUALMENTE ESE PUENTE SE ENCUENTRA EN GRAVE PELIGRO, APROXIMADAMENTE HACE TRES AÑOS EMPEZO SU DETERIODO Y A PARTIR DEL AÑO 2017 SU DESTRUCCION EN SU ESTRUCTURA, SIENDO UN RIESGO YA QUE SE ESTA HUNDIENDO, ES TAN GRAVE EL PROBLEMA

QUE EL PESO DE CUALQUIER CARRO LO PUEDE VENCER EN CUALQUIER MOMENTO Y OCACIONAR UN DERRUMBE O ACCIDENTE FATAL.

LA ANTERIOR ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ESTATAL NUNCA HICIERON CASO A LOS RECLAMOS DE LA POBLACIÓN DEL EMINENTE PELIGRO, QUE EXISTE EN ESE PUENTE, QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DEL EJIDO ISLAS AGRARIAS VINIENDO DE LA CARRETERA DE CUERNAVACA.

La comunidad y su seguridad es la motivación de este posicionamiento, a ella nos debemos y necesario protegerla.

Necesitamos más acciones y menos palabras compañeros. Muchas gracias.

(SE INSERTA POSICIONAMIENTO, LEÍDO POR EL DIPUTADO JUAN MELENDREZ ESPINOZA)

DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
HONORABLE XXIII LEGISLATURA, DEL CONGRESO
DE BAJA CALIFORNIA.

P R E S E N T E.-

JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA, en lo personal y en calidad de miembro del Grupo Parlamentario de Morena de esta XXIII Legislatura, hago uso de la tribuna para hacer el siguiente posicionamiento relativo a la necesidad de REPARAR EL PUENTE VEHICULAR DE LA ENTRADA A ISLAS AGRARIAS B, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. ANTECEDENTES.

Islas Agrarias Grupo B, Ejido Islas Agrarias Grupo B o simplemente Islas Agrarias B, es una localidad mexicana, del municipio de Mexicali, Baja California, enclavada en la delegación González Ortega. De acuerdo al Censo realizado por INEGI, la población a 1,068 habitantes.

Islas Agrarias B tiene relevancia municipal ya que es una de los dos localidades en las que se celebra tradicionalmente el "Día del Ejido", la otra localidad es Michoacán de Ocampo, en la delegación Cerro Prieto.

El nombre Islas Agrarias, es un recordatorio del movimiento agrarista del valle de Mexicali, después denominado: El Asalto a las Tierras, en el que se vieron involucrados sus fundadores, algunos de los cuales fueron arrestados y enviados a las Islas Marías en el año de 1930.

Está comunicada por la carretera estatal No. 128, que conduce al Norte al poblado: Los Manantiales y al sur con el poblado: Ejido Cuernavaca, conecta con la carretera federal No. 2.
El 9 de marzo de 1937 el General Rodolfo Sánchez Taboada, gobernador del entonces Territorio Norte de Baja California, entregó las dotaciones ejidales a los miembros de Álamo Mocho formando con ellos dos ejidos, el Islas Agrarias Grupo A y el Islas Agrarias Grupo B. En 1957 el primer gobernador constitucional del Estado de Baja California, Braulio Maldonado Sández, oficializó la celebración del aniversario del "Asalto a las Tierras", designándolo como "Día del Ejido" y en 1984, el 27 de enero, el gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, en la ceremonia de celebración correspondiente, reinhuma los restos de la Sra. Felipa Velázquez viuda de Arellano en éste poblado, develando la estela y epitafio de esta figura esclarecida del movimiento agrarista del Valle de Mexicali. Desde entonces, cada año se monta una guardia de honor y se deposita en ese lugar una ofrenda floral para honra de su memoria y como otro acto de conmemoración de la lucha agraria que impulsó la efectiva aplicación de la reforma agraria y con ello, la instauración del estado de derecho en lo respectivo a la tenencia de la tierra en el valle de Mexicali.

SEGUNDA. POBLACIÓN.

La población total de Islas Agrarias Grupo B es de 1068 personas, de cuales 546 son hombres y 522 mujeres. El índice de fecundidad es de 2.53 hijos por mujer. Del total de la población, el 25.62% proviene de fuera del Estado de Baja California.

Edades de los ciudadanos
Los ciudadanos se dividen en 388 menores de edad y 680 adultos, de cuales 106 tienen más de 60 años.

Habitantes indígenas en Islas Agrarias Grupo B
53 personas en Islas Agrarias Grupo B viven en hogares indígenas. El número de los que solo hablan un idioma indígena pero no hablan español es 0, y los habitantes que hablan un idioma indígena y también español son 26.

TERCERO. PROBLEMA.

Las compañías extranjeras asentadas en la zona al principio del siglo hicieron un arroyo en lo que es ahora valle de Mexicali y utilizaron ese arroyo para construir un canal con el que irrigarían estas tierras, DONDE POSTERIORMENTE EN ESTE CANAL SE CONSTRUYO UN PUENTE PARA PERMITIR EL PASO A LOS PEATONES Y VEHICULOS, COMO CAMIONES DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE PUEDEN CRUZAR Y TRASLADAR

SU MERCANCIA PROVENIENTE DE LA AGRICULTURA Y OTROS PRODUCTOS. PUENTE QUE SE CONSTRUYO COMO CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL POBLADO DE ISLAS AGRARIAS B, DANDO UN SERVICIO AL 88.7% DE LA POBLACIÓN, Y SIENDO UTILIZADO POR EL 85.2% DE LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS, ACTUALMENTE ESE PUENTE SE ENCUENTRA EN GRAVE PELIGRO, APROXIMADAMENTE HACE TRES AÑOS EMPEZO SU DETERIODO Y A PARTIR DEL AÑO 2017 SU DESTRUCCION EN SU ESTRUCTURA, SIENDO UN RIESGO YA QUE SE ESTA HUNDIENDO, ES TAN GRAVE EL PROBLEMA QUE EL PESO DE CUALQUIER CARRO LO PUEDE VENCER EN CUALQUIER MOMENTO Y OCACIONAR UN DERRUMBE O ACCIDENTE FATAL.

LA ANTERIOR ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ESTATAL NUNCA HICIERON CASO A LOS RECLAMOS DE LA POBLACIÓN DEL EMINENTE PELIGRO, QUE EXISTE EN ESE PUENTE, QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DEL EJIDO ISLAS AGRARIAS VINIENDO DE LA CARRETERA DE CUERNAVACA.

La comunidad y su seguridad es la motivación de este posicionamiento, a ella nos debemos y necesitamos protegerla.

Necesitamos más acciones y menos palabras.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García", en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE

_____

DIPUTADO JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA

(SE CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien Diputado, ya por último la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, con el último posicionamiento de la orden del día.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Con su permiso Diputada Presidente en funciones. Diputados y Diputadas. Como recordaran en la sesión ordinaria de esta XXIII Legislatura celebrada el 19 de septiembre del año en curso, se aprobó un

Acuerdo Económico propuesto por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, por virtud del cual se determinó solicitar al Titular del Ejecutivo del Estado de Baja California Licenciado Francisco Arturo Vega De la Madrid, diversa información sobre los recursos públicos que se transfirieron a la Asociación Civil, Centro de Estudios y Análisis Humanistas, que es encabezada por el Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional, José Luis Obando Patrón y que supuestamente corresponde a cuotas, que también supuestamente empleados del Poder Ejecutivo del Estado, determinaron voluntariamente que se entregaron a esa persona moral. El mismo acuerdo ordenó al Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, para que compareciera a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de este Congreso, para que diera un informe detallado de esta presumible irregularidad. Oportunamente el Presidente del Congreso del Estado cito al Contador Armando Carrasco de encargado de despacho de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y oportunamente también en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, le informe al obligado compareciente el día, lugar y hora en que sería recibido por la Comisión para rendir su informe. El día 7 de octubre del año en curso el Contador Armando Carrasco Moreno ingreso un oficio de Oficialía de partes de este Congreso del cual se les ha entregado una copia a cada uno de ustedes, en el que expone diversos argumentos llenos de embustes, errores de interpretación de la Ley o muestras de la supina ignorancia de la misma, con los que trata de justificar su negativa a entregar la información que esta soberanía le exige. En su descuido seguramente por su intención de evitar de exponer los pormenores de la simulación fabricada

para entregar recursos públicos a los dirigentes de su partido político, mediante un mecanismo a la fiscalización de la autoridad electoral, llega el contador Carrasco a firmar que el Poder Legislativo no cuenta con las facultades que le confieren el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para citar a comparecer a los Secretarios del ramo del Ejecutivo, cuando se conozca como un asunto concerniente a sus mismos ramos o actividades. Por último, muestra el contador Carrasco su poca profesionalidad y su infinito desdén a este Poder Legislativo al indicar en su oficio que no comparecería a la citación que le fue formulada sin expresar justificación alguna. Es por lo anterior que propongo se proceda conforme al último párrafo del citado Artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, que dispone que los servidores públicos que no concurran a las sesiones para los que sean citados para comparecer, se harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, presentando este Congreso la denuncia correspondiente, pero claro dentro de tres semanas, gracias y es cuanto.

(SE INSERTA POSICIONAMIENTO, LEÍDO POR LA DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ)

DIPUTADAS Y DIPUTADOS:

Como recordarán, en la Sesión Ordinaria de esta XXIII Legislatura celebrada el día 19 de septiembre del año curso, se aprobó un Acuerdo Económico propuesto por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, por virtud del cual

se determinó solicitar al Titular del Ejecutivo del Estado de Baja California, Licenciado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, diversa información sobre los recursos públicos que se transfirieron a la Asociación Civil "Centro de Estudios y Análisis Humanistas", que es encabezada por el Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional, José Luis Ovando Patrón, y que supuestamente corresponden a cuotas que, también supuestamente, empleados del Poder Ejecutivo del Estado determinaron "voluntariamente" que se entregaran a esa persona moral.

El mismo Acuerdo ordenó citar al Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, para que compareciera ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de este Congreso, para que rindiera un informe detallado de esta presumible irregularidad.

Oportunamente el Presidente del Congreso del Estado citó al Contador Público Armando Carrasco Moreno, en su carácter de encargado del despacho de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, y oportunamente también en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público le informé al obligado a comparecer, el día, lugar y hora en que sería recibido por la Comisión para rendir su informe.

El día 7 de octubre del año en curso, el Contador Público Armando Carrasco Moreno ingresó un oficio a la Oficialía de Partes de este Congreso, del que se les ha entregado una copia a cada uno de ustedes, en el que expone diversos argumentos llenos de embustes, errores de interpretación de la Ley o muestras de la supina ignorancia de la misma, con los que trata de justificar su negativa a entregar la información que esta Soberanía le exige.

En su descuido y seguramente cegado por su intención de evitar exponer los pormenores de la simulación fabricada para entregar recursos públicos a los dirigentes de su Partido Político, mediante un mecanismo ajeno a la fiscalización de la autoridad electoral, llega el Contador Carrasco a afirmar que el Poder Legislativo no cuenta con las facultades que le confiere el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para citar a comparecer a los Secretarios del Ramo del Ejecutivo, cuando se conozca de algún asunto concerniente a sus mismos ramos o actividades.

Por último muestra el Contador Carrasco su poca profesionalidad y su infinito desdén a este Poder Legislativo, al indicar en su oficio que no comparecería

a la citación que le fue formulada sin expresar justificación alguna.

Es por lo anterior que propongo se proceda conforme al último párrafo del citado artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, que dispone que los servidores públicos que no concurran a las sesiones para las que sean citados a comparecer, se harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, presentando este Congreso la denuncia correspondiente, pero claro, dentro de tres semanas.

(SE CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Muy bien Diputada, agotado el orden del día compañeros se cita a los ciudadanos Diputados integrantes de la XXIII Legislatura del Estado la Sesión Ordinaria el día 17 de octubre, a las diez horas en el Recinto Parlamentario "Licenciado Benito Juárez García" del edificio Poder Legislativo del Estado de Baja California, siendo las quince horas con tres minutos del día diez de octubre, se levanta la sesión, buenas tardes Diputados. (15:03 horas).